

Reg: 142.607



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5313095623

TE
1308

TESIS DOCTORAL

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Y

LAS CORTES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1996-1997

Director:

D. José Antonio Alonso de Antonio
Prof. Titular de Derecho Constitucional

Doctorando:

Álvaro Pérez de Ugena y Coromina



NOTA PRELIMINAR

Quiero expresar mi gratitud al Director de esta Tesis Doctoral, el profesor JOSE ANTONIO ALONSO DE ANTONIO, por su constante apoyo, sin el cual el presente trabajo nunca habría podido llegar a realizarse.

De igual manera, deseo agradecer al Congreso de los Diputados la beca concedida para llevar a cabo esta investigación y las facilidades que me ha prestado para el acceso a la documentación y fondos de que dispone.

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

A.T.C. :	Auto del Tribunal Constitucional
A.P.M. :	Asociación Profesional de la Magistratura
B.J.C. :	Boletín de Jurisprudencia Constitucional
B.O.E. :	Boletín Oficial del Estado
C.A.:	Comunidad Autónoma
C.G.P.J.:	Consejo General del Poder Judicial
C.S.M. :	Consejo Superior de la Magistratura
D.S.C.:	Diario de Sesiones del Congreso
D.S.S.:	Diario de Sesiones del Senado
F.V. :	Asociación " Francisco de Vitoria "
L.O.C.G.P.J.:	Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial
L.O.C.J.:	Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales
L.O.P.J.:	Ley Orgánica del Poder Judicial
L.O.T.C.:	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
R.C.:	Reglamento del Congreso
R.F.D.U.C.M.:	Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
R.S.:	Reglamento del Senado
R.D.P. :	Revista de Derecho Político
R.D.Pr.:	Revista de Derecho Procesal
R.D.P.I.:	Revista de Derecho Procesal Iberoamericana
U.M.I.:	Unión de Magistrados Internacional
U.J.I. :	Unión de Jueces Independientes
U.J.D. :	Unión de Jueces para la Democracia
S.T.C. :	Sentencia del Tribunal Constitucional
T.C.:	Tribunal Constitucional

	<u>Págs.</u>
INTRODUCCIÓN.....	9
METODOLOGÍA	11
FUENTES.....	12

PARTE PRIMERA

ESTUDIO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....15

CAPÍTULO SEGUNDO: INSTITUCIONES ANÁLOGAS EN EL DERECHO COMPARADO

SECCIÓN I INTRODUCCIÓN.....23

SECCIÓN II EN EUROPA OCCIDENTAL

- i) Le Conseil Supérieur de la Magistrature (Francia)...29
- ii) Il Consiglio Superiore della Magistrature (Italia)....43
- iii) El Conselho Superior de la Magistratura (Portugal)..61
- iiii) El Consejo Superior de la Magistratura (Grecia)....69

SECCIÓN III EN LA EUROPA ORIENTAL

- i) República de Albania.....72
- ii) República de Bulgaria..... 73
- iii) República de Croacia.....74
- iv) República de Eslovenia.....75
- v) República de Moldavia.....77
- vi) República de Polonia.....78
- vii) República de Rumania.....80
- viii) República de Turquía.....81

SECCIÓN IV EL MODELO JUDICIAL NORTEAMERICANO.....83

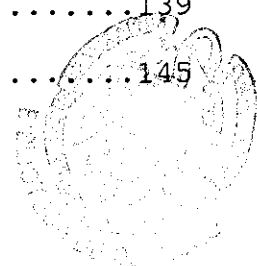
SECCIÓN V INSTITUCIONES HOMÓLOGAS AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN IBEROAMÉRICA.....86

CAPÍTULO TERCERO: RASGOS BÁSICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

SECCIÓN I NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN.....104

SECCIÓN II RÉGIMEN JURÍDICO

- i) Regulación normativa del Consejo General del Poder
Judicial en la Constitución Española de 1978.....139
- ii) La regulación en las diversas Leyes Orgánicas.....145



SECCIÓN III: ORGANIZACIÓN

i) Estructura de la institución.....	152
a) Introducción.....	152
b) Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo.....	153
c) Vicepresidencia.....	156
d) Pleno del Consejo General del Poder Judicial.....	157
e) La Comisión Permanente.....	161
f) La Comisión Disciplinaria.....	167
g) La Comisión de Calificación.....	180
h) Comisión de Estudios e Informes.....	182
i) Comisión Presupuestaria.....	184
j) Órganos Técnicos del Consejo.....	185
ii) El Consejo General del Poder Judicial ante la sugerida territorialización de la Administración de Justicia.....	187
a) La función coordinadora atribuida al Consejo General del Poder Judicial.....	187
b) De las diversas posturas doctrinales relativas a la territorialización.....	189

SECCIÓN IV FUNCIONES DESARROLLAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i) Funciones.....	199
a) Durante la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980 de 10 de enero.....	200
b) Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio.....	202
c) Con posterioridad a las reformas introducidas por la Ley Orgánica 16/1994 de 8 de noviembre.....	203
ii) En especial: la potestad reglamentaria.....	215
a) Introducción.....	215
b) Naturaleza y alcance	221
c) Características propias.....	236

SECCIÓN V VALORACIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i)	Introducción.....	244
ii)	Perspectiva externa: la opinión de la ciudadanía....	246
iii)	El criterio interno: la opinión de la judicatura....	255

PARTE SEGUNDA

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS CORTES GENERALES Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

INTRODUCCIÓN.....	264
-------------------	-----

CAPÍTULO PRIMERO: DESIGNACIÓN Y CESE DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN I: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES Y LA ACTIVIDAD DE LAS CORTES GENERALES

i) La aprobación de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980, de 10 de Enero.....	284
ii) Designación de los Vocales del Consejo en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial.....	285
iii) Motivos que originaron la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial.....	290
iv) La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio: el aspecto favorable.....	292
4.1. La enmienda Bandrés Molet:	
a) Tramitación parlamentaria	293
b) Fundamentos a favor del cambio.....	306
c) Fundamentos contrarios al nuevo modelo.....	314
4.2. Regulación de la designación de los vocales del Consejo:	
a) En el Reglamento del Congreso de los Diputados...	322
b) En el Reglamento del Senado.....	325
4.3. Situación actual:	
a) Introducción.....	326
b) Efectos resultantes de la aplicación de la enmienda Bandrés.....	330
4.4 Postura mantenida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 108/1986.....	334
4.5 Posibles soluciones a la actual situación de crisis del Consejo:	
a) Jueces corporativos: El autogobierno.....	340
b) Designación directa por el Gobierno.....	344
c) Designación directa por los jueces	344

d)	Designación por antigüedad.....	346
VI)	Conclusiones.....	346

SECCIÓN II ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i)	Introducción.....	354
ii)	Requisitos.....	354
a)	Formación jurídica.....	354
b)	Cualidades éticas.....	357
c)	Sistema de incompatibilidades.....	358
d)	Posibilidad de reelección.....	359
e)	Duración del mandato.....	361

SECCIÓN III CESE DE LOS VOCALES

i)	Introducción.....	363
ii)	Causas.....	363

CAPÍTULO SEGUNDO: INFORMES QUE EL CONSEJO PRESENTA ANTE LAS CORTES GENERALES

i)	Introducción.....	368
ii)	Objeto.....	380
iii)	Relevancia	385
iv)	Efectos resultantes de la omisión	390

CAPÍTULO TERCERO: INSTRUMENTOS DE CONTROL PARLAMENTARIO

SECCIÓN I	INTRODUCCIÓN.....	394
-----------	-------------------	-----

SECCIÓN II	MEMORIA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ELEVA ANUALMENTE ANTE LAS CORTES GENERALES.....	395
------------	---	-----

i)	Concepto, objeto y datos a partir de los que se elabora.....	395
ii)	Carácter doctrinalmente atribuido.....	401
iii)	La responsabilidad derivada de la presentación: responsabilidad en sentido propio y en sentido impropio.....	404

SECCIÓN III	LAS SESIONES PÚBLICAS.....	412
-------------	----------------------------	-----

SECCIÓN IV	CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN....	414
------------	---	-----

i)	Introducción.....	414
ii)	Funciones y características.....	419
iii)	Conclusiones	430

SECCIÓN V ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. LA NUEVA SITUACIÓN CREADA CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LO 16/1994 DE 8 DE NOVIEMBRE.....	436
---	-----

**CAPÍTULO CUARTO: DE LOS CONFLICTOS ENTRE EL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL Y OTROS ÓRGANOS DE
NATURALEZA CONSTITUCIONAL**

i)	Introducción.....	443
ii)	Conflictos de atribución entre órganos constitucionales.....	447
iii)	Breve apunte sobre los Conflictos de jurisdicción...	454

CONCLUSIONES.....	459
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	476
--------------------------	------------

SECCIÓN I MANUALES Y OBRAS GENERALES.....	477
---	-----

SECCIÓN II MONOGRAFÍAS.....	479
-----------------------------	-----

SECCIÓN III ARTÍCULOS DE REVISTAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS...	483
--	-----

SECCIÓN IV OTRA DOCUMENTACIÓN.....	497
------------------------------------	-----

SECCIÓN V ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS.....	499
--	-----

INTRODUCCIÓN

El origen de la presente investigación parte de la preocupación del doctorando por analizar el papel otorgado a la Magistratura. De ésta depende en gran medida, tal y como pusiera de manifiesto Justiniano en el Digesto la estabilidad de nuestra sociedad: "es tan importante para mi imperio la gloria de mis generales como la elocuencia de mis magistrados, porque de ellos depende, en definitiva, la paz de mis reinos".

Aún cuando nuestro actual sistema político-social diste, en mucho, del de la época de Justiniano, sus palabras mantienen hoy toda su vigencia.

La lógica consecuencia de ese interés inicial nos ha llevado a estudiar en profundidad el papel del Consejo General del Poder Judicial como máximo órgano de gobierno de la Magistratura, al que competen el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de las condiciones básicas para el ejercicio de las funciones que la Constitución y la ley encomiendan a jueces y magistrados.

De otra parte, se trata en este estudio sobre una institución novedosa. Si bien en Derecho Comparado sus

orígenes se encuentran en Francia, remontándose a 1946, en nuestro ordenamiento no se consagra constitucionalmente hasta nuestra vigente constitución, en la que queda formulada en el artículo 122.3.

Centrada nuestra investigación en el Consejo General del Poder Judicial por los motivos expuestos, vamos a enfocar su estudio desde una perspectiva distinta a la de los trabajos ya existentes. Ya que pese a ser ésta una institución en cierta medida novedosa, por no contar con precedentes claros en la historia del constitucionalismo español, su importancia ha motivado la realización de algunas investigaciones.

Nuestra aportación trata de ser, en la medida de lo posible, un completo estudio de las fases por las que ha atravesado el Consejo desde su creación, las relaciones que éste ha establecido con las Cortes Generales -de especial importancia en este apartado resulta la introducción de la enmienda Bandrés-, las actividades que ha desarrollado, incluso se recogen las valoraciones que desde diversas perspectivas se ha mantenido acerca del papel desarrollado por el Consejo.

Se ha analizado la configuración orgánica y funcional del Consejo General del Poder Judicial que se debió, en un primer momento, a la LOCGPJ 1/1980, de 10 de enero, para con posterioridad ser reformada por la LOPJ 6/1985 de 1 de julio y, en recientes fechas, por la Ley Orgánica 16/94 de 8 de noviembre.

Decidimos, partiendo de las premisas mencionadas, centrarnos en el análisis de la relación entre dos grandes poderes: el legislativo y el judicial a través del estudio de las instituciones organizativas de dichos poderes. Este tema con el escaso tratamiento que la doctrina le ha otorgado, se ha revelado en las últimas fechas, como una cuestión con evidentes repercusiones prácticas, tanto en el mundo judicial como en el ámbito político. Existen múltiples publicaciones referentes al Consejo General del Poder Judicial, pero éstas apenas enfatizan en ese aspecto concreto de las relaciones con las Cortes Generales, siendo sin embargo, una cuestión básica en el estudio del Derecho Constitucional y Parlamentario.

METODOLOGÍA

Se ha puesto especial énfasis en el análisis jurídico de las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias

sobre el Consejo General del Poder Judicial, trayendo a colación ciertos preceptos reguladores de figuras similares existentes en otros países.

Pero para el estudio de esa realidad normativa no se ha olvidado el que la misma sólo adquiere su auténtico significado en el contexto histórico, social y político en el que surge y se desenvuelve, que es el que dota de sentido a las normas jurídicas.

Del mismo modo resulta imprescindible comprobar el grado de eficacia real de esta institución, debiendo contemplarse el funcionamiento práctico de la misma.

En consecuencia el método utilizado ha sido el jurídico, en cuanto análisis de las normas, y el propio de las ciencias auxiliares para el conocimiento de la realidad que condiciona esas normas (sociología, ciencia política, estadística. etc.)

FUENTES

Para la realización de esta investigación se han tenido en cuenta las monografías referentes a la materia que han sido publicadas en España o en otros países que cuentan con

un sistema judicial similar al nuestro y que por ello puedan ser tomados como punto de referencia en un análisis comparativo.

Se analizan, igualmente, otras publicaciones encontradas en revistas científicas y que pueden resultar de interés.

Ha sido objeto de especial atención la legislación aplicable teniendo en cuenta igualmente la normativa existente en sistemas homólogos al español.

A todo ello, hemos añadido el examen de la documentación complementaria existente como informes, memorias, entrevistas con destacados miembros del entorno judicial, etc.

Se ha tratado en todo momento de dar un enfoque práctico a la investigación, haciendo especial énfasis en el análisis de los efectos resultantes de la relación entre los dos órganos objeto de este trabajo. Se ha pretendido de este modo aportar posibles soluciones a los problemas que se han planteado en el desarrollo del estudio de la relación entre el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes Generales.

PARTE PRIMERA

ESTUDIO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

CAPÍTULO SEGUNDO: INSTITUCIONES ANÁLOGAS EN EL DERECHO COMPARADO

SECCIÓN I INTRODUCCIÓN

SECCIÓN II EN EUROPA OCCIDENTAL

- i) Le Conseil Supérieur de la Magistrature (Francia)
- ii) Il Consiglio Superiore della Magistrature (Italia)
- iii) El Conselho Superior de la Magistratura (Portugal)
- iiii) El Consejo Superior de la Magistratura (Grecia)

SECCIÓN III EN LA EUROPA ORIENTAL

- i) República de Albania
- ii) República de Bulgaria
- iii) República de Croacia
- iv) República de Eslovenia
- v) República de Moldavia
- vi) República de Polonia
- vii) República de Rumania
- viii) República de Turquía

SECCIÓN IV EL MODELO JUDICIAL NORTEAMERICANO

SECCIÓN V EN IBEROAMÉRICA

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Si bien podemos entender que la Constitución no innova el modelo judicial tradicional, el hecho de que el artículo 122 de la Constitución haya introducido en nuestro ordenamiento jurídico una figura tan destacada como la del Consejo General del Poder Judicial significa, cuando menos, el intento de abrir un nuevo camino en el modelo judicial tradicional¹, aun cuando, tal vez, el desarrollo posterior de ese precepto constitucional no haya plasmado con nitidez el perfil de dicho Consejo².

¹ La Constitución alcanza, en lo relativo al Poder Judicial, la más alta cota de desarrollo de su historia, al proclamar la efectiva independencia de los jueces, al tiempo que va a extraer del Ejecutivo todas las facultades de que siempre ha hecho uso sobre la gobernación judicial, las ha conferido a un órgano de estructura democrática denominado Consejo General del Poder Judicial y ha puesto a su frente al Presidente del Tribunal Supremo, que asume, por ello, la máxima representatividad y jerarquía judicial en toda la Nación. Véase Domínguez Martín, S.: "Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial creado por la Constitución " en Poder Judicial, Vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983, pág.975

² PECES-BARBA, G.: " quizá sea éste uno de los campos en los que la Constitución se puede considerar más avanzada. Ha llegado donde ninguna otra Constitución actual había llegado en la línea de la utopía que algún jurista español había intuido: la supresión de las competencias del Ministerio de Justicia en el ámbito del poder Judicial y su sustitución por un órgano colegiado: El Consejo General del Poder Judicial" La Constitución Española de 1978: un estudio de derecho y política " en Colección el Derecho y el Estado ed. Fernando Torres S.A., Valencia, 1984, pág. 166

En nuestro constitucionalismo histórico no se hallan precedentes al actual artículo 122 de la Constitución, aunque por otro lado, es cierto que existen referencias constantes en toda la normativa fundamental del siglo XIX a la exclusividad o a la independencia que juzgados y Tribunales han de disfrutar en el ejercicio de sus competencias, en su función de juzgar.

El análisis de la situación de la judicatura previa a la Constitución de 1978 puede resultar muy útil para comprender la creación del actual Consejo del Poder Judicial³:

Para OSCAR ALZAGA el CGPJ iba a producir " una auténtica revolución en cuanto a la dirección de nuestra organización jurisdiccional " Véase " La Constitución Española de 1978 " Madrid, 1978, pág. 734

Para FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ " cuando termine el proceso (de desarrollo constitucional del Consejo), el Ministerio de Justicia debe ser, fundamentalmente, el ministerio de las leyes y el asesor jurídico del Gobierno; el resto de las facultades debe ostentarlo el Consejo General" Fernández Viagas, P.: Togas para la libertad, entrevista con Fernández Ordóñez, págs. 86-95

³ Para un estudio más concreto de las diversas fases y de su interpretación histórica debe tenerse en cuenta el trabajo realizado por Domínguez Martín, S.: " Perspectivas y Realidades del Gobierno del Poder Judicial creado por la Constitución " en El Poder Judicial, V.II, Instt. de Estudios Fiscales, Madrid, 1983. Igualmente puede ser interesante consultar Agúndez Fernández, A.: " Historia del Poder Judicial en España", Madrid, 1974 e incluso, aunque de manera mucho más breve Requejo Ibáñez, J.L.: " El Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial" en Papeles de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, Madrid, 1996

Debemos remontarnos a 1837 por constituir ésta una fecha clave en lo que al autogobierno se refiere. Así, en el proyecto de la Junta de Jefes del Ministerio de Justicia, se propugnaba que los nombramientos en todas las categorías judiciales se hicieran por el Gobierno " a propuesta de los propios Tribunales, y que los ascensos, mediante la " antigüedad necesaria" se produjeran previo informe de la Junta de Gobierno de las Audiencias respectivas.

Durante las discusiones parlamentarias de la Constitución de 1869, se planteó la posibilidad de establecer un sistema de autogobierno de los Tribunales; una vez más, la idea fracasó.

Podemos afirmar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 fue, en su tiempo, una verdadera innovación para la jurisdicción ordinaria española. Los principios que establecía la misma hacían énfasis en la necesidad de establecer una sólida independencia judicial en todos sus aspectos. Estos principios incluían entre otros: independencia del poder judicial respecto de otros poderes⁴;

⁴ Ley Orgánica del Poder Judicial, de 15 de Septiembre de 1870, art. 2-4 y 6

independencia funcional de jueces y magistrados⁵; independencia de jueces y magistrados respecto a los partidos⁶; independencia disciplinaria de jueces y magistrados⁷; independencia económica de jueces y magistrados⁸; el principio judicial de no ser transferidos⁹; status apolítico de jueces y magistrados¹⁰; responsabilidad civil y criminal de jueces y magistrados cuando éstos se exceden de sus funciones; introducción de un sistema de competición para el acceso a la judicatura¹¹.

Se hace preciso esperar a 1873 para que el proyecto referente al autogobierno del Poder Judicial cobre cierta vida. El impulsor de esta empresa fue SALMERÓN, Ministro de Gracia y Justicia durante la I República, quien a través del Decreto de 8 de mayo de 1873, intentó establecer nítidas diferencias entre el poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

⁵ Id. art.4

⁶ Id. art. 117, 119

⁷ Id. Título XIX.

⁸ Id. Título III

⁹ Id. Art.9 y Título IV

¹⁰ Id. art. 7

¹¹ Id. Título II

Para evitar lo que podemos denominar como "manifiestas actuaciones del Ejecutivo en la vida judicial", se propuso que se diera efectividad a la Ley Orgánica de 1870 en lo referente al nombramiento, ascenso, traslación y separación de los miembros del Poder Judicial, evitándose con ello la participación del Ministerio de Justicia. Se hacía necesario igualmente modificar la audiencia e informe del Consejo de Estado por la del Tribunal Supremo órgano éste al que se consideraba más imparcial que el Gobierno a la hora de llevar a cabo la valoración de los méritos de aquellos que esperaban ser nombrados; se trataba con todo ello de hacer realidad el autogobierno judicial.

Por otro lado, se hace preciso indicar como causa principal del fracaso de este proyecto el hecho de que el Tribunal Supremo no se consideró asimismo como el órgano apropiado para llevar a cabo dicho cometido; tras varias operaciones el Tribunal Supremo había conseguido ser despojado de sus atribuciones; los Decretos de 3 de Octubre de 1873 y 14 de Enero de 1874 dejaban sin efecto el ya preconizado autogobierno del Poder Judicial.

Sin detenernos en el Proyecto de Ley de Organización de las Carreras Judicial y Fiscal de 1876, en el que se consideraba interesante dar entrada a senadores y diputados a

las Juntas que se formaban para llevar a cabo la clasificación de la Carrera Judicial, llegamos a 1894; fecha ésta en la que es de destacar el proyecto realizado por el Colegio de Abogados, en el que se pretendía disminuir la intervención del Ministerio en favor del autogobierno judicial, especialmente en lo referente a la inspección de Tribunales y en la apreciación de méritos.

El Proyecto BARROSO, de 1916, propugnaba la creación de un Consejo Judicial, cuyas funciones principales serían las relativas al estudio de las condiciones reunidas por aquellos sujetos que pertenecían a la carrera judicial, respecto de las cuales remitiría los informes elaborados al Ministerio de Justicia. La materia fue objeto de discusión y análisis por los contemporáneos de BARROSO; en especial, VICTOR PRADERA, quien consideró que el Consejo Judicial debía tener como función esencial la valoración de méritos, y que dado su papel de Tribunal de Honor, debían ser excluidos de dicho Consejo aquellos miembros que no pertenecieran a la carrera judicial; el objetivo de dichas exclusiones no era otro que el de evitar las posibles interferencias realizadas desde el plano político.

La Junta Organizadora del Poder Judicial, creada por Decreto de PRIMO DE RIVERA de 20 de Octubre de 1923, y que

puede considerarse en opinión de REQUEJO IBÁÑEZ como el segundo intento de llevar a cabo la instauración de un régimen de autogobierno, tuvo una vida muy corta: el 21 de junio de 1925 se suprimió.

Con posterioridad podemos destacar, de entre los diversos proyectos existentes referentes al autogobierno del poder judicial, entre otros, el realizado por ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO en 1929 elaborado en forma de bases; el desarrollado por ELOLA en 1931, en el que se defendía un Consejo Judicial formado por diversos funcionarios judiciales de las diversas categorías y en cierta proporción, dedicado fundamentalmente a aspectos organizativos.

El proyecto llevado a cabo por ALBORNOIZ en 1932, consideraba como organismo apropiado en lo referente a los ascensos y traslados de los miembros de la carrera judicial al Ministerio de Justicia, previa la valoración realizada por el Presidente del Tribunal Supremo de los candidatos propuestos por las Salas de Gobierno, en unión a cinco asesores designados anualmente.

Por último, debemos destacar la idea presentada por LUNA GARCÍA en 1938, que pretendía la supresión del

Ministerio de Justicia, trasladando sus funciones al Tribunal Supremo y a la Sala de Gobierno.

No puede hablarse de ningún precedente durante la larga dictadura franquista¹², en la que los principios de unidad de poder y coordinación de funciones, se concretaron en un control gubernamental de los aspirantes a la Carrera Judicial y en el monopolio para el nombramiento de los cargos judiciales de algún relieve.¹³

La creación del actual Consejo General del Poder Judicial con la vigente Constitución ha supuesto un paso muy importante. El Borrador aparecido en la presa el día 25 de Noviembre de 1977 fue objeto de duras críticas, lo que motivó la inclusión de importantes cambios en el texto definitivo; el cual, no saldría a la luz nuevamente sino hasta el 27 de Diciembre de 1978, fecha en la que, junto con el resto de los preceptos que conforman la actual Constitución fue sancionado

¹² Tal y como puso de manifiesto Rodríguez Aguilera, prolongada la situación de la guerra civil, el débil Poder Judicial español se encuentra con una estructura de la Carrera judicial " jerarquizada y subordinada de tal modo al Gobierno que pone en manos de la libre decisión de éste, no tan sólo los cargos importantes de la Carrera Judicial, sino de la mayor parte de los destinos de la misma, a través de la ambigua fórmula de la especial idoneidad " Véase El Poder Judicial en la Constitución ed. Bosch, Barcelona, 1980

¹³ Movilla Alvarez, C.: " El autogobierno de la justicia" en Jornadas de estudio sobre el CGPJ celebradas en Madrid del 10-13 Dic.de 1981, Ed. Nacional, CGPJ, pág.259

por el Rey. El 23 de Octubre de 1980, bajo la presidencia de los Reyes, se constituyó por vez primera¹⁴ el Consejo General del Poder Judicial.

CAPÍTULO II INSTITUCIONES ANÁLOGAS EN EL DERECHO COMPARADO

SECCIÓN I INTRODUCCIÓN

¹⁴ El 23 de octubre de 1985 finalizaría el primer Consejo General del Poder Judicial del que fue presidente Federico C. Sainz de Robles. La regulación normativa de la renovación del mismo sería recurrida ante el Tribunal Constitucional. Cinco años más tarde finaliza el segundo mandato del Consejo, muy criticado por su ineficacia y sometimiento al ejecutivo. Así como el primer Consejo puede calificarse de activo y conflictivo, " el segundo parece vaciado de toda fuerza: atacado desde su nacimiento con la acusación de politización y dependencia del partido político mayoritario, desposeído de numerosas competencias por la Ley Orgánica de 1985, reducido a los límites coincidentes con el mínimo constitucional, este órgano es incapaz de actuar de otra forma" (Véase Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" en Revista de Derecho Político núm. 38, UNED, Madrid, 1993, pág. 87).

En el tercer mandato (1990-1995), estando presidido por Pascuala Sala, el Consejo ha seguido en funciones hasta que la situación interna se consideraba insostenible; se han puesto de manifiesto las necesidades de reformar o impulsar a la institución hacia un nuevo rumbo.

En relación al nuevo Consejo General del Poder Judicial, elegido tras más de nueve meses de interinidad del anterior Consejo, las dudas sobre el papel que desempeñará son notables en opinión de las distintas asociaciones " El Consejo nace bajo sospecha" Véase Rev. Momento de la actualidad jurídica, núm. 2, Agosto de 1996, págs. 8 a 14. los Vocales designados han sido Emilio Olabarria, Rafael Fernández Valverde, Bruno Otero, Javier Moscoso, Teófilo Ortega, Ángeles Huet, Luis López Guerra, Elisa Veiga, Jacobo López Barja de Quiroga, Manuela Carmela, R. Sáez Valcárcel, Margarita Retuerto, Rubén Jimenez, Francisco Monterde, Enrique Arnaldo, Benigno Varela, Marcelino Murillo, M. Damián Álvarez, Esther Giménez Salinas y Francesc Camilal.

Es cierto que en pocos países han sido creados órganos de características similares a nuestro Consejo General del Poder Judicial," pero también es cierto que en casi todos ellos existen costumbres constitucionales... que hacen impensable determinadas actitudes de desprecio, recelo o ataque institucional al Poder Judicial"¹⁵. No podemos, sin embargo, dejar de constatar un hecho evidente, este tipo de instituciones " allí donde existen, no sólo perduran, sino que, además, ven reforzadas sus atribuciones"¹⁶

Para llevar a cabo un análisis del Derecho comparado, y en especial de la institución del Consejo General del Poder Judicial, se hace preciso delimitar el ámbito de estudio y, para ello, nos centraremos únicamente en aquellos modelos que puedan aportarnos datos de interés¹⁷. En una primera

¹⁵ Navarro, J.: Manos sucias, el poder contra la justicia, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 120

¹⁶ Pascual Sala: en la Clausura del Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León sobre el Gobierno de la Justicia. Véase "El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial", Publicación con motivo en el Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León. Valladolid, 28, 29 y 30 de septiembre de 1994. Ed. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, pág. 471

¹⁷ No se incluye entre los modelos objeto de estudio el sistema alemán, pese a que en la Ley Fundamental de Bonn se prevé la existencia de un Consejo Presidencial del Tribunal Federal, éste " poco tiene que ver con el resto de sus contemporáneos parientes europeos, puesto que sus limitadísimas competencias quedan reducidas a la emisión de dictámenes no vinculantes para el órgano competente para la toma de decisión en materia de nombramientos y promoción de jueces y magistrados.

aproximación podemos destacar la parquedad del texto constitucional español, que remite a una Ley Orgánica para su regulación definitiva, parece ser un denominador común para el resto de los textos que se analizan a continuación; incluso en algún país iberoamericano se contempla la creación del Consejo a través de una Ley Orgánica, sin imposición de los requisitos mínimos a nivel constitucional.

Otra característica propia del sistema español y que encontramos presente en otros modelos como el italiano o el francés es la del autogobierno relativo: " En uno y en otro sistema el Ministerio de Justicia subsiste estándole atribuida la misión de dirigir los aspectos políticos de justicia"¹⁸.

Podemos encuadrar los modelos que vamos a analizar en la clásica división realizada por PIZZORUSSO o en la más moderna llevada a cabo por LUCAS MURILLO DE LA CUEVA. El primero de éstos autores distinguiría en Europa continental entre dos claros sistemas de organización judicial¹⁹:

Pese a la existencia del Consejo, la realidad es que en Alemania no existe autogobierno del poder judicial" Véase Bustillo Bolado, " El autogobierno del poder judicial en Europa" en Poder Judicial, núm. 37, 2ª Epoca, CGPJ, Madrid, Marzo 1995, pág.63

¹⁸ Garrido Falla, F.: Comentarios a la Constitución Civitas, Madrid, 1985, pág.1276

¹⁹ Véanse Villagómez Cebrián, M.; " Las atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: análisis comparado del sistema italiano y el español" en Revista Poder Judicial, núm.

a) El modelo francés, aplicado con algunas variantes en Centroeuropa (Alemania, Austria y Bélgica), que en líneas generales, considera a la Magistratura como una parte de la Administración Pública. En este sistema el poder judicial no se configura como una estructura organizativa propia, y el Consejo Superior, o no existe, como el caso de Alemania y Bélgica, o sólo tiene carácter de órgano consultivo del Presidente de la República (como se dijo que sucedía en Francia.)

b) El modelo italiano, seguido también por España, Portugal y Grecia (aunque con ciertas variantes). Este modelo rompe los ligámenes que unían a la Magistratura con el Poder Ejecutivo, dibujando un Poder Judicial con una organización autónoma, en cuya cúspide está situado el Consejo Superior.

También puede optarse, como se indicaba con anterioridad, por la clasificación tripartita llevada a cabo por LUCAS MURILLO DE LA CUEVA²⁰; clasificación ésta, que

35, 2ª Época, CGPJ, Madrid, Sept., 1994, pág. 311-312 y PIZZORUSSO, A.: " La magistratura" tomo III, en Commentario della Costituzione, con ZAGREBELSKY y CARBONE, Bolonia, 1992.

²⁰ Véase " Modèles de gouvernement du Pouvoir Judiciaire " en Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature , op. cit., págs. 139 a 158 así como en " El gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español", en Revista de las Cortes Generales, op. cit., págs. 170 y ss.

consideramos como la más apropiada, por ser la más completa, y la que permite distinguir entre distintos modelos judiciales: el externo, el interno y el institucional.

El primero de los modelos siguiendo a LUCAS MURILLO, el externo, puede denominarse así porque " en él las principales decisiones sobre el estatuto judicial están atribuidas a órganos externos al Poder Judicial"²¹. El ejemplo típico de este modelo es el vigente en los Estados Unidos, (la selección de los jueces federales se encuentra en manos del poder Ejecutivo. Son nombrados por el Presidente con el examen previo por parte del Senado) que a su vez tiene una enorme influencia procedente del derecho inglés (en este caso, la selección de los jueces que ocupan los más altos cargos es realizada por la Reina a propuesta del primer ministro y tras escuchar a Lord Canciller)

El modelo interno se justifica " porque, bien de forma directa, bien en virtud de recurso, son las propias instancias judiciales las que resuelven las cuestiones que afectan al estatuto mientras que la intervención ministerial tiene un carácter reglado que le priva normalmente de todo

²¹ Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español", op. cit., pág. 179

peligro "²². Este sistema precisa de la existencia de un juez-funcionario. El problema que se plantea es que en estos sistemas se origina una cierta " autonomía de las salas de gobierno de los tribunales, al convertirse en órganos disciplinarios, o se terminan creando órganos de carácter consultivo, que colaboran con el Gobierno en la adopción de medidas relativas al estatuto de los jueces²³.

El modelo institucional sería para LUCAS la lógica consecuencia de un modelo interno que evoluciona de su propia experiencia, y que crea un órgano de carácter colegiado " situado fuera de la dependencia del poder ejecutivo, en cuyas manos se ponen los instrumentos necesarios para resolver, de acuerdo con la Constitución y la ley, cuanto afecta al estatuto de los jueces"²⁴

²² Ibidem, pág. 184

²³ Ibídem, pág. 185

²⁴ Ibidem, pág. 185

SECCIÓN II EN EUROPA OCCIDENTAL:

i) Le Conseil Supérieur de la Magistrature (Francia)

Comenzamos por analizar este modelo constitucional debido a que la primera aparición de esta institución, tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina²⁵, se encontraría en la Constitución Francesa de 27 de diciembre de 1946, que dedicaba el Título IX a regular el Consejo Superior de la Magistratura.

Dicha figura sería " precedente de los demás órganos que, con idéntica finalidad, adoptarían primero la Constitución italiana de 1947 y, más tarde, siguiendo su ejemplo, la Constitución española de 1978, como también lo harían los textos constitucionales vigentes portugués y griego "²⁶. Otros autores han señalado que la Constitución Francesa de 27 de diciembre de 1946 " reconoce y potencia un órgano que, si bien con una funcionalidad muy reducida, ya

²⁵ Véase LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P.: " El Gobierno del Poder Judicial y los modelos ..." op. cit., pág. 186 En esta misma dirección, véase Terol Becerra, M. J.: El Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pág. 53

²⁶ Terol Becerra, M. J.: El Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pág. 53

venía existiendo en el país vecino (se hace referencia a Italia) desde 1883"²⁷

Para nosotros, como posteriormente podrá observarse, el primer punto de referencia histórico en el Derecho Comparado lo constituye el *Conseil Supérieur de la Magistrature*, instituido por la Constitución de la IV República francesa (1946-1958), profundamente modificado por la Constitución de la V República (1958-1994).

De la Constitución de 1946 destaca la escueta regulación existente en lo referente a las atribuciones con que cuenta el *Conseil*, al tiempo que detallaba con una mayor amplitud y de manera pormenorizada todo lo relativo a su composición.

El *Conseil Supérieur de la Magistrature* del 46 tenía como principal función la de " garantizar la autonomía judicial con respecto al Gobierno, pero sin darle una independencia absoluta."²⁸. Más en concreto, las funciones que el *Conseil* debía realizar durante su fase inicial se

²⁷ Véase PRIETO CASTRO, L.: " El autogobierno de la magistratura", en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, núm. 2, 1970, pág. 265 y BUSTILLO BOLADO R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit., pág. 63

²⁸ García-Pelayo, M.: Derecho constitucional comparado, Alianza, Madrid 1984, págs. 515-516

pueden resumir en las siguientes; asegurar la disciplina judicial, administración de los tribunales de Justicia, proponer al Presidente de la República el nombramiento de todos los magistrados, a excepción del Ministerio Público, y aconsejar al Jefe del Estado sobre los recursos de gracia, actuación ésta que el Presidente de la República tenía que ejercitar a través del Consejo.

El *Conseil* de esta primera fase estaba compuesto por "catorce miembros, de entre los que formaban parte el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, quienes ostentaban, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia del órgano. En lo referente a los demás vocales, seis eran elegidos por la Asamblea Nacional de entre personas ajenas a ella por mayoría de dos tercios, cuatro habían de ser magistrados representantes de cada una de sus categorías -(jueces de paz, Tribunales de primera instancia, Tribunal de Apelación, Tribunal de Casación y elegidos por Colegios formados por magistrados de cada una de estas categorías)- y los dos últimos eran nombrados por el Presidente de la República entre quienes no fuesen ni miembros del Parlamento, ni magistrados, pero sí perteneciesen a la profesiones jurídicas. El mandato de todos ellos era de seis años."²⁹

²⁹ Referencia a los artículos 83 y 84 de la Constitución de 1946

Con la Constitución de 1958 el Conseil Supérieur de la Magistrature, al que encontramos regulado en los artículos 64³⁰ y 65³¹ sufre importantes modificaciones respecto del existente en 1946. El Conseil estará ahora formado por once miembros frente a los catorce anteriores. Únicamente se hace referencia a cuestiones relativas al Presidente y Vicepresidente del Conseil, remitiendo el régimen aplicable a los otros nueve³² miembros a la Ley Orgánica.

³⁰ Constitución Francesa de 1958, en su artículo 64 dispone: " El Presidente de la República garantiza la independencia de la autoridad judicial. Será asistido por el Consejo Superior de la Magistratura. Una Ley Orgánica fijará el estatuto de los magistrados. Los magistrados serán inamovibles."

³¹ Constitución francesa de 1958, art. 65:" El Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia es el Vicepresidente de derecho. Puede suplir al Presidente de la República. El Consejo Superior comprende, además, nueve miembros designados por el Presidente de la República en las condiciones fijadas por una ley orgánica"

³² La regulación de la mencionada Ley Orgánica se encuentra en la ordenanza núm. 58-1271 de 22 de diciembre de 1958 estableciéndose en ella que corresponde su designación al Presidente de la República. Cuando el Consejo se encuentra presidido por el Presidente de la República, algunos autores como FRANÇOIS-GUILHEM BERTRAND lo han denominado *Gran Consejo*. Cuando estaba constituido bajo la presidencia del Ministro de Justicia lo denominan *Pequeño Consejo*. En referencia a la forma de designación de los otros nueve miembros, la elección debe recaer entre:

- Dos miembros son nombrados libremente por el Presidente, fuera de la magistratura, en razón de su competencia
- Seis magistrados (tres del Tribunal de Casación y tres de los otros tribunales) son nombrados por el Presidente de una lista que incluye el número de nombres triple del número de puestos a cubrir. Estas listas son establecidas por la oficina del Tribunal de Casación.

Aunque el Conseil no conserva, como consecuencia de las modificaciones normativas todas las competencias que tuvo en el momento de su creación, durante la época de la IV República, sin embargo, esta institución se ha mantenido hasta nuestros días. Previo a su análisis debemos observar la configuración de que es objeto hasta el momento de ser transformado en un sistema de doble formación.

El sistema que se seguía durante la V República, y previo a la reforma 1993-1994, para la elección de nueve de los once³³ miembros del Conseil, se basaba en la designación del Presidente de la República entre: " tres Magistrados del Tribunal de Casación; otros tres Magistrados de Juzgados y Tribunales, elegidos de una lista formada por dicho Alto Tribunal, de manera que en ella estén representadas las dos

- Un consejero de Estado nombrado en las mismas condiciones de una lista de tres nombres fijados por la Asamblea General del Consejo de Estado.

El Consejo era nombrado por un período de cuatro años, sus miembros eran renovables y no podían ser removidos durante el transcurso de su mandato

FRANÇOIS-GUILHEM BERTRAND: El Gobierno de la justicia en Francia en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, Publicación con motivo en el Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León. Valladolid, 28, 29 y 30 de septiembre de 1994. Ed. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996

³³ Debemos recordar que el Ministro de Justicia y el Presidente de la República son miembros natos del Conseil.

categorías judiciales y, finalmente, del último tercio, un Consejero del Estado, designado entre los incluidos en una terna propuesta por el Pleno del mismo, y dos, juristas distinguidos por su competencia, elegidos libremente por el Presidente, sin que medie su presentación"³⁴.

Las funciones que desarrollaba el Conseil durante la V República eran, entre otras, las de dictaminar sobre los indultos y, sobre las propuestas del Ministro de Justicia relativas al nombramiento de otros jueces; en su función de consejo disciplinario de la judicatura se encuentra presidido por el Primer Presidente del Tribunal de Casación. Por ello se dice que, pese a que con su composición se aseguraba la mayoría de la Magistratura, ésta no garantiza la efectividad de sus posturas, habida cuenta de que excepto en cuestiones de disciplina, el consejo carece de facultades decisorias.

La normativa existente sobre el Conseil ha sido objeto de numerosas modificaciones³⁵; incluso el texto

³⁴ Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " en El Poder Judicial, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. II, Madrid, 1983, pág. 987.

³⁵ Destacamos la propuesta de HUBERT DALLE, Presidente del Tribunal de Montbeliard, que consideró ya en 1985 la necesidad de que se llevara a cabo una reforma en el seno del Consejo Superior de la Magistratura que garantizara la independencia externa y el papel representativo de esta institución; para

constitucional de 1958 precisaba un mayor desarrollo legal que llegó con la Ley Orgánica sobre el Consejo Superior de la Magistratura recogido en la ordenanza núm.58-1271 de 22 de diciembre. Con posterioridad, lo relativo al Conseil ha sido modificado por una Ley Constitucional de 27 de julio de 1993, Ley 93-952, de 27 de julio de 1993 y, por Ley Orgánica 94-100, de 5 febrero de 1994. Sobre estas normas y los cambios que han provocado nos referiremos con posterioridad.

La actual Constitución francesa de 1958³⁶ mantiene entre su normativa la institución del *Conseil Supérieur de la Magistrature*, aunque en relación a ésta se han variando sus atribuciones³⁷, facultades y composición respecto de períodos

ello, en opinión del citado autor, el *Conseil Supérieur de la Magistrature* debería pasar constituirse con un total de trece miembros, que distribuía como recogemos a continuación:

- 6 elegidos directamente por la asamblea de magistrados.
- 4 personalidades designadas por el Presidente de la República.
- 1 consejero de estado designado por la Asamblea General del Consejo de Estado. "

Véase HUBERT DALLE: " El autogobierno del Poder Judicial" recogido en Documentación Jurídica núm. 45-46. Ponencias y Comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre el Poder Judicial, celebradas durante los días 17 al 19 de Enero de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales. Ed. Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Tomo XII, Enero-Junio 1985, pág. 195

³⁶ La loi organique portant sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, en réalité l'ordonnance n°58-1271, du 22 Décembre 1958, précise les modalités de désignation des membres.

³⁷ El C.S.M. ha perdido tras las recientes modificaciones operadas, algunas de sus facultades. Entre otras destacamos la pérdida de la exigencia constitucional de consultar al Consejo cuando iba a llevarse a cabo el ejercicio del derecho de gracia.

previos. Tras las modificaciones operadas por las distintas leyes antes mencionadas, la situación ha quedado, del siguiente modo:

Lo relativo a la presidencia del *Conseil* no ha sufrido modificación alguna; se sitúa como representante de la institución al Presidente de la República³⁸. Como vicepresidente actúa el Ministro de Justicia, que es miembro nato del *Conseil* por razón de su cargo. Sin embargo, las atribuciones encomendadas al Presidente de la República se han visto modificadas: ya no nombra a los demás miembros de dicho Consejo; va a ser la propia institución la que proponga el nombramiento de los magistrados (frente a la anterior situación en la que el Ministerio de Justicia era el que proponía éstos)

Debemos destacar como se establecen dos formaciones distintas del Consejo; uno relativo a los fiscales (*parquet*) y otro referente a los jueces (*siège*).

Para este binomio además del Presidente y del Vicepresidente, se integrarán en la institución otros diez,

³⁸ Salvo cuando se ejerzan funciones disciplinarias, en cuyo caso preside la institución el Presidente Primero del Tribunal de Casación

configurándose de esta manera un *Conseil* constituido por un total de doce miembros.

De este total de doce integrantes, encontramos una base común, de seis miembros, independientemente de la formación a la que nos refiramos:

- Presidente de la República
- Ministro de Justicia³⁹, vicepresidente de derecho
- Un Consejero de Estado elegido por la Asamblea General del Consejo de Estado
- Tres personalidades designadas respectivamente por:
 - * El Presidente de la República
 - * El Presidente de la Asamblea Nacional
 - * El Presidente del Senado

Centrándonos ya en el análisis particularizado de las dos formaciones a las que hemos hecho referencia vemos como

³⁹ Debemos resaltar como ni el Presidente de la República ni el Ministro de Justicia forman parte del Consejo cuando éste se constituye en formación disciplinaria. Tal y como ha señalado GRIVART DE KERSTRAT, F. " Even when the urgency of a situation may necessitate a decision by the Minister of Justice to remove a judge, the Minister is under an obligation to seek the opinion of the Conseil Supérieur de la Magistrature on the case. Judicial independence: The contemporary debate, ed. Shimon Shetreet of Jerusalem and Jules Deschênes, Superior Court of Québec (Consultin Editor), Martinus Nijhoff Publishers, a member of the Dluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985, pág.69

con la entrada en vigor de la LO 94-100 de 5 de febrero de 1994 se ha creado un Conseil de " Parquet" (Fiscales) cuya composición se integra, además de por los miembros de la base común anteriormente citados por:

- un Abogado General del Tribunal Supremo
- un Fiscal General de un Tribunal de Apelación
- un Fiscal de la República del Tribunal
- dos fiscales
- un Magistrado

Al igual que se exigen una serie de requisitos para el sistema de " Parquet", existen determinadas condiciones para el sistema de " Siège" respecto al procedimiento de su elección, así, deben proceder:

- Un magistrado de la Corte de Casación fuera de jerarquía, elegido por la Asamblea de Magistrados, fuera de la jerarquía de ese Tribunal.

- Un primer presidente de Corte de Apelación elegido por la Asamblea de primeros presidentes de Cortes de Apelación.

- Un presidente de Tribunal de Gran Instancia elegido por la Asamblea de presidentes de Tribunales de Gran

Instancia, de Primera Instancia o de Tribunales Superiores de Apelación.

- Dos magistrados elegidos por un sistema indirecto
- Un fiscal elegido por un sistema indirecto⁴⁰

La reforma llevada a cabo es por tanto significativo. Sin embargo, se han dejado en el olvido algunas cosas: " no se ha llegado a eliminar el carácter formalmente subordinado al Presidente de la República que el texto de 1958 atribuye al Consejo, cosa ésta que sí se contemplo en los trabajos parlamentarios que prepararon la reforma. Tampoco se ha llegado a reducir la posición del Ministerio de Justicia a la de asistente, con voz pero sin voto ni a atribuir al Presidente de la República el nombramiento de un vicepresidente ajeno al poder ejecutivo, ni a encomendar al Presidente del Consejo Constitucional la designación de personalidades que se ha acabado atribuyendo al Jefe del Estado, extremos todos ellos contemplados en el proyecto. En definitiva, se ha reducido el número de magistrados, que es sustituido por un fiscal, se ha aumentado en uno el de personalidades y se ha optado por un sistema de doble

⁴⁰ Sobre la fórmula indirecta de elección de estos dos magistrados y un fiscal, deben tenerse en cuenta los artículos 3-4-15 del Decreto 94-199. Véase el análisis realizado sobre el sistema electoral citado en Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El Consejo General del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op., cit., pág. 189-190

formación. Además, continúa existiendo una presencia gubernamental cualificada en el órgano. Finalmente, cabe apuntar que la Constitución sigue sin precisar cómo se realizará la designación de los magistrados y fiscales."⁴¹

La doctrina francesa ha entendido que ha sido el propio *Conseil* el que se ha ocupado de determinar claramente su competencia: simple dictamen no vinculante para los nombramientos de los Magistrados componentes del Ministerio Público...pero sin embargo, su dictamen es obligatorio en la propuesta de todos los nombramientos de Magistrados ("Siège").

El criterio del C.S.M.se le impone al Presidente de la República para todos los nombramientos de Magistrados y supone por tanto una garantía total del carácter independiente de los nombramientos; importante es también señalar cómo la renovación de los miembros del *Conseil* ha pasado ahora a ser cada cuatro años, estableciéndose además

⁴¹ Véase Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso ..." op. cit., pág. 188-189. De igual modo ha recogido esta crítica BERTRAND " de hecho, de los seis miembros elegidos, tres representan a los 500 más altos magistrados y los otros tres a 5.500... Igualmente se ha señalado que la elección del modo de escrutinio uninominal a una vuelta prima al sindicato mayoritario." en El Gobierno de la Justicia.El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág.72

la imposibilidad de continuar en el puesto de manera inmediata.

La presencia de personalidades nombradas por el Jefe del Poder Ejecutivo y los Jefes del Poder Legislativo, evita el riesgo de corporativismo que los medios a menudo reprochan a los Jueces."⁴² Al mismo tiempo, "la presencia del Presidente de la República, que no es un Jefe del Estado moderador y arbitral, sino el más poderoso de los órganos constitucionales, y del Ministro de Justicia, aunque no iguale numéricamente la mayor participación de los magistrados, sí aporta el suficiente equilibrio institucional."⁴³

En los inicios de este nuevo y reformado *Conseil Supérieur de la Magistrature*, los miembros del mismo valoran los cambios efectuados de forma muy positiva; únicamente mantienen un reproche, que para los nombramientos de los Fiscales "Parquet" su criterio no sea vinculante.

⁴² Opinión manifestada por PÂQUERETTE GIRARD-THUILIER, Presidenta de la Asociación Europea de Magistrados y Vicepresidenta de la U.I.M., en *Deliberación*, Ed. APM, núm.13, Julio-Septiembre 1995, págs.16-17

⁴³ Véase Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español " op. cit., pág. 212

Una de las principales diferencias existentes entre el CGPJ español frente al italiano y al francés se encuentra, tal y como se ha señalado⁴⁴, en que en la presidencia de nuestro Consejo General no se contempla al Jefe del Estado como presidente del mismo; este papel está representado como sabemos por el Presidente del Tribunal Supremo, lo que puede conducirnos a la determinación de que la composición del Consejo Superior de la Magistratura y la elección de sus miembros " no resulta de la aplicación de criterios estrictamente democráticos, al depender discrecionalmente de la voluntad del Jefe del Estado."⁴⁵ Al menos en este apartado podemos considerar que nuestra regulación normativa es más positiva que la existente en el Derecho Comparado.

Un aspecto concreto dentro de lo que constituye el estudio comparativo de las distintas formas de relación entre el CGPJ y el CSM viene dado, a la hora de referirnos a la actuación del Consejo, por los distintos informes que debe elaborar, regulados en el artículo 108 de la LOPJ, al que nos referiremos con mayor amplitud con posterioridad.

⁴⁴ Cazorla Prieto, L.M. y Arnaldo Alcubilla, E.: Temas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1988, pág. 372.

⁴⁵ Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " op. cit., pág. 986

En el modelo francés, la Ley Orgánica de 22 de diciembre de 1958 es muy restrictiva, " impidiendo al Consejo cualquier iniciativa normativa y atribuyendo al Gobierno la dirección de la política judicial"⁴⁶. Parece evidente que, el sistema instaurado por las Constituciones francesas de 1946 y 1958, y en concreto el artículo 65 de ésta última," no ha ofrecido a la Magistratura opción válida alguna para gobernarse a si misma... se pone de relieve el ampuloso alcance que los autores y comentaristas han dado al Consejo Superior de la Magistratura que existe en Francia, al sostener, en opinión de PRIETO CASTRO - que implicaba un grado intermedio de autogobierno (entre el alemán y el italiano), cuando la realidad es que su normativa no acusa siquiera un germen de tal, al no estar investido de facultad alguna que, indiciariamente, permita vislumbrar que puede resolver - al menos en *primera instancia*- cuestiones gubernativas que afecten a su esfera de acción "⁴⁷

ii) Il Consiglio Superiore della Magistrature (Italia)

⁴⁶ Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las CC AA " en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 16, Sept.- Dic. 1993, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 34.

⁴⁷ Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " op. cit, pág. 987

Debemos destacar, de manera previa al análisis del modelo italiano, la opinión de numerosos juristas que consideran el sistema establecido en la Constitución Italiana como el que más se ajusta a nuestra propia Norma Fundamental. A este respecto se ha señaladi que sólo tres modelos aparecen hoy como de posible referencia para la organización y estructura de nuestro Consejo: el modelo napoleónico, caracterizado por la prevalencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y por la organización de éste como *carrera*; la experiencia italiana del *Consiglio*, que ha supuesto una clara superación de aquel modelo, combinando equilibradamente la democracia participativa con la representación y el pluralismo social y judicial; y nuestra negativa experiencia de 1985.

No cabe duda de que fue la regulación establecida en el ordenamiento italiano⁴⁸ la que sirvió de "fundamental

⁴⁸ Sobre las diversas modificaciones operadas en el Consiglio hasta 1973 resulta sumamente interesante analizar el brillante trabajo realizado por Daga Luigi: Il Consiglio Superiore della Magistratura, ed. Eugenio Jovene, Napoli, 1973, en el que se estudian los diversos históricos dentro del marco jurídico italiano. Destacamos la diversa normativa sometida a debate en el trabajo anteriormente citado:

- Legge Sicardi (L. 19 de maggio 1851, núm. 1186)
- Ordinamento Giudiziario del 1865 (R. D. 6 Dicembre 1865)
- Legge sul Consiglio Superiore della Magistratura (L. 14 Luglio 1907, núm. 511)
- Legge sulle guarentigie e disciplina della magistratura (L. Luglio 1908, núm. 438)
- Riforma dello stato Liberale (R.D. 14 Dicembre 1921, núm. 1978)

inspiración en la obra de nuestros constituyentes"⁴⁹. De igual modo, podemos afirmar que el modelo francés de 1946 fue tomado por los constituyentes italianos de 1947 para crear su *Consiglio Superiore della Magistratura*, elegido por primera vez, como Consiglio, en 1958⁵⁰, rechazándose así su propio

- Ordinamento Giudiziario del 1923 (R.D. 39 Dicembre 1923, núm. 2786)

- Le modificazioni al Consiglio Superiore (R.D. 30 Dicembre 1926, núm. 2219; L. 5 Giugno 1933 núm. 557)

- L'ordinamento grandi del 1941 (R.D. Gennaio núm. 12)

Se recogen de igual forma algunos proyectos de reforma relativos al Consejo, sobre el número de componentes del mismo...:

- Proyecto Angeloni-Santoni Rugiu

- Proyecto Ferrara

- Proyecto Grassi

En relación a las diversas modificaciones operadas con posterioridad sobre el Consiglio me remito al estudio realizado tanto en el texto como en las notas a pie de página.

⁴⁹ En relación a la evidencia de la impronta italiana en nuestros autores, véase entre otros: Alonso de Antonio, A.L. y J.A.: Derecho Constitucional Español, Editorial Universitas, S.A., Madrid, 1996 pág. 51, Alzaga, O.: La Constitución Española de 1978 Madrid, 1978, pág. 735, de igual modo, Serrano Alberca, J.M. en Garrido Falla: Comentarios a la Constitución Civitas, Madrid, 1985, pág. 1281-1282, en la obra de Andres Ibañez, P. y Movilla Álvarez: El Poder Judicial Temas Clave de la Constitución Española, Tecnos, Madrid, 1986, pág. 49, Mosquera, L.: "La posición del poder judicial en la Constitución española de 1978" en La Constitución Española de 1978 (coord. García Enterría y Predieri), estudio sistemático, Civitas, Madrid, 1981, pág. 687-688, así como en Gerpe Landín, M.: "El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" en Revista Jurídica de Cataluña, núm. 2, Barcelona, 1987, pág. 126

⁵⁰ Sobre la posibilidad apuntada por Biscaretti di Ruffia relativa a la existencia de un primer CSM creado tras la caída del fascismo, véase el Decreto Legislativo de 31 de mayo de 1946, núm. 511. Sin tomar en consideración este supuesto primer C.S.M., el precedente de 1947 tuvo diversas fases de regulación;

precedente histórico de 1907⁵¹. Es pues, en el modelo italiano de origen francés " en cuya idea de independencia parece haberse inspirado el constituyente español, aunque no en su regulación concreta."⁵²

Se ha señalado por la doctrina italiana que el C.S.M. " es el hecho más innovador producido en Europa en esta materia. A partir de su implantación y a través de sus ulteriores vicisitudes se han dado condiciones verdaderamente favorables para que hoy pueda hablarse de un Poder Judicial ciertamente independiente en Italia"⁵³. Es por ello por lo que consideramos sumamente importante llevar a cabo un estudio en profundidad de cómo se ha desarrollado el modelo italiano.

Ley de 24 de marzo de 1958, Ley de 13 de Julio de 1965, Ley de 18 de Diciembre de 1967, Ley de 22 de Diciembre de 1975, Ley de 3 de Enero de 1981....II Consiglio Superiore della Magistratura. Venticinque anni di applicazione della legge 24 marzo 1958 n°195, Napoli 1984.

⁵¹ " El precedente histórico del Consiglio Superiore della Magistratura se remonta a 1907, en que un ente, con ese mismo nombre y competencias muy limitadas para lo que hoy entendemos por un órgano de autogobierno, es creado por ley de 14 de julio de ese mismo año" Véase BUSTILLO BOLADO, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit., pág. 65

⁵² Torres del Moral, A.: Principios de Derecho Constitucional, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Complutense, tomo II, Madrid, 1992, pág. 284.

⁵³ Andrés Ibañez, P.: " Conversación con Alessandro Pizzorusso", en la Revista Poder Judicial núm. 9, Dic. 1983, pág.22

El *Consiglio Superiore della Magistratura* se incorpora por vez primera a la organización judicial italiana con la ley 511/1907, de 14 de julio, que recoge esta institución en su artículo 34⁵⁴. Se trataba de un órgano consultivo del ministro, similar al que había funcionado con anterioridad en Francia. Su Presidente era el Primer Presidente de la Corte di Cassazione de Roma y formaban parte de él además, el *Procuratore Generale* ante la misma Corte, 6 Consejeros y 3 *Sosistitu Procuratori Generali di Cassazione* designados por las Cortes de Casación del reino y nombrados por el Ministerio, y 9 magistrados de grado no inferior al del Primer Presidente de Corte di Appello, nombrados a propuesta del Ministro previa deliberación en Consejo de Ministros. Las Cortes de Casación designaban también 3 consejeros y

⁵⁴ Con posterioridad se han producido numerosas modificaciones: Ley 1331/1912, de 19 de diciembre; R.D.1978/1921, de 14 de diciembre (art. 112); R.D. 2786/1923, de 30 de diciembre (art. 151); R.D-L. 511/1946 de 31 de mayo; Ley 195/1958 de 24 de marzo (sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura); D.P.R.916/1958, de 16 de septiembre (disposizioni di attualizione e coordinamento della legge 195);1198/1967, de 18 de diciembre; Ley 695/1975, de 22 de diciembre; Ley 1/1981 de 3 de enero; 655/1985, de 22 de noviembre; Ley 74/1990, de 12 de abril (modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura; D.L. 361/1995, de 28 de Agosto (convertitio dalla legge 437/1995, de 27 de octubre); Regolamento Interno (aggiornato al 22 dicembre 1995); Regolamento di Amministrazione e contabilita (Testo approvato il 24 gennaio 1969 ed aggiornato al 5 aprile 1995)

Sostituto Procuratore Generale de la Corte di Cassazione,
como suplentes.

La Ley 1311/1912 de 19 de diciembre, modificó la constitución del *Consiglio Superiore della Magistratura*, eliminando el carácter electivo de sus miembros y estableciendo el nombramiento de todos ellos por Real Decreto a propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, oído el Consejo de Ministros. Por Real Decreto 1978/1921 de 14 de diciembre, se dispuso el retorno al primer sistema dejado de nuevo sin efecto el 30 de diciembre de 1923. A la caída del fascismo se restableció una vez más el régimen electivo, esta vez para todos los componentes, a excepción de los dos miembros de derecho.

Podemos entender que " aunque ya había existido en Italia un Consejo Superior de la Magistratura con anterioridad a la Constitución de 1947, sólo la configuración que dió a este órgano la Asamblea constituyente elegida el 2 de junio de 1946, en los artículos 104 y siguientes del texto aprobado por ella, supuso un giro hacia la realización del autogobierno de la magistratura."⁵⁵ El art. 104 de la Constitución de la República, de 1947, dispuso que el CSM

⁵⁵ Pizzorusso, A.: " La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 24, Noviembre 1995, pág. 65

estaría integrado por el Presidente de la República, como Presidente, el Primer Presidente de la Corte de Casación y el *Procuratore Generale* ante la misma Corte y de otros componentes de los que 2/3 serían elegidos por la magistratura entre los pertenecientes a todas las categorías y 1/3 por el Parlamento, constituyéndose ambas Cámaras en sesión conjunta, entre profesores ordinarios de universidad en materias jurídicas y abogados con quince años de ejercicio profesional.

La Ley 195/1958⁵⁶ de 24 de marzo, desarrolló el texto constitucional en lo referente al CSM. Se compone, en la actualidad, después de la reforma introducida por la ley 695/1975 de 22 de diciembre, en el art. 1 de la primera, aparte los miembros de derecho previstos en la Constitución, por veinte magistrados elegidos por los magistrados ordinarios y diez consejeros elegidos por el Parlamento. Por otra parte, el *Consiglio Superiore della Magistratura* una vez constituido elige a su Vicepresidente entre sus propios miembros de procedencia parlamentaria. Este sistema fue posteriormente retocado mediante la ley 3 de junio de 1981, núm.1 en la que se establece que "dieci componenti togati

⁵⁶ La Ley italiana de 1858 fue declarada inconstitucional en lo referente al sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo y conforme a la Ley de 18 de diciembre de 1967 todos ellos han de ser elegidos por todas las categorías del personal judicial.

del Consiglio lossero eletti indipendentemente dalla categoria di appartenenza, mentre gli altri dieci sarebbero stati scelti, quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori due fra i magistrati appello e quattro fra i magistrati di tribunale"⁵⁷

La elección de los miembros del Consejo procedentes de la magistratura, se produce sobre la base de listas de candidatos presentadas por las diversas asociaciones de magistrados⁵⁸, mientras la elección de los " componentes laicos por el Parlamento tiene lugar a partir de candidaturas presentadas por los partidos políticos. Esto hace posible que en el ámbito del Consejo se materialice una pluralidad de tendencias análoga, aunque diversa, de la que existe en los órganos parlamentarios...Esto determina un acentuado pluralismo en las orientaciones ideológicas, ya que no existe necesaria correspondencia entre las posiciones de los partidos políticos y las asumidas por las asociaciones de

⁵⁷ Pizzorusso, A.: " L'autogoverno del potere giudiziario in Italia" en Documentación Jurídica. Ponencias y Comunicaciones presentadas en " Jornadas sobre el Poder Judicial celebradas durante los días 17 al 19 de marzo de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales" recogido en Tomo XII Enero -Junio 1985, núm.45-46 Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia.

⁵⁸ Associazione Nazionali Magistrati, Unità per la Costituzione, Magistratura Democratica, Movimento per la Giustizia, Magistratura Indipendente.

magistrados, que han rechazado siempre cualquier forma de colaterismo institucionalizado"⁵⁹

En el aspecto referente a la elección de sus miembros, la ley de 1958 ha experimentado diversas modificaciones, como consecuencia de las transformaciones internas de la magistratura, motivadas en buena medida por la superación del viejo modelo jerárquico de organización⁶⁰

Los artículos 104 a 106 de la Constitución italiana de 1947 regulan determinados aspectos orgánicos relativos a la Magistratura, a la que podemos definir como un órgano autónomo e independiente de cualquier otro poder⁶¹. La posición mayoritaria de la doctrina italiana es que " el CSM es un órgano autónomo, independiente, no jurisdiccional y al que no puede atribuirse la representación del Poder

⁵⁹ Pizzorusso, A.: " La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura" op. cit., pág. 67

⁶⁰ Andrés Ibañez, P. y Movilla Alvarez: El Poder Judicial, op. cit., pág. 49-50

⁶¹ Pizzorusso, A.: " The Ordinary Judiciary (magistratura ordinaria) constitutes an autonomous order, independent from any other power of the state. It is administered by the Consiglio Superiore della Magistratura " Véase Pizzorusso, A.: Judicial independence: The contemporary debate, op. cit., pág.196

Judicial (poder difuso) ni siquiera, aunque el tema sea polémico, la representación procesal del mismo."⁶²

En su composición figura el Presidente de la República⁶³, el Primer Presidente de la Corte de Casación y el Procurador General de dicha Corte." Es significativa su composición democrática, al margen de esos cargos natos, al ser elegidos casi los dos tercios de sus miembros por todos los Magistrados ordinarios pertenecientes a las distintas categorías de la carrera, ocho de ellos de dicho Alto Tribunal, cuatro Magistrados de los Tribunales de Apelación y otros ocho entre Jueces; completando el resto hasta 33, que

⁶² Porras Nadales, J.A.: " Los conflictos entre órganos constitucionales y principio de separación de poderes" en Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, núm. 52, Madrid, 1986, pág. 32

⁶³ Según el art. 1º de la Ley 195/1958, del CSM es presidido por el Presidente de la República, formando parte del mismo, además el Presidente de la Corte Suprema di Cassazione y el Fiscal General de la República. Tal y como ha apuntado REVENGA SÁNCHEZ " ya en sede constituyente, la relación entre presidencia y vicepresidencia del CSM se concibió como una presidencia honorífica, a cargo del Jefe del Estado, y una presidencia efectiva a cargo del Vicepresidente." Sin embargo, para PIZZORUSSO, la presidencia del Jefe del Estado no constituye un hecho puramente formal y a veces ha dado lugar a problemas... en particular los relativos a la elaboración de la orden del día de las sesiones. Véanse REVENGA SÁNCHEZ, M: " Responsabilidad y disciplina judicial" en Revista Poder Judicial, núm. 21, CGPJ, Madrid 1991, pág. 61 y PIZZORUSSO, A.: " La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura" op. cit., pág. 68, así citados por el primero de éstos, CARLASSARE, L.: " La presidenza del CSM, secondo i costituenti" en Questione Giustizia, núm. 1, 1986, pág.32 y BESSONE, M.: " Sul ruolo insituazionale della vicepresidenza del CSM" Giuresprudenza di Merito núm II, 1985, pág. 741

es el número total de sus miembros, diez personas elegidas por el Parlamento (en sesión conjunta de las dos Cámaras), entre profesores titulares de disciplinas jurídicas de la Universidad y abogados con más de quince años de ejercicio profesional. De este grupo se elige por el propio Consejo un vicepresidente, por lo que los dos primeros cargos del mismo son ajenos a la magistratura"⁶⁴.

Esta composición⁶⁵ del Consejo ha suscitado numerosas dudas dentro de lo que constituye la vida política italiana; entre otras razones por la posibilidad de que se originara una casta cerrada de magistrados en la que los políticos se vieran imposibilitados de ejercer la influencia que podían desempeñar sobre el gobierno de jueces y magistrados. Otro de los temores existentes en la clase política italiana se encontraba en la posible formación en el seno del Consejo Superior de la Magistratura de una corriente que siguiese una

⁶⁴ Domínguez Martín, S.: "Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial creado por la Constitución " op. cit., pág. 988

⁶⁵ En referencia a la composición del Consejo se ha manifestado Pizzorusso, para el que " la institución de un Consejo superior así compuesto ha venido a dar a la magistratura el rango de un auténtico poder del Estado, capaz de contraponerse a los otros y de romper aquella dependencia del ejecutivo que, en el período anterior, consentía la atribución al Ministro de Justicia de competencias inherentes a la administración del personal judicial". Véase Pizzorusso, A.: *L'organizzazione de la giustizia in Italia*, Einaudi, Turin, 1982, pág. 38. Igualmente recogido en " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos..." op. cit., pág. 194

dirección contraria a los criterios adoptados por los órganos competentes, así como que prevaleciesen las apreciaciones propias del magistrado, divergentes de las directrices políticas generales del país... éstos son entre otros, los temores que a nuestro parecer ponen de relieve, la razón de ser y la motivación esencial que justifica y ampara la defensa que de dicho autogobierno judicial se ha realizado por parte de la judicatura italiana.

Por otro lado, en referencia a ese autogobierno y a la composición mixta del Consejo, " el pluralismo en el interior del Consejo es una garantía para la independencia de los jueces frente al propio CSM -independencia en el plano interno- de modo que se hace posible a cada magistrado encontrar en este órgano una forma de protección y, en todo caso, se reafirma la posibilidad de que cualquier eventual agravio que pudiera cometerse o intentarse no quede oculta a la opinión pública, sino que pueda dar lugar a debates y reacciones, incluso fuera de los ámbitos judiciales. Este sistema de composición mixta constituye una solución intermedia que, por un lado, responde a la naturaleza representativa y democrática que debe tener un órgano de gobierno y, por otro lado, evita que el reforzamiento de la

independencia de la magistratura, que supone la creación del CSM, pudiera inducir a ésta a encerrarse en sí misma"⁶⁶

Las facultades con que cuenta el Consejo Superior de la Magistratura, atribuidas en virtud de diversos preceptos constitucionales y desarrollados por leyes como la Ley Ordinaria de 24 de marzo de 1958, son llevadas a la práctica a través de una serie de órganos⁶⁷ que, al igual que sucede en el modelo español, son imprescindibles para el desarrollo de la actividades encomendadas al *Consiglio*.

⁶⁶ Véase Villagómez Cebrián, M.: " Las atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: análisis comparado del modelo italiano y español" en Rev. Poder Judicial, núm. 35, 2ª Epoca, ed. CGPJ, Madrid, septiembre, 1994, pág. 312

⁶⁷ Destacamos el Comité de Presidencia, las Comisiones (ya sean éstas las previstas en la ley o en el propio reglamento del Consejo) y la Sección Disciplinaria: compuesto por nueve miembros titulares y por seis suplentes. Dos tercios de sus miembros son de procedencia judicial, y un tercio de entre los elegidos por el Parlamento. Son miembros titulares: el Vicepresidente del CSM, dos miembros de entre los elegidos por el Parlamento, un Magistrado de Casación y cinco Magistrados del resto de las categorías judiciales. Y son miembros suplentes: un Magistrado de Casación, tres Magistrados, y dos miembros de procedencia parlamentaria. La Sección Disciplinaria debe actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del Vicepresidente del CSM - salvo que el Presidente del Consejo, o sea el Presidente de la República, se valga de la facultad legal de presidirla-. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus miembros, se procederá a su sustitución por un miembro suplente de idéntica procedencia.

Véase Villagómez Cebrian, M.: " Las atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: análisis comparado del sistema italiano y español" op. cit., pág. 314-315

Las facultades a las que hacíamos referencia anteriormente se concentran esencialmente en: la selección y formación de los jueces y magistrados⁶⁸, nombramientos, concursos de ingresos, traslados, ascensos⁶⁹, medidas disciplinarias de los Magistrados⁷⁰, potestad reglamentaria,

⁶⁸ En Italia esta medida es de competencia exclusiva del Consejo: es éste el que convoca la oposición, nombra el Tribunal que decide sobre los diversos ejercicios realizados, establece los diversos pasos a seguir por los jueces en prácticas hasta consolidar su situación...

⁶⁹ Destaca al analizar este apartado el hecho de que el Consejo precise, previa a la adopción de esta medida -la del ascenso-, de exigir un concierto con el Ministro de Justicia. El problema que se plantearía en el caso de que la decisión que adoptara el Ministro fuera contraria a la propuesta del Consejo no existe, dado que la actuación del Ministro de Justicia no es vinculante para el Consejo.

Debemos resaltar a la hora de examinar como se llevan a cabo los ascensos, la intervención de los Consejos Judiciales. Tal y como ha puesto de manifiesto VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, se " trata de órganos de gobierno interno, constituidos en cada Corte de Apelación, con atribuciones de carácter administrativo taxativamente determinadas en la ley y con competencia sobre todos los Magistrados con destino en el distrito....La principal atribución del Consejo judicial es la elaboración de los informes que le solicite el CSM, particularmente, a efectos de promoción a la categoría de Magistrado del Tribunal y Magistrado de Apelación, para la atribución de cargos directivos a los Magistrados de la Corte de Apelación, o para el cambio de funciones de Magistrados, de las decisorias a las promotoras y viceversa." Véase la obra de Villgómez, " Las atribuciones del órgano de Gobierno" op. cit., págs. 319-320

⁷⁰ La titularidad de la acción disciplinaria corresponde en virtud del art. 107.2 de la Constitución italiana, al Ministro de Justicia. Éste tiene atribuida la facultad -discrecional- de promover la acción disciplinaria, mediante propuesta dirigida al Fiscal General. La facultad de la acción disciplinaria se extendió, con la entrada en vigor de la Ley del CSM en 1958 al Fiscal General de la Corte de Casación. Como consecuencia, podemos resumir en tres las posibilidades del inicio de una investigación a efectos de llevar a cabo una sanción disciplinaria:

Mediante requerimiento del Ministro dirigido al Fiscal General del Tribunal Supremo para que éste proceda a una fase instructora.

Mediante la apertura de una fase de instrucción sumaria por parte del Fiscal General y la consiguiente (y obligatoria) notificación de la misma al CSM.

Mediante el requerimiento del Fiscal General dirigido al CSM para que la propia Sección Disciplinaria proceda a tramitar una fase de instrucción formal.

El principal problema que se plantea en este apartado es que en la práctica la iniciativa del Fiscal no ha llegado nunca a buen término; ya sea por la escasez de medios con que cuenta, ya sea por la falta de interés en la materia.

REVENGA SÁNCHEZ ha analizado el problema de la inicial cotitularidad: las razones que justifican la misma se deben a: " la responsabilidad política del Ministro por el funcionamiento global de la Justicia y, de otro, la defensa objetiva de la legalidad atribuida al Ministerio Fiscal. La titularidad del Fiscal General del Tribunal Supremo vendría entonces a actuar como una especie de cláusula de seguridad frente a posibles degeneraciones políticas en el uso (o desuso) de la acción disciplinaria." Véase REVENGA SÁNCHEZ, M.: " Responsabilidad y disciplina judicial.El caso italiano" op.cit., pág.65

Este mismo autor destaca el enorme auge que sufrió la actividad desempeñada por la Sección Disciplinaria desde 1960 a 1985:

AÑOS	DECISIONES ABSOLUTORIAS	DECISIONES DE CONDENA	TOTAL (A+B)
1960-1965	24	46+(5)	75
1966-1970	52	43+(1)	96
1971-1975	90	39+(4)	133
1976-1980	79	26+(5)	110
1981-1985	205	85+(9)	300

Al mismo tiempo, en las conclusiones de su investigación pone de manifiesto como es el " carácter de su gestión, no su dimensión cuantitativa, la que determina del destino de este tipo de responsabilidad. Idónea para configurarse como garantía adicional de los derechos del justiciable, resulta también porclive a ... convertirse en instrumento intimidatorio en manos del ejecutivo, a actuar como jurisdicción corporativa, ensanchando el foso entre magistratura y sociedad." Véase REVENGA SÁNCHEZ, M.: " Responsabilidad y disciplina del juez. El caso italiano." op. cit., pág. 78, cuadro en pág. 76

todo lo relativo a la materia de las incompatibilidades, así como una función de colaboración con la actividad legislativa en materia de organización judicial, mediante la emisión de informes sobre proyectos o proposiciones de ley. Falta pues, -aunque ésta afirmación deba ser parcial, dada la posibilidad otorgada al *Consiglio* para que utilice el Servicio de Inspección del Ministerio de Justicia-, en relación a las facultades con que cuenta nuestro Consejo, la función de inspección. Se debe esta falta de atribución al *Consiglio* en que dicha potestad se encuentra en manos del Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 12 de agosto de 1962 núm. 1311. En opinión de destacados autores italianos, la citada atribución al mencionado Ministerio⁷¹ implica " una alteración en el equilibrio de roles, que fija la Constitución, entre el Ministerio de Justicia, al que el artículo 110 reserva solamente funciones inherentes a la

⁷¹ Sobre las facultades que corresponden al Ministerio de Justicia, destacamos, siguiendo el modelo establecido por VILLAGÓMEZ CEBRIÁN: " Atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: análisis comparado del sistema italiano y español" op. cit. pág. 324:

- a) Facultad para llevar a cabo peticiones referentes a las materias comprendidas entre nombramientos, traslados, promociones... a las que hemos hecho referencia en el texto.
- b) Interviene, aunque tal y como hemos indicado con carácter no vinculante, en los nombramientos de Magistrados para cargos relevantes.
- c) Facultad de promover el ejercicio de la acción disciplinaria.
- d) Dirige y tiene a su cargo el servicio de inspección Disciplinaria.
- e) Refrendo de las actuaciones del Consejo.

organización de los servicios judiciales, y el CSM, que es el órgano institucionalmente investido de la competencia para valorar la actividad y productividad de los Magistrados"⁷².

Debemos recordar que las decisiones del *Consiglio*, en el ámbito de sus competencias constitucionales se exteriorizan por vía de decretos presidenciales refrendados por el Ministro de Gracia y Justicia. De entre todas esas actividades destacamos especialmente la referente al nombramiento de los Consejeros de Casación por "méritos insignes"⁷³ entre juristas de condiciones similares a los que pueden ser elegidos miembros del mencionado Consejo Superior de la Magistratura.

La situación existente en Italia⁷⁴ no dista mucho de la realidad a la que deben enfrentarse los miembros de nuestro

⁷² Ibidem, pág 324

⁷³ Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " op.cit., pág.988

⁷⁴ Sobre la situación actual de la magistratura se ha referido Pizzorusso. " La magistratura en su conjunto y algunos magistrados en particular se han convertido en el blanco de ataques de todo género, desde los propios de la mafia-traducidos a menudo en episodios sangrientos- a los propios de imputados y abogados, consistentes en actos de difamación, menos cruentos pero no por ello menos insidiosos. A estos ataques dirigidos contra magistrados concretos se añaden los que han tenido como objeto la magistratura en su conjunto y consistentes en proyectos de ley o de revisión constitucional tendentes a reducir sus prerrogativas, o en propuestas de referéndum orientadas a explotar demagógicamente errores judiciales..."

poder judicial; el C.S.M " se ha visto llevado a gobernar una magistratura a la que la necesidad de medirse profesionalmente con un tipo de conflictividad social y política de intensidad sin precedentes, ha conferido un elevado índice de politicidad, en una situación asimismo caracterizada por la asunción de nuevas funciones y por el desplazamiento sobre la institución judicial de graves conflictos deficientemente afrontados en las correspondientes sedes políticas "⁷⁵

El modelo italiano, del que debemos de destacar entre otras cosas que se renueva cada cuatro años y no cada cinco como sucede en nuestro sistema, cuenta en lo que hemos calificado como vías de control parlamentario, y sobre las que se plantean distintas cuestiones a lo largo de la investigación, con un eficaz instrumento que no hemos adoptado en nuestro actual Consejo: en Italia las Sesiones del *Consiglio Superiore della Magistratura* son públicas, tal y como dispone el artículo 16 de su reglamento⁷⁶, salvo como

Véase Pizzorusso: " La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura" op. cit., pág. 69-70

⁷⁵ Andrés Ibáñez: El Poder Judicial, Temas Clave de la Constitución Española, op. cit., pág.55

⁷⁶ Reglamento interno aprobado el 22 diciembre de 1995. En el art. 16 viene a establecerse que las sesiones del Consejo son públicas; sin embargo, se disponen de igual forma algunas excepciones tales como los motivos de seguridad, la primacía de la tutela de derechos... Pese a que el acceso a dichas sesiones

es lógico, por motivos de decoro o seguridad. Si en España no se ha adoptado la vía de control a la que venimos refiriéndonos, si al menos se ha establecido la posibilidad de que se recojan en el acta los votos particulares de los distintos miembros judiciales.⁷⁷

iii) El Conselho Superior de la Magistratura (Portugal)

Dentro de la normativa vigente en el sistema portugués, vamos a centrarnos fundamentalmente lo relativo al *Conselho Superior de la Magistratura*, cual es su significado, su composición, función que desarrolla... así como una breve referencia a sus normas más importantes.

El principal problema con el que nos encontramos en el estudio de la normativa lusa viene dado por la propia Constitución de 2 de abril de 1976⁷⁸, artículo 220, debido a

se encuentra abierto al público, el artículo 16 prevé la actuación del vicepresidente del Consejo para controlar las distintas situaciones, atendiendo a lo que disponga el propio Consejo. Debemos resaltar la posibilidad de que las sesiones sean observadas, cuando son públicas, mediante un sistema audiovisual de circuito cerrado. Pese a que las sesiones del Consejo son públicas, sin embargo, las de las distintas Comisiones no lo son, provocándose con ello cierta incoherencia.

⁷⁷ Véase Andres Ibañez: El Poder Judicial op. cit., pág. 85 y la referencia del citado autor a Zagrebelsky, " La pubblicità delle sedute del Consigilio Superiore " Quaderni Costituzionali, n.º3/1982, pág. 685 y ss.

⁷⁸ La Constitución de 1976 ha sido revisada en tres ocasiones; 1982, 1989 y 1992, siendo significativo, tal y como

que, al hacer referencia a la Justicia " parece eludir la configuración de ésta como uno de los poderes del Estado, al dedicarles el título V de la parte III, bajo la rúbrica Tribunales y la incluye en el quinto lugar, dentro de los órganos de soberanía diciendo, que son los que tienen competencias para administrar la justicia en nombre del pueblo"⁷⁹, esa ubicación dentro del marco constitucional y el proclamar la independencia de los miembros de la judicatura, unido a la referencia relativa al Consejo Superior de la Magistratura dan un papel muy particular a la regulación normativa de este país.

Para explicar la importancia que cobra el Conselho⁸⁰ en Portugal resulta suficiente analizar las diversas intromisiones llevadas a cabo por parte del Poder Ejecutivo, unas veces de manera directa, otras a través del Ministerio de Justicia⁸¹, para darse cuenta de la necesidad de

pone de manifiesto GÓMEZ ORFANEL, la inclusión de un precepto que establece la necesidad de esperar cinco años para realizar una nueva revisión. Véase GÓMEZ ORFANEL, G. " Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea", CEC, Madrid, 1996, pág.467

⁷⁹ Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " op. cit., págs. 989-990

⁸⁰ Tal y como ha señalado Lucas Murillo de la Cueva, debemos indicar para evitar confusiones que nos referimos al Consejo Superior de la Magistratura, debido a que en Portugal, al igual que en otros países de corte europea, existen otros dos Consejos; el Consejo de los Tribunales Administrativos y Fiscales y el Consejo del Ministerio Público. Véase " El Gobierno del Poder Judicial..." op. cit., pág. 196

⁸¹ En relación con el Ministerio de Justicia y su intervención, debe señalarse, como va a ser éste y no otro quien

existencia de un órgano superior de gestión y disciplina de la Magistratura Judicial. Su constitución como tal, ha experimentado diversas fases: se hizo preciso en primer lugar llevar a cabo la previsión normativa que diera lugar al Consejo; la ley reguladora -Ley Orgánica de los Tribunales Judiciales 82/1977, de 6 de diciembre- que vería la luz con cierto retraso en relación a lo que fueron las primeras pretensiones. Siete días más tarde a la Ley 82/1977 tuvo lugar la norma que tendría una especial significación para el CSM, la Ley 85/77 de 13 de Diciembre, (" Diario de la República de Portugal " núm. 286, I Serie) que en su capítulo X va a llevar a cabo la regulación del Consejo.

El *Conselho Superior da Magistratura*, definido por los la doctrina portuguesa como un órgano constitucional autónomo, tiene como función esencial gestionar la disciplina de los tribunales judiciales cuya existencia y composición debe satisfacer dos requisitos:

(a) garantizar la autonomía de los jueces y tribunales judiciales, tornándolos independientes del Gobierno y de la Administración;

propone el presupuesto relativo al Consejo, con base a la elaboración que ha de hacerse en la Secretaría del mismo. Domínguez Martín, S.:" Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial creado por la Constitución " op. cit., pág. 991

(b) atenuar de algún modo la ausencia de legitimación democrática de los jueces, en lo que se refiere a su forma de designación, atribuyéndoles la propia de los órganos elegidos directamente -Presidente de la República y Asamblea Republicana-⁸².

La responsabilidad de la organización administrativa judicial recae desde el momento de su constitución en el "Alto Consejo de la Magistratura". La composición del *Conselho*, fijada constitucionalmente por vez primera en la revisión constitucional de 1982, ha sufrido diversas variaciones, ya sea vía Decreto-Ley o Ley, sobre las que nos referiremos de forma particular, hasta llegar a la situación actual.

El *Conselho*, situado en lo más alto del sistema judicial portugués, fue creado por la ley que introdujo el autogobierno de la Magistratura, la Ley 85/77, de 13 de Diciembre, por el que se aprobaba el primer estatuto de magistrados judiciales pos-constitucionales.

Con anterioridad a la existencia del *Conselho Superior* de la Magistrature existía en Portugal el *Conselho Superior*

⁸² Gomes Canotilho, J.J. y Moreira V.: *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 3ª edição revista, Coimbra, Ed.1993, pág.827, traducción propia.

Judiciario, órgano este cuya existencia en la actualidad ha desaparecido, y cuyas funciones y facultades no fueron, ni deben confundirse, con las del órgano sobre el que versa nuestra investigación. Dicho Conselho Superior Judiciario aparece definido como el " Órgão superior hierárquico de toda a organização judiciária no continente e elhas adjacentes dos Açores e da Madeirea, ao qual compete a fiscalização e superintendencia administrativa e disciplinar sobre os magistrados, funcionários e serviços judiciais." (Base XIX de la Ley núm. 2113, de 11-4-1962, y art. 339 del Estatuto Judicial, aprobado por el Decreto Legislativo núm. 44278, de 14-4-1962)⁸³

El *Conselho*, en cuanto a su composición, en un primer momento, estuvo compuesto exclusivamente por jueces, natos o elegidos, tal y como disponía el Decreto-Ley núm.926/76, de 31 de Diciembre. Con posterioridad, pasó a tener una composición mixta, de jueces y de miembros ajenos a la judicatura. Se encontraba integrado por miembros permanentes y de miembros elegidos para el desempeño del cargo de forma provisional, regulaba tal situación la Ley 85/77, de 13 de diciembre (art.140). Los miembros permanentes eran el

⁸³ Fernandes, J.P. y coordinado por Rodrigues Queiró: Dicionário Jurídico da Administração Pública, 2ª ed. Octubre, 1990, Tiragem, págs.631. Para un análisis más detallado sobre las distintas facultades atribuidas a este ya desaparecido órgano, véanse págs. 631 a 645.



Presidente de la República, el Presidente de la más Alta Corte de Justicia, el Presidente de las Cortes de Justicia del distrito, y el Fiscal General del Estado (General State Attorney). El grupo de miembros que debían elegirse se encontraba constituido por cuatro personas, elegidas por el Parlamento, dos jueces provenientes de la Corte Suprema de Justicia, seis jueces de las Cortes de Justicia y cuatro empleados de justicia (clerk of justice)⁸⁴. Como consecuencia de la reforma constitucional de 1982, así como de la Ley 21/1985, de 30 de julio, se produciría un nuevo cambio en la estructura del Conselho; éste se encontraría pues en la presidencia con el Presidente del Tribunal Supremo; formarían parte del mismo dos vocales designados por el Presidente de la República, con la obligación de que uno de ellos debería ser magistrado. Junto a los dos miembros anteriormente citados, siete elegidos por la Asamblea de la República y otros siete elegidos por y entre los jueces. Al mismo tiempo, formaban parte del Consejo seis funcionarios judiciales, elegidos por sus pares y cuya única actividad se limitaba a la discusión y votación de las materias que afectasen a su estatuto. Con posterioridad desaparecían del Consejo éstos seis funcionarios a los que como consecuencia lógica de que

⁸⁴ Para un amplio estudio sobre la evolución histórica, desarrollo, funciones atribuidas...a este Alto Consejo de la Magistratura, resulta interesante el análisis de trabajo publicado por el profesor Pessoa Vaz, A.M.: Judicial independence: The contemporary debate, op. cit., págs.278 a 285

el Consejo fue privado de la materia relativa al resto de funcionarios judiciales. La última modificación legislativa operada en este sentido es la Ley Constitucional 1/1989, de 1 de julio.

En la actualidad, el art. 220 de la Constitución Portuguesa establece un Consejo constituido por diecisiete miembros de los que el número de Vocales designados por el Parlamento es de siete, al igual que el número de los designados por los jueces; el Gobierno no lleva a cabo la selección de ninguno de los miembros, lo cual implica amplias garantías en la independencia judicial. El Presidente de la República llevará a cabo la selección de dos de los Vocales del Consejo, con la obligación de que uno de éstos pertenezca a la vida judicial (juez o magistrado).⁸⁵ Como puede comprenderse rápidamente, la influencia que el Parlamento ejercita sobre el *Conselho Superior da Magistratura* se limita a la designación de los siete miembros que la Constitución le atribuye.

⁸⁵ Artigo 220 (Conselho Superior da Magistratura)

1. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes vogais:

a) Dois designados pelo Presidente da República, sendo um deles magistrado judicial;

b) Sete eleitos pela Assembleia da República;

c) Sete juizes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação proporcional.

2. As regras sobre garantias dos juizes são aplicáveis a todos os vogais do Conselho Superior da Magistratura.

3. Suprimido por la ley Constitucional 1/1989, de 1 de julio
Hacia referencia a los funcionarios judiciales a los que me he referido con anterioridad.

La actual composición del *Conselho* obedece a las siguientes reglas⁸⁶:

a) una mayoría de miembros designados por los órganos de soberanía directamente elegidos, acentuando de esta manera la legitimación democrática a la que con anterioridad nos referíamos, y contrariando el criterio de formas corporativas de autogobierno de la magistratura.

b) simultáneamente, una mayoría de miembros oriundos de la propia magistratura, la mayor parte de ellos elegidos por los propios jueces, entre sí, lo que se traduce en una cierta forma de autogobierno de la magistratura. Se hace preciso llegados este punto señalar que los siete miembros procedentes de la judicatura son renovados cada tres años. Los de designación parlamentaria y presidencial permanecen en el cargo durante la legislatura.

c) ausencia de miembros designados por el Gobierno, remarcándose de esta forma la separación entre magistratura y poder ejecutivo, y evitándose de esta manera todo camino posible de injerencia.

⁸⁶ Véase *Constituição da República Portuguesa*, op. cit., pág. 826

d) entrega de la presidencia del *Conselho* al Tribunal Superior de Justicia, para evitar con la unión personal de miembros cualquier posible conflicto de legitimidad o autoridad, y para reforzar la posición de los jueces del Tribunal Supremo dentro del *Conselho*. Dicha entrega se realiza otorgando la facultad de elección del Presidente del Consejo a los magistrados del Tribunal Supremo; tomando en consideración que la Constitución no exige que el sujeto designado sea juez, se comprende la facilidad de encontrar el equilibrio entre los distintos integrantes del Consejo.

De entre las competencias atribuidas al Consejo desarrolladas a nivel constitucional, destacamos las relativas al nombramiento de los jueces, la potestad de realizar traslados, así como la promoción y el ejercicio de la acción disciplinaria. (art. 219.1)

iiii) El Consejo Superior de la Magistratura (Grecia)

Adoptan el Consejo Superior a través de su Constitución de 9 de junio de 1975, reformada por la ley de revisión constitucional de 1986⁸⁷. Tal y como ha señalado la doctrina

⁸⁷ En la Constitución de Grecia, en el Capítulo II, dentro de la Sección E, relativa al Poder Judicial, encontramos la regulación del Consejo Superior de la Magistratura. En relación a su composición se establece que " estará compuesto por el Presidente del Tribunal Superior competente y miembros del mismo Tribunal designados por sorteo entre los miembros que hayan

en el modelo judicial griego no puede afirmarse " la existencia de ningún precedente histórico de los actuales Consejo Superior de la Magistratura, Consejo Disciplinario Superior y demás Consejos"⁸⁸.

El Consejo Superior de la Magistratura tiene una composición variable, de tal manera que en cada caso formarán parte del consejo el Presidente del Tribunal Superior competente y miembros del mismo tribunal designados por sorteo entre aquéllos que hayan servido al menos dos años ante el mismo tribunal, en las condiciones que la ley establezca. Resulta sumamente curioso también la existencia del Consejo Disciplinario Superior⁸⁹, compuesto por un

prestado sus servicios al menos durante dos años ante el mismo Tribunal con los requisitos establecidos por la ley." (artículo 90.1) En este mismo artículo se hace referencia a algunas de las competencias asignadas al Consejo: " los ascensos, destinos, traslados, expedientes y cambios de plantilla de los Magistrados se efecturán mediante decreto presidencial dictado tras la previa decisión del Consejo Superior de la Magistratura" (art. 90.1)

⁸⁸ Bustillo Bolado, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa"op. cit., pág. 67

⁸⁹ El estudio sobre este Consejo desarrollado por BUSTILLO BOLADO se centra en lo dispuesto en el texto constitucional, así: " El Consejo Disciplinario Superior estará formado por el Presidente del Consejo de Estado como Presidente del mismo, por dos Vicepresidentes del Consejo de Estado o Consejeros de Estado, dos Vicepresidentes del Tribunal de Casación o Consejeros de dicho Tribunal, dos Vicepresidentes del Tribunal de Cuentas, o Auditores Jefes del mismo y dos profesores numerarios de Derecho que pertenezcan al cuerpo docente de una Facultad de Derecho. Los miembros del Consejo serán designados por sorteo entre aquellos que lleven de servicio al menos tres años en Tribunales Superiores o Facultades de Derecho. Estarán excluidos del Consejo cuando se enjuicie un asunto, aquellos

Presidente y seis vocales que viene a ejercer la potestad disciplinaria sobre los Magistrados de los órganos judiciales más importantes; la acción disciplinaria es llevada a cabo por el Ministro de Justicia.

La materia de la que es competente el Consejo se refiere de manera fundamental al estatuto de los jueces y magistrados, así, se ocupa de los traslados, excedencias y cambios de plantilla. El objeto de análisis más interesante dentro de este modelo son los ascensos: la competencia en esta materia no recae de manera exclusiva en el Consejo, sino que se encuentra en última instancia sometido al Ejecutivo.⁹⁰

miembros que pertenezcan al Tribunal del que un miembro, un Fiscal o un Comisario sea llamado para ser juzgado por el Consejo. Cuando un miembro del Consejo de Estado esté afectado por un expediente disciplinario, la Presidencia del Consejo Disciplinario Superior corresponderá al Presidente del Tribunal de Casación. (Véase artículo 91) Para un análisis más detallado véase la obra del citado autor " El autogobierno del poder judicial en Europa "op cit., pág. 68

⁹⁰ Para un análisis pormenorizado de la materia véase Bustillo Bolado, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa " op. cit., pág.68 y ss.

SECCIÓN III EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN

LA EUROPA ORIENTAL:

Sobre la regulación de estos otros países a los que hemos considerado de interés, únicamente vamos a realizar una aproximación con lo que es su regulación normativa fundamental. Intentar profundizar en un análisis más riguroso se encuentra plagado de dificultades, no sólo de acceso a la normativa propia de cada país, sino y, esto resulta más importante, a la realidad propia de cada uno de éstos territorios, debido a esto, únicamente se han analizado aquellos países que hemos considerados más representativos.

i) República de Albania

REPÚBLICA DE ALBANIA⁹¹: en el artículo 15 de su texto constitucional, aprobado en Tirana en Diciembre de 1993, recogido en el capítulo VI relativo a la organización judicial, establece que " El Consejo Supremo de Justicia se encuentra presidido por el Presidente de la República y está

⁹¹ Art. 15 recogido dentro del capítulo VI relativo a " la organización judicial y la Corte Constitucional", de la Constitución, aprobada en Tirana, en Diciembre de 1993 y puesta al día hasta mayo de 1995 por (AAVV) " Constitutions of the countries of the World", Tomos I a XX, Ed. Albert P. Blaustein & Gisbert H., Oceana Publications, Inc., Dobbs, Ferry, New York, (updated), Tomo I. La traducción del texto inglés ha sido llevada a cabo por el autor de la investigación.

compuesto por el Presidente de la Corte de Casación, el Ministro de Justicia y nueve abogados de capacidad y distinción probada, quienes son elegidos para un período de cinco años, sin la posibilidad de ser reelegidos en una elección inmediatamente posterior, a través de una reunión general de la Corte de Casación y la oficina del Fiscal General del Estado. El Consejo Supremo de Justicia es un cuerpo sólido que determina el nombramiento, el traslado y la responsabilidad disciplinaria de los jueces de primera instancia y de las cortes de apelación así como la de los fiscales. La forma en la que el Consejo Supremo de Justicia funciona y sus actuaciones se definen mediante el estatuto que el Consejo Supremo aprueba".

ii) República de Bulgaria

REPÚBLICA DE BULGARIA⁹²: aprobada el 12 de Julio de 1991, dispone en el Capítulo VI, relativo a " El Cuerpo Judicial" (Sudebna Vlast), la existencia de un Alto Consejo Judicial, cuyas actividades se encuentran reguladas por ley, tal y como establece el artículo 133: " La ley gobierna la organización y actividades del Alto Consejo Judicial..."

⁹² (AAVV) " ~~Constitutions of the countries of the World~~", op. cit. Tomo II. La traducción del texto inglés ha sido llevada a cabo por el autor de la investigación.

A la composición de la institución, se hace mención en el texto constitucional de 1991; el Alto Consejo Judicial tiene veinticinco miembros, de los cuales son miembros natos el Presidente de la Corte Suprema de Apelación, el Presidente del Consejo Supremo Administrativo, y el Fiscal General del Estado. De estos miembros, los abogados con al menos quince años de experiencia profesional, una reconocida competencia profesional así como una intachable moral, que no sean miembros de pleno derecho, pueden ser elegidos miembros. La Asamblea Nacional nombra miembros del Ato Consejo Judicial; los otros once son nombrados por autoridades judiciales. Son elegidos para periodos de cinco años, sin que sea posible la reelección de manera inmediata tras agotar el término establecido. Destacamos también el hecho de que las sesiones del Alto Consejo Judicial son presididas por el Ministro de Justicia, que, no tiene derecho al voto. (art. 130)

Las resoluciones del Alto Consejo Judicial en nombramientos, promociones, expulsiones de la carrera judicial, acusaciones, e investigaciones, así como mociones se someten a lo establecido en el art. 129 parágrafo 2, y deben ser llevadas a cabo por votaciones secretas (Artículo 131)

iii) República de Croacia

REPÚBLICA DE CROACIA: Se hace referencia al texto de 22 de Diciembre de 1990, el cual, en su capítulo IV, relativo a " El Poder Judicial" establece que " Jueces y fiscales, de conformidad con la Constitución y la ley, son nombrados y cesados, al igual que la toma de decisiones en las materias relativas a la responsabilidad disciplinaria por el Republicano Alto Consejo de la Judicatura. Dicho Consejo se encuentra compuesto por un Presidente y catorce miembros. El Presidente y los catorce miembros son propuestos por la Chamber of Countries, y son elegidos por la Chamber of Representatives para períodos de ocho años, entre destacados jueces, fiscales, abogados, y profesores de Universidad de la rama de Derecho, de conformidad con la ley." (Véase artículo 121)

iv) República de Eslovenia

REPÚBLICA DE ESLOVENIA: en relación a la Constitución de Eslovenia, debemos citar que las referencias utilizadas se encuentran actualizadas hasta Octubre de 1992, sin que por nuestra parte se tengan conocimiento de posteriores modificaciones en relación a la Constitución de 23 de Diciembre de 1991.

Con la creación del Consejo de la Magistratura " le pouvoir judiciaire bénéficie d'une certaine autonomie dans le choix de magistrats à l'égard du Parlement et du pouvoir exécutif"⁹³. La citada Constitución regula en su art. 131 la normativa precisa para que podamos hablar de un Consejo Judicial. Éste en un primer momento se desarrolló a través de la Ley, debemos recordar que el Consejo de la Magistratura se creó en 1990, para con posterioridad disfrutar de una mayor protección normativa, al recogerse la institución a través del texto constitucional.

La normativa existente aclara que el Consejo Judicial se compondrá de once miembros. Cinco miembros serán elegidos por la Asamblea estatal con base en la recomendación del Presidente de la República, de entre profesores de derecho de la Universidad, abogados y otros sujetos relacionados con el mundo del derecho, y seis miembros elegidos por los propios jueces; entre los que se dediquen de manera continuada al ejercicio de juzgar. El Consejo elegirá un Presidente de entre sus propios miembros.

⁹³ " Communication présentée par la délégation de la Slovénie" dentro de las Jornadas de Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature (Réunion multilatérale organisée par le Conseil de l'Europe en collaboration avec le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire d' Espagne, Madrid 9-11 Nov. 1993) ed. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1995,pág. 117

Sin duda alguna la función de propuesta sancionadora encomendada al Consejo Judicial es una de las más importantes; " Los jueces serán expulsados de la carrera por razones determinadas en la ley. Si un juez infringiera la Constitución o de manera notable la ley en el ejercicio de sus funciones, la Asamblea del Estado podrá apartarlo de la judicatura con la propuesta realizada por el Consejo Judicial" (Véanse los artículos 131 y ss)

v) República de Moldavia

REPÚBLICA DE MOLDAVIA⁹⁴: Constitución adoptada el 29 de Julio de 1994. En lo relativo a la materia judicial destacamos del capítulo IX " Autoridades Judiciales" la sección segunda, pues en la misma se contempla " El Alto Consejo de los Magistrados", que viene a ser una copia del proyecto que se presentara como modelo deseable varios años antes⁹⁵. En la actualidad, el artículo 122 es el que de manera más precisa regula la materia; se contempla la composición y el método

⁹⁴ The Constitution of the Republic of Moldava. Editor the State. Printed by Universul Publishing House. Draught 2000, Chişinău, 1994. Recogido en Constitutions of the countries of the World op. cit. Tomo XII. Issued March 1995, Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York. Traducción propia.

⁹⁵ " L'Administration judiciaire autonome dans la Republique de Moldava". Communication présentée par la délégation de la République de Moldava. Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature , op. cit., págs.108 y 109.

para llevarlo a cabo: " El Alto Consejo de los Magistrados se compone de once magistrados los cuales ostentan el cargo durante un período de cinco años. Son miembros de pleno derecho del Alto Consejo, el Ministro de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Corte de Apelación, el Presidente de la Corte de la materia Presupuestaria, el Fiscal General del Estado. Además, los colegios reunidos de la Corte Suprema de Justicia elegirán de forma secreta tres magistrados más, y otros tres serán elegidos por el Parlamento de entre acreditados profesores universitarios"

La materia relativa a los poderes con que cuenta el Alto Consejo de los Magistrados es establecida, en sus líneas básicas, a través del artículo siguiente, en el que se dispone: " El Alto Consejo de los Magistrados en concordancia con las regulaciones establecidas relativas al cuerpo judicial lleva a cabo los nombramientos, traslados, promoción de jueces así como las acciones disciplinarias contra los mismos."

vi) República de Polonia

REPÚBLICA DE POLONIA: Si atendemos a la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, de 20 de diciembre de 1989,

actualmente en vías de revisión, (Diario Oficial núm. 73, y núm. 435) descubrimos que la composición de este Consejo llega hasta 26 miembros, si bien es cierto que, no son retribuidos por el cargo que ostentan. Los miembros del Consejo son:

- once magistrados pertenecientes a las jurisdicciones de derecho común;

- dos jueces de la Corte Suprema;
- un juez de la Corte Superior de lo Administrativo
- un juez de los tribunales militares
- cuatro diputados;
- dos senadores.

Los jueces son elegidos por la Asamblea General de representantes de los jueces. Los diputados lo son por la *Sejm* y los senadores por el *Senado*.

Los miembros de carácter nato del Consejo son:

- el Presidente de la Corte Suprema
- el Presidente de la Asamblea militar de la Corte Suprema
- el Presidente de la Corte Administrativa Superior
- el Ministro de Justicia
- una persona designada por el Presidente de la República

Debemos resaltar cuales son las funciones encargadas al Consejo; lleva a cabo el estudio de los candidatos que deben ser promocionados en los distintos niveles de la jurisdicción, se encarga también de estudiar y presentar al Presidente de la República los casos en que es precisa la destitución de los miembros de la judicatura. Se encarga de los traslados...Resulta interesante señalar como las decisiones definitivas en materia disciplinaria son competencia exclusiva del Ministro de Justicia.

vii) República de Rumania

REPÚBLICA DE RUMANIA: En su Constitución de 21 de Noviembre de 1991 establece, en la Sección tercera del Capítulo VI, relativo a la " Autoridad Judicial" la existencia de un Alto Consejo de Magistrados.

La estructura de la institución se encuentra en el artículo 132, en el que se establece que el Alto Consejo de Magistrados está compuesto de magistrados, los cuales son elegidos para un período de cuatro años, en sesión conjunta por la Cámara de Diputados y el Senado.

Las competencias con las que cuenta se establecen en el artículo 133, con un posterior desarrollo a través de la diferentes leyes existentes: " El Alto Consejo de Magistrados propone al Presidente de Rumania el nombramiento de jueces y fiscales, con la excepción de los jueces interinos, de acuerdo con la ley. En estos casos, las sesiones son presididas por el Ministro de Justicia que, no tiene el reconocido derecho al voto.El Alto Consejo de Magistrados sirve como consejo disciplinario para los jueces. En estos casos, las sesiones serán presididas por el jefe de justicia de la Corte Suprema de Justicia"

viii) República de Turquía

REPÚBLICA DE TURQUÍA⁹⁶: El Capítulo III relativo al Consejo Supremo de Jueces y al Ministerio Público establece que El Consejo Supremo de Jueces y del Ministerio Público se formará y llevará a cabo sus funciones de acuerdo con los principios de independencia y seguridad propios del ejercicio de los jueces.

⁹⁶ Constitución de la República de Turquía. Ley núm.2709 de 7 de Noviembre de 1982, enmendada por la Ley núm. 3361 de 17 de mayo de 1987. Traducción del texto originario del inglés procedente de Constitutions of the countries of the World op.cit.tomo XVII

El Presidente del Consejo Supremo de los Jueces es el Ministro de Justicia. El Vicepresidente deberá ser un miembro saliente del Consejo. Se prevé la existencia de tres miembros habituales, y tres sustitutos, nombrados por el Presidente de la República para un período de cuatro años. Los vocales pueden ser reelegidos al final de su mandato. El Consejo debe elegir un Presidente de entre sus propios miembros.

El Consejo Supremo de los Jueces y del Ministerio Público tiene a su cargo la admisión de los jueces y fiscales para las cortes de justicia, las cortes de carácter administrativo, las delegaciones de poder de forma temporal, las distintas categorías de promoción, la imposición de penas, las decisiones referentes a la continuidad o no en el cuerpo judicial. Asimismo toma la decisión final relativa a la abolición de una Corte, así como todas aquellas funciones que le sean atribuidas por las leyes y la Constitución.

Las decisiones que toma el Consejo no son recurribles. El Ministro de Justicia precisa del consentimiento de este órgano para conferir poderes temporales en distribución de servicios, así como para colocar jueces y fiscales, ya sean de carácter temporal o permanente, en las oficinas centrales del Ministerio de Justicia. (Véase artículo 159)

SECCIÓN IV EL MODELO JUDICIAL NORTEAMERICANO

Pese a que el sistema existente en este país dista mucho de ser asimilable al modelo tradicional europeo, resulta interesante mostrar algunas características del mismo. Una nota común a nuestro sistema es que persiste una cierta intervención del Gobierno en la organización del Poder Judicial. El sistema de jueces elegidos está muy desarrollado en los Estados Unidos, no a nivel federal, sino al de los Estados." Desde la elección de Jackson para la presidencia en 1928, cuarenta Estados de los EEUU han adoptado el sistema de elección de los jueces del Estado por sufragio universal. Incluso a veces los electores pueden revocar a los jueces en función por una especie de referéndum, el *recall*." ⁹⁷

Pese a que este sistema pudiera parecer brillante, sin embargo no ha dado buenos resultados⁹⁸. Ello debido a diversas razones, entre las que destacamos:

⁹⁷ Duverger, M.: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, pág 164, Ariel, Barcelona, 1980

⁹⁸ Como apuntábamos en el texto, la fórmula elegida no ha resultado todo lo operativa que pudiera parecer, sin embargo, pretender que se desarrolle en un país como Estados Unidos o Inglaterra un modelo similar al de los sistemas europeos plantea graves inconvenientes, entre otras cosas debido a la concepción que se tiene del juez, al que en ningún momento se le asemeja al juez-funcionario, básico en nuestra estructura judicial.

Por un lado, no queda claro que aquellos sujetos que resulten elegidos tengan los conocimientos jurídicos necesarios para desempeñar una labor de tanta responsabilidad. La solución aportada para el caso es que sea preciso el requisito de la calificación de apto por una comisión de juristas.

Otro grave riesgo es el de que para ser elegidos se alíen al programa de un determinado partido, perdiendo de esta forma su imparcialidad - requisito imprescindible para el buen desempeño del cargo-; para eludir esta cuestión bastaría con alargar la duración del mandato parlamentario para que así no se vean influenciados por los partidos políticos.

Con anterioridad me he referido a los jueces federales, éstos son elegidos por un sistema diferente, así, es tomada en consideración no solo la experiencia profesional, sistema predominante en Gran Bretaña, sino que los jueces y magistrados también son elegidos entre los profesores de renombre universitario.

Resulta sumamente interesante, al examinar el modelo americano⁹⁹ el abanico de posibilidades que dependiendo del

⁹⁹ En relación al modelo norteamericano puede resultar interesante la consulta de la obra de CUCHILLO FOIX, M.: Jueces

estado se ofrece para llevar a cabo la selección de los jueces. Véase el brillante estudio que sobre la materia ha realizado LUCAS MURILLO DE LA CUEVA¹⁰⁰:

y administración en el federalismo norteamericano, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, ed. (Monografías) Civitas, 1996

100

Sistema de méritos a través de una Comisión Seleccionadora	Nombramiento Gubernativo o Legislativo sin Comisión Seleccionadora	Elección partidista	Elección no partidista
Alaska	California (G)	Alabama	Georgia
Colorado	Maine (G)	Arkansas	Idaho
Connecticut	New Hampshire (G)	Illinois	Kentucky
Delaware	New Jersey (G)	Lousiana	Michigan
District of Columbia	Rhode Island (*)	Mississippi	Minnesota
Hawaii	South Calorina (L)	North Calorina	Montana
Iowa	Virginia (L)	Pennsylvan ia	Nevada
Maryland		Texas	North Dakota
Massachussets		West Virginia	Ohio
Nebraska			Oregon

SECCIÓN V INSTITUCIONES HOMÓLOGAS AL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL EN IBEROAMÉRICA¹⁰¹

En diversos países de Iberoamérica existen instituciones cuyo objetivo y funciones son similares a las que en nuestro país desarrolla el Consejo General del Poder Judicial. Si bien dichos órganos, que responden a denominaciones distintas, varían tanto en lo que se refiere a

Selección combinada de méritos y otros métodos	Sistema de méritos a través de una Comisión Seleccionadora	Elección no partidista
Arizona	New Mexico	Washington
Florida	Utah	Wisconsin
Indiana	Vermont	
Kansas	Wyoming	
Missouri		
New York		
Oklahoma		
South Dakota		
Tennessee		

(*) Para el Tribunal Supremo, nombramiento por el Legislativo. Para el Tribunal Superior, nombramiento por el Gobernador

Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op. cit., pág.182-183

¹⁰¹ Tal y como ha señalado MANUEL JIMENEZ DE PARGA, debemos referirnos siempre a Iberoamérica y no a Latinoamérica pues ésta última constituye una palabra sumamente peligrosa para nuestros intereses históricos, ya que con la misma se transforma el papel desempeñado por España y Portugal en aquellas tierras. Véase Diario ABC, 16-10-95 " Latinoamérica, una palabra envenenada"

sus atribuciones y composición, todos ellos atienden a la necesidad de crear un órgano de gobierno del poder judicial independiente.

Encontramos así el *Consejo de la Judicatura Federal*, en **México**¹⁰², introducido en su sistema tras la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1994, regulado en el artículo 100 de la Constitución y los artículos 68 y ss. de la LOPJ de la Federación, de 25 de mayo de 1995.

En **El Salvador** el artículo 187 del vigente texto constitucional remite al legislador los aspectos referentes a la configuración del *Consejo Nacional de la Judicatura*. La principal función encomendada a esta institución va a ser la proposición de candidatos para los cargos de Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y de Jueces de Primera Instancia.¹⁰³

En **Paraguay** la Constitución desarrolla y especifica con

¹⁰² Véase MARIO MELGAR ADALID, (Coord.), *Reformas al Poder Judicial*, UNAM., México, 1995, y especialmente el trabajo de SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L.: "El Consejo de la Judicatura Federal a la luz del derecho comparado " en Reformas al Poder Judicial; de igual modo destacamos en relación al modelo judicial mexicano, el estudio llevado a cabo por Héctor Fix-Zamudio: Función del poder judicial en los sistemas constitucionales latinoamericanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1977

¹⁰³ Hace referencia al artículo 187 de la Constitución

mayor amplitud la materia relativa al Consejo de la Magistratura.

Este órgano deberá contar, conforme a lo que determina el artículo 262 y siguientes de la Constitución con: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por esta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional elegidos por sus pares, y un profesor de Facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades Privadas, elegido por sus pares.

Se remite igualmente a la Ley la reglamentación de los sistemas de elección pertinentes¹⁰⁴.

Los Vocales del Consejo de la Magistratura deben reunir los siguientes requisitos: Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer el título universitario de Abogado, y durante el término de diez años, cuando menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la Magistratura Judicial, o ejercido

¹⁰⁴ Véase artículo 262 de la vigente Constitución

la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente.

Los designados para ocupar los puestos más relevantes de esta institución desempeñarán sus funciones durante un periodo de tres años en sus funciones, y gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca la ley¹⁰⁵.

Los miembros de la institución habrán de realizar determinados actos, así, les compete¹⁰⁶: proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo. Del mismo modo van a proponer las ternas de la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de las tribunas inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales. Habrán por último de elaborar su propio reglamento así como cumplir con los demás deberes y atribuciones que fijen su Constitución y las leyes.

¹⁰⁵ Véase el artículo 263 de la vigente Constitución

¹⁰⁶ Véase artículo 264 de la vigente Constitución

Podemos también encontrar una institución homóloga al Consejo General del Poder Judicial en **Venezuela**. El artículo 217 de la Constitución Venezolana se refiere al *Consejo de la Judicatura* y que remite a la Ley Orgánica su creación, la cual habrá de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los tribunales así como garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial. De igual forma, deberá darse adecuada representación a las otras ramas del Poder Público.

El actual *Consejo Nacional de la Magistratura Peruano* surge como fruto de una inquietud puesta ya de manifiesto con el Plan del Gobierno revolucionario de la fuerza armada suscrito por el general Velasco Alvarado (octubre de 1968). Este enunciaba entre sus objetivos: "crear un organismo de alto nivel que garantizara la autonomía del poder judicial ante los otros poderes del Estado. Ello dió lugar al establecimiento del Consejo Nacional de Justicia que, de hecho, no fue sino un instrumento de interferencia y presión en la actuación de los tribunales de justicia. En la Constitución peruana de 1979 se creó el Consejo Nacional de la Magistratura con la facultad de proponer al presidente de la República, para su nombramiento, a los magistrados."¹⁰⁷

¹⁰⁷ Duverger M.: Instituciones Políticas...op. cit., pág 614

Los artículos 246 y siguientes de su actual Constitución regulan un Consejo de la Magistratura que cuenta con un número reducido de miembros, seis en total, uno elegido por la Corte Suprema, otro por la junta de fiscales, tres por los colegios profesionales de abogados y otros auxiliares de la Justicia y otro por los rectores de las universidades. Este Consejo puede autoampliarse a nueve miembros, siendo notorio que los otros dos poderes del Estado no intervienen ni en la designación ni en el gobierno del Consejo, con lo que se preserva la independencia clásica de los poderes en esta república presidencialista.

En **Bolivia**¹⁰⁸ el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Tiene su sede en la ciudad de Sucre. El Consejo es presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y está integrado por cuatro miembros denominados Consejeros de la Judicatura, con el Título de Abogado de Provisión Nacional y con diez años de ejercicio idóneo de la profesión o cátedra universitaria. Los Consejeros son designados por el Congreso Nacional por el voto de dos tercios de sus miembros

¹⁰⁸ La Constitución Boliviana, aprobada el 2 de febrero de 1967, con las modificaciones operadas en la Ley núm. 1585, Ley para la Reforma Política del Estado Constitucional, de 12 de Agosto de 1994, (publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, La Paz).

presentes. Desempeñan sus funciones por un período de diez años no pudiendo ser reelegidos sino pasando un tiempo igual al que hubieren ejercido su mandato.¹⁰⁹

De entre las atribuciones con que cuenta el Consejo en este país destacamos:" Proponer al Congreso Nacional nóminas para la designación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, y a esta última para la designación de los Vocales de las Cortes Superiores de Distrito; Proponer nóminas a las Cortes Superiores de Distrito para la designación de Jueces, Notarios y Registradores de Derechos Reales; Administrar el Escalafón Judicial y ejercer el poder disciplinario sobre Vocales, Jueces y Funcionarios Judiciales, de acuerdo a la ley; Elaborar el Presupuesto Anual del Poder Judicial: Ejecutar el presupuesto conforme a la ley y bajo el control fiscal. La Constitución remite a la ley la organización y demás atribuciones administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura.¹¹⁰

Como podemos observar el Consejo en Bolivia "tiene más atribuciones que el peruano, ya que es un órgano de administración y disciplina del Poder Judicial"¹¹¹.

¹⁰⁹ Véase artículo 122 de la vigente Constitución

¹¹⁰ Véase artículo 123 de la vigente Constitución

¹¹¹ Pellet Lastra, A.: " La versión argentina del Consejo de la Magistratura y del jury de enjuiciamiento" en Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica (La reforma constitucional

Especial atención merece la **República Argentina** por la reciente modificación llevada a cabo en su Constitución, con la reforma de 1994. Entre las diversas cambios operados destacamos la introducción de un *jury* para el enjuiciamiento de la conducta de los jueces federales de primera y segunda instancia y, la creación¹¹² de un Consejo de la Magistratura, apartado éste que como es lógico analizaremos con mayor detenimiento. Estas novedades se incluyeron en el núcleo de coincidencias básicas del Pacto de Olivos, acordado por el Presidente Menem y el ex presidente y líder de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín en diciembre de 1994, con el "doble objetivo de recortar algunas de las facultades de la cuestionada Corte Suprema de Justicia y, a la vez, restarle influencia al presidente en la selección y promoción de los jueces federales"¹¹³

en México y Argentina) ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996, pág. 105-106

¹¹² Debemos poner de manifiesto, al igual que hacen DROMI y NEMEM, la existencia de un antecedente a este Consejo de la Magistratura en el Decreto 1179/91, por el que se creó la Comisión Asesora de la Magistratura. Esta Comisión fue concebida con el objeto de jerarquizar al Poder Judicial, dotándolo de mejores recursos humanos conforme a la valoración objetiva de las cualidades de todos aquellos profesionales que aspiren a ser designados o promovidos como magistrados. (Véase Dromi, R. y Nemem, E.: "La Constitución Reformada, comentada, interpretada y concordada", ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, Rep. Argentina, 1994, pág.374

¹¹³ Pellet Lastra, A.: " La versión argentina del Consejo de la Magistraturay del juri de enjuiciamiento" op. cit., pág.95

El Consejo de la Magistratura, tal y como se denomina esta institución en Argentina, aparece regulado a nivel Constitucional en el artículo 114. Se establece en dicho texto, que dicho órgano regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será renovado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

De entre sus atribuciones destacan: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores: emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores: administrar los recursos y ejecutar el presupuesto¹¹⁴ que le asigne la ley a la administración de

¹¹⁴ Sobre esta materia resulta interesante el análisis de la ley 23.853, conocida como autarquía del Poder Judicial, el decreto 2.190/90, el decreto 2.071/91 así como el decreto 2.356/91. Véase el análisis que de dicha normativa llevan a cabo

justicia: ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados: decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente: dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia

La creación de esta institución responde a un espíritu de cambio, a un intento por salir de la situación de "profunda crisis en que se encuentra el Poder Judicial"¹¹⁵, motivo éste que hizo a la clase política¹¹⁶ desarrollar la Ley

Dromi, R. y Nemem, E.: " La Constitución Reformada, comentada, interpretada y concordada", op. cit., pág. 368.

¹¹⁵ Pedro Sagüés, N.: " El Poder Judicial en la Reforma Constitucional" en la obra colectiva Reforma Constitucional, ed. Ciudad Argentina, Fundación de Estudios Políticos y Administrativos, Buenos Aires, Rep. Argentina, 1994, pág. 48

¹¹⁶ Como ha puesto de manifiesto PEDRO SAGÜÉS, entre la clase política existen distintos tipos de actitudes. Una responde a aquellos que niegan totalmente los problemas existentes en el seno del Poder Judicial; para este sector, se satisface plenamente el nivel de independencia e imparcialidad existente en la judicatura. Incluso llega a sostenerse que es bueno que el juez mantenga una suerte de dependencia hacia otros poderes de origen popular (teoría del juez comprometido), o que por se el Poder Judicial " político", es correcto que tenga ligazones fuertes con los restantes poderes "políticos".

Otro grupo de miembros de la clase política ha asumido el problema judicial y ha intentado honestamente resolverlo. Así, destacamos a HITTERS, C. y VANOSSE, J.R., que propusieron en su tiempo la creación del Consejo de la Magistratura, de la necesidad de la Escuela Judicial o de reformar el método de los concursos. Entre los resultados obtenidos por éste último grupo destacamos como aportaciones básicas: todo lo relativo al Consejo de la Magistratura, las modificaciones en el régimen de

24.309 de Reforma de la Constitución Nacional. En esta ley se configura un Consejo con amplias facultades. Entre otras se atribuyen a éste órgano la administración de los recursos del poder judicial, potestad desarrollada hasta ese momento y desde 1863 por la Corte Suprema; de igual forma, ostenta la autoridad en materia disciplinaria tal y como dispone el art. 114.4 de la Constitución argentina tras la reforma llevada a cabo en 1994, en la que establece que " El Consejo de la Magistratura ha de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados" se priva así de esta atribución a la Corte Suprema. Debemos destacar llegados a este apartado, cómo se ha producido un cambio sustancial en relación a la apertura de los procedimientos disciplinarios en relación con los jueces y magistrados, pues, si bien con anterioridad a la reforma el inicio de estos procedimientos quedaba en manos de las Cámaras, es el Consejo el que a partir de este momento va a decidir sobre la apertura de los procedimientos de remoción de magistrados y las correspondientes suspensiones de éstos. Lo cual parece más lógico y proporciona, que duda cabe, una mayor seguridad a los integrantes de la judicatura.

designación de los jueces, las enmiendas al sistema de remoción o la preocupación existente en torno al Ministerio Público. Véase Pedro Sagüés, N.: " El Poder Judicial en la Reforma Constitucional" en la obra colectiva Reforma Constitucional, op.cit., pág. 49-50

De conformidad con el apartado sexto del artículo 114, se le atribuye también al Consejo la facultad de dictar reglamentos relacionados con la organización judicial, así como todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Respecto a su composición debemos señalar como en el mismo se integran quince consejeros; la distribución de éstos corresponde a: tres consejeros elegidos por simple mayoría y dos por la minoría de la Cámara de Diputados; tres elegidos por simple mayoría y dos por la minoría por los jueces federales de todo el país, dos consejeros por la mayoría y uno por la minoría en elección realizada entre todos los abogados matriculados ante la justicia federal, y dos nombrados por el presidente de la Nación entre personalidades del ámbito académico.

Aporta importantes reflexiones respecto a la composición del Consejo la discusión que se planteó en el Senado; se incluyen a continuación algunas de las propuestas más destacadas¹¹⁷:

¹¹⁷ Tomamos como referencia el trabajo realizado por PELLET LASTRA: " La versión argentina del Consejo de la Magistratura..." op. cit., págs. 108-109

El Senador ALASINO (proyecto del bloque mayoritario judicialista) propone un Consejo de quince miembros titulares y de quince suplentes, con un mandato de cuatro años, de los cuales cuatro serán senadores; cuatro diputados; dos ministros de la Corte Suprema; un magistrado judicial de cualquier instancia elegido por sus pares por voto directo, secreto y obligatorio; dos abogados de la matrícula federal, también elegidos por sus pares: un profesor titular de universidad nacional, elegido de la misma forma y un miembro de las academias nacionales.

El Senador GENOUD otorga seis años de mandato a dieciséis miembros titulares, de los cuales tres serían elegidos por la Cámara de los Diputados y tres por la de Senadores. Se propone también que se integre el Consejo con seis consejeros jueces, designados por los magistrados; tres consejeros abogados elegidos por sus pares de la matrícula profesional y un consejero, representante del ámbito académico, elegido por los rectores de las universidades nacionales.

Los Senadores BORDÓN Y FADEL otorgan cuatro años de mandato a tres representantes del Senado, tres de los diputados y uno del Poder Ejecutivo, agregando nueve jueces de todas las instancias, dos académicos y tres abogados.

Senador AGUIRRE LANARI otorga cuatro años de mandato a tres senadores y /o diputados en ejercicio de su mandato, y completa con 21 miembros que prevé su composición con tres representantes del Poder Ejecutivo; un ministro de la Corte; cinco jueces en ejercicio, otro jubilado; seis abogados de la matrícula, un profesor universitario y un académico de número, miembro de las academias de derecho.

Como podemos observar se hicieron planteamientos muy diversos, a través de los cuales se pretendía en definitiva tratar de resolver el problema que preocupa a los constitucionalistas¹¹⁸ estudiosos de la materia, cual es, evitar el intervencionismo de las Cámaras en la elección de los distintos vocales, incluyendo para ello a miembros provenientes de los distintos poderes del Estado.

Podemos concluir que, en Iberoamérica, los movimientos revolucionarios, golpes de Estado y demás circunstancias, hacen que resulte complejo llevar a cabo un análisis de la normativa existente, ya que exige en todo caso tener en cuenta la realidad socio-política en cada uno de los países, lo cual exigiría, para una verdadera comprensión un estudio

¹¹⁸ PELLET LASTRA recoge la postura de NÉCTOR SAGÜES, SAMUEL ABAD en " " La versión argentina del Consejo ..." op. cit., pág. 106

monográfico de las circunstancias de cada país. No debe ser, sin embargo, ésto óbice para mostrar el interés que este apartado despierta. Debemos asimismo destacar la importancia del papel que desempeña España para estos países; basta mencionar, como ejemplo, el estudio llevado a cabo por parte del " Tribunal Supremo colombiano para analizar la experiencia del Consejo General del Poder Judicial y su posible implantación de un modelo similar en la Constitución colombiana"¹¹⁹, para dejar constancia de la idea expresada.

Por último, y como resultado de la necesidad de implantación de esta institución en cualquier país democrático¹²⁰, hay una serie de países que se encuentran en estos momentos estableciendo las bases de figuras similares a nuestro Consejo General del Poder Judicial; destacamos entre otros:

Colombia en donde el Consejo de la Magistratura es un órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial que cuenta con autonomía económica y administrativa respecto de los otros poderes, con facultad de elaborar el presupuesto

¹¹⁹ " Memoria que el Consejo General del Poder Judicial eleva a las Cortes Generales " , Madrid 1993, ed. Consejo General del Poder Judicial , pág.81

¹²⁰ Entre otros países que cuentan con un modelo similar al nuestro y que no han sido analizados en profundidad destacamos Brasil y Uruguay.

anual de la justicia y ejecutarlo bajo control fiscal. En la **República Dominicana** hay un Proyecto de creación de dicho Consejo. **Costa Rica** se encuentran también dentro de este último grupo.

CAPÍTULO TERCERO: RASGOS BÁSICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

SECCIÓN I NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN

SECCIÓN II RÉGIMEN JURÍDICO

- i) Regulación normativa del Consejo General del Poder Judicial en la Constitución Española de 1978
- ii) La regulación en las diversas Leyes Orgánicas

SECCIÓN III ORGANIZACIÓN

- i) Estructura de la institución
 - a) Introducción
 - b) Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo
 - c) Vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial
 - d) Pleno del Consejo General del Poder Judicial
 - e) La Comisión Permanente
 - f) La Comisión Disciplinaria
 - g) La Comisión de Calificación
 - h) Comisión de Estudios e Informes
 - i) Comisión Presupuestaria
 - j) Órganos Técnicos del Consejo
- ii) El Consejo General del Poder Judicial ante la sugerida territorialización de la Administración de Justicia
 - a) La función coordinadora atribuida al Consejo General del Poder Judicial
 - b) De las diversas posturas doctrinales relativas a la territorialización

SECCIÓN IV FUNCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

- i) Funciones
 - a) Durante la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980 de 10 de enero
 - b) Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio
 - c) Con posterioridad a las reformas introducidas por la Ley Orgánica 16/1994 de 8 de noviembre
- ii) En especial: la potestad reglamentaria
 - a) Introducción
 - b) Naturaleza y alcance
 - c) Características propias

SECCIÓN V VALORACIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL

- i) Introducción
- ii) Perspectiva externa: la opinión de la ciudadanía
- iii) El criterio interno: la opinión de la judicatura

CAPÍTULO TERCERO: RASGOS BÁSICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

SECCIÓN I. NATURALEZA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Con el fin de llegar a un mejor conocimiento de la institución del Consejo General del Poder Judicial, sería importante tratar de descubrir la auténtica naturaleza de ese órgano, así, como analizar las funciones que le han sido encomendadas, poniendo en cuestión el que las atribuciones con las que cuenta o la estructura del mismo sean las más idóneas para el cumplimiento de la alta función que la Constitución le atribuye.

Qué duda cabe que la influencia del modelo italiano ha provocado el que la doctrina española, al plantearse la naturaleza del Consejo, sea totalmente tributaria de la italiana. La dependencia doctrinal tendrá un efecto eminentemente positivo, que se traducirá en que el tema del gobierno judicial salga del trillado terreno en el que lo tenían encerrado los procesalistas; pero también tendrá consecuencias negativas ya que nos trasladará los problemas específicos de la magistratura italiana¹²¹

¹²¹ Gerpe Landín, M. : " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades

En relación a la naturaleza del Consejo, debemos indicar que " se han dicho tantas cosas y tan dispares que sería fácil considerar que cualquier propuesta interpretativa es razonable: el abanico va desde considerar al Consejo como vértice del Poder Judicial, órgano político al que corresponde determinar la política jurídica y únicamente responsable ante el Parlamento, a considerarlo un mero órgano administrativo."¹²² Se trata, que duda cabe, de un órgano de naturaleza polémica¹²³

La opinión doctrinal sobre su naturaleza no es pacífica¹²⁴, sino que, mientras una parte de la doctrina lo

reglamentarias " en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, ed. Colegio de Abogados, Barcelona, 1987, pág. 126

¹²² Gerpe Landín, M. " *El Consejo del Poder Judicial* ", en Revista de Derecho Político núm. 36, pág. 177-187. Tema La reforma Constitucional, Madrid, 1992, pág.181. En palabras de Andrés Ibañez " significa un momento de ruptura con la forma de concebir la organización judicial dentro del aparato del Estado" Andrés Ibañez, P.: El Poder Judicial, op.cit.,pág. 60

¹²³ Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" en Revista de Derecho Político núm. 38, UNED, Madrid, 1993, pág. 51

¹²⁴ Para GERPE LANDÍN, ofrecen mayores dosis de seguridad las concepciones que lo califican de " órgano de relevancia constitucional " que tendrá un ámbito garantizado de inmodificabilidad frente a la Ley y que su función última es la de ser órgano instrumental de garantía de un principio constitucional (la vertiente externa de la independencia judicial) y, " órgano administrativo " que vendría a fijar que la actividad decisoria del Consejo tiene tal naturaleza. En opinión de LANDÍN, con las consideraciones anteriores evitaremos el riesgo de caer en la consideración de autogobierno " que no

lo es ni por su composición ni por sus funciones ni por la finalidad de las mismas, o la incerteza que aporta el concepto de órgano constitucional..." Véase Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, op. cit., pág. 139

De igual forma puede verse esta misma postura en " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, ed. Colegio de Abogados, Barcelona, 1987 pág 131 y pág. 147, en donde pone de manifiesto que " únicamente desde la concepción del CGPJ como órgano constitucional, instrumental para el poder judicial y autónomo del resto de poderes públicos, lo que se traduce en negar su consideración como expresión de autogobierno judicial o su inclusión como vértice del Poder Judicial, nos podremos aproximar a una teoría constitucional adecuada al texto constitucional que interprete la pluralidad o complejidad de la estructura de poderes constitucionales superando la meramente indicativa trilogía de poderes estatales"

Para otro destacado jurista, ÁLVAREZ CONDE:

a) Se pueden encontrar argumentos doctrinales que abogan por tal consideración, de igual modo que también se pueden encontrar argumentos contrarios a la misma

b) El tema debe ser puesto en relación con la composición y atribuciones del Consejo ...

c) Existe un argumento de índole legal, ya que, como es sabido, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le legitima para interponer los correspondientes conflictos de atribuciones con los demás órganos constitucionales.

Es cierto que el Consejo General no es un órgano consustancial al Estado democrático configurado por nuestra Constitución, existiendo Estados, merecedores de tal calificación, en los cuales no existe un órgano semejante. Pero también es cierto que esta misma consideración podría predicarse de otros órganos pacíficamente considerados como constitucionales. Y lo que no puede admitirse es que el Consejo General, como órgano de gobierno del Poder Judicial, carezca de naturaleza constitucional por el hecho de que sus competencias afecten únicamente a los miembros integrantes del Poder Judicial... El Consejo General es uno de los garantes de la independencia judicial, que no es sólo un principio inspirador del status jurídico de jueces y magistrados, sino que también, entre otras cosas, presenta, como faceta negativa, el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Además, es el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado y participa en la composición de otros órganos constitucionales, como es el caso del Tribunal Constitucional, manteniendo una serie relaciones con los demás órganos constitucionales (

califica como órgano constitucional¹²⁵; lo que supondría que es un órgano perfectamente definido, de los que tiene "

Parlamento, Gobierno...) y ejerciendo competencias que afectan a la generalidad de los ciudadanos.

El que sea un órgano constitucional no empece para proclamar su condición de órgano no jurisdiccional, no formando parte del Poder Judicial que gobierna ni pudiendo ejercer competencias de naturaleza jurisdiccional. Por ello, nuestra jurisprudencia constitucional le ha privado de su condición de órgano representativo del Poder Judicial, negando que sea una expresión del autogobierno de los jueces. Y desde este planteamiento, también parece de recibo el negar su condición de órgano constitucional señalando que sus actos son objeto, como los actos administrativos, de un control judicial, pues esta misma consideración también se puede predicar de los actos de otros órganos constitucionales, como el Gobierno, el propio Tribunal Constitucional e, incluso, nuestro Parlamento, cuando actúan como Administraciones Públicas, aspecto este que también hay que predicar del Consejo General, además de su consideración de "órgano constitucional" Véase Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, op. cit., pág. 145-146

¹²⁵ En este sentido se manifiesta LUCAS MURILLO DE LA CUEVA ; " la calificación del Consejo como órgano constitucional resulta con claridad del art. 59.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Capítulo III de su título IV. Más difícil es sostenerla desde las premisas que en sede doctrinal se utilizan para definir este tipo de órganos" Véase " El Gobierno del Poder Judicial: los..." op. cit., pág. 200. De igual modo CARRETERO PÉREZ " El modelo del poder judicial..." op. cit., pág. 751, ÁLVAREZ CONDE, E.: " Algunas consideraciones sobre la posición constitucional del poder judicial " en El Poder Judicial, op. cit.I, pág. 515, aunque considera necesario acudir al art. 59.3 LOTC, MOSQUERA L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española de 1978"(dir.Pedrieri) op. cit.,743, ANDRES IBÁÑEZ y MOVILLA ÁLVAREZ: El Poder Judicial, op. cit., pág.164. REQUEJO IBÁÑEZ, para el que se " trata de un órgano constitucional que gobierna desde el principio de autonomía y desde fuera al Poder Judicial" Véase REQUEJO IBÁÑEZ en " Nombramientos discrecionales, Justicia interiena e inspección" El Gobierno de la Justicia.El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 146. Para CORTES DOMÍNGUEZ " el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano constitucional no significa, como es sabido, que tenga en sus manos el ejercicio de uno de los tres poderes estatales

carácter troncal para la configuración del modelo de Estado configurado por la Constitución... participación en la dirección política del Estado, en la formación de la voluntad estatal, en la dirección del poder supremo del Estado, en las funciones de dirección y estructuración políticas "¹²⁶. Para otro sector de la doctrina se trata de un mero órgano de relevancia constitucional. Sobre las distintas concepciones referentes al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de autogobierno integral, autogobierno relativo, gobierno compartido..., nos referiremos con posterioridad.

El Consejo es un órgano independiente¹²⁷, es el órgano de " alcance político-constitucional que, ostentado la potestad de administrar el estatuto jurídico de los jueces y

reconocidos en la Constitución; está de más decir que el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial" Véase " Naturaleza del Consejo General del Poder Judicial" en El Gobierno de la Justicia.El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág.174

¹²⁶ García Pelayo, M.: Derecho Constitucional Comparado, Madrid, 1984, pág. 412. A esta teoría se suma Fernández-Miranda Campoamor, para concluir que el Consejo General del Poder Judicial posee naturaleza de una mera relevancia constitucional. (Véase El Consejo General del Poder Judicial: de la LO 1/1980...op. cit., pág. 51)

¹²⁷ Que la independencia judicial, principio fundamental en el que se apoya la razón de ser del CGPJ, se encuentre recogido a nivel constitucional, tal y como ha señalado TEROL BECERRA constituye un fenómeno relativamente nuevo; en 1931 se proclamaba en su art. 94 de manera expresa y por primera vez en nuestra historia constitucional la independencia del poder judicial. Así, el citado artículo establecía que " los jueces son independientes en su función; solo están sometidos a la ley "

magistrados, tiene como función primordial velar por la independencia del poder judicial y contribuir con sus atribuciones al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia"¹²⁸. Dicho órgano no se encuentra encuadrado dentro de ninguno de los tres poderes clásicos del Estado y, por lo tanto, no forma parte del Poder Judicial, entre otras razones, porque no ejerce jurisdicción y su única función es la de gobernar al Poder Judicial.

Para nosotros es evidente que el Consejo no está entre los órganos que integran el Poder Judicial. Esta inicial consideración " parece difícil de conciliar con la atribución al Consejo General de una posición de gobierno o dirección del Poder Judicial y de ahí surgen las tendencias a considerar que el Consejo General representa y encarna al Poder Judicial o incluso forma parte de éste...- sin embargo, incardina perfectamente la posición del CGPJ, dado que- el constituyente concibe un determinado modo de garantizar la independencia judicial, que venía conociéndose con la denominación, quizás arbitraria, de autogobierno, como esencial en el sistema político, de tal suerte que eleva al órgano encargado de realizar las funciones necesarias para hacer realidad el autogobierno a la categoría de órgano

¹²⁸ Bandrés Sánchez-Cruza, J.M.: ~~Poder Judicial y~~ Constitución, Boch, Barcelona, 1987, pág. 36

constitucional. Por lo tanto, no es que las funciones que realiza el CGPJ sean propias de este poder ni tengan una especial sustantividad en relación con él; se trata de funciones accesorias con respecto del funcionamiento de Juzgados y Tribunales, como lo ha sido siempre, si bien se modifica la forma de realizarlos y la importancia de las mismas "¹²⁹

Debemos señalar como dato relevante a estos efectos que el Consejo " no gestiona intereses propios del Poder Judicial, de los Jueces y Magistrados, sino un interés general y, en último término representa una técnica organizatoria y garantizadora de un importante aspecto de la libertad política del ciudadano y de la depuración del Estado de Derecho. El Consejo gestiona, por consiguiente, intereses de la sociedad, del Estado y del ciudadano, sustituyendo al Ejecutivo, que era, y todavía lo es entre nosotros, el titular de esta función"¹³⁰. A este respecto puede incluso

¹²⁹ Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" op.cit., pág. 129 así como Xiol Ríos, J.A.:" El autogobierno del Poder Judicial: la situación en España " en Documentación Jurídica, ed. Ministerio de Justicia, en jornadas de estudio sobre el Poder Judicial, núm. 45-46, Enero- Junio 1985, pág.144.

¹³⁰ Mosquera, L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española " en La Constitución Española de 1978, un estudio sistemático, (dir. García de Enterría y Predieri), Cívitas, Madrid, 1981, pág. 737-738

señalarse que tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina, así como, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial " no puede siquiera arrogarse la representación ad extra del Poder Judicial, esto es, la protección de la integridad del cometido constitucional de los Juzgados y Tribunales (reserva de Poder Judicial) en relación de estos con otros poderes del Estado"¹³¹. Si bien lo anterior es cierto, no podemos olvidar como " su rango de órgano constitucional le da valor de expresión pública y solemne de un Poder Judicial separado e independiente de los otros dos Poderes"¹³²

Retomando el problema acerca de la consideración del CGPJ como órgano constitucional o de relevancia constitucional vemos como algún autor minoritario, es reacio a su consideración como órgano constitucional. Así, este sector doctrinal al referirse a las diversas instituciones recogidas en la Constitución, y en especial referencia al CGPJ, considera que pese a preverse su existencia en el texto constitucional, que incluso puede recoger algunos elementos de su régimen jurídico, no es sin embargo, inmediato o

¹³¹ Díez-Picazo, L.M.: Régimen constitucional del Poder Judicial Madrid, Civitas, 1991, pág.136

¹³² " Reflexión sobre el poder judicial" en jornadas celebradas del 10-13 Diciembre 1981, op. cit., pág.24

esencial para el ordenamiento del Estado.¹³³ En esta misma dirección la doctrina italiana ha destacado que " mientras la expresión órgano de relevancia constitucional tiene un significado técnicamente preciso, en cuanto indica que un determinado órgano está previsto en la Constitución y por consiguiente no puede ser modificado ni suprimido sin una revisión constitucional, la determinación del significado de la expresión órgano constitucional es bastante más controvertida y por tanto su utilización en el orden práctico resulta menos viable y sobre todo menos útil. Así, mientras no hay duda de que el *Consiglio Superiore della Magistrature* puede ser calificado como órgano de relevancia constitucional, en tanto que previsto y parcialmente regulado por la Constitución, la ulterior calificación del mismo como órgano constitucional no tiene un alcance que corresponda a una noción generalmente aceptada y por ello podría ser empleada sólo en un sentido genérico y no técnico"¹³⁴

Frente a esta concepción, la doctrina mayoritaria acepta la teoría del Consejo como órgano constitucional. El legislador recoge igualmente esta idea a través del artículo

¹³³ Lucas Verdú P.y Murillo de la Cueva L.: Manual de Derecho Político; introducción y teoría del Estado, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 222

¹³⁴ Pizzorusso, A.: " La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura" op. cit., pág. 65

59 de la LOTC en el que el CGPJ ha sido calificado como órgano constitucional¹³⁵, junto al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Tribunal de Cuentas.

Esta teoría no resulta tan clara para algunos autores, en cuya opinión, el legislador ha silenciado el problema ya

¹³⁵ Han sido diversos y múltiples los estudios realizados sobre el concepto de órgano constitucional. Centrándonos en el profundo estudio concretado por GÓMEZ MONTORO podemos recoger la siguiente clasificación:

a) Criterios de esencialidad o indefectibilidad: son órganos constitucionales aquellos necesarios para individualizar al Estado en un momento histórico (ROMANO); aquellos cuya desaparición, o desorganiza totalmente el Estado o lo transforma fundamentalmente (JELLINEK)...

b) Criterio de la posición en la organización estatal: los órganos constitucionales se sitúan en el vértice de dicha organización; todos ellos tienen una posición de paridad- poseen el mismo rango Constitucional (Gleichrangigkeit seiner Stellung) y gozan de independencia recíproca- superiorem non regnoscens- (JELLINEK y ROMANO)

c) Criterio funcional: son órganos constitucionales los que ejercen el poder soberano; los que participan de forma inmediata en el poder supremo del Estado..., en el proceso de formación de la voluntad estatal...

d) Criterios de derecho positivo: se pueden incluir bajo esta denominación todos aquellos criterios que se basan no tanto en consideraciones de carácter dogmático cuanto en los datos concretos que se desprenden de la normas de derecho positivo y, fundamentalmente, de las normas constitucionales

Según el primero de ellos son órganos constitucionales aquellos cuyo origen, composición y competencias vienen establecidas de forma inmediata en la Constitución.

El segundo grupo de criterios se centra en el reconocimiento de un ámbito de autonomía: aquellos a los que el ordenamiento reconoce y garantiza un ámbito de autonomía funcional, y ello mediante el reconocimiento de una potestad de organización interna, de una autonomía financiera, y de un determinado status de los titulares del órgano. Véase GÓMEZ MONTORO, en El conflicto entre órganos constitucionales, Colección estudios constitucionales, CEC, Madrid, 1992, pág.317-318

que " atribuye aquel rango supremo al mismo (hace referencia al CGPJ), con criterios eminentemente prácticos, esto es, a fin de conferirle legitimación activa en los procesos constitucionales, al incluirlo en la enumeración de los mismos que a esos efectos hace el artículo 59.3 LOTC...quedando así la institución de referencia asimilada, por extensión, a las restantes que sí merecen, de manera contratada e inequívoca -tal es el caso del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado y del propio Tribunal Constitucional- esa consideración"¹³⁶

Centrando el problema en la interpretación de la LOTC a la que hemos hecho referencia, remitimos a la opinión de PASCUAL SALA, para el que el Consejo sería pues " un órgano constitucional por lo menos desde la solución que da el derecho positivo español"¹³⁷. Manteniendo una postura favorable a la conceptualización del CGPJ como órgano constitucional y reafirmando una postura que han manifestado otros autores nos encontramos con " las funciones que se le encomiendan, intervención que tiene en el nombramiento de miembros de otros órganos, como es la propuesta para el

¹³⁶ Porras Ramírez, J.M.: " Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria" op. cit. pág. 244

¹³⁷ Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 4, ed. Asamblea Regional de Murcia, Universidad de Murcia, en "Tema para Debate; el Consejo General del Poder Judicial", Murcia, 1992, pág. 125

nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, el hecho de que su informe sea preceptivo con carácter previo a la tramitación parlamentaria de los anteproyectos de ley o disposiciones generales en determinadas materias."¹³⁸

Podríamos asimismo justificar la naturaleza jurídico constitucional del Consejo General destacando su importancia, ya que con esta institución, no sólo se pretende proteger los intereses propios de los jueces y magistrados, sino también los de la colectividad, que precisa de una adecuada Administración de justicia. Es por ello por lo que de manera mayoritaria, se ha considerado que el Consejo General " no es una institución cualquiera sino que es un órgano constitucional (art. 59 LOTC), puesto en el vértice del Poder Judicial, teóricamente desvinculado de cualquier otro órgano de los restantes poderes."¹³⁹

Abundando en esta idea, podemos señalar que el CGPJ constituye un órgano constitucional, un " órgano de

¹³⁸ Ibidem, pág.132

¹³⁹ Merino Merchán, J.F.: Instituciones de Derecho Constitucional Español, Centro de Estudios Superiores Ramón Carande, Madrid, 1994, pág. 556.

En este mismo sentido Díez Picazo, L.M.: Régimen Constitucional del Poder Judicial, Cívitas, Madrid, 1991, págs. 132-133.

naturaleza y regulación constitucional"¹⁴⁰ ya que en éste " se dan todas las notas que los defensores de la teoría de los órganos constitucionales han utilizado para la caracterización de los mismos. La determinación constitucional inmediata de su existencia, del sistema de nombramiento de sus miembros y del núcleo de sus competencias, la atribución implícita al mismo de una función esencial en el sistema político cual es la del Gobierno del Poder Judicial, su carácter de órgano supremo (*superiorem non recognoscens*) e independiente de los demás órganos constitucionales, su carácter de órgano necesario y probablemente indefectible para garantizar la posición del Poder Judicial en el sistema político y naturaleza de órgano que..., ocupa el vértice de una organización caracterizada por el desempeño de funciones relevantes desde el punto de vista de la orientación política del Estado, como poder constitucionalmente reconocido, permiten considerar que el CGPJ es uno de los órganos que la constitución sitúa en el vértice del sistema político"¹⁴¹

Partiendo de la consideración del CGPJ como órgano constitucional, podemos señalar una serie de características propias de esta institución; se trata de "un órgano estatal,

¹⁴⁰ Canales Aliende, J.M.: "La Administración de Justicia: hacia una visión gerencial del servicio público de la justicia" en Revista de Estudios Políticos, núm. 73, C.E.C., Madrid, 1991

¹⁴¹ Xiol Ríos, J.A.: "El Poder Judicial y su Consejo..." op. cit., pág. 21.

no tiene personalidad jurídica diferente de la del Estado, sino que forma parte del mismo...órgano mediato... secundario en relación a la magistratura...órgano constitucional, es decir, previsto en la constitución como esencial en la configuración de la estructura del Estado, que no depende de ningún otro órgano y cumple una función primaria propia..."¹⁴²

Por tanto el Consejo : " Es un órgano autónomo de la Justicia, no un autogobierno judicial, según resulta de la composición, origen y propuesta de sus miembros: Es un órgano constitucional, con todo el rango y garantías que ello comporta: Está inserto dentro de la estructura de los Poderes del Estado, regido bajo el principio de unidad, por lo que no es susceptible de fragmentación en las Comunidades autónomas: Ostenta una doble legitimación: No es un órgano político, ni puede estar al servicio de ideología alguna, para no poner en cuestión su propia independencia: Es un órgano estrictamente administrativo, que da lugar a relaciones de Derecho Público, no exentas de control jurisdiccional de legalidad, por lo que sus actos y disposiciones son impugnables en la vía contencioso-administrativa: Su significación es puramente

¹⁴² "Reflexión sobre el Poder Judicial" Marzo 1982, núm.2, pág.24. Se recogen diversas comunicaciones presentadas en las jornadas de Estudio sobre el CGPJ celebradas en Madrid del 10-13 de Diciembre de 1981.

instrumental, dentro del Poder Judicial, al servicio de los Jueces y Tribunales para que éstos realicen su función con la máxima independencia y eficacia: Se configura como el órgano garante de dicha independencia y de la imparcialidad de aquellos, y clave esencial para esa eficacia y adecuado funcionamiento dentro de la Administración de Justicia, así como de su protección"¹⁴³

Una postura muy novedosa introducida por la doctrina italiana y adoptada por nuestros autores respecto a la naturaleza del CGPJ se basa en la consideración de este órgano como *órgano de enlace*, evitándose así los problemas referentes a la dicotomía existente entre *órgano constitucional-órgano de relevancia constitucional*. Acercándonos a la doctrina italiana podríamos definir al Consejo " como un órgano cuyo cometido es, sí la tutela de la independencia de la magistratura, pero sobre todo ejercer una función de enlace de ésta con los demás poderes del Estado que tienen la investidura democrática en sentido tradicional"¹⁴⁴. Entre nosotros el Consejo se considera como un *órgano de enlace*, basándonos para ello en las diversas

¹⁴³ Domínguez Martín, S.: " Estudio sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial" vol. II, en Cuadernos de Documentación, (Presidencia del Gobierno) núm. 41, Madrid, 1986, pág. 50

¹⁴⁴ Andrés Ibañez, P.: " Conversación con Alessandro Pizzorusso " en Poder Judicial, núm. 9, Diciembre 1983, pág.23

relaciones existentes entre el Poder Judicial y órganos tales como el Gobierno y las Cortes, desarrolladas a través de los informes o memorias....Se elimina de esta manera el problema de la naturaleza del Consejo, si el mismo tiene o no carácter o relevancia constitucional, al tiempo que, al no serle conferida la representación del Poder Judicial no puede considerarse que se le atribuyan facultades no inherentes al propio Consejo.

Quizá con esta postura se corra el riesgo de una excesiva simplificación aunque, podemos calificarla como la concepción que de una manera más clara nos representa el papel que debería ser atribuido al Consejo General del Poder Judicial, como complemento a la función de órgano de garantía.

El hecho de que la función de órgano de enlace se desarrolla por el Consejo queda suficientemente recogido a lo largo de la presente investigación, en la que no sólo se contemplan los informes o las memorias como vía de relación con las Cortes Generales, sino también, otras actividades del Consejo. Así, de las Memorias que el Consejo eleva anualmente a las Cortes Generales para su aprobación se desprenden datos relativos a las relaciones entre el CGPJ y el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia,

los Colegios y Asociaciones Profesionales; incluso podemos hablar del papel que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito internacional.

Una vez analizada la discusión doctrinal relativa a si el Consejo General del Poder Judicial debe entenderse como órgano constitucional o de relevancia constitucional, y al margen de esta cuestión, debemos intentar definir su propia esfera. Desde este punto de vista, el CGPJ ha sido considerado como órgano específico de gobierno del poder judicial, órgano de autogobierno, gobierno relativo, gobierno independizado, heterogobierno, órgano de garantía, órgano instrumental, órgano de enlace, comisionado político...

Como **órgano específico de gobierno del poder judicial**; éste puede ser definido como " la administración de los medios personales y materiales de la Justicia, es decir, selección y nombramiento del personal, así como aplicación del régimen disciplinario, por un lado, y, por otro, obtención y distribución de los medios económicos para retribuir a su personal y atender los gastos de sus servicios. Si en esa actividad participa en todo o en parte la Administración de Justicia a través de un órgano creado a tal efecto, quedando más o menos competencias y funciones al margen de la acción de la Administración del Estado nos

encontramos con un autogobierno en alguna de sus manifestaciones"¹⁴⁵

Podemos igualmente considerar al Consejo General del Poder Judicial como un **órgano de autogobierno**. La utilización del término autogobierno aplicado a la organización del poder judicial se debe al prestigioso Ministro y administrativista italiano ORLANDO quien hizo uso de esta idea por primera vez en 1907; Costa, entre nosotros, es otro de los pioneros al hablar del autogobierno judicial, al que hizo ya referencia en el discurso de apertura de los tribunales en 1951; se defendió al autogobierno de la Judicatura como la meta, la solución última y más perfecta pero, que habría que prepararla con mucho cuidado.

En su tiempo, el sistema de autogobierno pudo ser considerado como una idea prematura; sin duda hoy cuenta con condiciones más favorables. Pero todavía representa un ideal quizá no inmediato, subordinado a una serie de realizaciones progresivas, de tipo judicial algunas de ellas y de tipo general otras.

¹⁴⁵ Véase Bustillo Bolado, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" en Poder Judicial, núm. 37, 2ª Epoca, Marzo 1995, CGPJ, pág. 59-60.

Dentro de la corriente doctrinal favorable a la consideración del Consejo General del Poder Judicial como órgano de autogobierno tenemos que distinguir dos tendencias. Los que tienden a absolutizar el término dando lugar con ello a un perjuicio para los otros dos poderes ya que pretenderían la consecución de un Estado judicial y, aquellos que se refieren al autogobierno de forma relativa, postura esta última que ha prevalecido sobre la anterior.

En nuestro sistema actual es evidente que no podemos hablar propiamente de autogobierno, puesto que el órgano encargado de ello, el Consejo General del Poder Judicial, no está compuesto únicamente por miembros de la judicatura ni elegido por ellos, sino que todos los miembros son designados por las Cortes Generales. Tal y como ha quedado perfilado por la LOPJ, se trata del gobierno de un órgano de composición mixta y designación heterónoma, cuyo funcionamiento ha sido dotado, sin embargo, de total autonomía.

Han sido entre nosotros varios los autores que han constatado como el actual sistema no puede considerarse de autogobierno. Podríamos entender que la Constitución no consagra esta fórmula en primer lugar, " por que el Consejo no sólo se integra por miembros del Poder Judicial o de la Magistratura, sino también por personas elegidas por el

Parlamento y ajenas a aquella, lo que supone ya, a lo sumo, un gobierno compartido, pero no un autogobierno".¹⁴⁶

A estos efectos podemos además, distinguir entre gobierno y autogobierno, siendo necesario " reservar éste último término para la hipótesis en que sean los propios jueces y magistrados los que, a través de la elección de sus representantes, formen el órgano encargado de resolver sobre su estatuto personal"¹⁴⁷

De esta forma concluimos que el término autogobierno " enturbia la comprensión de la posición constitucional del Consejo, cuya característica más relevante para nosotros es que es un órgano constitucional autónomo al que se le atribuyen facultades en relación con un poder del Estado, el Poder Judicial..."¹⁴⁸ esto se apoyaría al mismo tiempo por el análisis de los fundamentos 5º 7ª y 8º de la Sentencia del TC 108/1986.

¹⁴⁶ Véase Mosquera " La posición del Poder Judicial en la Constitución española " en La Constitución Española de 1978, estudio sistemático, (Dir. García de Enterría, Predieri), Civitas, Madrid, 1981, pág.737. Véase de igual forma Xiol Rios, J.A.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho Premio Poder Judicial 1986, Madrid, CGPJ, pág.20 y ss.

¹⁴⁷ Véase la obra Lucas Murillo:" El Gobierno del Poder Judicial: los modelos ..." op. cit., pág. 208

¹⁴⁸ Véase Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades..."op. cit., pág. 130

Si como hemos visto la posibilidad de desarrollar el autogobierno no encaja con nuestra actual configuración normativa, menos aún podemos hablar de **autogobierno integral**. Sin embargo, se hace preciso hacer un sucinto comentario respecto de esta postura doctrinal.

Este sistema de autogobierno integral, viene a ser la opción más radical, y consiste " en la asunción por parte de ese órgano de todas las cuestiones concernientes al gobierno del poder judicial... que podría suponer de hecho la desaparición del Ministerio de Justicia, u órgano equivalente, por vaciamiento de sus competencias"¹⁴⁹

Los aspectos positivos que han sido destacados respecto de esta fórmula de gobierno vendrían a ser: independencia política, composición netamente judicial, plena disponibilidad de medios, reconocimiento constitucional, naturaleza administrativa y total apoliticidad, unido a la responsabilidad correlativa a dichas atribuciones mediante las distintas vías posibles; impugnación de sus resoluciones

¹⁴⁹ Véase Bustillo Bolado; "El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit., pág. 60.

y actos de gobierno en la vía contencioso-administrativa y la civil y penal ante el Tribunal Supremo.¹⁵⁰

Desde un prisma muy distinto, algún autor ha llegado a interpretaciones que por centrarse en el aspecto orgánico y no en el funcional llegan a considerar que el Consejo avanza hacia el autogobierno integral. Así, con el diseño dado por las sentencias 45/1986 y 108/1986, y la interpretación de la LRLOPJ, el CGPJ " avanza hacia un órgano de autogobierno integral, que no condiciona, ni excepciona, ni restringe el ámbito de ejercicio funcional de quienes lo componen, esto es Jueces y Magistrados. El diseño que realiza el TC del CGPJ lo aboca hacia la acción institucional-constitucional en relación con los órganos jurisdiccionales independientes funcionalmente, y obliga a adoptar una concepción del CGPJ axiomáticamente orgánica desprovista de impurezas funcionales, lo que equivale a tipificar un CGPJ que en ese nivel funcional no va a poder realizar los cometidos propios de un Poder funcional, sino sólo orgánico, al asumir la acción institucional-constitucional de garantizar el

¹⁵⁰ Las opiniones de Conde Pumpido y Ruiz Jarabo proceden de Domínguez Martín S. en: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución " op. cit., pág. 1039. Véase también Garrido Falla, F.: Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pág.1274

ejercicio de la función jurisdiccional en orden a hacer operativo el principio de separación de poderes..."¹⁵¹

Tras el estudio de la opción del autogobierno es preciso hacer mención a la existencia de fórmulas de sistemas de gobierno relativo¹⁵² dentro de las cuales se alude al autogobierno atenuado que vendría a " que vendría a significar un reparto de funciones más o menos equitativo entre el Ministerio de Justicia y el órgano de autogobierno. En el reparto lo más frecuente es que al Ministerio le corresponda la administración de los medios materiales y al órgano de gobierno la de los medios personales"¹⁵³.

Junto a éstos se habla también de **heterogobierno**, al que se ha considerado como la opción constitucional. Destacamos a DE LA OLIVA quien considera que no es arriesgado afirmar que " la Constitución española de 1978 rechazó

¹⁵¹ Véase Lorca Navarrete, A.M^a.: " Introducción al Derecho Procesal..., op. cit.,pág. 64-65

¹⁵² Ibidem

¹⁵³ En relación a la expresión gobierno relativo, encontramos numerosos partidarios en nuestra doctrina a favor de utilizar la misma: destacamos algunos de ellos: PRIETO CASTRO, GUTIÉRREZ DE CABIEDES, DE MIGUEL, ALMAGRO NOSETE Véase " Poder Judicial y Tribunal de GARantías en la nueva Constitución " en Lecturas sobre la Constitución Española, UNED, Madrid, 1978. Véase BUSTILLO BOLADO," El autogobierno del poder judicial en Europa " op.cit.,pág. 60

implícitamente un régimen de autogobierno de la Magistratura, optando por un sistema mixto o híbrido de auto y heterogobierno, que supusiese eso sí, un limitado pero sustancial desapoderamiento del Poder Ejecutivo respecto de la Administración de Justicia"¹⁵⁴. En un sentido parecido se hace uso de otros términos como por ejemplo **gobierno independizado**¹⁵⁵,

Otra de las opciones, además de las del autogobierno integral o relativo, es la de considerar al CGPJ como órgano de garantía; podría así entenderse que la Constitución concibe a dicha institución como un órgano " preordenado al mantenimiento de quienes administran justicia fuera del alcance de otros centros de poder y en condiciones de hacer posible el dictado del artículo 117.1, *in fine*, que quiere a los jueces *sometidos únicamente al imperio de la ley*. De no ser así el CGPJ vendría a reproducir un fenómeno de dependencia como el que está encargado de evitar. De ahí que

¹⁵⁴ Véase Oliva De Santos, A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" en Revista de Derecho Procesal(dirigida a iberoamérica núm. 2, 1994, ed. Edersa, pág. 275.

¹⁵⁵ Expresión utilizada entre otros por MARTÍNEZ RUIZ. Véase Xiol Ríos, J.A.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho op.cit., pág.20

no le corresponda tampoco ninguna condición de superioridad jerárquica respecto de ningún organismo judicial." ¹⁵⁶

Para otros autores, la esencia del CGPJ radica en ser un **órgano instrumental**; así, " la característica realmente importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial en nuestro sistema jurídico-político es que aparece como un instrumento al servicio de uno de los pilares de la Constitución. El Consejo es, pues, un órgano instrumental...(de aquí derivarían dos consecuencias) que el Consejo General del Poder Judicial tiene un fin claramente instrumental, que no es sino garantizar la independencia de todos los integrantes del Poder Judicial, que, recordemos, según el art. 117 de la CE lo conforman los jueces y magistrados. Ello quiere decir que toda su actividad tiene que tender a conseguir ese fin... una interpretación exacta de 'la Constitución' hace imposible mantener que la independencia pueda ser conseguida por otros caminos"¹⁵⁷,

Otra de las opciones con la que nos encontramos al tratar de situar la naturaleza jurídica del CGPJ es la de

¹⁵⁶ Véase Andrés Ibáñez, P. y Movilla, C.: El Poder Judicial op. cit., pág. 66-67

¹⁵⁷ Véase Cortes Domínguez: " Naturaleza del Consejo General del Poder Judicial" en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 175

considerarlo como **órgano de gestión** por entender que " asume competencias en materia de régimen administrativo de Jueces y Magistrados, a lo que hay que añadir la reencontrada potestad reglamentaria externa que ostenta en virtud de la reforma de la LO 16/94, lo que abre un portillo a un poder limitado, pero de configuración de la organización judicial...es que un órgano de deliberación o de reflexión es algo también presente: baste citar, por ejemplo, la elaboración que hace de la relación de necesidades de la Administración de justicia o su cometido como órgano consultivo, de forma que la evolución tendría que llevar a ahondar en ambos aspectos, para llegar a convertir al CGPJ en el verdadero centro de elaboración de la política judicial"¹⁵⁸

Incluso se ha llegado a considerar al Consejo General del Poder Judicial como un **comisionado político**. La demonminación de *comisionado político* responde a una visión del mundo judicial, y en especial del Consejo General del Poder Judicial, un tanto especial. Para el juez NAVARRO, según esta idea, el Consejo sería un comisionado político de las oligarquías partidistas con mayor representación

¹⁵⁸ Véase El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 48. ALBÁCAR confirmaría su condición administrativa o política por referencia a su carácter no jurisdiccional. Véase " Naturaleza jurídica del CGPJ... en Jornadas de Estudio op. cit., Madrid, 1983

parlamentaria¹⁵⁹. No parece que puede considerarse al Consejo desde dicha perspectiva, entre otras razones, porque el artículo 122 de la Constitución establece " un mandato de cinco años, que no coincide con el de las Cámaras y evita el considerar al Consejo como un simple comisionado de las mismas".¹⁶⁰

Que las concepciones doctrinales son abundantes se pone de manifiesto con el estudio de las distintas interpretaciones que hemos analizado a las que hay que añadir la que considera al Consejo como **órgano de enlace del Poder Judicial**¹⁶¹

Las distintas concepciones a que hemos hecho alusión referentes al Consejo General del Poder Judicial, o cualesquiera otras¹⁶², encuentran su origen en la confluencia

¹⁵⁹ Véase Manos sucias, op. cit., pág. 145, pág.150, pág. 159

¹⁶⁰ Véase Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit., pág. 65

¹⁶¹ En este sentido se manifiestan Pizzorusso y en nuestra doctrina, Terol Becerra. Sobre esta postura se ha mostrado ya el parecer del autor en páginas anteriores.

¹⁶² La APM ha llegado incluso a calificar al CGPJ de órgano constitucionalmente muerto, por encontrarse el mismo gobernado por las reglas que dicta el Ejecutivo. Véase " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial" en la XI Congreso de dicha asociación, op. cit., pág.,13.

Otras denominaciones que ha ido recibiendo el Consejo a lo largo de su existencia; *cementerio de elefantes* (célebre frase de Antonio Hernández Gil) *Consejo de usar y tirar* (Perfecto

de diversas circunstancias, entre otras, las de carácter histórico y las propias del Derecho Comparado.

Tiene gran interés destacar, como precedente constitucional de la aproximación del Poder Judicial al Parlamento, el artículo 261 de la Constitución de Cádiz, que al hacer referencia a las funciones del Supremo Tribunal de Justicia dispone, en su apartado quinto, que este deberá " Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve jueces que serán elegidos, por suerte, de un número doble". Este precedente ha sido considerado por ciertos autores como una actuación que implicaba un cierto grado de control político de la institución parlamentaria sobre el Poder Judicial.

Andres Ibáñez) o lugar donde llevar a cabo el quinquenio sabático, han sido recogidas en *Manos Sucias...*, cit., pág. 156.

La calificación de "jefatura de personal" (José Gabaldón) implica el escaso papel representativo que algunos juristas han otorgado al Consejo. (Véase *Hablan los jueces*, op. cit., pág. 91)

En la historia del constitucionalismo español es básica la referencia a la Constitución de 1837, así como el Decreto de Salmerón de 1873, junto con el intento de acercar el autogobierno a través del Decreto de Primo de Rivera de 20 de Octubre de 1923, con el que se daría lugar a la Junta Organizadora del Poder Judicial. También es crucial el proyecto de Osorio en 1929 que vendría a originar las bases. Estos y otros antecedentes del Consejo han sido tratados en la parte histórica del Consejo a la que nos remitimos.

Junto al derecho histórico en el que se mostraban algunas notas reflejo de esa preocupación por la necesidad de articular una fórmula de gobierno del Poder Judicial, destacamos la influencia que sobre nuestro Derecho Constitucional ha tenido el Derecho comparado en este concreto aspecto.

Fueron el modelo italiano¹⁶³ y el modelo francés, o viceversa -dependiendo de la postura doctrinal que prefiera

¹⁶³ Tal y como ha señalado Mosquera: " el sistema español se inspira, en lo fundamental, en el italiano y las diferencias entre las dos regulaciones obedecen, de un lado, a la diversidad de formas de Estado... y, de otro lado, a la técnica de consenso, que presidió la elaboración de la Constitución española, pues ha propiciado una regulación más lacónica, más ambigua, y más susceptible por consiguiente de derivaciones interpretativas". Véase Mosquera L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española de 1978"(en Constitución española de 1978, un estudio sistemático dir. García de Enterría y Predieri), Civitas, Madrid, 1981, págs. 728-729.

seguirse tal y como se ha expuesto con anterioridad-, los que sirvieron de apoyo a los precursores de nuestra actual institución.

La influencia europea, producto de la preocupación internacional, que aún hoy sigue viva, sobre la necesidad de una efectiva independencia, puesta de manifiesto en la existencia de múltiples reuniones y conferencias¹⁶⁴, unido a

Esta afirmación ha sido recalcada también por Lucas Murillo de la Cueva. Es evidente que la configuración de la Constitución Italiana de 1947 es más exhaustiva que la española. Por ello, el silencio de nuestro texto fundamental " ha permitido concluir que el Consejo no está constitucionalmente configurado como un órgano de autogobierno". Véase la obra del citado autor " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op. cit., pág. 211

¹⁶⁴ The International Bar Association (IBA) Project on Minimum Standards of Judicial Independence, ha llevado a cabo múltiples reuniones de trabajo. Destacamos algunas de ellas por el interés de las mismas; debe tenerse en cuenta, entre otras cosas la proximidad de dichas reuniones a la fecha de configuración de nuestra institución: la Conferencia de Lisboa, celebrada del 11 al 15 de Mayo de 1981; la Conferencia de Jerusalem, celebrada del 1 al 5 de Marzo de 1982, la Conferencia de New Delhi, en octubre (17 al 23) de 1982.

Es en esta reunión celebrada en la India donde la asociación internacional antes citada elabora un Código en el que se establecen los principios mínimos necesarios para que exista una verdadera independencia judicial. Se resumen en cuarenta y siete artículos, divididos en ocho apartados: Jueces y Gobierno; Jueces y Legislativo; Vida judicial; Remoción del puesto y Disciplina judicial; La prensa, los Jueces y los Tribunales; Principios de conducta; Imparcialidad e Independencia; Independencia Interna.

Dada la importancia de los principios aquí recogidos, reproducimos parte del texto aprobado en New Delhi, India, el 22 de Octubre de 1982:

Especial atención nos merece el apartado sobre los jueces y el poder ejecutivo:

1.a) Los jueces individualmente considerados, deben de disfrutar de independencia de carácter personal así como de independencia sustantiva

b) La independencia personal significa que en los términos y condiciones judiciales se actúa con seguridad, al tiempo que se asegura que los jueces individualmente considerados no están sujetos al control del ejecutivo.

c) Independencia sustantiva significa que en el ejercicio de sus funciones, un juez no está sujeto a nada excepto a la ley y a los principios que le dicte su conciencia.

2.La judicatura, entendida como un conjunto debe disfrutar de autonomía colectiva e independencia *vis a vis* del Ejecutivo

3.a) La participación por el Ejecutivo o por el Legislativo en lo acuerdos y promociones judiciales no es inconsistente con la independencia judicial, considerando que esos acuerdos y promociones de la judicatura se encuentran integrados en el cuerpo judicial, en donde los miembros de la judicatura y de la profesión legal forman una mayoría.

b) Acuerdos y promociones por parte de un cuerpo no judicial no se considera inconsistente con la independencia judicial en países donde, por tradición histórica y tradición democrática, los acuerdos y la promoción judicial opera satisfactoriamente.

4.a) ... El poder disciplinario o para remover a los jueces debe ser confiado a una institución que sea independiente del ejecutivo.

b) El poder para remover a un juez debería estar preferiblemente confiado a un Tribunal judicial.

5. El poder ejecutivo no debería tener control sobre las funciones judiciales

En relación a las fórmulas disciplinarias y de remoción de puestos de los miembros de la judicatura, resulta sumamente interesante lo establecido a nivel normativo: En los sistemas donde el poder disciplinario para remover a los jueces se encuentre conferido en una institución distinta del Legislativo, el tribunal para la disciplina y remoción de los jueces deberá ser permanente, y compuesto predominantemente por miembros de la judicatura. (Véase lo dispuesto en el artículo 31)

El 10 Junio de 1983 se celebró la Conferencia de Montreal (Québec, Canada), la primera reunión mundial sobre la independencia de la justicia. De este Congreso nació el concepto de la independencia colectiva " A modern conception of judicial independence cannot be confined to the individual judge and to his substantive and personal independence, but must include collective independence of the judiciary as a whole" (IBA Standards 2, 9. The Montreal Declaration Art. 2.09-2.10, 2.26-2.31). En este mismo sentido se manifestaba SHETRRET para el que el concepto de la independencia personal y sustantiva de los jueces considerados de manera individual estaba perfectamente reflejada en las leyes. Sin embargo, el concepto " of collective independence of judiciary ...is not yet well established ". En "

The Administration of Justice: Practical Problems, Value Conflicts and Changing Concepts" recogido en Judiciary Independence, The Contemporary Debate, op.cit., pág.402

Debemos destacar también la actividad llevada a cabo por la Organización Internacional de Derecho Penal y la Comisión Internacional de Juristas, que en el Congreso celebrado en el Instituto de SYRACUSE, Sicilia, del 25 al 29 de Mayo de 1981, formularon " THE SYRACUSE DRAFT PRINCIPLES ON THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY". La idea básica giraba en torno a formular una serie de principios que garantizara la existencia de la independencia judicial, considerando dicha independencia de los juzgados y Tribunales como esencial para llevar a cabo el respeto y la protección de los derechos humanos.

En el artículo segundo del Texto de Syracuse se da una definición de lo que se considera como independencia judicial:

" That every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for any reason, and that the judiciary is independent of the executive and legislature, and has jurisdiction, directly, or by review, over all issues of a judicial nature."Recogido en el libro colectivo judicial independence, the contemporary debate, op. cit., pág. 414

Destacamos también una de las primeras reuniones celebradas por The Law Association for Asia and the Western Pacific, en Tokyo el 17-18 de Julio de 1982, y del que nacerían " TOKYO PRINCIPLES ON THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE LAWASIA REGION" de cuyo texto resaltamos algunos aspectos:

1. La judicatura es una institución que debe ser vista como de un alto valor en las sociedades de los países de la región de LAWASIA.

2. El mantenimiento de la independencia de la judicatura es básico para conseguir los objetivos y propósitos de esta alta función judicial.

3. Es misión de la judicatura respetar y guardar los objetivos y las funciones propias de otras instituciones del Gobierno; del mismo modo que es misión de esas otras instituciones respetar y guardar las funciones propias de la judicatura.

4. Los objetivos y funciones propias de la judicatura en estos países incluye los siguientes:

Asegurar que toda la gente pueda vivir de forma segura bajo el imperio de la ley.

Promover, sin sobrepasar los límites judiciales, la observancia y el mantenimiento de los derechos humanos reconocidos en nuestra sociedad.

Administrar la leyes de forma imparcial entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado.

6. Se considera esencial para preservar la independencia de la judicatura que se encuentre libre de todo peligros y presiones de los distintos grupos de poder.

De entre las últimas reuniones internacionales, destacamos el Congreso de la Asociación MEDEL (Asociación Europea de Magistrados por la Democracia y las Libertades), celebrada en Palermo el 16 de Enero de 1993, en donde se llegaron a las siguientes conclusiones, que forman parte del Estatuto Europeo de la Magistratura que la citada asociación propone al Consejo de Europa como protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales:

1. Magistrados y Fiscales gozan, como los demás ciudadanos de la libertad de expresión, de creencia, de asociación, de pertenencia a un partido político y de reunión. Tienen también derecho de huelga, sin que su ejercicio pueda atentar contra los derechos fundamentales del justiciable.

2. Tienen asimismo libertad de constituir y afiliarse a asociaciones y sindicatos de magistrados y a otras asociaciones, en particular para la tutela de los derechos fundamentales, del servicio judicial y de los intereses de la magistratura, así como de promover la formación profesional y defender la independencia de la magistratura.

En España esa preocupación sobre la materia judicial se desarrollaba de forma paralela a la inquietud internacional: podemos ver como ya en la época de la transición española la preocupación por los temas de la justicia eran evidentes; un ejemplo de lo anterior lo constituye el XXVII Congreso del PSOE, celebrado del 5 al 8 de Diciembre de 1976, en el que se adoptara entre otras la siguiente conclusión: " la independencia de los tribunales es pieza esencial de una justicia democrática. El gobierno del Poder Judicial será ejercido por el Consejo Superior de la Magistratura, cuyos miembros deben ser elegidos por sufragio universal, y por cuartas partes, por los propios jueces, por los funcionarios de los restantes cuerpos de la Administración de Justicia, por los colegios de abogados y por los parlamentarios" Véase Manos Sucias, el poder contra la Justicia, cit., págs.. 79-80

Un Congreso que de igual forma debe destacarse fue el celebrado el 10 de Enero de 1977 por Justicia Democrática; de los principios resultantes de aquella reunión destacamos el de considerar miembros del Poder Judicial a los jueces y magistrados, los fiscales y secretarios judiciales. Su gobierno se regiría por principios democráticos y todos sus órganos serían elegidos por los miembros que lo integran, siendo su mandato de carácter temporal.

En España destacamos entre otros: el VII Congreso de la Asociación Jueces para la Democracia celebrado en Murcia, en junio de 1992, así como la reunión multilateral organizada por

la necesidad de que el gobierno del Poder Judicial no se lleve a cabo por el Ministerio de Justicia, como era práctica habitual, dará lugar al nacimiento y posterior consolidación de la institución del Consejo General del Poder Judicial.

La lucha entre los miembros de la judicatura, partidarios de un sistema de gobierno coroporativo al que acertadamente consideran " uno de los pilares de todo edificio constitucional del Estado "¹⁶⁵, les llevará incluso al extremo de afirmar que la solución óptima sería recurrir al autogobierno¹⁶⁶; frente a éstos, la postura sustentada por

el Consejo de Europa en colaboración con el CGPJ, en Madrid del 9 al 11 de Noviembre de 1993.

¹⁶⁵ Chimenti, C.: " Algunos rasgos fundamentales del parlamentarismo italiano" en Revista de Estudios Políticos, Centro de estudios Constitucionales, núm. 75, Enero-Marzo 1992 pág. 34

¹⁶⁶ Debe entenderse la expresión autogobierno tal y como lo explica Pizzorusso " invece come un modo di impegnare la specifica preparazione degli operatori della giustizia per la realizzazione dell'interesse che tutti i cittadini hanno a che i giudici siano indeipendenti e liberi nell'esercizio delle loro fondamentali funzioni" recogido en L'autogoverno del potere giudiziario in Italia, en Documentación Jurídica, Ponencias y Comunicaciones presentadas en " Jornadas sobre el Poder Judicial celebradas durante los días 17 al 19 de marzo de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales" recogido en Tomo XII Enero-Junio 1985, núm.45-46 op. cit., pág.181.

De la Oliva se ha manifestado en relación al autogobierno; así," no se debe incurrir en el simplismo maniqueo de ver el Mal personificado en el Poder ejecutivo ni en la ingenuidad de pensar que el autogobierno de la Magistratura es una especie de bálsamo de Fierabrás maravilloso, que inmuniza y previene frente a cualquiera influencias patológicas en el quehacer judicial" Véase " Acerca del Consejo General del Poder Judicial"op.cit., pág. 300-301

los miembros del foro político, defensores de mantener en lo posible un cierto control sobre el aparato judicial con el fin, que duda cabe, de dedicarse como apuntara POINCARÉ al arte de intrigar¹⁶⁷¹⁶⁸.

¹⁶⁷" Ya Raimundo Poincaré alertaba sobre la necesidad de separar la política de partidos y justicia: Si el juez no llega a liberarse de la tutela parlamentaria, bien pronto desaparecerá la autoridad de la justicia. Y entonces no habrá necesidad de escribir y leer ensayos sobre el arte de juzgar: el arte de intrigar será bastante" En el prólogo de la obra Ramson, G.: Essai sur l'art de juger, 1912, Recogido en Manos Sucias... op. cit., pág. 160

¹⁶⁸ Quizá fueron estas múltiples luchas las que provocaron el descalabro del primer Consejo General del Poder Judicial. Para FEDERICO SAINZ DE ROBLES el fracaso se debió a diversas causas, sobre las que volveremos con posterioridad, de entre las que ahora queremos resaltar " la desconfianza institucional de los restantes poderes e instituciones del Estado. Esta desconfianza se manifestó por tres cauces: conservadurismo de la magistratura, falta de legitimación democrática en cuanto a su origen, y persistencia en el escalafón de una gran mayoría de magistrados y jueces que habían desarrollado su función durante el régimen anterior....se trataba de una institución sin responsabilidad política, lo que no sucedía a los restantes poderes del Estado...las instituciones políticas se mostraron reticentes a que CGPJ ocupara la posición que por otro lado, éste había definido y explicado...No toda la magistratura asumió como suyo el órgano de gobierno que la Constitución le había asignado...exceso de impaciencia...la situación social no estaba lo suficientemente asentada como para recibir repentinamente un órgano constitucional tan literalmente original" Sainz de Robles, F.: " Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial" en el libro Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, op. cit., págs. 3006, 3007.

SECCIÓN II RÉGIMEN JURÍDICO

i) Regulación normativa del Consejo General del Poder Judicial en la Constitución Española de 1978

El Consejo General del Poder Judicial aparece previsto en el Anteproyecto de Constitución¹⁶⁹, que en su artículo 112.3 establecía:

" El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, doce de ellos a propuesta y en representación de las distintas categorías de las carreras judiciales y ocho a propuesta del Congreso de los Diputados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión".

Esta " propuesta inicial sufrirá continuas alteraciones, las cuales terminarían por enriquecerla con nuevas aportaciones que luego se revelarían de gran importancia." ¹⁷⁰

Atendiendo al texto del Anteproyecto y a los votos particulares que se plantearon durante la tramitación del

¹⁶⁹ Véase Anteproyecto de Constitución, en Constitución Española, Trabajos Parlamentarios, Vol. I, págs. 7-62

¹⁷⁰ Terol Becerra,: El Consejo General del Poder Judicial op.cit., pág. 64-70. En especial pág. 64

mismo, podemos concretar aspectos sobre los que existe unanimidad en la Ponencia y otros sobre los que se mantienen posiciones distanciadas. La unanimidad afecta a los siguientes aspectos:

- a) la opción por el heterogobierno, concretado en un órgano autónomo;
- b) el Consejo está compuesto por especialistas en cuestiones jurídicas;
- c) el Consejo tiene composición mixta, jueces profesionales y otros juristas;
- d) los no profesionales de la Magistratura serán designados por el Congreso de los Diputados;
- e) la Presidencia del Consejo correspondería al Presidente del Tribunal Supremo, designado a propuesta del propio Consejo.

La unanimidad no alcanza, según expresa el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, a las siguientes materias:

- a) la afectación del gobierno, que en el Anteproyecto (art. 122.2) se refiere a la Administración de Justicia y UCD propone que se refiera al Poder Judicial;
- b) al número de vocales: el Anteproyecto propone veinte y el voto particular quince, quedando también afectadas las proposiciones entre jueces y juristas;

c) al sistema de designación de los vocales judiciales: el anteproyecto lo regula y el voto particular lo remite a la Ley;

d) al criterio de la categoría judicial: el Anteproyecto lo incluye y el voto particular no.¹⁷¹

De entre las diversas enmiendas presentadas en el Congreso, sobresalen la núm. 544 y la 691 mantenidas por los Diputados MORODO y LÓPEZ RODÓ respectivamente, en las que se hacía referencia a la denominación que debía recibir la institución que analizamos. Dichos Diputados, cuya actividad será notable en la tramitación parlamentaria, invocaron como la expresión más acertada la de *Consejo General de la Justicia*. Otra posibilidad, apuntada ésta en la enmienda 420 y presentada en el Senado, sería la del senador J. SATRUSTEGUI, que consideraba más apropiada la denominación *Consejo General de la Administración de Justicia*.

Otro interesante aspecto, planteado con ocasión de la tramitación del Anteproyecto de la Constitución fue el referente a la conveniencia de incorporar al Consejo un representante de los Secretarios judiciales en igual posición

¹⁷¹ Gerpe Landín, M.: "La composición del Consejo General del Poder Judicial" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 9, Mayo-Agosto 1991, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.

al resto de miembros; la idea sería recogida a través de la enmienda presentada por MORODO.

Sin duda, las enmiendas más interesantes a los efectos de llevar a cabo un estudio de las primeras propuestas realizadas, en atención a la distribución entre los distintos órganos de elección de los veinte miembros del Consejo, se encuentra en las modificaciones que proponían Minoría Catalana, Socialistas de Cataluña, Socialistas del Congreso y el Grupo Vasco¹⁷². Minoría Catalana proponía que de los veinte miembros, doce fueran designados por los jueces y los ocho restantes por el Congreso de los Diputados con un *quorum* de tres quintos. La propuesta realizada por los Socialistas implicaría conceder un papel más relevante al Congreso, el cual designaría doce de los veinte Vocales. El Grupo Vasco aporta como solución a la delicada lucha de poderes existente entre ambas instituciones una postura de compromiso entre ambas opciones; diez de los miembros del Consejo serían propuestos por los jueces y los otros diez se dejarían en manos del Congreso.

El Informe de la Ponencia constituye una muestra de la posición del grupo parlamentario que contaba por aquel

¹⁷² Véase enmiendas núm. 164, 293, 436 y 643.

entonces con una mayor representación, UCD. La propuesta del informe quedaría redactado como sigue:

" el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por quince miembros nombrados por el Rey, por un período de cinco años. Diez entre Jueces y Magistrados, en los términos que establezca la Ley Orgánica y cinco a propuesta del Congreso de los Diputados, elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio de su profesión."

El Debate del Informe en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas consigue, no sin ciertos problemas, lograr obtener la unanimidad: para ello, fueron precisas concesiones por parte de todos los grupos parlamentarios. En referencia a esto último, debemos resaltar, por la importancia que cobrará en momentos posteriores, la postura de UCD que, aceptando la variación en el número de miembros de el Consejo, debilitaba al componente judicial.

La ratificación del texto presentado por el Dictamen de la Comisión sería llevado a cabo por el Pleno del Congreso de los Diputados. Una muestra del consenso y unanimidad existente respecto de esta cuestión lo constituye el resultado de la votación, en la que únicamente se dieron tres abstenciones, sin que se produjera voto alguno en contra. El texto establecía como artículo 116.3

" El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un período de cinco años. Doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica, y ocho a propuesta del Congreso de los Diputados, elegidos por mayorías de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio en su profesión."

En su mayor parte, las enmiendas presentadas en el Senado tenían un interés común; hacer que esta Cámara tuviera participación en la designación de los miembros del Consejo. Dentro de este interés común se manifestaron dos tendencias; de un lado la de los que consideraban apropiado que el Senado tuviera una participación igual a la del Congreso y de otra parte los que se conformaban únicamente con la participación del Senado aunque fuera desde un grado inferior.

Con las enmiendas 212 del Sr. GUTIÉRREZ RUBIO y la 625 de las Agrupaciones Independientes se pretendó que a cada una de las Cámaras le correspondiera la designación de tres de los componentes del Consejo. Las enmiendas presentadas por diversos grupos y miembros del Senado como la de IGLESIAS CORRAL -223-, Unión de Centro Democrática -751- y la de los Socialistas del Senado -1079- se hallan entre las que no reivindicaban una posición paritaria con el Congreso de los Diputados. Como sabemos, el resultado final aprobado en el

Senado hace referencia a la atribución paritaria a cada una de las Cámaras de la designación de cuatro de los Vocales del Consejo, la razón se debe al acuerdo tomado entre la UCD y el PSOE.

Así se recoge en el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978:

" El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión "

i) Regulación normativa en las diversas Leyes Orgánicas

Las diversas leyes orgánicas¹⁷³ bajo las que se ha ido constituyendo y configurando el actual Consejo General del Poder Judicial responden, que duda cabe, a las diversas

¹⁷³ Para FEDERICO SAINZ DE ROBLES " el seno natural del CGPJ era la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en 1979 inició con una serie de borradores, su andadura legislativa " Sainz de Robles, F.:" Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial" en el libro Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría op. cit., págs. 2999 y ss.

necesidades políticas existentes en cada momento¹⁷⁴; así, debemos poner de manifiesto como la Ley Orgánica 1/1980, conocida como LOCGPJ " nació para hacer posible la constitución del primer Consejo y ha sido sustituida por otra antes incluso de que este último hubiera consumado su mandato"¹⁷⁵.

Resaltamos, de manera esquemática, dado que analizaremos cada una de las distintas leyes al estudiar la enmienda Bandrés, aquellos aspectos que caracterizan de manera sustancial a la que fuera la primera Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980, de 10 de Enero. Entre las opciones criterio de representación o el de jerarquía de una parte y en la alternativa que plantea la elección entre un sistema mayoritario o proporcional se van a elegir el criterio de la jerarquía y el sistema electoral mayoritario

¹⁷⁴ Como ha puesto de manifiesto GERPE LANDÍN, la Ley Orgánica a la que remite la Constitución es, obviamente, la del Poder Judicial, que debería sustituir o modificar a la más que centenaria Ley provisional de 1870. Pero diferentes circunstancias, sin duda la más influyente la necesidad de constituir el Tribunal Constitucional, precipitan la regulación separada del Consejo General. Véase Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" en Revista Jurídica de Catalunya núm. 2, op. cit. pág.121

¹⁷⁵ Andrés Ibañez, P.: El Poder Judicial op. cit, pág. 67.

Por el sistema elegido queda claro que "resultan primados por sobrerrepresentación los niveles jerárquicos de la carrera judicial, cuando se prevé la presencia en el Consejo de tres Magistrados del Tribunal Supremo, seis Magistrados y tres jueces".¹⁷⁶ Como ha sido señalado es "saludable la decisión de dejar a los propios jueces el elegir una parte importante de los miembros de su órgano de gobierno; por el contrario sí puede ser susceptible de crítica la manera en que esos doce se distribuían, puesto que como se aprecia prevaleció un estricto criterio jerárquico sobre un quizá más deseable criterio de proporcionalidad"¹⁷⁷. Al mismo tiempo, hemos de señalar como con la LOCGPJ 1/1980, de 10 de Enero, "resultan negativamente discriminados los vocales de procedencia parlamentaria cuando se trata de distribuir las situaciones de poder o representación en el interior del Consejo" ¹⁷⁸

¹⁷⁶ Andrés Ibañez, P.: El Poder Judicial op. cit, pág. 68. Tal y como ha puesto de manifiesto Gerpe Landín, en la que fuera la primera elección del Consejo celebrada entre los días 14 y 15 de mayo de 1980, y dado que los jueces de distrito no se habían incorporado a la Carrera Judicial, ni los Magistrados de Trabajo a la jurisdicción ordinaria, los puestos judiciales se distribuirían de la siguiente manera: "tres magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales será Presidente si hubiere candidato; cinco magistrados; un juez de Primera Instancia e Instrucción; un magistrado de Trabajo, y dos jueces de Distrito." Véase Gerpe Landín, M.: "El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" op. cit., pág. 134

¹⁷⁷ Bustillo Bolado, R.: "El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit., pág. 71

¹⁷⁸ Andrés Ibañez, P.: El Poder Judicial op. cit, pág. 68

El 23 de Diciembre de 1983 puede considerarse una fecha clave para el sistema judicial que disfrutamos/padecemos en la actualidad¹⁷⁹. La remisión por parte del Ministerio de Justicia del Anteproyecto de lo que vendría a constituirse como LOPJ 6/1985 de 1 de julio¹⁸⁰, publicada en el BOE el día 2 de Julio de 1985, supuso un gran paso, calificado por ciertos autores como prematuro y poco reflexivo, y por otros como el inicio del largo camino que se llevaría a cabo para reformar el ya vetusto sistema judicial establecido. Con el citado Anteproyecto se sentarían las bases necesarias para

¹⁷⁹ Los meses anteriores y posteriores a Diciembre de 1983 pueden calificarse como " uno de los períodos de más alta tensión polémica vividos por la justicia de este país, y podría también decirse, por este país a propósito de la justicia" Véase Andrés Ibáñez P. y Movilla C.: El Poder Judicial op. cit. pág. 75.

¹⁸⁰ Federico Sainz de Robles ha puesto de manifiesto la verdadera revolución que se introducía con la entrada en vigor de la LOPJ6/1985: " estoy persuadido de que, con el pie obligado de rechazar el abortado proyecto de UCD y, por imperativo de la realidad (que el PSOE empezó a calibrar desde que legítimamente llegó al poder de forma avasalladora), de rechazar también su propio proyecto alternativo de 1980, se propusieron inicialmente y con sinceridad reformar a fondo la Justicia... la sinceridad del propósito se truncó al advertir que, según el mandato de la Ley Orgánica 1/1980, el 23 de julio de 1895 era la fecha tope para convocar elecciones al Consejo General del Poder Judicial entre el cuerpo judicial. Para taponar esa fecha fatídica hubo que acelerar la elaboración de la Ley Orgánica, hubo que eliminar el recurso de inconstitucionalidad previo -introducido por el PSOE-, y el Tribunal Constitucional tuvo que alterar el orden de tramitación y fallo del recurso de inconstitucionalidad contra otras leyes. Casi nada." Sainz de Robles, F.C.:" ¿Un Pacto de Estado para la Justicia? en Tapia, Publicaciones para el Mundo del Derecho, año XIV, núm. 87, Abril-Marzo 1996, pág. 5

garantizar la independencia judicial, al tiempo que el Ministerio confería ciertas competencias al CGPJ consideradas como propias. Sin embargo, la mayoría vino a señalar que el Anteproyecto respondía a la intención de limitar las facultades del Consejo, centrando sus facultades de manera exclusiva en lo relativo al estatuto de jueces y magistrados al tiempo que se excluían las facultades reglamentarias externas. El Informe elaborado por el propio Consejo consideraba que el Anteproyecto era un inadmisibles paso a tras y una clara restricción de la independencia judicial en su ámbito de gobierno.

Con posterioridad las tensiones se acrecientan con motivo del Proyecto de LOPJ, y ello debido entre otras razones a que el " Gobierno no integra las propuestas del Informe del Consejo General, modifica en parte el texto del Anteproyecto y no solicita Informe del Consejo General en contra de lo previsto en la LO 1/1980 "¹⁸¹. Es evidente, tal y como se ha puesto de manifiesto, como el consenso que había presidido la regulación del Consejo General del Poder Judicial en el momento constituyente y en la elaboración de la Ley Orgánica 1/1980, del Consejo General, no se consigue alcanzar durante la elaboración de la Ley Orgánica del Poder

¹⁸¹ Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias " op cit., pág. 123

Judicial, LO 6/1985, de 1 de julio. Se caracteriza este último proceso por el contrario " por el abierto enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria y el Consejo General y entre la mayoría parlamentaria y la oposición conservadora"¹⁸² La situación descrita conducirá a la LOPJ ante el Tribunal Constitucional por una doble vía, la de los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado y la del recurso de inconstitucionalidad. A estos apartados nos referiremos con posterioridad; únicamente debemos señalar ahora que los conflictos núms. 495, 788, y 799 de 1985 responden a los planteados 1º y 3º requerido al Congreso de los Diputados y el segundo al Senado, que fueron acumulados y resueltos en la Sentencia 45/1986 de 17 de abril por el TC - desestimados por cuestiones formales-, al tiempo que, la sentencia del TC referente a la inconstitucionalidad fue la 108/86 de 29 de julio.

Tras la LOGPJ 1/1980 de 10 de Enero han sido aprobadas la LOPJ, 6/1985 de 1 de Julio, así como la reciente modificación llevada a cabo a través de la LO 16/1994, de 8 de Noviembre; sobre éstas volveremos con posterioridad, para un análisis particularizado, especialmente en relación a la

¹⁸² Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, op. cit., pág. 120

competencia nuevamente atribuida al Consejo sobre la selección y formación de jueces y magistrados.

SECCIÓN III ORGANIZACIÓN

i) Estructura

a) Introducción

Debe destacarse que los aspectos organizativos del Consejo General del Poder Judicial no tienen solamente un sentido técnico, empresarial, de simple productividad, sino que están profundamente imbrincados con los principios y los valores políticos que son propios de un Estado determinado. Es importante observar detenidamente el funcionamiento del CGPJ debido, principalmente, a que la estructuración de esta institución, no puede plantearse acudiendo solamente a criterios de distribución del trabajo o a técnicas de gestión, sino que sus funciones están íntimamente ligadas con el sistema de poder político y la relación de éste con la sociedad civil.¹⁸³ En atención a la normativa reguladora del Consejo General del Poder Judicial, observamos la existencia de distintos órganos dentro del mismo.

¹⁸³ MOVILLA ALVAREZ, C. " *División de Poderes e interpretación, hacia una teoría de la praxis constitucional* " Tecnos, Madrid, 1987, capítulo IV - constitucionalidad, derecho comunitario europeo y jurisdicción ordinaria -, apartado "sistema político y jurisdicción contencioso-administrativa" pág.119

b) Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo

- EL Presidente¹⁸⁴ del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo,¹⁸⁵ es nombrado por el Rey para un período de cinco años¹⁸⁶, a propuesta del Consejo por

¹⁸⁴ Es aquel que preside el Consejo, se da la circunstancia de que éste va a ser al mismo tiempo Presidente del Tribunal Supremo. La LOPJ vigente dispone la forma en la que se lleva a cabo la elección art. 123.1;" El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato ". Observamos pues, que el Presidente puede pertenecer o no al Consejo, cabe que no sea Juez ni Magistrado.

Art.123.2 " La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo ". Frente a este nuevo quorum señalar que la derogada LOCGPJ, establecía la necesidad de que para que dicho acuerdo se consiguiera precisaba de mayoría absoluta en primera votación y si esta no se producía bastaba la mayoría simple.

El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de Abril y publicado en el BOE el 5 de mayo de 1986, en el Título Segundo " de los órganos del Consejo General del Poder Judicial y del régimen de sus reuniones" Capítulo II, establece en los artículos 25 a 27 algunos de los aspectos relativos al Presidente del Consejo.

¹⁸⁵ Debe destacarse el hecho de que no es necesario que el designado sea previamente elegido Vocal del Consejo, ni tampoco que pertenezca a la carrera judicial.

¹⁸⁶ Cesa en el momento en que se cumple el período para el que fue elegido si bien, puede continuar en la presidencia del Consejo hasta el momento en que se realiza la designación de los nuevos miembros del Consejo, es decir, mientras se mantiene en funciones la institución. Otra posibilidad que se recoge es la de la renuncia del Presidente del Consejo; en este caso, debe darse comunicación al Presidente del Gobierno a través del Ministro de Justicia. Es posible también que el cese se produzca como consecuencia de la incapacidad del mismo, que en todo caso,

mayoría de tres quintos. Podrá ser reelegido una vez y ha de pertenecer a las mismas categorías profesionales que los Vocales, es decir, debe ser elegido entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con más de quince años de antigüedad en la carrera judicial o en el ejercicio de su profesión como jurista. Ostenta la representación del Consejo General del Poder Judicial¹⁸⁷. El nombramiento del Presidente del TS y del CGPJ se lleva a cabo por Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno, y presta juramento o promesa ante el Rey, tomando posesión de su cargo ante los Plenos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en sesión conjunta.

Resulta interesante analizar el papel que desempeña el Presidente del Consejo. Así pueden destacarse las siguientes funciones:

* Convoca y preside las sesiones del Pleno del Consejo y de la Comisión Permanente.

debe ser notoria. Se contempla otro supuesto relativo a la finalización de la Presidencia, fundamentado en el incumplimiento grave de sus deberes como Presidente del Consejo. En los dos últimos supuestos planteados, se hace preciso que la decisión se tome por tres quintas partes del Consejo y que dicha decisión sea sancionada por el Rey.

¹⁸⁷ arts.123 y 125 de la LOPJ

* Dirige las deliberaciones del Pleno, dispone cuando una materia ha sido suficientemente debatida, llama al orden a aquellos que perturban el normal desarrollo de los Plenos, dispone la suspensión de la reuniones cuando procede...

* Fija el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente

* Propone el nombramiento de Ponencias para temas concretos.

* Autoriza con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente, en los que cuenta con voto de calidad para los supuestos de empate.

* Asume la superior dirección de la actividad de los órganos técnicos del Consejo, en particular, en materia económico financiera.

* Sumamente interesante resulta el problema de la responsabilidad política del Presidente; la Ley Orgánica no regula de forma expresa la materia, aunque quizás sirva para reparar esta omisión el art.126 dedicado a la notoria incapacidad, así como de los del incumplimientos del cargo. La doctrina se ha pronunciado al respecto, así "la exigencia de dicha responsabilidad no nos parece que vaya en contra de

la naturaleza del Consejo General, ni siquiera por su condición de Presidente también del Tribunal Supremo, sino que supone una vía más de democratización del Poder Judicial, perfectamente compatible con la proclamación de su independencia."¹⁸⁸

c) Vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial

- El Vicepresidente¹⁸⁹ es propuesto por el Pleno entre sus Vocales, por mayoría de tres quintos y nombrado por el Rey. Sustituye al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad u otro motivo legítimo.¹⁹⁰ De igual forma tendrá atribuidas aquellas funciones que le delegue expresamente el Presidente, delegación que, deberá comunicar al Pleno. Tal y como establece el apartado tercero del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ aprobado

¹⁸⁸ Álvarez Conde, E.: El Régimen Político Español , op. cit.,pág. 300.

¹⁸⁹Frente a la regulación de la derogada LOCGPJ, en donde no se preveía la necesidad de éste, ya que en casos de ausencia, enfermedad o vacante, actuaba el Magistrado más antiguo miembro del Consejo, en la vigente LOPJ 6/1985 de 1 de julio, en el art. 124, se contempla esta figura, siendo nombrado por el Rey, previa propuesta elevada por el Pleno entre sus vocales, por mayoría de tres quintos de sus componentes.

¹⁹⁰ arts. 123 y 124.

por Acuerdo el 22 de Abril de 1986, junto a estas funciones le corresponde también " las demás que le atribuyan las Leyes o le encomienden el Pleno del Consejo o su Presidente"

d) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial

El Pleno del Consejo, al que le corresponde ejercer las funciones más importantes atribuidas a éste, se considera validamente constituido con la presencia mínima de catorce Vocales¹⁹¹. Podemos estructurarlo siguiendo a LORCA NAVARRETE en tres grandes grupos¹⁹²:

Las primeras relativas a *nombramientos*, ya que al Pleno del CGPJ le corresponde la propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y de dos miembros del Tribunal Constitucional. Le corresponde, asimismo, proceder al nombramiento de Presidente de Sala y Magistrados del TS y cualesquiera otros discrecionales, así como la propuesta de nombramiento de Presidente de los TSJ de las CCAA y evacuar la audiencia prevista en el art. 124.4 de la Constitución relativo al nombramiento del Fiscal General del Estado.

¹⁹¹ art.127 LOPJ

¹⁹² Lorca Navarrete, A.M^a.: Introducción al Derecho Procesal, Organización Judicial española y principios rectores del Proceso Español Dykinson, Madrid, 1995, pág. 79

Un segundo grupo de funciones afectan al Pleno del CGPJ como órgano de instancia resolutoria; así, se le atribuye la resolución de los recursos que en vía administrativa se interpongan contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria, de las Salas de Gobierno de los TSJ y de los órganos de gobierno de los órganos jurisdiccionales. Resuelve, en fin, los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria¹⁹³.

¹⁹³ Como una curiosidad relativa al modelo existente en Inglaterra y Gales, en lo que concierne al control disciplinario, ponemos de relieve, cómo es la costumbre la que establece que todo aquél culpable de un delito debe renunciar. Si se negare, el Lord Canciller tiene el poder de destituir a los Jueces de Circuito, pero no así a los de la Alta Corte, Corte de Apelaciones o Cámara de los Lores. Solamente la Reina puede remover a estos basada en una iniciativa de la Cámara de los Comunes o de los Lores. Durante el siglo pasado, se hicieron frustrados intentos de reconsideración de tal iniciativa, pero no se han registrado pedidos de esta índole en lo que va del siglo actual. En algunos casos, Lord Canciller llamará públicamente la atención del juez, poniendo extremo cuidado en no interferir con la independencia del Poder Judicial. Tal y como ha puesto de manifiesto MARCUS EDWARD (Juez del Condado de Brentford) ningún juez ha renunciado o sido removido, por delito o mala conducta, en los últimos cincuenta años de excepción de un Juez de Distrito, en 1987, quien debió renunciar tras comprobarse su participación en actividades de contrabando de whisky... En época reciente, el Lord Canciller advirtió a los jueces que, de ser procesados por conducir bajo exceso de alcohol, deberían renunciar a su cargo. (Véase Maureen Williams, S.: "Jornadas angloargentinas de Abogados y Jueces" en Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, núm. 2, Tomo 53, Montevideo, Buenos Aires, Argentina, Septiembre 1993)

El tercer grupo de funciones que asume el Pleno del CGPJ son *orgánicas*. Afectan a la elección y nombramiento de los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones aprobando la Memoria anual que, con motivo de la apertura del año judicial, debe leer el Presidente del Consejo sobre el estado de la Administración de Justicia.

Destacamos algunas notas fundamentales en el funcionamiento del Pleno del Consejo:

* Las resoluciones adoptadas en las reuniones del Pleno, que pueden ser ordinarias o extraordinarias¹⁹⁴, se denominan

¹⁹⁴ Conforme dispone el art. 128 de la LOPJ así como los artículos 34 a 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ.

El Pleno se reunirá previa convocatoria del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente en reuniones ordinarias y extraordinarias con arreglo a los que se determine en el Reglamento de Organización aprobado por el propio Consejo. En todo caso, deberá celebrarse sesión extraordinaria, cuando lo soliciten cinco de sus miembros, incluyendo en el orden del día los asuntos que éstos hayan propuesto. (Art. 128 de la LOPJ). En relación con este supuesto se encuentra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, en el que se dispone que las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias. El Pleno se reunirá periódicamente en sesión ordinaria para el despacho de los asunto de su competencia. Al inicio de cada trimestre, el Presidente dará a conocer a los miembros del Consejo el calendario de sesiones plenarias para dicho período. El calendario anunciado no se modificará sino por causa justificada. Como regla, las sesiones ordinarias se celebrarán en días hábiles. (Art. 38)

Para diferenciar entre sesiones ordinarias y estraordinarias también recurrimos a lo dispuesto en el Reglamento anteriormente citado: así, son sesiones extraordinarias las que se convoquen por el Presidente, fuera del calendario trimestral establecido para el estudio o decisión de asuntos que, por su importancia o urgencia, exijan un tratamiento específico e inmediato.

técnicamente "acuerdos", los cuales " se pueden adoptar por asentimiento o por votación. Existe asentimiento para los acuerdos que versen sobre propuestas respecto de las cuales no se hayan formulado objeciones por ningún Vocal. Los restantes acuerdos deben adoptarse mediante votación, bastando, salvo que se establezca otra mayoría, el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes."¹⁹⁵

Procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al Presidente por cinco o más Vocales del Consejo, con expresión del tema que haya de ser tratado, y con aportación de todos los documentos, si los hubiere relacionados con el orden del día propuesto. El Presidente convocará al Pleno del Consejo de los tres días siguientes a la presentación la solicitud, e incluirá el tema propuesto en el orden del día. (artículo 35) " La convocatoria de las sesiones plenarias expresará el orden del día de la reunión, y se comunicará a los Consejeros con tres días, al menos, de antelación, salvo las sesiones extraordinarias que, por razones de urgencia, no lo permitan." (Art. 36) El Reglamento también establece que " con la convocatoria del Pleno, se repartirá a los miembros del Consejo la documentación correspondiente a cada uno de los puntos del orden del día. Los asuntos que se sometan a la consideración del Pleno deberán estar debidamente documentados, incorporando los antecedentes necesarios y, en su caso, la propuesta de acuerdo correspondiente." (Art. 37) El lugar de las celebraciones de las sesiones está determinado también en el Reglamento así, " Las sesiones del Pleno del Consejo se celebrarán normalmente en su sede oficial de Madrid, pero podrán tener lugar, cuando así lo exprese en la convocatoria, en la sede del Tribunal Supremo o de otros órganos jurisdiccionales, en Madrid u otras poblaciones españolas" (Art. 38)

¹⁹⁵ Lorca Navarrete, A.M^a.: Introducción al Derecho Procesal, Organización Judicial española y principios rectores del Proceso Español op. cit. pág. 81

* Destaca el hecho de que las actas que se levantan de cada sesión plenaria son sucintas.

* Resoecto a las deliberaciones y actas del Pleno debemos resaltar el carácter reservado de las mismas.

e) La Comisión Permanente

La Comisión Permanente está formada por el Presidente y cuatro Vocales, dos pertenecientes a la carrera judicial y dos ajenos a ella. Las reuniones de esta comisión sólo son válidos cuando asisten al menos tres de sus miembros, entre los que debe encontrarse el Presidente o en quien este haya delegado. Prepara las sesiones del Pleno y vela por el cumplimiento de sus acuerdos¹⁹⁶. La Comisión Permanente se elige en la primera reunión del Pleno, tras la toma de posesión de su Presidente. Tiene la obligación de reunirse, al menos una vez a la semana para el despacho de los asuntos de su competencia. Las reuniones se convocarán por el Presidente al menos con veinticuatro horas de antelación.¹⁹⁷

A este órgano se le atribuyen diversas competencias:

¹⁹⁶ arts. 130 y 131 LOPJ

¹⁹⁷ De esta manera aparece recogido en el art. 58 Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo el 22 de Abril de 1986.

* Decide practicar la jubilación forzosa de jueces y magistrados cuando se cumple la edad legalmente establecida.

* Resuelve las cuestiones relativas a las licencias solicitadas¹⁹⁸.

* Autoriza los escalafones de la carrera judicial

* Lleva a cabo también las autorizaciones relativas a los segundos trabajos ejercidos por los jueces y magistrados. Esta facultad se encuentra atribuida a la Comisión Permanente por acuerdo del CGPJ de 25 de septiembre de 1986.

En relación a esta materia vamos a centrarnos, de entre las incompatibilidades y prohibiciones recogidas en el artículo 389 de la LOPJ, en lo dispuesto en el apartado quinto, que comprende la docencia como actividad compatible con el ejercicio de la judicatura, por ser éste un supuesto muy característico y sobre el que existe muy importante jurisprudencia. Tal y como establece el citado artículo de la LOPJ, el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo

¹⁹⁸ Arts 373 y ss. de la LOPJ. Véase de igual modo el Acuerdo de 25 de marzo de 1992 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento en el que se desarrolla el régimen jurídico de licencias y permisos.

empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades de las Administraciones Públicas¹⁹⁹. Analizando la normativa existente observamos que, la concesión de la realización de ese segundo trabajo se encuentra condicionada por lo establecido en el artículo 397 de la LOPJ: " La competencia para la autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva"

Esta cuestión es interesante si tenemos en cuenta que la vocación docente de numerosos jueces y magistrados al mundo de la enseñanza universitaria enriquece la Universidad, pues amplía, de este modo, el discurso jurídico que puede ofrecerse a los alumnos, transmitiéndoles conocimientos eminentemente prácticos. Sin embargo, el ejercicio de esta

¹⁹⁹ En este sentido, véanse entre otras las LO 1/1985, de 18 de Enero de incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Administración de Justicia y Consejo de Estado y de componentes del Poder Judicial; Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y RD 598/de 30 de abril.

actividad no puede en ningún caso impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes -así lo dispone la Ley 53/1984, de 26 de diciembre en su art. 1.3-

En todo caso, la interpretación del artículo referido nos obliga a que cuando se aplique dicha norma, se deba, de forma particularizada, analizar si existe o no lo que denominaremos impedimento o menoscabo jurisdiccional, pudiendo el Tribunal Supremo, en cualquier caso, controlar jurisdiccionalmente la decisión del CGPJ. Esto último es así dado que la decisión adoptada por la Comisión Permanente puede ser recurrida mediante recurso ordinario ante el Pleno del Consejo. Resuelto ese primer recurso queda abierta la vía de reclamación contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Entre los problemas que se plantean a la hora de resolver si debe o no otorgarse la compatibilidad entran en juego los siguientes factores:

- La necesidad de que la actividad desarrollada no implique una vulneración del horario de trabajo establecido.

- Que se produzca una necesaria petición de excedencia voluntaria cuando se llegue al mundo judicial procedente de la enseñanza universitaria. (art. 4.1. de la Ley 53/1984)

- No puede desconocerse la exigencia del deber de residencia de los jueces y magistrados en la población donde tenga su sede el juzgado o tribunal que sirvan sin posibilidad de ausentarse de la circunscripción en que ejerzan funciones excepto cuando lo exija el cumplimiento de sus deberes judiciales o usen de licencia o permiso.

- Las distancias en el tiempo, que no en el espacio, dado el alto desarrollo de los medios de comunicación, lo que viene a implicar que deba tomarse en consideración no la distancia recorrida, sino el tiempo empleado para ello.

- Un aspecto fundamental a la hora de otorgar o denegar la autorización de compatibilidad debe ser el conjunto de circunstancias peculiares concurrentes en el juzgado o tribunal donde el juez o magistrado solicitante de la autorización está desarrollando su actividad jurisdiccional; si por motivos estructurales un determinado órgano jurisdiccional ha acumulado un excesivo volumen de trabajo, no debería permitirse que el juez o magistrado titular del mismo compaginase su actividad con otras que, sin duda

alguna, menoscabarán el cumplimiento normal de su función jurisdiccional.²⁰⁰

Continuando con el análisis de las funciones que le corresponden a la Comisión Permanente debemos añadir:

* Decide sobre el nombramiento de jueces y magistrados que por tener carácter íntegramente reglado no son competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

* Ejerce cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o atribuidas por la ley.

Los acuerdos pueden adoptarse por mayoría simple de los miembros presentes, decidiendo, en caso de empate el Presidente, al que se le otorga voto de calidad.²⁰¹ El acta tiene, como en los casos anteriormente señalados, la

²⁰⁰ Para un análisis más detallado sobre el tema, tómense en consideración el brillante trabajo realizado por PICÓ I JUNOY, J.: " Límites a la actividad docente de jueces y magistrados" en Rev.Poder Judicial, núm. 38, 2ª Epoca, Junio de 1995, págs. 241 a 249, así como las sentencias del Tribunal Supremo: STS 18 de noviembre de 1991, STS 6 de noviembre de 1992, STS 28 de octubre de 1987, STS 23 de abril de 1988, STS 23 de junio de 1988, STS 14 de junio de 1988, STS 30 de junio de 1988. De igual modo debe tenerse en cuenta el Informe sobre compatibilidad del cargo judicial con el ejercicio de la docencia, publicado en septiembre de 1990 y recogido por PUYOL MONTERO, F: " Dictámenes y criterios gubernativos del CGPJ" ed. CGPJ, Madrid, 1991

²⁰¹ Véase art. 60 del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo de 22 de Abril de 1986

característica de ser sucinta y los componentes tienen la obligación de guardar secreto sobre lo sucedido²⁰².

f) La Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria²⁰³ se encuentra integrada por cinco miembros, tres de la carrera judicial y dos ajenos a ella. Es precisa la asistencia de todos sus miembros. Le compete la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a jueces y magistrados ²⁰⁴. De igual modo le compete también la realización de los expedientes de rehabilitación y la cancelación de las anotaciones de las sanciones disciplinarias impuestas. Debemos destacar como la Ley 16/1994, de 8 de Noviembre, que reforma algunos aspectos de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, hace referencia a la imposición de las sanciones: " se atribuye a la Comisión Disciplinaria del CGPJ la imposición de sanciones para las faltas graves y se residencia la competencia para las muy

²⁰² Véase art. 62 del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Consejo publicado en el BOE el 5 de mayo de 1986

²⁰³ Sobre esta materia y para un análisis en mayor profundidad, véase REVENGA SÁNCHEZ, M.: " Responsabilidad y disciplina judicial. El caso italiano" op. cit., págs. 63-64

²⁰⁴ arts. 132-133 LOPJ, así como el art. 66 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Acuerdo el 22 de Abril de 1986 y publicado el 5 de mayo de 1986

graves en el Pleno del Consejo General y hay que sobreentender que será a propuesta de la Comisión Disciplinaria, otorgándole a estos órganos la facultad de imponer sanciones de menor gravedad de las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar un expediente que inicialmente está atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto del mismo merecen un inferior reproche disciplinario²⁰⁵. La importante modificación reside singularmente en que al conocer la Comisión Disciplinaria del Consejo las faltas graves, antes competencia atribuida a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se propicia la posibilidad de establecer criterios de unificación de actuación en este punto"²⁰⁶

Los acuerdos se adoptan por mayoría de sus miembros²⁰⁷ siendo las deliberaciones de dicha Comisión reservadas²⁰⁸.

Respecto a la actividad desarrollada por la Comisión Disciplinaria, puede ser interesante analizar los datos

²⁰⁵ art.421.2

²⁰⁶ Memoria que el Consejo General del Poder Judicial eleva anualmente a las Cortes Generales, Memoria de 1995, aprobada el 12 de julio de 1996, Ed. CGPJ, Madrid, 1996, pág. 44-45

²⁰⁷ Art. 68 del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por Acuerdo el 22 de Abril de 1986

²⁰⁸ Art. 70 del Reglamento aprobado el 22 de Abril de 1986

recogidos en las diversas Memorias elevadas por el Consejo a las Cortes Generales²⁰⁹

AÑO	1983	1984	1985
EXP. INCOADOS	33	56	28
EXP. CON SANCIÓN	7	14	11
EXP. SOBRESEÍDOS	6	11	12
EN TRAMITACIÓN	20	31	5

En el período comprendido en la Memoria de 1984 de los siete expedientes resueltos con sanción, cuatro afectaron a Magistrados, uno a Juez y dos a Secretarios. De los expedientes en tramitación, tres se referían a Magistrados, tres a Jueces, tres a Jueces de Paz y once a personal auxiliar²¹⁰

²⁰⁹ Como puede observarse, tomamos como primer año de análisis 1983, dado que en las Memorias elaboradas con anterioridad no se reflejan los datos a los que se hace mención en este apartado.

²¹⁰ Véase Memoria de 1984 del CGPJ, pág. 210

De los expedientes resueltos con sanción dentro del período comprendido dentro de la Memoria de 1985, cuatro correspondían a Magistrados, siete a Jueces, y se sancionó a tres Secretarios.²¹¹

Si partimos del análisis de la Memoria de 1986, así como de los datos referentes a la Memoria de 1985, en donde se expresan ya datos referentes a los primeros seis meses de 1986, observamos como existe certeza respecto de los once expedientes disciplinarios, tres recaídos sobre Magistrados, tres sobre Jueces y cinco sobre Secretarios. Sin embargo, no es posible afirmar la exactitud de los datos contenidos en el cuadro de 1985, dado que, no figura en la Memoria de 1986 una exposición clara respecto de los meses de Noviembre y Diciembre.²¹²

AÑO OBJETO	1986 (1)	1987 (2)	1988 (3)	1989(4)	1990 (5)
EXP. INCOADOS	35	30	39	26	22
EXP.CON SANCIÓN	10	6	2	3	1

²¹¹ Véase Memoria elevada por el CGPJ al Parlamento en el año de 1985, pág. 251

²¹² Véase Memoria del CGPJ elevada a las Cortes Generales, Ed. CGPJ, Madrid, de 1985 pág. 251 así como Memoria del CGPJ, Ed. CGPJ, Madrid, de 1986, pág. 114 y 114

EXP. SOBRESEIDOS	5	4	3	2	5
EN TRAMITACIÓN (*)					

(*) De la Memoria de 1990, aprobada por el Pleno el 24 de julio de 1990 obtenemos un resumen de la actividad desarrollada por la Comisión Disciplinaria en el período comprendido del 1 de Noviembre de 1985 al 31 de junio de 1990²¹³. Consecuencia del análisis de los datos comprendidos en cada uno de los períodos y del cuadro resumen se desprende un margen de diferencia que hace relación a los supuestos " en tramitación" no recogidas en los análisis particulares anuales.

EXP. CON SANCIÓN	47
EXP. SIN SANCIÓN	61

(1) Se abarca el período de julio de 1986 a junio de 1987. Durante ese período, de las treinta y cinco causas incoadas, únicamente acabaron en sanción diez, de las cuales ocho fueron para magistrados y dos para jueces de instrucción.²¹⁴

²¹³ Véase Memoria de 1990, pág. 52

²¹⁴ Véase Memoria de 1987, págs. 111 y ss.

(2) El cuadro resume la actividad llevada a cabo durante el período de julio de 1987 a julio de 1988 ambos inclusive. En este período se recibieron en el Consejo un total de 1.699 denuncias de las que 770 fueron directamente archivadas por referirse a cuestiones judiciales al margen de las competencias del Consejo. De las diligencias Informativas incoadas, en total 929, unas hacían referencias a los retrasos de la Justicia, en total 774. Las diligencias informativas por referirse a retraso debido a sobrecarga de trabajo del órgano jurisdiccional y/o escasez de medios materiales o personales se referían 446. Las tramitadas por causa distinta a la anterior fueron de 298. Las diligencias informativas abiertas por otras causas fueron un total de 185. Se ha hecho referencia en el cuadro a la resolución de expedientes disciplinarios resueltos por la Comisión del Consejo. Los resueltos por las Audiencias Territoriales en dicho período fueron un total de 31. De éstas 13 con sanción y 18 sin la misma²¹⁵.

(3) El resumen hace referencia a la actividad llevada a cabo durante el período de julio de 1988 a junio de 1989, ambos inclusive. Las denuncias recibidas durante este tiempo por el Consejo fueron 1439 de las que se archivaron directamente 662. Hemos hecho referencia a los expedientes

²¹⁵ Véase Memoria que el CGPJ eleva anualmente a las Cortes Generales, CGPJ, Madrid, Memoria de 1988, págs. 35 y ss.

resueltos por la Comisión Disciplinaria del Consejo. Los resueltos por otros órganos competentes suman un total de 23 de los que ocho tuvieron sanción, mientras que quince quedaron sin la misma²¹⁶.

(4) Se engloba de julio de 1989 a junio de 1990. Durante ese lapso de tiempo se recogen en el Consejo General del Poder Judicial un total de 1513 denuncias de las que 710 fueron archivadas de manera directa por ser ajenas al Consejo. Por la Comisión fueron incoadas un total de 26 de los 48 expedientes. De los expedientes resueltos por otros órganos un total de 20, únicamente 4 tienen sanción. El resto, 16 fueron resueltos sin sanción.

(5) La tabla refleja el período de julio de 1990 a abril de 1991, ambos inclusive. De los 22 expedientes disciplinarios incoados por la Comisión durante esas fechas, 10 se referían a faltas muy graves y 12 a faltas graves; por otros órganos serían incoados un total de 13 expedientes. Fueron resueltos por esos otros órganos a los que se ha hecho referencia un total de 27 expediente de los que como es

²¹⁶ Véase Memoria que el CGPJ eleva anualmente a las Cortes Generales, CGPJ, Madrid, Memoria de 1989, págs. 33 y ss.

lógico, algunos pertenecían a períodos anteriores. De los 27 únicamente 4 acabaron en sanción.²¹⁷

AÑO	1991 (1)	1992 (2)	1993 (3)	1994 (4)	1995 (5)
EXP. INCOADOS	26	45	29	12	14
EXP. CON SANCIÓN	5	2	4	8	10
EXP. SOBRESEIDOS	9	8	11	3	4

(1) El resumen numérico engloba el período de mayo de 1991 a abril de 1992, ambos inclusive. En un total de 43 reuniones de la Comisión disciplinaria se resolvieron las cuestiones suscitadas en torno al ejercicio de la potestad atribuida legalmente a través del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Del total de expedientes disciplinarios incoados, 58, a instancia de la Comisión lo fueron 26 de los que 15 hacían mención a la comisión de falta muy grave y 11 a falta grave. Por otros órganos serían incoados un total de 34 expedientes, algunos de ellos de períodos anteriores, de los que 28 fueron no sancionatorios y 6 lo serían.

²¹⁷ Memoria de 1991, aprobado por el Pleno el 6 de Noviembre de 1991

(2) Se recoge en el cuadro la actividad realizada de enero a diciembre de 1992, ambos inclusive. Se reflejan las notas recogidas en el Memoria de 1993, aprobada por el Pleno en su reunión de 21 de julio de 1993; así, podemos observar que las denuncias recibidas en el Consejo fueron de un total de 1.432. De éstas serían archivadas de plano 764. Respecto a los expedientes disciplinarios incoados, fueron, como se desprende el cuadro 45 de las cuales provenían de la misma Comisión un total de 21, dentro de las cuales podemos distinguir entre las de origen en una falta muy grave, 14, y aquellas derivadas de faltas graves, siete en total. Por órganos distintos a la Comisión se incoaron un total de 24 expedientes. Los expedientes resueltos por la Comisión han quedado reflejados en el cuadro. Por ello, hemos de referirnos a los resueltos por otros órganos distintos a la Comisión Disciplinaria: con sanción un total de siete, sin la sanción un total de 23²¹⁸.

(3) La tabla comprende el período de Enero a Diciembre de 1993 ambos inclusive. El número total de expedientes incoados fue de 62 de los cuales se realizarían a través de la Comisión un total de 29 de éstos 23 hacían referencia a una falta de carácter muy grave, 4 a faltas graves, y 2 a

²¹⁸ Véase Memoria que anualmente el Consejo General eleva al Parlamento, de 1993, aprobada por el Pleno en su reunión de 21 de julio de 1993, Ed. CGPJ, Madrid, 1993, pág. 44 y ss.

faltas leves. Por otros órganos se incoaron un total de 33 expedientes. Los expedientes resueltos, incoados en el período o anteriores llegaron a un total de 45 de los que 15 fueron resueltos por la Comisión. Los restantes 30 fueron resueltos por otros órganos, de los que 12 finalizaron sin sanción y 18 lo hicieron con sanción. En total las reuniones celebradas por la Comisión fueron 35.²¹⁹

(4) Se abarca el período de enero a diciembre de 1994, ambos incluidos. La Comisión Disciplinaria llevó a cabo un total de 33 reuniones. Los expedientes incoados fueron un total de 30 de los que como se desprende del cuadro 12 lo fueron por la comisión. Los otros 18 serían incoados por otros órganos (Salas de Gobierno o Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia). De los resueltos, un total de 54, únicamente corresponden a la Comisión 11, los restantes, serían resueltos por otros órganos: con sanción 11, sin sanción 34²²⁰. Resulta interesante destacar la importancia de los datos contemplados en las Memorias. Un ejemplo de esto se encuentra al analizar detenidamente los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales. Así, durante los debates relativos a la presentación de la Memoria, en la Comisión de Justicia e Interior, se puso de manifiesto por

²¹⁹ Véase Memoria de 1994, pág. 44 y ss.

²²⁰ Véase Memoria de 1995, aprobada el 12 de julio de 1996, pág. 34 y ss.

algunos señores portavoces la falta de concreción de algunos datos, especialmente a la pregunta del tipo de infracción que había motivado la sanción: así lo reconocía Pascual Sala: "La Comisión Disciplinaria, según me han comunicado por que efectivamente no está reflejado en la Memoria, ha sancionado en 1994 y 1995 a 8 jueces por falta muy grave, consistentes siete en retrasos reiterados o abandono y una infracción por incompatibilidades...Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia han sancionado a 13 jueces por falta grave o leve de retraso y desidia en la administración de justicia..." ²²¹

(5) El número de expedientes disciplinarios resueltos durante el período comprendido en la Memoria de 1996 y, a 15 de junio de 1996, han sido 14, los más numerosos son los relativos a faltas por retraso injustificado, reiterado o simple retraso en el desempeño de la función judicial.²²²

²²¹ Véase Diario de Sesiones de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia e Interior, V Legislatura, año 1995, núm. 628, 28-11-95, pág. 19033

²²² Véase Cortes Generales, Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, Comisiones de Justicia e Interior, año 1996, VI Legislatura, núm. 37, Sesión núm.5, de 26 de Junio de 1996. Comparecencia de Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo a fin de presentar las Memorias de 1994 y 1995, pág. 641

De entre las últimas medidas disciplinarias adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial, destacamos la sanción impuesta al magistrado Miguel Moreires, apartado de la Audiencia Nacional por un año, como consecuencia de la revelación de datos sumarias²²³.

Retomando en este apartado el análisis comparativo que hemos venido desarrollando a lo largo de toda la investigación, vamos a centrarnos en el modelo italiano, en el que la Comisión Disciplinaria recibe el nombre de Sección Disciplinaria. La facultad disciplinaria sobre jueces y magistrados se atribuye al *Consiglio* en virtud del art. 105 de la Constitución Italiana desarrollado a través de la Ley 195/1958, de 24 de Marzo. Es destacable el que la presidencia de la misma corresponda al Vicepresidente del *Consiglio* cuando ejerce funciones disciplinarias. Inicialmente la Sección Disciplinaria acusó una clara sobrerrepresentación de los jueces de más categoría -magistrados del TS- lo cual " pareció responder al deseo de perpetuar la subordinación de la judicatura a la esfera organizativa del Ministro de Justicia. Además, en lo que al ejercicio de la función disciplinaria respecta, ello se hallaba en consonancia con el

²²³ Tal y como señalaba el Diario ABC, 10-10-96, es la primera vez en la historia del Consejo que se castiga a un miembro de la carrera judicial por hechos de este tipo.

principio vigente hasta entonces de que el juicio disciplinario sólo podía sustanciarse ante superiores o iguales jerárquicos.

La Ley 1198/1967, de 18 de diciembre, excluyó de la Sección Disciplinaria al Presidente del Tribunal Supremo, pero mantuvo sin reservas la preponderancia de los magistrados de dicho Tribunal. Sobre la constitucionalidad de tal preponderancia y sobre la pertinencia de que fuera una sección, y no el Pleno del *Consiglio*, el que ejerciera la función disciplinaria. Hubo de pronunciarse al respecto la Corte Costituzionale en una importante Sentencia, la 12/1971, de 2 de febrero, que representa el punto de encuentro de un arduo debate sobre la legitimidad constitucional de la Sección. La constitucionalidad de la Sección es ratificada sobre la base de la libertad autoorganizativa de los órganos constitucionales dentro de los márgenes estatuidos en la Constitución en cuanto a su estructura y funcionamiento....En cambio, la Sentencia 12/1971 declaró inconstitucional que, en el seno de la Sección Disciplinaria, se procediera por sorteo para la designación de los miembros encargados de enjuiciar el caso concreto. Con ello, según la Corte, se vulneraba lo dispuesto en el art. 104 de la Constitución porque en el ejercicio de una de las más delicadas competencias del CSM no

resultaba asegurada la presencia de todas las categorías judiciales...."

Con posterioridad se han producido diversas modificaciones en relación con la composición y atribuciones del Consejo. Destacamos las operadas como consecuencia de la Ley 1/1981, de 3 de enero, que daría lugar a diversas sentencias de la Corte Costituzionale; Sentencia 86/1987 y 87/1987 de 7 de mayo. Las sucesivas reformas han llevado a la Ley 655/1985, de 22 de Noviembre, en donde se establece el número de nueve miembros titulares y seis suplentes: Los nueve miembros titulares son: el vicepresidente del CSM, que preside la Sección, dos miembros laicos, un magistrado del Tribunal Supremo con ejercicio efectivo de la función y cinco jueces con funciones de mérito. En cuanto a los miembros sustitutos deben distribuirse de la siguiente forma: dos miembros laicos, un magistrado de casación y tres jueces con funciones de mérito.

g) La Comisión de Calificación

La Comisión de Calificación está formada por cinco miembros, tres pertenecientes a la carrera judicial y dos ajenos a ella. Tiene diversas funciones:

En los nombramientos competencia de el Pleno (arts. 134 a 136 LOPJ así como el art. 74 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, Acuerdo de 22 de Abril de 1986) la Comisión de Calificación, producida la vacante, procede a elaborar una relación de al menos tres candidatos para el cargo de que se trate, entre los cuales pueden figurar quienes, reuniendo los requisitos legalmente establecidos, no hayan formulado solicitud, siempre que se haya recabado y obtenido su aceptación. Esa relación se distribuye a todos los miembros del CGPJ en unión de la lista de peticionarios de la plaza. Dentro de los cuatro días siguientes, cada miembro del CGPJ puede proponer otros candidatos, comunicándolo a la Comisión, que los incluye en la relación, tras de los cual se le da curso para su inclusión en el orden del día de un próximo Pleno del CGPJ, en el que la Comisión informa de las circunstancias que concurren en los candidatos incluidos inicialmente en la relación o ulteriormente adicionados. En todo caso se comunica a todos los Vocales la producción de la vacante. En segundo término, la actividad de la Comisión de Calificación afecta a la provisión de plazas de Magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ entre juristas de reconocido prestigio...la Comisión de Calificación se limita a emitir informe sobre los méritos y circunstancias de los

juristas incluidos en la terna presentada por la Asamblea legislativa de la CA.²²⁴

Corresponde también a la Comisión de calificación llevar a cabo las propuestas de premios, distinciones o condecoraciones que deba formular el Consejo. Se encarga de igual forma, tal y como se contempla en el art. 72 del Reglamento del Consejo de las actividades orientadas a la formación y perfeccionamiento de los miembros de la carrera.

h) La Comisión de Estudios e Informes

La Comisión de Estudios e Informes se encuentra compuesta de cinco miembros, elegidos por el Pleno del Consejo, de entre sus vocales, por mayoría de los miembros presentes, considerándose válidos los acuerdos adoptados cuando se encuentren presentes al menos tres de sus cinco miembros. La celebración de las reuniones de esta comisión se deben a la convocatoria del Presidente o a que lo soliciten al menos dos de sus miembros. Se encarga²²⁵ tal y como dispone

²²⁴ Véase el brillante y completo estudio referente a los órganos del Consejo General del Poder Judicial realizado por LORCA NAVARRETE op. cit., pág. 84

²²⁵ De entre los últimos estudios llevados a cabo resaltamos el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, en el que se proponen fórmulas de control jurisdiccional de las clasificaciones realizadas por el Gobierno, de igual modo se

el art. 81 del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en Acuerdo de 22 de Abril de 1986:

- Redactar las iniciativas o propuestas que el Consejo acuerde ejercitar en materia normativa, sometiéndolas a la consideración del Pleno y ultimándolas conforme a la decisión del mismo.

- Preparar los informes que deba emitir el Consejo, conforme a lo dispuesto por el art. 108 de la LOPJ.

- Someter al Pleno iniciativas o propuestas surgidas en el seno de la Comisión, previos los estudios pertinentes.

- Elaborar el proyecto de los Reglamentos que deba aprobar el CGPJ.

- Realizar los estudios jurídicos que se consideren procedentes o que se encarguen por el Pleno o por el Presidente sobre temas relacionados con la Administración de Justicia.

solicita, que se gradue el tiempo de duración de la clasificación y ello debido a que el plazo de mantenimiento de la clasificación no puede ser igual para todas las materias, sino que debería graduarse en función de cuál sea el interés específico que en cada caso se intente proteger y de su vigencia.

Resulta interesante destacar el hecho de que a las reuniones de esta comisión pueden asistir los restantes miembros del Consejo que lo deseen, así como aquellos a los que se convoque por la especial preparación que tengan con la materia objeto de análisis, para todos ellos rige lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, es decir, que no tendrán derecho a voto, aunque eso sí, derecho a expresar su parecer.

i) La Comisión Presupuestaria

La Comisión Presupuestaria, se encuentra regulada a nivel reglamentario en el Capítulo IX del Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Acuerdo el 22 de Abril y publicado el 5 de mayo de 1986. Esta Comisión se encarga de la elaboración de presupuesto del CGPJ siguiendo las directrices marcadas por el Pleno del Consejo. Se compone de cinco miembros que son elegidos por el Pleno del Consejo, de entre sus Vocales, por mayoría de los miembros presentes. Se renueva anualmente.

Debemos recordar que los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo serán adoptados por mayoría de los miembros presentes; quien presida tendrá voto de calidad en

caso de empate. Las deliberaciones tendrán carácter reservado y el Vocal que disintiera podrá formular voto particular. (art. 137 LOPJ)

j) Órganos Técnicos del Consejo

Hemos hecho referencia hasta ahora a una serie de órganos del Consejo, aquellos a través de los cuales se articula. Pero no debemos olvidar la existencia de otra serie de órganos; los órganos técnicos, regulados en los artículos 144 a 148, Capítulo VI " de los órganos técnicos al servicio del Consejo General" de la LOPJ 6/85, dentro del Título II " Del Consejo General del Poder Judicial", desarrollados a nivel reglamentario a través de los artículos 90 a 116 y 117 a 126 (éstos últimos para los órganos técnicos en particular) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, sin cuya colaboración el Consejo no podría actuar. No vamos a detenernos a analizar cada uno de los distintos órganos técnicos, únicamente los mencionamos:

- Secretaría General: véase el desarrollo reglamentario que se lleva a cabo en el Capítulo I " De los órganos técnicos al servicio del Consejo General del Poder Judicial" del Título III, artículos 90 a 98 del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo

el 22 de Abril de 1986, donde pueden observarse integrados dentro de la Secretaría entre otros, la Oficina de Prensa, o la Sección de Archivo y Publicaciones.

- Gabinete Técnico: cuenta dentro del mismo con una Sección de Relaciones Institucionales e Internacionales y la Sección de Estudios sobre organización y racionalización de la Oficina Judicial. Todo el Capítulo II se refiere al mismo y, comprende desde el art. 99 al 104 del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento.

- Servicio de Personal Judicial: se estructura en diversas secciones: Sección de régimen jurídico de jueces y magistrados; Sección de selección, formación y perfeccionamiento; Sección de régimen disciplinario. Comprende el Capítulo III es decir, los artículos 105 a 109 del citado Reglamento de Ordenación.

- Gerencia del Consejo²²⁶, Interventor²²⁷ y Servicio de Inspección. Se estructura en Jefatura de Servicio; Unidades Territoriales de Inspección; Sección de Informes²²⁸.

²²⁶ Para un análisis más detallado deben contemplarse los artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ, publicado el 5 de mayo de 1986, en los artículos 110 a 114 del Capítulo IV, relativos todos ellos a la Gerencia.

²²⁷ Véase el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del CGPJ, aprobado por Acuerdo el 22 de Abril de 1986, en los

ii) El Consejo ante la sugerida territorialización de la
Administración de Justicia

a) La función coordinadora atribuida al Consejo
General del Poder Judicial

Es innegable que como consecuencia del nuevo carácter atribuido a las Comunidades Autónomas, el papel del Consejo General del Poder Judicial, regulado en un primer momento en la Ley Orgánica de 10 de enero de 1980, adquirió un carácter relevante; es más, va a evitar la división de la justicia en el mosaico de las Comunidades Autónomas y va a mantener la independencia tanto frente a la Administración de éstas como ante la del Estado. Se considera al CGPJ como la " vía institucional más idónea "²²⁹ para llevar a cabo ese papel coordinador.

artículos 114 a 116, que componen el Capítulo V del Título III.

²²⁸ Para un análisis más detallado de las actividades, facultades otorgadas a los distintos organismos, composición etc..., véase LORCA NAVARRETE, A.M^a. "Introducción al Derecho Procesal, Organización Judicial española, principios rectores del Proceso Español" op. cit., págs. 85 a 88. De igual modo remitimos al Reglamento de Ordenación y Funcionamiento del CGPJ, de 22 de Abril de 1986, publicado en BOE el 5 de Mayo, en donde se regula dentro del Título IV todo lo relativo a la actividad, composición, estructura... del Servicio de Inspección, arts. 117 a 126.

²²⁹ Tolivar Alas, L.: " Las Comunidades Autónomas y la fijación de las demarcaciones judiciales" en El Poder Judicial op. cit. pág. 2611

Uno de los graves peligros con los que se encuentra en la actualidad el CGPJ es el de su pérdida de competencias, producto de la *sugerida*²³⁰ territorialización de la *Administración de Justicia*, con los consiguientes riesgos que esto implica; pudiera darse entrada con la territorialización a la participación del poder ejecutivo en la administración de justicia a nivel autonómico, rompiéndose de esta forma los frágiles lazos que unen a los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, prevaleciendo el poder ejecutivo frente al resto. Existen autores que consideran necesario señalar la descentralización de la que puede ser objeto el Consejo General, así como se pone de manifiesto " la necesidad de una estructura judicial mas acorde con los principios que en la actualidad la definen...a partir de la fijación de los principios básicos por el Estado (principios que ya se encuentran en la Constitución y en la LOPJ), las competencias autonómicas serían las que actualmente posee el Estado Central dentro del territorio de cada una de ellas; básicamente, el desarrollo de la Planta,

²³⁰ Requejo Ibáñez señala el erróneo camino por el que se adentra el Borrador de Anteproyecto de LOPJ que, por ejemplo, lejos de corregir la rechazable experiencia de un CGPJ politizado y carente de prestigio prevé multiplicar por diecisiete esa lamentable situación al crear Consejo Autonómicos; una vez más la justicia es mercancía entre los políticos" en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 143

demarcaciones, estructura de la oficina judicial, organigrama de personal, relaciones con el Consejo General del Poder Judicial e infraestructura de servicios"²³¹.

Destacamos a LÓPEZ AGUILAR y ÁLVAREZ CONDE, en relación al concepto de *Administración de Justicia y Poder Judicial*; para los mencionados autores, la " *Justicia es susceptible de ser concebida, según nuestro ordenamiento, como un valor, como un aparato orgánico y como un poder ... ello supondrá que quedarán fuera del ámbito competencial de las CC AA... las que afecten al núcleo esencial de la Administración de Justicia, entendiendo que hay una serie de materias inaccesibles que pertenecen a la competencia de Jueces y Magistrados, del CGPJ y demás órganos de gobierno del Poder Judicial, y del Gobierno de la nación.*"²³²

b) De las diversas posturas doctrinales relativas a la territorialización

Pretendemos poner de relieve los problemas que suscita la pretensión de que al igual que existen diversas

²³¹ Aparicio Pérez, M.A.: " *El Poder Judicial* " op. cit., págs.165 y 172

²³² Álvarez Conde, E.; " *El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas* ", en Rev. del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 16, pág. 13-14, Sept.-Dic. 1993, CEC, Madrid, 1993.

instituciones a nivel de las Comunidades Autónomas, pudiera ser factible el que el CGPJ, en su gestión, se descentralizase, con la creación de los respectivos Consejos Autonómicos del Consejo General del Poder Judicial²³³. En relación a la posible creación de los diversos Consejos Autonómicos, la doctrina ha venido planteando diversas posturas; nosotros consideramos, junto a ALVAREZ CONDE que, su hipotética existencia no debe tener carácter prioritario, dado que su desarrollo implicaría numerosos problemas, entre otros los de carácter competencial, dado que deberían suprimirse algunas de las competencias propias de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia;²³⁴ incluso podemos decir que vamos más allá, al considerar que la creación de dichos mini-Consejos no tendrían excesivos efectos positivos y, provocarían una reproducción de todos aquellos problemas que se están desarrollando en el CGPJ. En esta misma línea argumental se ha expresado REQUEJO IBÁÑEZ, para el que con estos sugeridos Consejos Territoriales se "

²³³ En este sentido se han manifestado MOSQUERA, RODRÍGUEZ AGUILERA, XIOL RÍOS, GONZÁLEZ RIVAS y RODRÍGUEZ-ZAPATA, que consideran acertada la posibilidad de creación de las Delegaciones Territoriales del Consejo General del Poder Judicial, que no vendrían a reemplazar el papel del Consejo pero que contarían con cierta participación. La presidencia de dichas delegaciones debía recaer, en todo caso, en el Presidente del Tribunal Superior de justicia, quedando relegado al Reglamento la composición de tales delegaciones. Véase XIOL RÍOS: "El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado Social y Democrático de Derecho" op. cit., págs 116 y ss.

²³⁴ Véase el trabajo llevado a cabo por Alvarez Conde, E.: "El ámbito competencial..." op.cit. , pág. 17

multiplicaría por diecisiete el viciado esquema de LOPJ, implicaría llevar la politización del gobierno judicial, no ya a su órgano central, sino a cada una de las regiones dando lugar a una visión automatizada de la Justicia, sujeta a los intereses políticos locales de todo signo a la par que implicaría no sólo suprimir el verdadero autogobierno de la Justicia, que es el desempeñado por los órganos de gobierno interno, sino politizar ese mismo ámbito."²³⁵ La idea de esos Consejos Territoriales del Poder Judicial no es nueva; en el primer borrador constitucional se introducía una fórmula ambigua que parecía apuntar a la posibilidad de creación de consejos territoriales del Poder Judicial: *los territorios judiciales deberán coincidir con los de las unidades territoriales de autogobierno*. Con posterioridad, durante la discusión parlamentaria de la LOCGPJ, los Grupos Comunista²³⁶ y Socialista replantearían la cuestión. Sin embargo, la lógica del sistema y la intención de crear un único Consejo General del Poder Judicial, hacían imposible defender la creación de esos consejos territoriales a los que hacían

²³⁵ Requejo Ibáñez, J.L.: " El Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial" en Papeles de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, (Temas monográficos) Madrid, 1996, pág. 74

²³⁶ Véase enmienda 218 en Consejo General del Poder Judicial, Trabajos Parlamentarios, Ed. Cortes Generales, op. cit., págs. 96 a 99

referencia entre otros MOSQUERA²³⁷, DÍAZ VARCÁRCCEL²³⁸ y PASCUAL SALA²³⁹

Estas ideas plantean temas de enorme gravedad que podría afectar a la esencia misma de la concepción de una organización de la justicia igual para todos los ciudadanos españoles. Cosa distinta es evidentemente la subsistencia de todo el derecho foral, de gran tradición en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

En relación a las diversas materias en las que existe la posibilidad de conflicto entre el CGPJ y las distintas CC AA por la participación de éstas últimas en cuestiones en las que se consideran al margen de sus atribuciones, debemos señalar²⁴⁰ como la situación causada en la actualidad en las relaciones entre el Estado y las CCAA es lamentable dado que, se ha provocado la ruptura de la unidad jurisdiccional propia

²³⁷ Mosquera, L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española de 1978" en La Constitución Española de 1978 op. cit.

²³⁸ Díaz Varcárcel, L.M.: " El Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas" en Jornadas de Estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, op. cit., págs, 10-12

²³⁹ Véase las referencias recogidas por el juez Navarro en Manos Sucias, el poder contra la Justicia, op. cit. págs. 143 y 144

²⁴⁰ A este respecto podemos destacar el interesante trabajo llevado a cabo por Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial..." op.cit., pág. 20 y ss.

de la materia judicial; de igual modo, el Ejecutivo ha pretendido introducir sus influencias en el marco comunitario al intentar crear una Judicatura propia de las Comunidades Autónomas a través del Acuerdo Reglamentario de 23 de Octubre de 1991 del CGPJ, que " daba lugar a espectaculares ascensos en el escalafón, de hasta nueve años, basados en el conocimiento del idioma y del derecho foral propio de las Comunidades. Tras el recurso interpuesto por la APM el Acuerdo fue suspendido y posteriorme anulado por inconstitucional en Sentencia de la Sala Tercera del TS de 29 de Abril de 1995. Ante lo resuelto por el Tribunal Supremo el Consejo tuvo que dejar sin contenido los arts. 108 a 114 del nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, dando lugar a un hecho tan insólito como lamentable:la promulgación de un reglamento con un título III sin contenido. "²⁴¹

Se hace necesario llevar a cabo una distinción, en relación a la consideración del cargo judicial al que nos estemos refiriendo; por ello, no va a ser igual el grado de participación de las CC AA en el nombramiento de los jueces y magistrados en general, frente al papel que las CC AA representan cuando se trata de altos cargos judiciales. En el

²⁴¹ Sección Territorial de Madrid: " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial " presentada en la XI Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, Madrid, 26 al 28 de Octubre de 1995, pág.10

primer supuesto las posibilidades de una participación por parte de las CC AA es inexistente; el papel es fundamentalmente desarrollado por el CGPJ²⁴². Para el segundo los supuestos, es decir, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y de las Audiencias, el elemento de intervención desempeñado por parte de las CC AA lo constituye el establecimiento de los méritos referentes al conocimiento del idioma, así como lo relativo al conocimiento del derecho foral. Llegado el momento en que el CGPJ deba llevar a cabo la designación de los distintos altos cargos judiciales, éste tomará, dentro de la discrecionalidad con que cuenta aquellos presupuestos establecidos desde las CC AA.

Con anterioridad nos referíamos a los distintos cargos judiciales, sin embargo, no debemos olvidar que junto a los jueces y magistrados, que desempeñan el papel más relevante dentro de la estructura del aparato judicial, se hace precisa la actuación que lleva a cabo el personal al servicio de la

²⁴² El Consejo General del Poder Judicial a la hora de llevar a cabo el nombramiento de jueces y magistrados desempeña un papel sumamente interesante. Tal y como pone de manifiesto en su estudio Alvarez Conde, para el caso de los jueces, su nombramiento es realizado mediante Orden que tiene su origen en el CGPJ. En lo que concierne a los magistrados, la participación del órgano encargado de la representación de los miembros que integran el Poder Judicial consiste en llevar a cabo una propuesta que debe ser refrendada por el Ministro de Justicia y, que una vez aprobado tomará para los efectos oportunos la forma de Real Decreto. Para un detallado estudio de la materia véase Alvarez Conde, E." El ámbito competencial..." op. cit., pág. 20 y ss

Administración de Justicia. La materia a la que nos referimos se presenta ciertamente compleja, especialmente al tener que pronunciarnos sobre quién debe ser el encargado de este personal cuando nos encontramos en el ámbito de las Comunidades Autónomas. En la actualidad, tras las diversas modificaciones legislativas, en un principio en la LOCGPJ, y con posterioridad en la LOPJ, la competencia en lo que a formación, selección...se concentra en el Ministerio de Justicia, desplazándose de esta manera la actividad desempeñada con anterioridad por el Consejo General. El origen de las diversas transformaciones operadas se encuentra, tal y como brillantemente ha apuntado ÁLVAREZ CONDE, no sólo en lo relativo a las "cláusulas subrogatorias, que impiden... la asunción de competencias legislativas ... sino también de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª...se reserva a la competencia exclusiva del Estado la normativa básica, pudiendo las CC AA ejercer un desarrollo normativo al respecto...."²⁴³

²⁴³ Sumamente interesante resulta el trabajo desarrollado por Alvarez Conde, E.: "El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas" op. cit., en donde se recoge la interpretación de algunos preceptos de la LOPJ, tomando como base el art. 122.1 de la CE, de los que, dado su carácter relevante indicamos el siguiente:

La inconstitucionalidad del apartado cuarto del art.37 de la LOPJ, por estimarse que el contenido del mismo, en lo relativo a las facultades de actuación de las Comunidades Autónomas para con sus recursos propios, no podía verse sometido a la previa aprobación por parte del CGPJ del un informe

Para FERNÁNDEZ VIAGAS las facultades atribuidas al Consejo General del Poder Judicial " son intransferibles a las autonomías, por imperativo de la unidad del Poder Judicial y de la unidad del ordenamiento jurídico, proclamada con énfasis por el artículo 1º de la Constitución; las que el Gobierno se reserva pueden transferirse por ser, precisamente, facultades administrativas que conciernen a los medios materiales o a los personales de los servicios de apoyo, no integrantes del Poder Judicial"²⁴⁴

Debemos referirnos a la actividad de inspección desempeñada por el CGPJ y la realizada por las distintas Comunidades Autónomas pese a que en el campo práctico el tema no haya presentado especiales complejidades, dado que nunca las CC AA han ejercido la facultad de instancia ante el CGPJ. Como sabemos, en virtud del art. 152 de la LOPJ, la actividad inspectora no es exclusiva del Consejo General, también es desempeñada por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Junto a estos organismos capacitados y, en relación a las Comunidades Autónomas, la facultad de

positivo: se eliminaban con dicha regulación los puntos claves de la autonomía.

²⁴⁴ Fernández Viagas, P.: " El Consejo General del Poder Judicial y los conflictos constitucionales" Ponencia presentada en las Jornadas de Estudio sobre el CGPJ, celebradas en Madrid, del 10 al 13 de Diciembre de 1981, Ed. Nacional, pág.281

instar la inspección corresponderá al Ministerio de Justicia respecto de aquellas CC AA cuyos Estatutos no hayan asumido competencias al respecto. En caso contrario, la facultad de instar corresponderá solamente a las CC AA, excluyéndose la competencia del Ministerio de Justicia.²⁴⁵

Relacionado con la materia que estamos tratando se encuentra el supuesto de la actividad llevada a cabo por las CC AA a la hora de participar en el perfeccionamiento y la formación de los miembros más importantes del aparato judicial, es decir, de los jueces y magistrados; cómo se justifica la intervención de las distintas Comunidades Autónomas frente al CGPJ, determinar si existe normativa existente que contemple dicha participación son cuestiones que debemos responder. Ciertamente sector de la doctrina española ha puesto de manifiesto su opinión en relación a las preguntas que nos planteábamos:

De entre los diversos autores de la doctrina española que se han definido en relación al tema destacamos a ÁLVAREZ CONDE²⁴⁶ que, al analizar el art. 455 de la LOPJ, y ponerlo en relación con la sentencia 56/1990, llega a la conclusión de

²⁴⁵ Álvarez Conde, E.: " El ámbito competencial..." op. cit., pág. 26

²⁴⁶ Álvarez Conde, E.: " El ámbito competencial..." op. cit., pág. 27

que el título por el que la actuación de las Comunidades Autónomas puede considerarse legitimadas para actuar en el perfeccionamiento y formación de los jueces y magistrados no es otra que la del interés. En lo que concierne al cauce normativo, la solución ha girado en torno a la adopción de convenios entre el CGPJ, Ministerio de Justicia y las CC AA.

SECCIÓN II.ª FUNCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i) Funciones

Como sabemos, el Consejo General del Poder Judicial " había sido creado para desapoderar, para sustraer al Poder Ejecutivo todas las competencias que venía reteniendo en relación con el Gobierno del Poder Judicial" ²⁴⁷y ello para dar efectividad a lo que acertadamente postulara LOEWENSTEIN; " la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que les hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro detentador del poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho"²⁴⁸

La función encomendada al Consejo General es la de dedicarse exclusivamente a actividades de carácter organizativo y administrativo, para que sean los Juzgados y Tribunales los que desempeñen la función jurisdiccional. En relación a la finalidad del órgano que analizamos, señalar

²⁴⁷ Ledesma F.: " Relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo" en Jornadas de Estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 502

²⁴⁸ Loewenstein, K.: Teoría de la Constitución op. cit., pág. 294

como la misma se resume en " privar al Gobierno de funciones que pueden permitirle interferirse en la actividad de los jueces, asignándolas a un órgano autónomo y separado...que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos"²⁴⁹. Debemos hacer mención a las atribuciones que corresponde al Consejo, y que, han ido variando en virtud de las distintas leyes reguladoras de esta institución. Vamos a enumerar en un primer momento las facultades con que ha contado y las que se le atribuyen en la actualidad al Consejo para con posterioridad referirnos a aquellas que consideremos más interesantes:

a) Durante la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo

General del Poder Judicial 1/1980 de 10 de Enero

a) De Propuesta:

1.a) para nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de su Presidente.

1.b) de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

b) De selección, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario:

2.a) de Jueces y Magistrados

²⁴⁹ Muñoz Machado, S.:" La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con los demás poderes del Estado.", en Actualidad y Perspectivas del Derecho Público a fines del Siglo XX, op. cit. pág. 271

2.b) de Secretarios Judiciales

c) Sistema de selección, formación y perfeccionamiento, incluido la aprobación del programa y nombramiento de Tribunales, del personal auxiliar y colaborador de la Administración de Justicia

d) Nombramiento del Director de la Escuela Judicial

e) Nombramiento de Jueces, Magistrados y Presidentes

f) En cuanto al régimen interno:

3.a) nombramiento del Secretario General

3.b) Nombramiento de miembros y gabinetes o servicios dependientes del CGPJ

3.c) elaboración y aprobación del anteproyecto de presupuesto del CGPJ

g) Potestades normativas: iniciativa o propuesta y, en todo caso, informe en

4.a) determinación y modificación de la Demarcación

4.b) plantilla orgánica y retribuciones de Jueces Magistrados y Secretarios y personal al servicio de la Administración de Justicia.

4.c) proyectos de ley en materias procesales o que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales o al estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados, así como proyectos de ley o reglamentos en materia penitenciaria o normas de cualquier

rango que afecten al personal judicial o a la organización y mantenimiento de los servicios de justicia.

5.d) potestad reglamentaria interna y externa sobre régimen personal y servicios y demás materias de su competencia dentro del ámbito de la LOGPJ

h) ser oído para el nombramiento del Fiscal General del Estado.

b) Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio

Como es por todos conocido, la modificación operada como consecuencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, redujo considerablemente las atribuciones conferidas al CGPJ; tal y como señalara JORGE DE ESTEBAN, la modificación introducida en la LOPJ de 1985 ha producido una "mutación regresiva" de la norma fundamental ²⁵⁰. Van a mantenerse sin embargo, algunas facultades:

a) De Propuesta relativas al TS y al TC

e) Nombramiento de Jueces, Magistrados y Presidentes

f) En cuanto al régimen interno

²⁵⁰ De Estaban, J.: "Las Tribulaciones del Poder Judicial" Recogido en prensa, El Mundo, 2-X-1991

h) ser oído para el nombramiento del Fiscal General del Estado.

Sin embargo, se van a sustraer del Consejo las siguientes:

b) De selección de Jueces y Magistrados así como de Secretarios Judiciales

c) Sistema de selección, formación y perfeccionamiento, incluido la aprobación del programa y nombramiento de Tribunales, del personal auxiliar y colaborador de la Administración de Justicia

d) Nombramiento del Director de la Escuela Judicial

En cuanto a las potestades normativas eliminó la de propuesta o iniciativa para mantener sólo la de informe, y en cuanto a la potestad reglamentaria mantuvo sólo la interna.

c) Con posterioridad a las reformas introducidas por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre

Con la entrada en vigor de las reformas operadas por la Ley Orgánica 16/94 se han producido importantes novedades:

a) Se ha restituido al CGPJ la selección de Jueces y Magistrados y la potestad reglamentaria externa en las

materias relacionadas en el artículo 110, si bien ha dado paso a que las Comunidades Autónomas puedan entrar a reglamentar

b) En materia presupuestaria se atribuye al CGPJ no solo elaborar, sino dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento de su presupuesto

c) La dirección del centro de selección y formación de Jueces y Magistrados que pasa a denominarse de nuevo Escuela Judicial.

d) A su potestad de informe se añade el informar sobre determinación y modificación de la capitalidad de las demarcaciones judiciales, sobre aquellas normas que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios, y del ejercicio de derechos fundamentales y leyes penales.

De entre las atribuciones a las que nos hemos referido con anterioridad destacamos:

a) Proponer por mayoría cualificada el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo General²⁵¹. La mayoría cualificada a la que hacemos referencia

²⁵¹ Si una de las funciones que tienen atribuidos los Vocales del Consejo General del Poder Judicial es la de elegir al Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, resulta cuando menos sorprendente leer titulares en la prensa, estando al mismo tiempo el CGPJ sin los 14 miembros necesarios para poder formar el Pleno, que hacen referencia a la designación del Presidente

es de 3/5. El nombramiento deberá recaer en persona ajena al órgano constituido. Tal y como ha puesto de manifiesto FERNÁNDEZ-MIRANDA, la ley no prohíbe expresamente que el nombramiento de Presidente venga a recaer en uno de los vocales; sin embargo, la regulación de la elección de Vicepresidente en el artículo 104, *propuesto por el Pleno de éste entre sus vocales*, y la utilizada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional respecto a la elección de Presidente (art.9), *elige de entre sus miembros...* llevó a interpretar que, para el caso que analizamos, el Presidente no fuera un miembro del Consejo; de todas formas, y al no estar prohibido, en el caso de que así fuera se producirá un cese anticipado del vocal y se instará a la Cámara de procedencia a que efectúe una nueva propuesta²⁵² (art. 116 LOPJ). Otro de los requisitos que vienen a establecerse es que el que va a ser designado como Presidente del Consejo, pese a no pertenecer como regla general a los Vocales, sin embargo, sí debe pertenecer al mismo ámbito o mundo profesional.

del Consejo a través de la decisión de José María Aznar, Felipe González y Adolfo Suárez. " Lavilla, dispuesto a aceptar la presidencia del Poder Judicial. González y Aznar pactaron el nombramiento en presencia de Suárez, quien comió en la Moncloa" Véase el Mundo, pág. 12, 15 de mayo de 1996

²⁵² Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985...op. cit., pág. 53

b) Proponer por igual mayoría de 3/5 el nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal debe observar lo dispuesto en el art. 10f) " De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional".

c) La inspección de Juzgados y Tribunales. Con esta atribución reconocida al Consejo a través del art. 107.3 de su LOPJ, se amplía la competencia disciplinaria sobre jueces y magistrados frente a la derogada LOCGPJ. Con esta nueva atribución se va a conseguir una mayor información sobre la actividad que desarrollan cada uno de los órganos integrados dentro del complejo sistema en que se estructura el Poder Judicial. La iniciativa de inspección se encuentra en manos del propio Consejo, sin embargo, se va a mantener en manos del Ministerio de Justicia la facultad de instar que se lleve a cabo el mismo. (véanse artículos 171 a 177 de la LOPJ).

d) Sin duda la esencia de las facultades atribuidas al Consejo se encuentra en tener a su cargo la formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados, la provisión de destinos, la facultad de otorgar ascensos, las diversas situaciones administrativas en que pueden encontrarse jueces y magistrados así como el régimen disciplinario de jueces y magistrados. Y por último, el nombramiento de jueces y

presentación de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, de Presidentes y Magistrados para que sean nombrados por Real Decreto.

Sumamente interesante resulta la atribución referente a la actividad que debe desempeñar el Consejo antes de que se efectúe el nombramiento del Fiscal General del Estado²⁵³. Tal

²⁵³ La actual Constitución Española de 1978 configura al Ministerio Fiscal como órgano ubicado en el ámbito del Poder Judicial otorgándole amplias e importantes funciones. Así se refiere al mismo en el art. 124 situado dentro del Título VI dedicado al Poder Judicial. A la cabeza del Ministerio Fiscal se encuentra el Fiscal General del Estado, que en coherencia con los principios de unidad y dependencia jerárquica, está facultado para dar instrucciones de carácter general y órdenes concretas sobre cualquiera de los asuntos que desarrolle la Fiscalía.

Tal y como se establece en el citado art. 124.4. de la Constitución " El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno... " respecto a la conclusión de su mandato, al contemplar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, observamos cómo al igual que el nombramiento, el cese se encuentra en manos del Gobierno. De este modo, tanto el comienzo de la actividad del Fiscal General del Estado como su fin dependen exclusivamente del Gobierno. La consecuencia de todo lo anterior es evidente; nos encontramos con un órgano que ejerce sus funciones en el ámbito del Poder Judicial y que tiene una vinculación estrecha con el Poder Ejecutivo. Este es parte y tiene intereses en conflictos a resolver por los órganos judiciales y en los que intervendrá el Ministerio Fiscal. La tentación de influir en los fiscales para proteger sus intereses es lógico que se dé. El instrumento para ejercer esas influencias será el Fiscal General del Estado, persona de confianza, y cuya permanencia en el cargo depende de que no pierda ésta. Una de las soluciones para evitar esas más que probables tentaciones del ejecutivo en el Fiscal General se encontraría en la posibilidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y trasladar el cese a manos del Parlamento.

Sobre las distintas perspectivas internacionales relativas al Ministerio Fiscal puede resultar interesante analizar las diversas comunicaciones presentadas en el IV Congreso do Ministério Público celebradas del 20 a 22 de mayo de 1994 en

y como establece en el art. 108.4 de la LOPJ. El único aspecto criticable es que la opinión del Consejo General del Poder Judicial no va a ser vinculante para el Gobierno, lo que en realidad convierte esta atribución es un acto meramente simbólico, fácilmente subsanable y, que habría podido evitar algunas de las irregularidades cometidas a la hora de elegir al Fiscal General del Estado, entre otras, la elección de Eligio Hernández. Las propuestas referentes a la reforma del actual sistema son numerosas: hemos hecho referencia a la necesidad de atribuir un papel más activo al Consejo General del Poder Judicial, pero, no cabe duda de que existen otras posibilidades, entre ellas la apuntada por GISBERT GISBERT, para el que " no es aceptable el actual sistema de designación del Fiscal General del Estado. Mantenerlo es hacer depender la objetividad de la institución del talante personal de quien ejerza el cargo, y en cualquier

Portugal recogidas en Revista do Ministério Público, núm. 6, op. cit. Destacamos aquí las más interesantes:

- Francisco Cluny, A.: " O Ministério Público e o Poder Judicial" (Portugal)
- Lyon-Caen, P.: " Le Ministère Public français entre l'Exécutif et le Judiciaire" (Francia)
- Nicod, J.C.: " Le Ministère Public en France" (Francia)
- Colombo, G.: "Il Pubblico Ministero in Italia" (Italia)
- Aguilar Cortez, A.C.: " Ministério Público : órgão do Poder Judicial ou instrumento do Executivo? " (Brasil)
- Do Amaral Buschel, I.: " O Ministério Público no Brasil" (Brasil)
- Walter-Freise, H.: " Le Ministère Public en Allemagne" (Alemania)
- Le Ministère Public en République Tchèque: son rôle ete compétence dans le système de justice " (Checoslovaquia)

caso dar pie a la desconfianza social frente a la misma que obstaculiza su eficaz y normal funcionamiento"²⁵⁴, para el que la solución optima se encontraría en " conseguir la designación parlamentaria del Fiscal General del Estado...así como el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal añade al precepto constitucional la exigencia de que la persona propuesta por el Gobierno sea un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo en su profesión, puede también exigir que esa persona tenga el respaldo de una determinada mayoría del Parlamento. Sería añadir a la exigencia de capacidad técnica, quince años de ejercicio profesional, otra de objetividad en el cumplimiento de los fines propios del Ministerio Fiscal, que vendría expresada por la obtención de una mayoría cualificada del poder legislativo."²⁵⁵

Una de las actividades de mayor importancia desempeñadas por el CGPJ, denominada por ALVAREZ CONDE " competencia estrella " ²⁵⁶, viene a ser la formación y perfeccionamiento

²⁵⁴ Gisbert Gisbert, A.: " La elección del Fiscal General del Estado: hacia una intervención parlamentaria" en Ministério Público: instrumento do executivo ou órgão do Poder Judicial? en Revista do Ministério Público, caderno núm. 6 relativo al IV Congresso do Ministério Público 20, 21, 22 de Maio de 1994, pág. 64.

²⁵⁵ Gisbert Gisbert, A.: " La elección del Fiscal General del Estado: hacia una intervención parlamentaria" op. cit., pág. 65

²⁵⁶ Denominada por este autor como competencia estrella por, entre otras razones recibir casi un tercio del total del presupuesto atribuido al Consejo. Alvarez Conde, E.: " El ámbito

de jueces y magistrados. En relación a esta materia se presentan diversos aspectos de enorme interés; entre ellas, no llegaba a comprenderse por qué el Ministerio de Justicia continuaba manteniendo competencias a la hora de seleccionar a los jueces y magistrados, cuando podía ocuparse enteramente de este aspecto el CGPJ, que tal y como ha indicado ALVAREZ CONDE ya " participa de algún modo en la misma mediante el correspondiente informe sobre las normas de acceso a la carrera judicial, la determinación de las plazas vacantes, el nombramiento de los Tribunales que han de juzgarlas etc..."

²⁵⁷. Con la entrada en vigor de la LO 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, se establece que " la materia relativa a la selección de Jueces y Magistrados como competencia propia... se efectuaba la atribución de la competencia... al Consejo General del Poder Judicial "²⁵⁸. En efecto, la Ley Orgánica

competencial del Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas " op. cit., pág.27.

²⁵⁷ Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas " op. cit., pág. 27

²⁵⁸ Véase Exposición de Motivos II, de la LO 16/1994, de 8 de Noviembre. De igual forma se hace preciso hacer mención a las variaciones que esta ley ha introducido en el texto legal: el artículo 107 de la LOPJ queda pues redactado de la siguiente forma en sus apartados:

4. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

7. Ejercicio de las competencias relativas al centro de selección y formación de Jueces y Magistrados que la Ley le atribuye.

16/94, de 8 de noviembre, ha modificado la LOPJ, devolviendo al CGPJ las competencias de selección de las que carecía desde 1985 y de las que dispuso a través de la Ley Orgánica 1/1980.

Por otro lado, resultaría sumamente interesante poder responder a la causa que origina el mantenimiento del Ministerio de Justicia²⁵⁹ una vez creado el Consejo, así;

²⁵⁹ En relación al Ministerio de Justicia hay que poner de relieve como este departamento ministerial, cuyo origen se remonta a 1714, ha sido uno de los más "estables en cuanto a su denominación, competencias y estructura orgánica en la historia de la Administración Central española" (Véase Canales Aliende, J.M. : " La Administración de Justicia: hacia una visión gerencial del servicio público de la justicia " en Revista de Estudios Políticos, núm. 73, C.E.C., Madrid, 1991, pág. 220.) De entre los últimos cambios, resaltar la unificación en un único departamento Ministerial de los Ministerios de Justicia e Interior, posteriormente disgregados, así como el traspaso de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia al Ministerio de Interior. Con todo lo anterior, debemos señalar que se encuentran incluidos dentro del Ministerio de Justicia las siguientes Direcciones Generales:

- Dirección General de Registros y del Notariado
- Dirección General de Objeción de Conciencia
- Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
- Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
- Dirección General de Asuntos Religiosos

Aunque no parece tener muchas posibilidades de éxito, quizás resultara interesante tomar en consideración la opinión que ya Calamandrei propuso en la Asamblea constituyente de 1946, en Italia; la supresión del Ministerio de Justicia. Su propuesta sólo obtuvo un voto, el suyo. (Para el pleno y total autogobierno de los jueces haría falta la supresión de los propios ministerios de justicia). Las distintas Direcciones Generales, cuatro de ellas, debido a que, la de Relaciones con la Administración de Justicia desaparecería automáticamente, parecen tener una fácil distribución. La Dirección General de Registros y Notariado pasaría a integrarse junto a la del Servicio Jurídico del Estado en Presidencia del Gobierno.

La Dirección General de Objeción de Conciencia, dada su estrecha conexión con los problemas militares que con la misma se han creado, pasaría a integrarse en el Ministerio de Defensa. Por último, la Dirección General de Asuntos Religiosos podría formar parte del Ministerio de Educación y Cultura. Las críticas a esta posibilidad son amplias, pero creo, debe tomarse en consideración a la hora de analizar los problemas actuales con que cuenta la Administración de la Justicia en España. Únicamente se ha pretendido poner aquí de manifiesto la necesidad de un análisis práctico de la cuestión, sin pretender en ningún momento entrar sobre la complejidad de la cuestión, dado que, dicho estudio implicaría una investigación más compleja y profunda de lo que en un primer momento pudiera parecer.

En España destacaron Costa primero y por Ossorio Gallardo después, quien en 1929, se pronunció abiertamente por la supresión del Ministerio de Justicia traspasando sus funciones a un Consejo Judicial

Luna García en 1938 propugnó la supresión del Ministerio de Justicia, para mantener las competencias propias de éste, atribuiría las funciones del mismo al Tribunal Supremo, cuyo Presidente sería miembro del Gobierno, tal y como se establece en el modelo inglés, y tomando la Sala de Gobierno las facultades de inspección de los Tribunales, la administración del presupuesto judicial, y cuantas materias referentes a la organización judicial fueren precisas. Véase Domínguez Martín, S.: "Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial..." op. cit., pág. 997-998, 1001

Conde Pumpido señaló en 1960 que el mantenimiento del autogobierno implicaría que éste " asumiera cuantas facultades tenía el Ministerio de Justicia, y además de la formación del presupuesto judicial, redactaría cuantos proyectos de Ley o reglamentos conceptuara necesarios; evacuaría los informes que se le pidieran y que serían preceptivos en todos los proyectos o proposiciones de Ley, que guardaran relación con la justicia, sus funcionarios y el funcionamiento o competencias de los Tribunales, y dispondría de cuantas facultades fueran precisas para la mayor eficacia de su función ". Véase Merino Merchan, J.F.: "Instituciones de Derecho Constitucional Español", Centro Ramón Carande, Madrid 1994, pág. 593

En este orden de ideas se manifestaba PECES BARBA, " la supresión de las competencias del Ministerio de Justicia en el ámbito del Poder Judicial y su sustitución por un órgano colegiado: el Consejo General del Poder Judicial " (Véase la opinión manifestada por Peces Barba G.: La Constitución Española de 1978. Un Estudio de Derecho y Política, Fernando Torres, Valencia 1981 ,pág. 166 igualmente recogido por Perfecto Andrés Ibáñez en El Poder Judicial, op. cit., pág. 60).

Otra razón expuesta para suprimir el Ministerio de Justicia hace referencia a la falta de adecuación del Consejo a las

GALLO ha considerado imprescindible la " exigencia de transferir al Consejo todos los residuos de poder concernientes a la Magistratura que todavía están en manos del Ministerio de Justicia... confiriéndole (*en relación al Poder Judicial*) una autonomía que encuentre su fundamento, no en la legitimación política, sino en la legitimación profesional, conectada a la función de justicia que postula como preeminente y caracterizante la interpretación y aplicación de la ley."²⁶⁰ Resulta también interesante responder a la cuestión de si se va a considerar al Ministerio de Justicia como jurídico-políticamente

actividades que desarrolla. Aprovechando la modificación de adaptación " merece ser detenidamente reconsiderada la bienintencionada propuesta de suprimir el Ministerio de Justicia y traspasar al CGPJ las competencias del Departamento ministerial" Véase De la Oliva Santos, A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág.306

En relación a la supresión o no del Ministerio de Justicia también se han manifestado autores que venían a considerar el peligro de la desaparición del Ministerio: destacamos a PRIETO CASTRO, el cual, al referirse al autogobierno integral viene a considerarlo no sólo innecesario desde el punto de vista teórico, sino que además lo considera inconveniente desde un punto de vista práctico.(Véase Prieto Castro L.: " El autogobierno de la Magistratura" en Revista de Derecho Procesal(dirigida a Iberoamérica), 1970, núm. 2, pág.258

²⁶⁰ GALLO, E.: " Il CSM nella legge istitutiva nella Costituzione e nelle propettive di riforma", Comunicación al Convenio de Parma de 1984, recogido por VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M.: " Las atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: Análisis comparado del sistema italiano y español" en Rev. Poder Judicial, núm. 35, 2ª Época, ed. CGPJ, Sept. 1994, Madrid, pág.329

responsable²⁶¹ de los actos del Consejo, así como ser capaces de justificar que el Presidente del Tribunal Supremo desempeñe el cargo más representativo dentro del Consejo General²⁶². Podemos añadir a lo anteriormente mencionado como la fusión de los Ministerios de Justicia e Interior²⁶³ llevada

²⁶¹ La estructuración del CGPJ como órgano de autogobierno de los órganos jurisdiccionales profundiza en la creación de un órgano que interviene exclusivamente en la ordenación orgánica - no funcional- del órgano jurisdiccional, único titular del ejercicio funcional de la jurisdicción mediante su desarrollo reglamentario, quedando en el Ministerio de Justicia la administración de los medios materiales y, en general, las responsabilidades constitucionales del funcionamiento del servicio público de la justicia respecto del personal no titular de la función jurisdiccional. **La bipolaridad existente entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ es evidente y expone cierto grado de tensión** respecto de las responsabilidades constitucionales..." Véase LORCA NAVARRETE, A.M^a. op. cit., pág. 56

²⁶² Consideramos acertada la brillante reflexión que sobre esta materia realiza Andres De la Oliva; así, " son innegables las diferencias entre los dos cargos y, en esa línea, su atribución a personas diferentes permitiría afinar en la búsqueda de quienes tuviesen la mayor idoneidad específica para una y otra presidencia. Poca duda cabe, además, de que, pese a ser muchos los cargos más agobiantes que estos dos, el perfecto desempeño de cada uno de ellos podría requerir la entera jornada laboral. Finalmente, no es de negar que, dentro de la normalidad institucional, caben situaciones de cierto conflicto e incluso oposición entre el CGPJ y el Tribunal Supremo, en las que en teoría, la común presidencia puede representar un factor de distorsión.

Con todo, imaginar Consejo y Tribunal Supremo con distintos presidentes es un ejercicio de intelecto que inmediatamente determina...la representación mental de una indeseable tensión institucional, y rivalidad permanente. A partir de aquí, me inclino a pensar que la presidencia común, si se busca y encuentra la persona idónea precisamente para esa situación, puede ofrecer ventajas que compensen (¿ y aún superen ?) los inconvenientes."(Véase DE LA OLIVA,A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial pág. 307-308)

a cabo durante el mandato socialista y, posteriormente disgregados de nuevo por el Partido Popular no solo supuso "mantener competencias esenciales para el poder Judicial bajo la batuta del Ejecutivo sino que además vino a mezclar estas con las netamente policiales"²⁶⁴. Con posterioridad, se ha vuelto a la posición clásica que diferencia los dos Ministerios; Justicia e Interior.

ii) En especial: la potestad reglamentaria

a) Introducción

²⁶³ En relación a la normativa reguladora de la existencia y estructura del Ministerio de Justicia e Interior deben tomarse en consideración el R.D. 10/1991, de 11 de enero que con diversas modificaciones estaba vigente al tiempo de producirse la unificación de los Ministerios de Justicia e Interior. El R.D. 907/1994, de 5 de mayo (BOE de 6 de mayo) de reestructuración de Departamentos ministeriales, suprime los Ministerios de Justicia e Interior y crea el Ministerio de Justicia e Interior que asume las competencias de ambos. Por R.D. 1334/1994, de 20 de Junio (BOE de 24 de junio) se establece la estructura básica del Ministerio de Justicia e Interior. Para un análisis más detallado véase SANTOS GAONA, D.: " La estructura orgánica del Ministerio de Justicia en el momento de creación del Ministerio de Justicia e Interior. Evolución reciente. " en Boletín de Información del Ministerio de Justicia e Interior, núm. 1714, de 25 de junio de 1994. Con posterioridad, tras las elecciones del 3 de marzo de 1996 y la subida al poder del Partido Popular, se ha recuperado, a través del R.D. 758/1996, de 5 de mayo de reestructuración de Departamentos Ministeriales (BOE 110 de 6 de mayo) la posición lógica de los Ministerios; un Ministerio de Interior y otro, distinto y separado, el Ministerio de Justicia.

²⁶⁴ " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial" en XI Congreso de la APM, comunicación presentada por la Sección Territorial de Madrid, Madrid de 26-28 de Octubre de 1995, pág.7 del texto mecanografiado.

En relación al estudio de la potestad reglamentaria que corresponde al CGPJ, la doctrina viene debatiendo²⁶⁵ principalmente acerca de cuestiones como la de si la actividad normativa de dicho órgano puede dar lugar a auténticos reglamentos, sobre cual es su naturaleza y el alcance de los mismos, cuales son sus diferencias y similitudes con la potestad reglamentaria que desempeñan otros órganos, especialmente el Tribunal Constitucional o las Cortes Generales y, sobre las cuestiones que se plantean en relación con el control de estos reglamentos.

Es importante analizar detenidamente el alcance que corresponda a la potestad reglamentaria, especialmente tras la reforma llevada a cabo por la LO 16/1994, de 8 de

²⁶⁵ Considero acertada la opinión manifestada por PORRAS RAMÍREZ, cuando, al referirse al ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada al Consejo, pone de manifiesto la escasa atención que la doctrina ha otorgado a la materia, consecuencia de lo cual se han producido situaciones de verdadera inseguridad jurídica, nada deseables en el seno de nuestras instituciones. Las razones señaladas de este abandono se deben entre otras cosas a la "consciente necesidad de tener que dilucidar, con carácter prioritario y urgente, otros aspectos de mayor relieve dogmático e importancia práctica... por venir propiamente a dar lugar los mismos a un derecho autónomo...su puesta en práctica no parece afectar a los derechos y deberes del común de los ciudadanos, por generar tan sólo relaciones de supremacía especial, que escapan, por su propia naturaleza o esencia al régimen jurídico general" Véase PORRAS RAMÍREZ: "Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria" en Rev.de Estudios Políticos, núm. 87, Enero-Marzo 1995, Madrid, C.E.C., págs. 239-240

noviembre, en cuanto que en ésta se concentra la posible acción del Consejo en el ámbito normativo²⁶⁶. Como

²⁶⁶ La actividad reglamentaria del Consejo es amplia, para hacerse una idea, no hace falta remontarse a períodos excesivamente lejanos, parece suficiente observar la normativa vigente así como ciertas normas derogadas:

- Acuerdo de 22 de Abril de 1986. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
- Acuerdo de 21 de Febrero de 1990. Dicta normas para la confección de los alardes a que se refiere el artículo 317.3 de la LOPU 6/1985, de 1 de julio.
- Acuerdo de 7 de marzo de 1990. Reglamenta el tiempo mínimo de permanencia en los destinos de los Jueces y Magistrados.
- Acuerdo de 6 de marzo de 1991. Situación administrativa que debe corresponder a los Jueces y Magistrados cuando sean nombrados para cargo político o de confianza en determinados puestos.
- Acuerdo de 6 de marzo de 1991. Establece los criterios para determinar los supuestos de cese anticipado de miembros electos de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y la forma de cubrir vacantes que por tal motivo se produzcan.
- Acuerdo de 24 de abril de 1991. Reglamentación de las solicitudes de provisión de plazas y cargos judiciales de nombramiento discrecional
- Acuerdo de 4 de diciembre de 1991. Aprueba el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas de Jueces.
- Acuerdo de 25 de marzo de 1992. Modifica el de 20 de diciembre de 1989, aprobando la instrucción que ha de regular la elección de Jueces Decanos.
- Acuerdo de 7 de julio de 1993. Aprueba el Reglamento sobre el contenido del Escalafón General de la Carrera Judicial.
- Acuerdo de 7 de junio de 1995. Se ordena la publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los órganos de Gobierno de los Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como de la relación de ficheros de carácter personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial.

Entre la normativa derogada:

- Acuerdo de 27 de mayo de 1986. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se ordena la provisión y distribución de las vacantes de la categoría de Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas selectivas de promoción y de concurso entre juristas de reconocida competencia.
- Acuerdo de 16 de junio de 1987. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento para la obtención de la especialización como Juez de Menores.

-
- Acuerdo de 15 de julio de 1987. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se establece la reglamentación sobre jueces en régimen de provisión temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
 - Acuerdo de 12 de abril de 1989. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dictan instrucciones para las elecciones de miembros de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.
 - Acuerdo de 20 de diciembre de 1989. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la instrucción que ha de regir la elección de los jueces decanos.
 - Acuerdo de 21 de febrero de 1990. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la confección de alardes.

 - Acuerdo de 7 de marzo de 1990. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre el tiempo mínimo de permanencia en los destinos de Jueces y Magistrados.
 - Acuerdo de 6 de marzo de 1991. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se establecen los criterios para determinar los supuestos de cese anticipado de miembros electos de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y la forma de cubrir las vacantes que por tal motivo se produzcan.
 - Acuerdo de 6 de marzo de 1991. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la situación administrativa que debe corresponder a los jueces y magistrados cuando sean nombrados para cargo político o de confianza en determinados supuestos.
 - Acuerdo de 24 de abril de 1991. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la reglamentación de las solicitudes de provisión de plazas y cargos judiciales de nombramiento discrecional.
 - Acuerdo de 4 de diciembre de 1991. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el funcionamiento de las Juntas de Jueces.
 - Acuerdo de 12 de febrero de 1992. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Régimen Jurídico de licencias y permisos.
 - Acuerdo de 25 de marzo de 1992. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el de 20 de diciembre de 1989, aprobando la instrucción que ha de regir la elección de Jueces Decanos.
 - Acuerdo de 7 de Julio de 1993. Del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento sobre el contenido del escalafón de la Carrera Judicial.

consecuencia de la mencionada Ley Orgánica, el artículo 110 de la LOPJ 6/1985 ha sido ampliamente modificado.²⁶⁷

²⁶⁷ Art. 110 de la LOPJ 6/1985, establecía:

" El Consejo General del Poder Judicial podrá dictar reglamentos sobre su personal, organización, y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la Función Pública. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General por Mayoría de tres quintos de sus miembros, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por el Presidente"

Este artículo ha sido modificado de manera sustancial y tras la entrada en vigor de la reforma dispone en el art. 110:

" 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá dictar Reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública.

2. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, podrá dictar Reglamentos de desarrollo de esta Ley para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar. Estos Reglamentos podrán regular condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial sin innovar aquéllos ni alterar éste en su conjunto. Podrán aprobarse en los casos en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta Ley, en aquéllos en que así se prevea en esta u otra Ley y, especialmente, en las siguientes materias:

a) Sistema de ingreso, promoción y especialización en la Carrera Judicial, régimen de los funcionarios judiciales en prácticas en el centro de selección y formación de Jueces y Magistrados, así como organización y funciones de dicho centro.

A este efecto, en el desarrollo reglamentario de la organización y funciones del centro, deberá determinarse la composición de su Consejo Rector, en el que necesariamente habrán de estar representados el Ministro de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia y las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.

b) Forma de distribución entre turnos y de provisión de plazas vacantes y desiertas de Jueces y Magistrados.

c) Tiempo mínimo de permanencia en el destino de los Jueces y Magistrados.

d) Procedimiento de los concursos reglados y forma de solicitud de provisiones de plazas y de cargos de nombramiento discrecional.

e) Actividades de formación de los Jueces y Magistrados y forma de obtención de títulos de especialización.

f) Situaciones administrativas de Jueces y Magistrados.

g) Régimen de licencias y permisos de Jueces y Magistrados.

-
- h) Valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y derecho propios de las Comunidades Autónomas en la provisión de plazas judiciales en el territorio de la Comunidad respectiva.
 - i) Régimen de incompatibilidades y tramitación de expedientes sobre cuestiones que afecten al estatuto de Jueces y Magistrados.
 - j) Contenido del Escalafón judicial en los términos previstos en esta Ley.
 - k) Régimen de sustituciones, de los Magistrados suplentes, de los Jueces sustitutos y de provisión temporal y de los Jueces de Paz.
 - l) Funcionamiento y facultades de las Salas de Gobierno, de las Juntas de Jueces y demás órganos gubernativos y elecciones, nombramiento y cese de miembros de las Salas de Gobierno y de Jueces Decanos.
 - m) Inspección de Juzgados y Tribunales y tramitación de quejas y denuncias.
 - n) Publicidad de las actuaciones judiciales, habilitación de días y horas, fijación de las horas de audiencia pública y constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
 - ñ) Especialización de órganos judiciales, reparto de asuntos y ponencias y normas generales sobre prestación y desarrollo del servicio de guardia, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Justicia e Interior (en la actualidad Ministerio de Justicia) en materia de personal, previstas en el artículo 455 de esta Ley.
 - o) Forma de cese y posesión de en los órganos judiciales y confección de alardes.
 - p) Cooperación jurisdiccional.
 - q) Honores y tratamiento de Jueces y Magistrados y reglas sobre protocolo en actos judiciales.

3. Los proyectos de Reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del Reglamento o sea necesario coordinar éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios que consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto.

El Ministerio Fiscal será oído cuando le afecte la materia sobre la que verse el proyecto y especialmente en los supuestos contemplados en las letras n, ñ y q del apartado 2 de este artículo.

4. Los Reglamentos, que deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría de tres quintos

b) Naturaleza y alcance

El problema de la naturaleza jurídica de los reglamentos puede quizás encontrar su solución en el análisis de los sujetos facultados para dictarlos. No sólo el Gobierno²⁶⁸ o los ministros²⁶⁹ tienen la facultad de dictar

de sus miembros autorizados por su Presidente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado."

²⁶⁸ art. 97 de la Constitución " El Gobierno dirige la política exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes."

²⁶⁹ Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de Julio de 1957, en su art. 14.3. pone de manifiesto entre las atribuciones de los Ministros la de *ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento*. El problema que se plantea en la doctrina es que no existe un criterio uniforme en relación a la actividad desarrollado por los ministros:

Así, García de Enterría, al tomar como premisa la doctrina alemana y la diferencia existente entre los reglamentos jurídicos y los reglamentos administrativos, pone de manifiesto que los Ministros sólo gozan de potestad reglamentaria en materia organizativa, no pudiendo extenderse la misma a las actividades propias de los ciudadanos -salvo cuando exista habilitación por ley o decreto-

Garrido Falla por contra, considera que no existe esa distinción a la que alude García de Enterría, dado lo cual, será preciso que el Ministro competente cuente en todo caso con esa habilitación a la que nos referíamos con anterioridad, ya sea en los supuestos de actividad organizativa, ya sea en las actividades propias de los ciudadanos.

Sin duda, debemos recoger aquí la opinión de Baena de Alcázar, que realiza una interpretación amplia de las potestades otorgadas a los Ministros así, considera que hay que

reglamentos, sino que los reglamentos²⁷⁰ también pueden tener su origen en distintos órganos constitucionales²⁷¹, como por

reconocerles una potestad reglamentaria propia exactamente en los mismos términos que la tiene el Gobierno en su conjunto.

Hemos puesto de relieve la problemática existente en la doctrina, el problema es que estos planteamientos vienen a reflejarse en las sentencias del Tribunal Constitucional. Tal y como ha señalado BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ. Véase BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, P.: " La titularidad de la potestad reglamentaria" en Poder Judicial, núm. 1, 1986, págs. 101-107 la imposibilidad de encontrar una regla general hace que la mejor manera de abordar el estudio de la potestad reglamentaria de los Ministros sea llevarlo a cabo desde una perspectiva temporal, utilizando el criterio cronológico. La citada autora, realiza un estudio de diversas sentencias:

S. de 22 de octubre de 1981, S. de 3 de diciembre de 1981, S. 25 de enero de 1982, S. de 15 de junio de 1982, S. de 12 de julio de 1982, S. de 15 de octubre de 1982, S. de 4 de febrero de 1982, S. 10 de diciembre de 1982, S. 14 de junio de 1983, S. de 9 de febrero de 1984, S. de 9 de marzo de 1984, S. de 16 de junio de 1984. Tras el análisis de las citadas sentencias, se pone de manifiesto " que no existen para el Tribunal Supremo graves dificultades a la hora de admitir la potestad reglamentaria de los ministros en el campo estrictamente organizatorio; y en segundo lugar, que no hay posibilidad alguno... de encontrar un criterio uniforme por lo que se refiere al ejercicio de la misma en el ámbito externo. En este campo, la polémica continúa." Véase BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, P.: " La titularidad de la potestad reglamentaria" op. cit., pág.107

²⁷⁰ Tal y como expresa PORRES RAMÍREZ, " la utilización mimética o analógica de la forma *reglamento*, en principio reservada exclusivamente a las normas escritas dictadas por la Administración, para denominar también, mediante la misma, a esa pluralidad de actos normativos de muy varia condición y trascendencia, expresados en acuerdos del Pleno del CGPJ, no es sino testimonio de la complejidad e imprecisión adquiridas por tal concepto, resultando tanto de la dispersión subjetiva de la potestad normativa generadora de las fuentes así denominadas como de la acentuación del proceso expansivo experimentado por la misma; además de traer causa de la revisión de los fundamentos jurídico-políticos sobre los que la potestad

ejemplo, al que nos estamos refiriendo; tenemos pues que matizar a la hora de hablar de los reglamentos, debido a que, " no responden a una categoría unitaria ya que -como ha observado Bassols Comá- mientras los reglamentos parlamentarios derivan directamente de la Constitución (art.72.1), los de otros órganos constitucionales se fundamentan sólo en la ley orgánica que desarrolla su régimen jurídico."²⁷² Al estar directamente subordinadas a sus respectivas leyes orgánicas, podemos denominarlos normas de carácter secundario. Uno de los más brillantes análisis realizados en torno a la naturaleza de los reglamentos derivados de órganos constitucionales es el de PORRAS RAMÍREZ, para el que debe entenderse que estos reglamentos responden siempre a las necesidades organizativas y funcionales de sus instituciones. Únicamente " partiendo de esa premisa podrá entenderse su peculiar, por dual,

reglamentaria descansa." Véase PORRAS RAMÍREZ, J.M.: " Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria " en Rev. de Estudios Políticos, núm. 87, Enero-Marzo 1995, C.E.C., Madrid, pág.246. Sobre esta materia puede resultar de igual modo interesante el estudio de SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Fundamentos de Derecho Administrativo, I, Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 1991 y BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, P.: "La titularidad de la potestad reglamentaria" en Poder Judicial, ed. CGPJ, núm. 1, Madrid, 1986

²⁷¹ Entre los distintos órganos constitucionales cabe citar entre otros, al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional, que cuentan con auténtica potestad reglamentaria.

²⁷² Arnaldo Alcubilla, E. y Cazorla Prieto, L.M.: Temas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo op. cit., pág.581

naturaleza jurídica, la que explica que los actos producto de la misma sean expresión no sólo de una potestad reglamentaria de carácter instrumental, al hallarse ésta puesta al servicio de los fines institucionales del órgano en cuestión, sino que resulten igualmente manifestación de un derecho autónomo, de carácter preferentemente estatutario, dotado de caracteres propios, que sólo en parte coinciden con los que se entienden como consustanciales al llamado derecho reglamentario"²⁷³

Ha existido una intensa discusión referente al posible campo de actuación de los reglamentos surgidos en el seno del Consejo; durante la vigencia de la LOGPJ 1/1980, su art. 5 establecía como ámbito de actuación las bases " sobre su organización y funcionamiento, así como sobre el régimen de personal y servicios, y demás materias de su competencia ". Autores como CARRETERO PÉREZ, LLORENTE HURTADO o LEDESMA BARTRET han otorgado a estos reglamentos un ámbito de carácter no meramente interno sino ampliable también al ámbito externo (potestad normativa **ad extra**). Para fundamentar esta tesis se toma como premisa que " la reglamentación es algo inherente a la función de gobierno, que en el caso del CGPJ ... se extiende a las materias de constitución, funcionamiento y gobierno de los organismos

²⁷³ Porras Ramírez, J.M.: " Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria " op. cit., pág. 247

jurisdiccionales, así como al estatuto jurídico de los jueces "274. En un plano completamente distinto, se encontrarían los defensores de la potestad únicamente con un carácter *ad intra* entre otros podemos destacar a CASTEDO ÁLVAREZ, MOSQUERA²⁷⁵ o MOVILLA ÁLVAREZ.

Vamos ha analizar cada una de las distintas posturas, tomando en consideración la distinta normativa existente en

²⁷⁴ Movilla Alvarez, C. y Andrés Ibáñez, P.: El Poder Judicial Temas Clave de la Constitución Española, op. cit., pág. 72-73

²⁷⁵ " el Consejo no tiene, ni debe reconocérsele, ninguna clase de potestad propiamente reglamentaria, pues esta está atribuida exclusivamente al Gobierno por el artículo 97 de la Constitución... Es, quizá, necesario matizar que la distinción entre normas *ad extra* y *ad intra*, clásica de la doctrina administrativista, no es, sin más, trasladable al campo de las facultades normativas del Consejo, pues no cabe considerar a los Jueces y Magistrados en una relación de supremacía o mejor, de subordinación especial respecto de aquél, por oponerse a ello el principio de independencia... Se desprende de todo lo dicho que el consejo carece de potestad reglamentaria *ad extra*, pero el problema radica ahora en que el Consejo, mediante la facultad de autoorganización, que evidentemente hay que reconocerle, es decir, mediante normas *ad intra*, pueda enmascarar realmente el ejercicio de una propia y verdadera potestad reglamentaria *ad extra*. Y en este punto, extremadamente importante, se hace preciso aclarar que la potestad de auto-organización no puede invadir zonas que han de ser reguladas por la ley, como es el caso de la que comprende el *gobierno del Poder Judicial*. Dicha potestad tendrá como objeto preciso y concreto la zona de organización interna del Consejo y su régimen interior, pero nada más. En cuanto desborde este ámbito proyectándose hacia fuera, es decir, hacia el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados, se convertirá en una potestad ilegal e incluso inconstitucional, pues...el Consejo no es Poder Judicial." Mosquera, L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española " en La Constitución Española de 1978, un estudio sistemático, op. cit., pág. 742

cada momento, así como la postura adoptada por el Tribunal Constitucional en la ya citada sentencia 108/1986

Con carácter previo se hace preciso, una breve referencia a la Sentencia 108/86 que, había planteado, además de la eventual limitación del ámbito objetivo de la potestad reglamentaria del Gobierno en el artículo 97 de la Constitución, el correlativo poder implícito para el Consejo de dictar, en cuanto la Ley lo exigiera, reglamentos sobre el estatuto jurídico de los integrantes del Poder Judicial. La sentencia deja claro que el poder reglamentario implícito no se extendería más que a dictar sus propias normas de organización y funcionamiento: fundamento vigésimo-quinto:" la segunda línea argumental seguida por los recurrentes para defender su opinión de que la potestad reglamentaria, en lo que se refiere a los Jueces, corresponde al Consejo se basa en la doctrina de los poderes implícitos. Aparte de que esta doctrina ha nacido y se aplica especialmente en el ámbito de la distribución territorial de competencias, en nuestro caso entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y es muy dudosa su extensión al campo de las relaciones entre órganos constitucionales, como ya advirtió la Sentencia de este Tribunal núm. 66/1985, de 23 de mayo, lo cierto es que a lo único a lo que conduciría en el presente supuesto es al reconocimiento de la necesidad de que el Consejo tenga la

facultad de dictar sus propias normas de organización y funcionamiento. Dado que esta facultad le está expresamente reconocida, como ya se ha dicho, por el art. 110 de la LOPJ resulta superfluo acudir, para justificarla, a la teoría de los poderes implícitos".²⁷⁶

Si partiéramos de esta premisa parecería lógico la declaración de ser conforme a la Constitución la atribución al Gobierno, por la Disposición Adicional 1.^a-2 de la Ley, de la facultad de dictar los reglamentos de desarrollo necesarios también en materia de estatuto jurídico de Jueces y Magistrados. Sin embargo, el Tribunal se plantea, en el fundamento vigésimo-sexto la existencia de otras razones para restringir la potestad reglamentaria sobre el estado jurídico de Jueces y Magistrados. Tales restricciones no parten de al reserva de Ley Orgánica que establece el artículo 122 de la Constitución para esta materia, ya que, como el Tribunal Constitucional declaró ya en su Sentencia 77/85, de 27 de junio, la reserva de Ley Orgánica no excluye la posibilidad de desarrollos reglamentarios. Las restricciones considera la Sentencia, proceden de que en esta concreta reserva de Ley

²⁷⁶ Tal y como se puso de manifiesto en la obra recopilatoria de PUYOL MONTERO, F.: "Dictámenes y criterios gubernativos del CGPJ, (Primera y Segunda Época), ed. CGPJ, Madrid, 1991, pág. 200-201 y ss. relativo al informe sobre competencias del CGPJ en el desarrollo reglamentario de la LOPJ, publicado en enero de 1987.

Orgánica se da una característica o fundamento peculiar, cual es la independencia de los jueces y magistrados como integrantes del Poder Judicial. Para el Tribunal, esta independencia supone que los Jueces no pueden estar sometidos en principio a normas de rango inferior a la Ley y muy especialmente a los reglamentos que pueda dictar el Gobierno...la reserva de Ley Orgánica en el caso del estatuto jurídico de Jueces y Magistrados tendría un rigor y una extensión superior a las normales, con la consecuencia de excluir en el ámbito que la misma cubre los desarrollos reglamentarios por parte del Gobierno que hubieran de incidir en la configuración de dicho estatuto. Pero como es lógico, ello no supone necesariamente que no queda en términos absolutos ningún tipo de regulación infralegal que afecte al status de los Jueces. La realidad práctica impone que determinados aspectos secundarios y auxiliares deban ser dispuestos por vía reglamentaria, siendo lícitas las remisiones al respecto por parte de la Ley, bien entendido que estas disposiciones no podrán afectar a los derechos y deberes de los jueces, sino las condiciones accesorias para su ejercicio.

Esta última conclusión a que llega el razonamiento de la Sentencia 108/86, puesta en correlación con las consecuencias que antes había extraído de la propia Sentencia

del principio constitucional de independencia de Jueces y Magistrados, excluyente de la actuación reglamentaria del Gobierno respecto a los mismos, obliga al Tribunal a buscar un sujeto en el que hacer radicar la titularidad de la potestad para esos desarrollos reglamentarios accesorios. Se indica que el tipo de reglamento que ha de contener esas disposiciones accesorias puede ser aquel cuya aprobación es facultad del Consejo conforme al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se postula una interpretación amplia de dicho precepto, que lo haga trascender del ámbito meramente doméstico del Consejo, y lo refiera al ámbito de todo el personal judicial. Con ello se introducen evidentes matizaciones en cuanto a la falta de potestad reglamentaria no meramente auto-organizativa antes proclamada. Resultaría, pues, de este último planteamiento que podría considerarse consecuencia de un esfuerzo integrador entre los planteamientos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el principio constitucional de la división de poderes e independencia judicial, que sería el Consejo el competente para dictar aquellos reglamentos que en los aspectos accidentales del estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados vienen expresamente exigidos por la Ley Orgánica. Sin embargo, frente a la doctrina antes expresada de exclusión de los reglamentos del Gobierno, se pasa a proclamar que también es posible en ciertos casos que la

potestad reglamentaria corresponda al Gobierno, aunque siempre dentro de los límites materiales antes indicados.

De lo expuesto anteriormente se deduce que tanto el Gobierno como el CGPJ parecen tener facultades de reglamentación. Se plantea entonces una duda; qué criterio ha de seguirse para saber el límite entre la actividad desarrollada por el Gobierno o por el Consejo.

De los dictámenes que estamos analizando consideramos acertado el criterio de que el Consejo es competente para reglamentar cuándo aquellas materias en las que la Ley remite al desarrollo reglamentario hacen referencia a aspectos del estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados en que se contempla a éstos como titulares de la jurisdicción, es decir, en relación con su actuación en la relación orgánica en la que aparecen incorporados como titulares al órgano judicial, frente a aquellos otros, correspondientes sólo a la relación de servicio del Juez o Magistrado, como funcionario, con el Estado, en la cual representa su propio centro de intereses. En este último ámbito, las competencias reglamentarias corresponderían al Gobierno, ya que no se referirían al Juez o Magistrado como titular del órgano jurisdiccional, y no estaría en juego, por lo menos de modo tan directo, la independencia judicial. Esta materia se

encontraba abierta a un posible debate doctrinal, que va a quedar muy delimitado. Con la Exposición de Motivos de la Ley 16/1994 de 8 de Noviembre, apartado X, la cuestión tomo otro sentido: " La presente Ley no se limita a tener por hechas las habilitaciones explícitas e implícitas contenidas ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino, que efectúa, con carácter adicional, una enumeración de materias concretas para cuya redacción se han tenido en cuenta los campos en los que efectivamente el Consejo General ha hecho ya uso de esa facultad reglamentaria. Enumeración que, por otra parte, cumple con una finalidad integradora de aquellos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 301.5, 329.3, 341.2, 365.2, 366.2 y 377) que se limitan a prever el desarrollo reglamentario de sus disposiciones, sin especificar que el mismo compete al Consejo General del Poder Judicial, al venir ello reclamado sin más por el hecho de afectar a alguna de las materias contenidas en la enumeración. Lo que, a su vez tiene el correspondiente contrapunto integrador en favor de la potestad reglamentaria del Gobierno en los restantes preceptos de la citada Ley Orgánica (artículos 434.3, 447.1, y 2, 472, 485, 486, 487, 492, 493, 495.2, 504.2, 506.1, 508.2 y d. a. 10ª.2) "²⁷⁷.

²⁷⁷ PUYOL MONTERO, F.: " Dictámenes y criterios gubernativos del CGPJ, op. cit., pág. 200-201 y ss.

Con la entrada en vigor de la LOPJ 6/1985, de 1 de Julio, que derogó a la LOCGPJ 1/1980, de 10 de Enero, se daba, en cierta medida, respuesta a las dudas suscitadas en relación a si la potestad reglamentaria derivada de la actuación del CGPJ alcanzaba al ámbito externo o por contra se limitaba a un ámbito de carácter ad intra tal y como veíamos que defendía parte de la doctrina; en el art. 110 de la hoy parcialmente modificada LOPJ 6/1985, se establece que el CGPJ " podrá dictar reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública." En consecuencia, todo cuanto define derechos y deberes de los jueces queda bajo reserva de ley orgánica, estando reservado el ámbito reglamentario para **" exigencias de tipo práctico"**. Tal y como señala TEROL BECERRA, el T.C. " entendió que se trataba de determinar si además podía adoptar reglamentos que, sin referirse a su organización o funcionamiento, afectasen al *status* de Jueces y Magistrados."²⁷⁸ Al respecto se pronunció el Tribunal Constitucional²⁷⁹ indicando que " el *status* de jueces y magistrados, es decir, el conjunto de los derechos y deberes de los que son titulares como tales jueces y magistrados, ha de venir determinado por ley y más precisamente por ley

²⁷⁸ Terol Becerra, J.M.: El Consejo... op. cit., pág 132.

²⁷⁹ STC 108/1986, de 29 de julio. Fundamento jurídico núm.

orgánica.(art.122.1 CE). Ello no supone necesariamente que no quepa en términos absolutos ningún tipo de regulación infralegal que afecte a ese *status*. Exigencias de carácter práctico pueden imponer que regulaciones de carácter secundario, auxiliar, puedan ser dispuestas por vía reglamentaria, pero en el bien entendido de que tal tipo de disposiciones no pueden incidir en el conjunto de derechos y deberes que configuran el *status* de los jueces y sí sólo regular, como se ha dicho, condiciones accesorias para su ejercicio". El fallo del Tribunal Constitucional en torno a la cuestión planteada giró en orden al juego de los artículos 122 en relación al artículo 97 de la Constitución, negándose de esta manera la vía reglamentaria; sin embargo, al mismo tiempo se refería al interés que despertaban los mencionados reglamentos en el campo práctico, produciéndose de esta manera una cierta oscuridad en la resolución tomada por parte del Tribunal, ya que no es fácil entender lo que puede significar relaciones de carácter "accesorio o auxiliar" términos a los que alude la mencionada sentencia.

Tal y como se ha indicado, se abre un campo, aunque claro está reducido²⁸⁰, para el ejercicio de la potestad

²⁸⁰ La discusión doctrinal sobre los efectos de esta ampliación normativa es evidente. En opinión de SANTAMARÍA PASTOR, J.A.y de PORRAS RAMÍREZ, dicha potestad ad extra sólo puede ser ejercitada por los órganos directamente representativos de los ciudadanos o por aquellos otros cuyo mandato traiga causa directa e inmediata de la representación

reglamentaria ad extra, así, " el CGPJ tiene competencia para dictarlos (esta haciendo referencia a los reglamentos) en tanto que protegen la independencia judicial... para la regulación por vía reglamentaria de los aspectos accesorios, secundarios o auxiliares del estatuto jurídico de jueces y magistrados, cuando se den exigencias de tipo práctico, tendrán competencia, tanto el Gobierno como el CGPJ y, siempre que no innoven los derechos y deberes que en el Estatuto se refinan (por Estatuto debe leerse LOPJ), será válido el reglamento que primero se dicte, proceda de uno u otro de los órganos mencionados."²⁸¹ El problema que se plantea es que se otorgan al Consejo materias que con anterioridad se encontraban atribuidas al Ministerio de Justicia. Surge entonces en la doctrina una grave preocupación: la de encontrarse con un Consejo General del Poder Judicial que comienza a contar con verdaderas facultades operativas, ya sean la facultades derivadas de la potestad reglamentaria, ya sea la de elaborar su presupuesto... frente a un Ministerio de Justicia que ve cada vez más difícil justificar su existencia, salvo por el tema

popular. (Véase Fundamentos de Derecho administrativo, op, cit.pág. 753-754, asimismo en Porras Ramírez:" Fundamento, naturaleza, extensión y límites..." op. cit., pág. 251)

²⁸¹ Sainz de Robles, F.:" Poder Judicial y CGPJ" en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, op.cit.,pág.,3012

de la ya conocida y criticada irresponsabilidad del Consejo.

Consecuencia de la reciente modificación operada en la LOPJ, mediante la LO 16/1994, de 8 de noviembre, el apartado segundo de la disposición adicional primera de la misma queda redactada de la siguiente forma; " El Gobierno, o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley Orgánica, salvo cuando la competencia para ello corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a tenor de lo que dispone el artículo 110. Cuando afecten a condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes de los Jueces y Magistrados estarán sujetos a los mismos límites y condiciones establecidos para el Consejo General del Poder Judicial". De la modificación llevada a cabo va a resultar viable a los Gobiernos autonómicos desarrollar la LOPJ, incluso en todo aquello considerado " condiciones accesorias " del estatuto judicial, provocándose con esto, en cierto modo, un ataque a lo que el propio Tribunal Constitucional ha denominado núcleo duro del Poder Judicial y sustrato de la independencia de los mismos. En opinión de GARCÍA DE ENTERRÍA esa cláusula habilitante de un poder reglamentario general de las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la Ley Orgánica del Poder judicial es

manifiestamente contrario a la Constitución; se trata según GARCÍA DE ENTERRÍA, de una cuestión de competencia, que se encuentra absolutamente vedado para las Comunidades Autónomas.²⁸²

c) Características propias

Debemos responder aún, una vez puesto de manifiesto el alcance que se le da a los reglamentos surgidos en el seno del CGPJ a una de las cuestiones que nos planteábamos al inicio; el grado de semejanza entre la actividad llevada a cabo por el CGPJ y los de carácter análogo, ya sean las Cortes Generales o el Tribunal Constitucional.

Dada la enorme diferencia existente entre la naturaleza jurídica a la que responden los reglamentos de uno y otro órgano, el que existan puntos de coincidencia, entre los que destacaría principalmente el de su autonormación en todo aquello que se refiera a organización y funcionamiento, buscando así garantizar su autonomía, no podemos llegar a afirmar que sean asimilables dichos reglamentos. Y esto, aunque el fin sea el mismo; evitar las influencias procedentes de otros poderes.

²⁸² Recogido en prensa" El Grupo Popular recurre por inconstitucionalidad la reforma Belloch de la Ley del Poder Judicial, ABC, 11-II-1995.

En cuanto a los reglamentos parlamentarios que pueden definirse como " normaciones autónomas de las Cámaras, un caso atípico en el mundo del Derecho, que no puede equipararse ni con las leyes formales ni con los Reglamentos administrativos "²⁸³, destaca la opinión de BALLADORE para el que " el Reglamento parlamentario es libre y no tiene más limitaciones que las dispuestas constitucionalmente o las que, en ejercicio del control constitucional, establezca el Tribunal Constitucional"²⁸⁴. Esta idea nos conduce al clásico principio de los *interna corpori acta*²⁸⁵, que viene a poner de manifiesto el hecho de que la acción de control jurisdiccional en torno a la actividad parlamentaria sólo tiene sentido cuando la misma provoca determinados efectos al margen de lo que constituye el ámbito propio del órgano, o bien porque con su actividad dan lugar a normas que puedan ser tachadas de inconstitucionales. Tal y como ha puesto de manifiesto PORRAS RAMÍREZ, al referirse a los citados reglamentos, la denominación de *reglamentos de la Cámaras parlamentarias responde exclusivamente a razones históricas,*

²⁸³ Santaolalla, F.: ~~Derecho Parlamentario Español~~, op. cit., pág 44.

²⁸⁴ Balladore Pallieri: ~~Diritto Costituzionali~~, Milan 1976, pág 240

²⁸⁵ Véanse A.T.C.de 21 de Marzo de 1984, B.J.C.,núm. 35, 1984 y A.T.C. 147/1982, de 22 de Abril.

debido fundamentalmente a que " es claro que no son en modo alguno producto de la potestad reglamentaria... sino que aparecen asimilados a la condición de auténticas leyes por su rango y valor, guardando con las mismas una relación presidida por el principio de competencia, que no por el de jerarquía, al serles atribuido su ámbito material de actuación por la Constitución misma. Su emanación de los propios órganos legislativos, ordenándose directamente a la Constitución, en tanto que normas primarias, conlleva que su control jurisdiccional corresponda exclusivamente al Tribunal Constitucional [art. 27.2 d) LOTC] y no a los jueces y Tribunales ordinarios"²⁸⁶

Otra característica de los reglamentos parlamentarios es - que desarrollan directamente la Constitución - sin embargo, los reglamentos dictados por el CGPJ, - jerárquicamente están subordinados a la LOPJ y a la legislación sobre la función pública a la que la mencionada ley se remite-. Vemos así como para los primeros, ya se refieran a los que tienen su origen en el seno de una sola de las Cámaras o a aquellas que son producto de las sesiones conjuntas de las mismas, se establece por la Constitución la

²⁸⁶ Porras Ramírez, J. M.: " Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria " op. cit., pág. 247

necesidad de que se aprueben, tal y como recoge el art.72.1 por " mayoría absoluta ". El motivo que origina la necesidad de tan elevado quórum es el " de evitar una instrumentacion partidista de los Reglamentos, y consiguientemente de la vida interna de las Cámaras, instrumentación que podría producirse de aceptarse la regla general de la mayoría simple para la adopción de acuerdos (79.2), ya que en este caso los Reglamentos podrían responder a la voluntad de una sola fuerza política que contase con la mayoría relativa. "²⁸⁷. Para los segundos, se precisa una mayoría cualificada, estableciendo el art.110 de la LOPJ " deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General por mayoría de tres quintos de sus miembros, autorizados por su Presidente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado." Se plantea en torno a esta materia una cuestión: " dado que no se trata de auténticos reglamentos internos u organizativos, sino que su inserción el Ordenamiento Jurídico es de mayor intensidad y de más amplios destinatarios, con vinculación para terceros, podría suscitarse...la duda de si respecto de ellos basta con los requisitos de dicho precepto, o si les serían aplicables los propios de la potestad reglamentaria auténtica, cuya titularidad normal viene atribuida al Gobierno por el art. 97 de la Constitución, ya que en este caso sería preceptivo el

²⁸⁷ Santaolalla, F.: " Derecho Parlamentario Español ", op. cit., pág 37.

dictamen del Consejo de Estado en cuanto reglamentos ejecutivos o de desarrollo de la Ley Orgánica"²⁸⁸. A nuestro parecer, la intervención del Consejo de Estado no es precisa, aunque sí puede considerarse conveniente la intervención, aunque sea de manera consultiva, del Gabinete Técnico del propio Consejo o de los distintos órganos del Consejo. Las razones en que nos basamos para negar la necesidad de la actuación del Consejo de Estado serían varias²⁸⁹: a) la sentencia del TC al proceder por asimilación al citado art. 110 no está pensando en el ejercicio de la potestad reglamentaria *erga omnes*, sino en la potestad reglamentaria doméstica, b) el Alto Órgano Consultivo está directamente vinculado en su función al Gobierno, pero no al Consejo, según viene a reconocer el art. 142.1 de la propia LOPJ al decir: " sin que en ningún caso sea necesaria la intervención del Consejo de Estado."

La referencia a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los reglamentos que tienen su origen en la potestad reglamentaria del Consejo, recalcándose de esta manera " su paralelismo con los reglamentos administrativos

²⁸⁸ Puyol Montero, F.: "Dictámenes y criterios gubernativos del Consejo General del Poder Judicial", op. cit. pág. 206

²⁸⁹ Véase Puyol Montero, F.: "Dictámenes y criterios gubernativos del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág. 206

"²⁹⁰, pone de manifiesto la diferencia existente entre los reglamentos que dicta este órgano y los de las Cámaras, ya que este requisito no está presente en los Reglamentos emanados del Parlamento, para los cuales se requiere únicamente la inserción en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, siempre que claro está, no tengan por objeto efectos externos pues en dichos supuestos se hace precisa también la publicación en el BOE.²⁹¹

En referencia al vínculo de similitud entre los reglamentos procedentes del Consejo General y los originados en el seno del Tribunal Constitucional existe, dada su condición indiscutible de normas secundarias, incluidas por asimilación dentro de la consideración reglamentaria²⁹², en el ámbito de los recursos una cierta afinidad²⁹³, pese a que el

²⁹⁰. Arnaldo Alcubilla, E. y Cazorla Prieto, L.M.: Temas de Derecho... op. cit., pág. 581

²⁹¹ La STC 179/1989, de 2 de noviembre ha exigido la publicación de los Reglamentos de Parlamentos de Comunidades Autónomas en los Boletines Oficiales de estas últimas para que puedan producir sus efectos externos, entre ellos su propia impugnación. Cabe imaginar que esta doctrina sea también aplicable al R.C.y R.S." Santaolalla F.: Derecho Parlamentario... op. cit., pág 37.

²⁹² Porras Ramírez, J.M. : " Fundamento naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria " op. cit., pág. 248

²⁹³ art. 58.1 LOPJ; " En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones emanadas del Consejo de Ministros o de sus Comisiones Delegadas, de los recursos contra los actos y disposiciones procedentes del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos de gobierno

alcance de la potestad reglamentaria del Consejo es más amplia, que somete a los reglamentos procedentes de estas dos instituciones a la jurisdicción ordinaria considerada pertinente.

En cuanto al control de los reglamentos derivados de las facultades atribuidas al CGPJ, debemos apuntar como va a ser la propia LOPJ 6/1985 la que otorga el control de dichos reglamentos, al igual que de los actos singulares de ejecución del CGPJ en materia de personal y administración, a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo competente el Tribunal Supremo. El Pleno del Tribunal Supremo pierde la competencia para conocer los recursos contencioso-administrativos frente a los actos del Consejo, que ahora se atribuye a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (art. 143.2)²⁹⁴

Junto a esta idea tenemos que recoger la crítica en torno a la contradicción existente ya que, se " permite que la actuación del CGPJ sea fiscalizada por un órgano, como es

del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en materia de personal y actos de administración. "

²⁹⁴ Perfecto Andres Ibáñez: El Poder Judicial op. cit, pág. 85

el Tribunal Supremo, cuyo gobierno corresponde al propio CGPJ."²⁹⁵

Frente a los actos emanados de los órganos integrantes del Consejo General del Poder Judicial, pueden llevarse a cabo diversas actuaciones, al margen de los posibles recursos a los que nos referíamos con anterioridad, así puede acudir a la Ley 62/1978 relativo a la protección de los derechos fundamentales, así como al recurso de amparo.

²⁹⁵ Díez-Picazo, L.M.: Régimen constitucional del Poder Judicial op. cit., pág.135

SECCIÓN Vª. VALORACIÓN DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL CONSEJO

GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i) Introducción

Tal y como señala POMPEU CASANOVAS²⁹⁶, la primera hipótesis que debemos de tomar en consideración es que " la transformación del parámetro general de la Justicia en España responde a dos transformaciones paralelas: la sociedad en su conjunto (economía e instituciones) y la forma de organización de las instituciones y del Estado".²⁹⁷ Junto a este primer apunte, se hace preciso resaltar las graves deficiencias que han venido padeciendo nuestras fuentes de información; por ello se hace preciso recalcar que " si hoy la justicia puede ser conocida, en sus logros y en su deficiencias, es gracias a la labor del Consejo; puede ser conocida -y en ello insiste el Consejo- por quien quiera asomarse con rigor y objetividad a los datos y análisis que trasparecen en sus Memorias y a los que parcial y ocasionalmente, se han puesto de relieve en sus notas y comunicaciones oficiales. Ninguna institución pública se ha

²⁹⁶ Pompeu Casanovas: " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de Justicia en España" por Pompeu Casanovas en Deliberación, Ed. APM, Julio-Septiembre 1995, núm.13, pág. 14-15

²⁹⁷ Pompeu Casanovas: " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de Justicia en España" por Pompeu Casanovas en Deliberación, op. cit., pág. 14-15

expuesto tan abiertamente al ciudadano como la Administración de Justicia"²⁹⁸

La implantación en nuestro sistema político del nuevo órgano, el CGPJ y su tratamiento específico " tuvo en general buena acogida en los medios doctrinales, que veían en él un cambio de cualidad para el futuro de la independencia de la magistratura"²⁹⁹. Las valoraciones posteriores en relación a cada Consejo han ido variando dependiendo de la actitud y facultades otorgadas a dichos Consejos: así, para CASTELLANO, de los Consejos hasta la fecha³⁰⁰ constituidos el " primero

²⁹⁸ Véase Memoria del Consejo General del Poder Judicial elevada a las Cortes Generales el 30 de julio de 1984. Ed. CGPJ, Madrid, 1984, pág. 12

²⁹⁹ Andrés Ibañez, P.: El Poder Judicial Temas Clave de la Constitución Española, op. cit., pág. 58

³⁰⁰ 8 de Noviembre de 1995, debería haberse renovado el CGPJ, con más de nueve meses de retraso se ha conseguido constituir un nuevo Consejo; ésto viene a poner de manifiesto el complejo entramado de intereses que se esconde bajo el Consejo. Es evidente por otro lado, que la normativa existente en relación a la renovación del Consejo esta lejos de ser eficaz. Sabemos que el Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años computados desde la fecha de su constitución. A tal efecto y con seis meses de antelación a la expiración del mandato del CGPJ, su Presidente se dirige al Parlamento para que por ambas Cámaras se proceda a la elección de los nuevos Vocales. Tal y como establece el art. 115 de la LOPJ, el Consejo saliente continúa actuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo. Dado que la práctica parlamentaria nos demuestra que el plazo de esos seis meses es insuficiente, quizás fuera necesario ampliar ese plazo.

* Tal y como señala Fernández- Miranda Campoamor, la interinidad no cabe duda de que debilita la institución. En " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985 " op. cit., pág. 65.

representó el ansia de ampliación de controversias, el segundo la ambición de ordenar la dependencia y el tercero la avaricia en dar el mejor servicio a quien lo nombra, conduce y guía... Triste espectáculo es el de comprobar cómo los altos órganos constitucionales acaban en moneda de cambio, de cuotificación y reparto entre las cúpulas y oligarquías de los partidos."³⁰¹ Sobre el último de los Consejos, que es el cuarto, parece difícil llevar a cabo valoraciones, y ello debido a que, aún no se ha cumplido un año desde su constitución. Podemos calificarlo eso sí, de un Consejo sobre cuya composición se han mantenido amplias negociaciones políticas.

ii) La perspectiva externa: la opinión de la ciudadanía

La dificultad primordial a la hora de determinar el papel que desempeña el Consejo General del Poder Judicial, en el marco del estado social y democrático de derecho, es la confusión existente en la opinión pública y en los medios de comunicación, entre aquello que le corresponde en la realidad

³⁰¹ Navarro, J.: Manos sucias, el poder contra la justicia, op. cit. pág. 18

al Consejo y, aquello que se le atribuye sin que sea conforme con las facultades que legalmente se prevén. Este desconocimiento por parte de los ciudadanos lo han reflejado diversos estudios;" El Consejo suena ahora apreciablemente más, pero en cambio su imagen está algo desdibujada; más gente sabe que existe, pero alguna menos, en cambio, para qué existe"³⁰². Se hace preciso señalar la existencia de numerosas

³⁰² Toharia, J.J. " Cuarto Barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial " Rev. Poder Judicial, 1988 núm.12, pág.90 y ss.

Referente a el supuesto al que aludíamos en el texto, véase el estudio llevado a cabo en " Informe: actitudes de los españoles ante la Administración de Justicia " en el Primer Barómetro de Opinión del CGPJ, en Rev. Poder Judicial, Marzo de 1985, n° 14, pág. 33 a 45.

Asimismo véase " Los españoles y la Administración de Justicia; segundo barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial" en Rev.Poder Judicial, 2ª época, N°.1, Marzo 1986, pág. 41 y ss.

" Cuestionario del Quinto Barómetro y series temporales de respuestas para las preguntas comunes de los anteriores Barómetros " en Rev.Poder Judicial, 2ª época, n°. 19, Sep. 1990, pág. 111 y ss.

Pompeu Casanovas: " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de Justicia en España" por Pompeu Casanovas en Deliberación, Ed. APM, Julio-Septiembre 1995, núm.13

Datos obtenidos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1996 y Estadísticas recogidas en prensa. Diario " El Mundo" 8-6-1995.

En 1984, en relación a qué era el Consejo General del Poder Judicial:

El 31% de los entrevistados...dice haber oído hablar del Consejo General del Poder Judicial. Este porcentaje resulta inesperadamente elevado teniendo en cuenta: a) que se trata de una institución de vida muy corta aún, b) que además no es objeto de una atención cotidiana y de primer plano por parte de los medios de comunicación, y c) que los españoles suelen tener un grado de conocimiento institucional muy bajo.

El 12% del total de entrevistados tiene una idea básicamente clara de lo que es el Consejo General. Lo cual sigue siendo un porcentaje inesperado, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que como sabemos por distintos sondeos de opinión apenas uno de cada dos españoles sabe quién hace las leyes en

nuestro país, y apenas uno de cada diez sabe citar el nombre de tres ministros.

Otras circunstancias analizadas, en relación a la pregunta qué es el CGPJ y su papel, toma en consideración el nivel de estudios de los entrevistados:

AÑO DE ANÁLISIS 1984	DEFINICIÓN CORRECTA	DEFINICIÓN INCORRECTA
MENOS DE ESTUDIOS PRIMARIOS	23%	77%
ESTUDIOS PRIMARIOS	34%	66%
BACHILLERATO	40%	60%
GRADO MEDIO	46%	54%
UNIVERSITARIOS	62%	38%

* Esta pregunta se hizo únicamente a los entrevistados que declararon haber oído hablar del Consejo General del Poder Judicial

HA OÍDO HABLAR DEL CGPJ 1985- 1995	1984	1985	1986	1988	1990	1995
NO	64	55	54	42	52	38
N.S/N	4	5	6	5	8	4
SI	31	39	40	53	40	58

SABE QUE ES EXACTAM ENTE	1984	1985	1986	1988	1990	1995
RESP. CORRECT A	39%	49%	39%	21%	35%	57%
NO LO SABE	61%	51%	61%	79%	65%	43%

EVALUACIÓN SOBRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL*

	1985	1986	1988	1990	1995
MUY MAL	2	7	2	3	9
MAL	10	14	9	10	18
REGULAR	32	39	44	43	47
BIEN	26	16	28	19	13
EXCELENTE	6	5	2	6	2
NO SABE NO CONTS.	24	19	15	19	11

(*) Pregunta realizada únicamente a los que dan una respuesta afirmativa a lo que constituye la función del CGPJ.

Continuando con lo que constituye el breve análisis de la actitud, consideración y conocimiento de los ciudadanos en relación al Consejo General, llegamos a 1985, fecha en la que el aumento de los sujetos que han oído hablar del Consejo General del Poder Judicial se ha incrementado en ocho puntos respecto al año anterior. Se hace igualmente interesante indicar, que de entre los ciudadanos que tienen una cierta idea de la misión que desempeña la institución a la que nos referimos, el 49% sabe exactamente cual es el papel que desempeña, frente al 39% del período anterior. Considero que la claridad de los cuadros es tal que no precisa de una mayor aclaración.

Durante 1985 las encuestas realizadas a los ciudadanos revelaban una consideración favorable del papel que la institución desarrollaba; destaca especialmente la valoración positiva que sobre su funcionamiento realizaron. Sin embargo, 1986-87 erosionó en cierto modo esa línea ascendente en cuanto a la consideración positiva por parte de los ciudadanos en referencia a la independencia respecto del Gobierno a la hora de llevar a cabo sus actividades; en 1987 en 34% considera al Consejo bastante independiente respecto del Gobierno frente al 37% de 1986.

La función que lleva a cabo el CGPJ es analizada de igual modo por los Jueces y Magistrados. El papel desempeñado por el Consejo en relación a su preocupación por resolver los problemas de la Justicia ha variado notablemente en los últimos años:

PREOCUPACIONES DEL CGPJ POR RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

	1987	1990	1995
Conocimiento profundo	11%	67%	45%
Conocimiento regular	26%	13%	17%
Desconocimiento	45%	17%	32%
Le preocupa	15%	45%	28%
No le preocupa en exceso	22%	13%	21%
Le es indiferente	57%	24%	29%
Pone especial interés en resolverlos	24%	25%	31%
Intenta resolverlos	35%	29%	39%
Es indiferente	37%	39%	30%

Analizar la consideración que tienen los ciudadanos de la institución cuya función principal es mantener la independencia de Juzgados y Tribunales, resulta sumamente interesante, especialmente si tenemos en consideración la inestabilidad política actual, en donde se entremezclan conceptos tales como la responsabilidad política y la responsabilidad judicial y, en donde se traspasan las primeras al ámbito judicial, cuya independencia ha sido puesta en duda debido entre otras razones a la configuración y modo de elección de los miembros del CGPJ previstos en la LOPJ.

VALORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN 1995

INSTITUCIÓN QUE SE ANALIZA	PUNTUACIÓN (0-10)
MONARQUÍA	6,5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	6,2
PARLAMENTO	4,5

investigaciones, entre las que destacamos el informe FOESSA, destinados a evaluar la consideración que de la independencia judicial tienen los ciudadanos, así como del CGPJ, máximo valuarte en la defensa de la misma, su función, cómo actúa...

De entre todos ellos vamos a centrarnos especialmente en los realizados por TOHARIA³⁰³, SANTOS PASTOR o POMPEU CASANOVAS³⁰⁴, dada la gran amplitud de datos que en los mismos se concentran, para con posterioridad, mostrar desde diversas fuentes la realidad de hoy en día, calificado entre otros por PABLO LUCAS VERDÚ, de crisis institucional, al tiempo que se

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	4,2
PARTIDOS POLÍTICOS	3,4

Resultado de las referencias a las que aludíamos anteriormente, de lo que ha sido denominado por algunos autores de la doctrina como la crisis institucional, tenemos que en la actual valoración que de las instituciones hacen los españoles, el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento, ambas resulten consideradas por debajo de lo que podríamos considerar como aceptable; junto a éstos, en lo que constituye la valoración negativa también se incluirían al Gobierno, a los gobiernos autónomos, y a los parlamentos regionales.

³⁰³ Tohaira J.J.: "Informe sociológico: actitud de los españoles ante la Administración de Justicia " en Poder Judicial, Marzo 1985, n.14, págs 33 a 45. Tal y como indican diversos autores, los cambios que ha experimentado la Administración de la Justicia española pueden considerarse como los más importantes del último siglo; ha mejorado notablemente la dotación de medios y personal...sin embargo, no se ha producido en opinión de la ciudadanía un cambio de tal envergadura en lo que constituye su funcionamiento.

³⁰⁴ Pompeu Casanovas: " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de Justicia en España" en Deliberación, op. cit. pág. 14-15

aportarán diversas soluciones para llegar a una más efectiva comunicación entre los ciudadanos en general y las instituciones en particular. Destacar, previo al análisis que realizamos la opinión de RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS para quien " es inevitable que las encuestas sobre la justicia dé resultados negativos ya que la mitad de las personas que tienen un pleito lo pierden o, en una gran parte, son condenadas por una sentencia penal, y naturalmente nadie acepta su propia culpa. Otros de los que tienen relación con la justicia se creen con motivos suficientes para quejarse por la exasperante lentitud de ésta. El resto también suele tener una opinión negativa de la justicia, en gran parte por que lee los periódicos, y en parte por lo que cuentan "³⁰⁵

Debemos tomar como primer punto de referencia los datos obtenidos a través de la encuesta realizada en 1982 por el C.I.S. para el Consejo General del Poder Judicial:

VALORACIÓN	AÑO 1982	AÑO 1984	AÑO 1995
INDEPEND.	33%	35%	21%
NO INDEP.	27%	33%	41%
NO SABE	40%	32%	38%

³⁰⁵ Mérida, M.: Hablan los jueces, la justicia a prueba, Ed. Plaza & Janes, Barcelona, 1996, pág. 53

Esto viene a indicar que durante 1982-1984 " de cada cuatro personas que, sobre este punto, pasan a adquirir una opinión, tres parecen hacerlo en el sentido de percibir a la Justicia básicamente plegada a las presiones e intereses gubernamentales."³⁰⁶ No podemos dejar de lado determinadas influencias que han sido puestas de manifiesto al elaborarse los datos a los que ahora nos estamos referimos; " según que el partido en el gobierno sea o no el partido por el que se ha votado, dicho grado de dependencia tiende a ser percibido como mayor o menor. Pero lo que no se percibe es que esa situación de dependencia sea creación del gobierno existente en cada momento concreto: este no hace sino aprovechar una situación ya creada, acentuándola (según quienes no les votaron) o atenuándola (según los votantes)"³⁰⁷. En la actualidad observamos como algo menos de uno de cada cuatro españoles confía en la actuación desempeñada por los jueces, una gran mayoría se muestra reacia a confiar en los jueces y muestra poca o muy poco crédito frente a las decisiones judiciales, la razón es bien sencilla," el 51% de la población considera que la justicia está en manos de los políticos"³⁰⁸. Parece mayoritaria la opinión de que la

³⁰⁶ Toharia, J.J. " Cuarto Barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial " Revista Poder Judicial, 1988 núm.12, pág.39

³⁰⁷ Toharia, J.J. " Cuarto Barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial " op. cit., pág.39

justicia no es igual para todos, un 76% así lo considera³⁰⁹

Entre los principales defectos que se apuntan como elementos distorsionadores del papel encomendado al CGPJ destacamos, por orden de importancia, en opinión del ciudadano:³¹⁰

³⁰⁸ Encuesta realizada por Imagen y Opinión para el Diario ABC, 30-10-95, pág. 22

³⁰⁹ Pompeu Casanovas " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de la Justicia en España " en Deliberación, ed. APM, Julio-Septiembre 1995 pág. 14-15

³¹⁰ Toharia, J.J.:" Encuesta a una muestra nacional de Jueces" en Revista Poder Judicial, Núm. 19, 1990, pág. 160

EXCESIVA POLITIZACIÓN	10
NO CENTRADO PROBLEMAS JUDICIALES	9
ORGANISMO INOPERANTE	5
NO ES INDEPENDIENTE	3
NO APOYA A LA JUDICATURA	2
ESCASAS COMPETENCIAS	2
COMPOSICION NO ADECUADA	2
NO ASUME SU PAPEL	2
OTRAS RESPUESTAS (1%)	8

iii) El critrerio interno: la opinión de la judicatura

Hacíamos referencia con anterioridad a la posibilidad de percibir la independencia judicial desde dos planos; el de aquellos sujetos que se encuentran al margen del mundo judicial y la consideración que de esa independencia existe dentro del ámbito judicial.

Tal y como ha señalado Federico Carlos Sainz de Robles, " el órgano de gobierno que entregó la Constitución al

llamado poder judicial, los jueces no lo han sentido nunca como suyo; ni cuando podían hacerlo en su porción mayoritaria, ni ahora que se les ha escapado. También es verdad que el Consejo no ha sabido ganarse a los jueces. Las causas de todo ello son mucho más profundas de lo que manifiestan una sentencia del Tribunal Constitucional y una discusión parlamentaria..."³¹¹

Hoy la consideración que la mayor parte de la judicatura tiene respecto al órgano supremo de los mismos, es bastante negativa, sin embargo," forzoso es reconocer que, hoy por hoy, no existe alternativa conocida a los Consejos de la Magistratura en términos de garantía constitucional de la independencia judicial; y ello, con todas las insuficiencias e inconsistencias que han sido señaladas. En este contexto, lo único que se puede reconocer es una reforma, no tanto de las reglas jurídicas, cuando de los comportamientos políticos: una inequívoca convención, que debe nacer de los partidos políticos mismos, tendente a evitar que la judicatura sea objeto de lucha política cotidiana o partidista. Sólo así la composición de los Consejos estará en condiciones de garantizar la independencia de cada uno de los jueces y se conjurará el peligro de que se vuelva contra

³¹¹ Mérida, M.: Hablan los jueces, la justicia a prueba, op. cit., pág. 22

ellos."³¹² Esa consideración negativa del Consejo se debe fundamentalmente a que " los jueces y magistrados no se sienten representados ni amparados por el Consejo, al que se mira con recelo y desconfianza"³¹³. A esto ha colaborado también, en opinión de REQUEJO IBÁÑEZ el modelo de Consejo General del Poder Judicial, totalmente elegido por las Cámaras Parlamentarias, en donde " se escondía y se esconde un claro propósito de hacer lograr tanto una cabeza de playa para el desembarco de un Ejecutivo prepotente en la Justicia como el debate de un órgano que no se aceptaba ni se acepta"³¹⁴, de igual modo se ha expresado FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, para quien " la nefasta práctica parlamentaria llevada a cabo en la propuesta de los Vocales del Consejo ha agravado la imagen de dependencia e ineficacia del órgano"³¹⁵, todo ello, unido a las enemistades personales nada ocultas entre algunos vocales, las querellas interpuestas unos contra

³¹² Díez-Picazo, L.M.: " Nota de Derecho Comparado sobre la independencia judicial" en Revista Española de Derecho Constitucional" C.E.C., núm. 34, Enero-Abril, Madrid, 1992, pág. 37

³¹³ Ponencia presentada al XI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrada en Madrid del 26 al 28 de Octubre de 1995 " Un nuevo Proyecto de Justicia " pág. 6 del Texto Mecanografiado.

³¹⁴ Requejo Ibáñez, J.L.: "Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial", en Papeles de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, Madrid, 1996, pág. 19

³¹⁵ Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit., pág. 91

otros y varias bajas...todo ello llevó al anterior CGPJ a una situación que fuentes judiciales y políticas no dudaron en calificar, cuando menos, de insólita; incluso se ha llegado a decir que el CGPJ está incapacitado funcionalmente³¹⁶, que "está deteriorado"³¹⁷. ¿Acaso responde esta situación a algún objetivo intencionado?: como ha señalado CHIMENTI, sin suponer, "una astucia maquiavélica en el poder político que, por una parte, ampliaba las competencias de los jueces y, por otra mantenía bajo su eficacia, es posible, no obstante, subrayar que una magistratura en crisis está objetivamente más en sintonía con los órganos de dirección política, ellos mismos también en crisis, que una magistratura eficiente."³¹⁸

³¹⁶ " El Consejo ha experimentado un imparable proceso de degradación, hasta llegar casi a la pura incapacidad funcional. Por no hablar de la deslegitimación ante sus gobernados, que difícilmente podría ser mayor ni contar con más fundamento.

El sistema de designación ha resultado ser un fracaso. Tanto en los primeros momentos de la fase del llamado " impulso democrático", desde medios de la mayoría socialista se volvió la vista hacia las asociaciones, considerando la posibilidad de atribuirles alguna intervención en el proceso, en busca de una cierta relegitimación. Propuesta ésta paradójica, pero bien ilustrativa y nada desencaminada." Andrés Ibáñez, P.: " Sobre asociacionismo e independencia judicial" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm.25, Marzo 1986, pág.91

³¹⁷ El Mundo, pág.14, 23/10/95 " El Consejo de los líos " La realidad de las controversias existentes entre los miembros del Consejo es evidente: Pascual Estevill se encuentra acusado de prevaricación, De la Oliva y Gómez de Liaño se han querellado recíprocamente, Robles Acera fue denunciado por un numeroso número de magistrados del Supremo por un artículo periodístico...

³¹⁸ Chimenti, C.: " Algunos rasgos fundamentales del parlamentarismo italiano" en Revista de Estudios Políticos,

En relación a consideración de la independencia al margen de la actuación del Consejo, el "81 por 100 de los Jueces y Magistrados españoles (frente al 79 por 100 de 1987 y el 86 en 1983) considera... que los Tribunales de Justicia tienen en nuestro país un grado de independencia elevado o muy elevado"³¹⁹ ; Cómo puede justificarse lo anterior cuando acabamos de decir que los jueces en su mayor parte no se sienten representados por el Consejo ? la respuesta es sencilla " si no hay independencia colectiva, hay independencia individual. Aquí se vende, alquila y regala el que quiere, y el que no quiere - se ha demostrado - puede tenérselas tiesas con todos "³²⁰

Pese a esa referencia en el seno de la judicatura, tan positiva respecto a la independencia, " en 1987 se detectó un estado de profundo desánimo profesional. En la actualidad, hay un 26% de los jueces que define la imagen interna de la judicatura como mala o muy mala, y un 61% como regular."³²¹

Centro de estudios Constitucionales, núm. 75, Enero-Marzo 1992
pág. 35

³¹⁹ Tohaira J.J.: " Encuesta a una muestra nacional de Jueces" op. cit., pág.133

³²⁰ Manos sucias, el poder contra la justicia, op. cit., pág. 21

³²¹ " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de Justicia en España" por POMPEU CASANOVAS en Deliberación, op. cit., pág. 14-15

JOSÉ GABALDÓN LÓPEZ se expresa de esta manera en relación al prestigio y credibilidad de los jueces, que en cierto modo ha sido puesto en peligro por una situación política repleta de escándalos " lo que más me preocupa... es que un ambiente que llegue a ser contrario a las actuaciones de los jueces españoles pueda llevarnos... a un grave deterioro del prestigio y de la credibilidad de la justicia y de la moral de los jueces, haciendo que se sintiesen zaheridos y poco apreciados, lo que probablemente nos obligaría a trabajar sin el estímulo necesario y en unas condiciones negativas"³²²

En relación a la opinión de los jueces sobre la mala prensa a la que están sometidos; en 1990 " uno de cada tres entrevistados (frente a uno de cada dos en 1987) opina que ello es claramente así, y pasan en cambio, del 12% al 18% los que niegan por completo que realmente exista esa mala prensa. Por otro lado, en 1987, la mayoría absoluta de quienes percibían esa mala prensa (57 por 100) consideraban que la Justicia la padecía en mayor medida que el conjunto de las instituciones del Estado."³²³ Debemos poner de manifiesto como en la actualidad, las descalificaciones a las que son sometidos los jueces en la mayoría de los casos tienen un doble objetivo, " por un lado sirven de medio de presión

³²² Hablan los jueces, op. cit., pág. 131

³²³ Toharia, J.J.:" Encuesta a una muestra nacional de Jueces", op. cit. pág. 136

contra el juez molesto que no se pliega a los dictados de los políticos, y, por otro desvían la atención de la opinión pública en algunos escándalos, cuestionando la legitimidad de los jueces"³²⁴.

³²⁴" El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial" en XI Congreso de la APM, op. cit., pág.12

PARTE SEGUNDA

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS CORTES GENERALES Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO: DESIGNACIÓN Y CESE DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN Iª: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES Y LA ACTIVIDAD DE LAS CORTES GENERALES

- i) La aprobación de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980, de 10 de Enero
- ii) Designación de los Vocales del Consejo en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial
- iii) Motivos que originaron la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial
- iv) La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio: el aspecto favorable

4.1. La enmienda Bandrés Molet:

- a) Tramitación parlamentaria
- b) Fundamentos a favor del cambio
- c) Fundamentos contrarios al nuevo modelo

4.2. Regulación de la designación de los vocales del Consejo:

- a) En el Reglamento del Congreso de los Diputados
- b) En el Reglamento del Senado

4.3. Situación actual:

- a) Introducción
- b) Efectos resultantes de la aplicación de la enmienda Bandrés

4.4 Postura mantenida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 108/1986

4.5 Posibles soluciones a la actual situación de crisis del Consejo:

- a) Jueces corporativos: El autogobierno
- b) Designación directa por el Gobierno
- c) Designación directa por los jueces
- d) Designación por antigüedad

VI) Conclusiones

PARTE SEGUNDA

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS CORTES GENERALES Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

INTRODUCCIÓN

La Constitución regula el Poder Judicial en sus arts. 117 a 127, estableciendo en éstos las reglas generales del ejercicio de la potestad jurisdiccional así como las normas básicas del estatuto de jueces y magistrados. Con dicha regulación, nuestra Constitución no se ha limitado a contemplar los tradicionales instrumentos de protección de la independencia³²⁵ judicial, sino que crea el Consejo General del Poder Judicial.

³²⁵ Tal y como señalara FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, los principios sobre los que debe asentarse la independencia judicial serían: Primero.- Principio de exigencia democrática. Es inútil hablar de independencia judicial cuando no está vigente un sistema democrático. Donde no hay libertad política, no hay justicia independiente, porque los jueces son simples funcionarios sometidos al poder político...

Segundo.- Principio de garantía. No basta una independencia formal sino una organización que permita los medios materiales y personales para que sea posible...

Tercero.- Principio de separación real de poderes o de autogobierno...

Cuarto.- Principio de responsabilidad. El Poder Judicial, para ser independiente, debe ser responsable, con mecanismos de responsabilidad interna o autocontrol y sometido a los jueces, a la ley civil y penal como cualquier ciudadano.. independencia no significa irresponsabilidad, sino precisamente lo contrario, porque en un sistema democrático ningún poder puede ser irresponsable" Véase el Discurso pronunciado por el Ministro de Justicia el día 19 de Julio de 1981 en la Clausura de la V

Se establecen diversas formas de relación entre las Cortes Generales y el Poder Judicial, en lo que ha sido calificado por FERNÁNDEZ CARNICERO como " relaciones de estricto nivel institucional de colaboración entre sus órganos de gobierno "³²⁶. Consideramos que " abrir posibilidades de cooperación es lo más importante ... la colaboración entre ambos Poderes es mucho más importante para el sistema constitucional que cualquiera de las reticencias o conflictos que puedan plantearse; éstos sólo terminarían por erosionar la filosofía de la división de poderes y con ello

Conferencia Hispano-Lusa-Americana y de Filipinas de Ministros de Justicia celebrada en Lima. Recogido en "La justicia en la década de los 80" Colección Temas Constitucionales, ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1981, pág. 17-19

Tal y como ha señalado REVENGA SÁNCHEZ, " la independencia en ningún caso puede elevarse a la condición de valor absoluto, sino que posee un carácter instrumental y relativo.

a) Es un valor instrumental en lo que se refiere a la vertiente individual de la independencia, pues lo que con ella se persigue es la imparcialidad de la decisión del juez...

b) la independencia, en su vertiente individual y colectiva, es asimismo un valor relativo. Contemplar la independencia como un valor absoluto, eludiendo la cuestión de sus límites, equivale a propugnar el aislamiento del juez respecto a la sociedad y el del Poder Judicial respecto a los demás poderes estatales; es decir, contribuir a la sacralización de la justicia y a la consiguiente permanencia de lo que ha sido calificado como uno de los pocos mitos trascendentes que ha logrado subsistir hasta nuestros días." V.Revenga Sánchez, M.: Independencia y responsabilidad del juez: dos valores enfrentados en Rev. Poder Judicial, 2ª época, núm.14, junio 1989, pág. 51-52.

³²⁶ Fernández-Carnicero González, Claro J.: " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " en Poder Judicial, op. cit., pág. 1347

la filosofía de la libertad... sin la configuración de poderes, sin la configuración de esas Cortes y de los Tribunales y sus órganos de coordinación como auténticos poderes dotados de sus propias prerrogativas y buscando las vías de incrementar su recíproca colaboración, difícilmente se puede decir que se este trabajando en mantener e incrementar un sistema en libertad."³²⁷

Uno de los motivos primarios que hacen precisa establecer una " relación permanente entre las Cortes Generales y el Poder Judicial en el actual contexto jurídico constitucional ...trata de la cláusula general de sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, previsión contenida en el artículo 9.1 de dicha norma fundamental "³²⁸. Junto a esta idea, hemos de expresar como " la colaboración entre ambos poderes es no sólo posible, sino necesaria para que el Estado de Derecho sea no sólo expresión de una voluntad constitucional (art. 1.1 de la Constitución), sino manifestación de una sociedad constituida"³²⁹. La

³²⁷ Fraile Crivillés, M.:" Las Cortes Generales y el Poder Judicial" en II Jornadas de Derecho Parlamentario, op. cit., pág.103

³²⁸ Fernández-Carnicero González, C.J. : " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " op. cit., pág.1351

³²⁹ Ruiz Vadillo, E.:" Independencia judicial, el CGPJ, y las Cortes ", en II Jornadas de Derecho Parlamentario, op. cit., pág. 177

independencia³³⁰ y separación de poderes, " obliga a una colaboración funcional entre todos los órganos del Estado en virtud de la cual únicamente es posible reconocer a cada uno de los poderes estatales una independencia relativa "³³¹ además, "la colaboración entre los órganos constitucionales responde a la esencia misma de la democracia parlamentaria"³³².

Parece evidente que, las relaciones entre ambos Poderes, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial son múltiples, recíprocas³³³ y todo lo complejas que pueda uno imaginarse.

³³⁰ La APM en su XI Congreso considera que la "independencia judicial no se basa únicamente en la libertad de criterio individual del Juez, sino que resulta fundamental también una independencia colectiva e institucional. Tanto uno como otro aspecto se ven en la actualidad gravemente afectados por la desaparición o falta de garantías en el ejercicio de la función jurisdiccional... y por el absoluto sometimiento al Ejecutivo que se manifiesta en el control político del Consejo General del Poder Judicial, sus paupérrimas consecuencias y la total dependencia del Gobierno en la atribución de medios materiales y personales " " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial" cit., pág.13. En este mismo sentido se han manifestado diversos miembros de la judicatura española; " O los jueces son independientes, o en lugar de impartir justicia la perpetran. O la justicia es independiente de cualquier poder político, social y económico, o no es justicia." Véase Manos sucias, el poder contra la Justicia, op. cit., pág. 110

³³¹ Terol Becerra, M.J.: El Consejo General del Poder Judicial op.cit., pág. 44

³³² Fernández-Carnicero González, Claro J.: " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " en El Poder Judicial, op. cit. pág. 1344

³³³ " Las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial no podrán dejar de presentar el aspecto de preeminencia que ostenta el titular directo de la soberanía nacional. Y en este orden se puede admitir una responsabilidad política del

Las Cortes Generales intervienen en la composición del Poder Judicial especialmente de manera relevante con la entrada en vigor de la enmienda Bandrés, de igual modo intervienen en la composición de los miembros del Tribunal Constitucional. Participan también en la " organización general de todos los Tribunales a través de las leyes, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de las distintas leyes procesales...las Cortes intervienen, por otra parte en la aprobación de la legislación que aplican los Tribunales...el Poder Judicial interviene en la composición de las Cortes y va a intervenir de dos formas : por una parte, en cuanto a que algunos de sus miembros del Tribunal Supremo y de las Audiencias, van a formar parte de las Juntas Electorales que son los órganos administrativo -judiciales encargados de la custodia del censo y del adecuado desarrollo de las elecciones. Por otro lado, son los Tribunales los que

Consejo ante las Cortes. Este tipo de responsabilidad se refleja no en sanciones o en coerciones, sino en medidas más difusas, morales, de tipo sociológico, que pueden ser la dación de cuentas, la sanción, y aún la mera queja o reproche y, en definitiva, la demostración de pérdida de confianza. El cauce o instrumento, el proceso a seguir para estas relaciones y, en su caso, exigencia recíproca de responsabilidad política entre los Poderes Legislativo y Judicial, está señalado...por la confección de la Memoria anual sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia que el Consejo ha de remitir a las Cortes Generales" Véase Memoria que el Consejo General del Poder Judicial eleva anualmente a las Cortes Generales, Memoria de 1982, aprobada el 30 de julio de 1982, Ed. CGPJ, Madrid, pág.19

tienen el examen de actas, no las propias Cortes, con lo cual están incidiendo sobre la composición de las mismas"³³⁴

Una modalidad de relación entre las Cortes Generales y el Poder Judicial, a través del Consejo General, es la derivada de la remisión por este último a las Cámaras de informes³³⁵ o Memorias en relación a proyectos o proposiciones de Ley ya formulados, cuando dicha remisión se haga en cumplimiento de un precepto legal... cabe también la remisión potestativa a las Cámaras de informes o Memorias del Consejo General del Poder Judicial sobre problemas o circunstancias que afecten institucionalmente al regular funcionamiento de la Administración de Justicia y que, tras su presentación, habrán de seguir el curso señalado a las propuestas o iniciativas.

³³⁴ Fraile Crivillés, M.:" Las Cortes Generales y el Poder Judicial" en II Jornadas de Derecho Parlamentario, op. cit., pág.102

³³⁵ Lucas Murillo ha señalado acertadamente, en relación al tema de los informes que el Consejo debe llevar a cabo, que con las modificaciones operadas en la LOPJ 6/1985, de 1 de julio por la LO 16/1994, de 8 de noviembre, éstos van a tener mayor relevancia. Así, " no es probable que sus informes surtan un efecto distinto si se remiten al Gobierno para que éste los tenga en cuenta al elaborar un anteproyecto de ley que si se envían a las Cortes para que los consideren al tramitar el correspondiente proyecto. Sin embargo, en el primer caso se asesora al Gobierno, en el segundo al Parlamento, lo que sin duda posee una mayor relevancia" Véase " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op. cit., pág. 227

La formulación de peticiones del Consejo General al Parlamento, con el objeto de llamar la atención de éste sobre aquellas materias cuya transcendencia para el ordenamiento jurídico reclame una especial interés del órgano político supremo puede y debe ser considerada como una efectiva vía de relación entre las Cortes Generales y el CGPJ. La iniciativa originaria de tales peticiones habría de corresponder, normalmente, a los órganos judiciales, siendo el Consejo General, por tanto cauce de las demandas del juzgador. El fundamento de esta colaboración lo encontramos en el artículo 77 de la Constitución. Al acudir a un instituto jurídico, hoy de muy escasa relevancia, como la petición, lo hacemos por considerar que ésta, desde los orígenes medievales de la institución parlamentaria ha sido un instrumento impulsor de su desarrollo, sobre todo en Inglaterra, en donde llegó a ser legis causa ya en el siglo XV, y conoció gran auge a fines del siglo XVIII.³³⁶

Las reuniones al más alto nivel de las Autoridades de los tres poderes podrían también facilitar la armonía y coherencia entre ellos en beneficio del Estado.

³³⁶ Fernández-Carnicero González, Claro J.: " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " en Poder Judicial op. cit. pág. 1347-1349, también recogido con posterioridad por Ruiz Vadillo , E.: " Independencia judicial, el CGPJ y las Cortes " en II Jornadas de Derecho Parlamentario, op. cit. pág. 177-178

Al hacer alusión en el texto de la investigación a las relaciones entre los distintos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, surge la cuestión de las conexiones existentes entre nuestras distintas instituciones al margen de las ya mencionadas. Una vez más se realza el papel encomendado al Consejo General del Poder Judicial, no sólo como órgano de garantía de la independencia judicial, sino también, como órgano de enlace.

Previo a dicho análisis, resulta interesante poner de manifiesto los efectos positivos de la opción tomada por el Consejo General del Poder Judicial de " tener designados dos Vocales con encargo permanente para mantener comunicación institucional con las Cortes Generales. Los comisionados, al comienzo de la actual legislatura, visitaron a los Presidentes de ambas Cámaras para presentarles sus credenciales como interlocutores con el Consejo General, todo ello con independencia de los contactos que los Presidentes de dichas Cámaras y el Consejo consideren oportuno mantener directamente."³³⁷

³³⁷ Memoria que el CGPJ eleva anualmente a las Cortes Generales, Memoria de 1984, Ed. CGPJ, Madrid, pág.174

El Consejo desarrolla esas actividades de enlace a las que hacíamos referencia con el Ministerio Fiscal, con el Ministerio de Justicia, con el Defensor del Pueblo, con los Colegios de Abogados y Procuradores, con las Universidades...incluso podemos hablar de las relaciones internacionales mantenidas por el Consejo. Todas estas actividades se encuentran recogidas en las Memorias.

De las relaciones de la Comisión Delegada del Consejo con el Ministerio de Justicia dejan constancia las Memorias de 1987, en la que se recogen las jornadas de reunión de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1986 y enero y febrero de 1987, en las que se trataba el tema de la organización de Juzgados y Tribunales, del personal colaborador de la Administración de Justicia y de las instalaciones y medios materiales de los órganos jurisdiccionales. De la Memoria de 1988 destacan las diversas reuniones celebradas durante julio y octubre de 1987, así como de las celebradas en enero, marzo, abril y junio de 1988. Durante los años sucesivos las reuniones se han ido repitiendo, así lo reflejan las distintas Memorias del Consejo.

Debemos resaltar la relación existente entre el Consejo General del Poder Judicial con un institución garantista como

es la del Defensor del Pueblo. Para MARÍA PÉREZ-UGENA es la Memoria que el Consejo eleva anualmente a las Cortes Generales el documento en el que dichas relaciones aparecen descritas, iniciándose dicha exposición a partir del año 1984. Desde esa fecha, las citadas memorias incluyen cada año una alusión a las cuestión."³³⁸ Es más, el propio Consejo ha designado un Vocal delegado para las relaciones con el Defensor del Pueblo que atiende o investiga, mediante el Servicio de Inspección del Consejo aquellos casos de los que el Consejo General tiene conocimiento, porque el Defensor del Pueblo le remite traslado de la queja enviada al Ministerio Fiscal. En 1985 destacan las relaciones entre ambas instituciones en materias tales como Seguridad Social y aplicación de la reforma del Código Civil en materia de incapacitaciones. Como indica la Memoria de 1986, en noviembre de 1985 se llevó a cabo la primera reunión destinada a componer un sistema de relaciones periódicas realmente eficaz para el logro de los fines institucionales. En 1987 la relación entre ambas instituciones tuvo como objetivo principal las materias competencia del Consejo en cuanto a la situación penitenciaria, sobre la que el Defensor del Pueblo expuso su parecer. En 1988 los principales temas objeto de estudio conjunto han sido los temas relativos a los

³³⁸ Véase PÉREZ-UGENA COROMINA, M.: "Defensor del Pueblo y Cortes Generales" Congreso de los Diputados, Monografía núm.26, 1996, Madrid, pág.74.

Menores o, el derecho a una tutela judicial efectiva. En 1991, además de las ya habituales quejas relativas al retraso en la Administración de Justicia, se remiten por parte del D.P. diversos informes relativos a: la protección de las víctimas de delitos violentos, notificación de las resoluciones judiciales a quienes no son parte en el procedimiento, cuestiones relacionadas con la jurisdicción de menores. De 1992 destacamos el interés mostrado por la institución del Defensor del Pueblo en torno a los problemas judiciales relativos a la situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España. Durante 1994 y 1995 únicamente se deja constancia, por parte del Defensor del Pueblo de las quejas presentadas con motivo de los retrasos de la Administración de Justicia³³⁹

De las relaciones del Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio Fiscal descubrimos que se han venido desarrollando con normalidad desde 1983. Al igual que para los supuestos de relaciones con las Cortes Generales o con el Defensor del Pueblo, un Vocal ha sido designado para llevar a cabo las relaciones con el Ministerio Fiscal: desde el 7 de julio de 1982, con carácter de permanencia se designaba un Vocal encargado de dichas relaciones... se han

³³⁹ Memoria que anualmente el CGPJ eleva a las Cortes Generales, CGPJ, Memoria de 1995, aprobada el 12 de julio, pág. 86-87

producido intercambios con efectividad y eficacia, en especial en el punto a la participación del Ministerio Fiscal en el Acuerdo Marco de Colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, y en los sistemas y cursos de perfeccionamiento del Personal de la Administración de Justicia, así como en el estudio conjunto de materias que, por su índole, afectaban a fiscalías y órganos jurisdiccionales³⁴⁰. En ningún momento se ha considerado la actuación del Ministerio Fiscal como la de un órgano Inspector; sin embargo, la Memoria de 1986 refleja, " con independencia de las comunicaciones que impone la tramitación de los expedientes disciplinarios contra jueces y magistrados...como la falta de contacto institucional ha sido una constante"³⁴¹ Destacar como el CGPJ actúa a través del Ministerio Fiscal cuando interesa que se promuevan actuaciones jurisdiccionales.

Otras vías de enlace que el Consejo General del Poder Judicial mantiene son las llevadas a cabo con las Asociaciones, Colegios Profesionales y Sindicatos. Uno de los supuestos que mayor relevancia tuvieron en este sentido fue el referente a la elaboración por el CGPJ sobre el Anteproyecto de LOPJ. En 1985 se creaba la Comisión Delegada

³⁴⁰ Memoria que el CGPJ eleva anualmente a las Cortes Generales, Memoria de 1983, Ed. CGPJ, Madrid, pág. 132.

³⁴¹ Véase Memoria de 1985, op. cit., pág. 72

de relaciones con las Asociaciones y Colegios Profesionales que, ha dedicado sus actividades de manera fundamental a la relación del Consejo con Abogados, Procuradores y Asociaciones de la Magistratura. Esta Comisión sería reforzada en 1987, tras la reunión celebrada el 3 de junio, en la que se decidió incluir a tres nuevos Vocales y trabajar como dos subcomisiones: una encargada de las relaciones con las Asociaciones de Jueces y Magistrados, otra dedicada a los restantes cometidos. En cuanto a las actividades derivadas de este tipo de relaciones, destacamos la constitución de una Comisión Mixta, entre Vocales del Consejo y representantes de las tres asociaciones, en marzo de 1988, cuyas propuestas derivaron finalmente en el RD 104/88 de 25 de noviembre, sobre complemento de destino, y el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 1989 sobre módulos de trabajo. Ya en fechas más próximas, destacar la reunión mantenida en octubre de 1994 por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, donde se expusieron diversas Ponencias relacionadas con los problemas más acuciantes de la ejecución de pena de privación de libertad.

El Consejo General del Poder Judicial también interviene de manera activa relacionándose, a través de una Comisión Delegada, con las Universidades, con las que realiza convenios de colaboración. De la Memoria de 1990 se

desprenden datos referentes a los acuerdos firmados con la UAM, la Universidad Carlos III y la Universidad de Alicante. En 1992 se firmaron acuerdos con Universidades tales como Cáceres, Sevilla, Castilla-La Mancha o Jaime I de Castellón. En 1994 van a ser las Universidades de Granada, La Coruña y Carlos III las que se beneficien de dichos acuerdos. Durante 1996, se han realizado convenios entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Murcia.

Parece interesante, en este apartado hacer mención de las distintas actividades que desarrolla el Consejo en el ámbito internacional: así, sólo entre 1988 y 1989 el Consejo establece diversos contactos con el Consejo de Europa y el Tribunal de Derechos de Estrasburgo, con los Tribunales Supremos de Estados Miembros de las Comunidades Europeas, con el Tribunal Supremo de la URSS, con la OIT, con la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa o con el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Con posterioridad estas actividades se han ido no sólo consolidando sino incluso incrementando; un ejemplo de lo anterior puede ser el interés mostrado por el Consejo por los cambios producido en la Europa del Este que " ha orientado su política hacia un apoyo decidido a la consolidación de los regímenes surgidos

de carácter democrático."³⁴² De la Memoria de 1990 destacamos las relaciones con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otras instituciones comunitarias, con reuniones y visitas en octubre de 1989 y mayo de 1990. Publicaciones como la de " Estudios de Derecho Comunitario Europeo" o la celebración del Curso " Aplicación del Derecho Comunitario " celebrado en Granada. Destacamos de igual forma el XII Coloquio de Presidentes del Consejo de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la CEE celebrado en junio de 1990. La Memoria de 1992 indica que " se ha producido un incremento notable de las actividades de la Consejería Delegada de Relaciones Internacionales. Ello se debe en parte, a la propia estructura interna del Consejo que atribuyó a una sola Vocalía las competencias y responsabilidades de este área, y por otra, a la voluntad decidida de aprovechar al máximo las posibilidades del Consejo General como interlocutor también en el plano internacional en las materias en las que ejerce sus competencias de manera exclusiva"³⁴³ En materia de Convenios se han celebrado un total de cinco; tres con cada una de las instituciones de igual naturaleza al CGPJ en Francia, Italia y Portugal, una con la Agencia Española de Cooperación Internacional y otra con el ILANUD (Instituto Latinoamericano

³⁴² Véase Memoria del CGPJ, op. cit., de 1993, pág. 78

³⁴³ Véase Memoria de 1992, aprobada el 15 de julio de 1992, pág. 63

de las Naciones Unidas para la prevención del Delito) En el ámbito de la Comunidad Europea también se ha incrementado la participación. Pero sin duda, donde mejor se refleja el papel altamente participativo del Consejo se observa en la multitud de Congresos, reuniones y seminarios desarrollados, o en los que ha participado el CGPJ.

De 1994 destaca la firma de numerosos convenios del Consejo:

- Con la Escuela Nacional de Francia
- Con el Ministerio de Justicia Argentino
- Con la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
- Con el C.S.M. en Italia
- Con el Centro de Estudios Judiciales de Portugal
- Con el Consejo Superior de la Magistratura en Portugal
- Con el Reino Unido a través del Departamento de Relaciones Internacionales del Lord Chancellor y la Vocalía de Relaciones Internacionales.
- Con el ILANUD
- Con Alemania

De igual forma se consiguió por parte del Consejo celebrar un congreso en Madrid en el seno del programa " Themis Demo Droit del Consejo de Europa para los países de Europa Central y Este relativo al papel de los Consejos de la Magistratura como órganos del Gobierno del Poder Judicial y

su relevancia en la garantía de la independencia judicial" celebrados del 9 al 11 de noviembre de 1993, en el que participaron un total de 16 países.

Las actividades en el ámbito de la Comunidad Europea se resumen en:

- Organización de visitas de Jueces españoles al Tribunal de Justicia de Luxemburgo
- Se completa el Archivo de resoluciones de Tribunales españoles que aplican el Derecho Comunitario Europeo.
- Difusión de la jurisprudencia oficial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
- Organización del Curso de Derecho Comunitario en colaboración con la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada del 24 al 27 de Febrero de 1993
- Participación en reuniones del Grupo Ad hoc sobre crimen organizado creado en el seno del Grupo Trevi.

En el ámbito Iberoamericano destacamos:

- Realización en Argentina de un programa de cooperación para trasladar la experiencia española
- Programa de cooperación con jueces chilenos

- II Conferencia de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Iberoamérica, Portugal y España, celebrado en el Consejo los días 4 al 7 de octubre de 1994

En 1996 España ha seguido manteniendo, y, por tanto el CGPJ relaciones con L'Ecole National de la Magistrature Française , con el Centro de Estudios Judiciarios Portugués y también con la Academia de Derecho Europeo, y se han desarrollado trabajos en diversos grupos de Estudio con la Comisión Europea, sobre todo en materia de derecho comunitario³⁴⁴

Los diversos conflictos jurisdiccionales surgidos en relación al ámbito de actuación, en ocasiones no perfectamente delimitado, entre el Poder Judicial y el Parlamento constituyen un tipo de relación que, si bien no es todo lo positiva que pudiera esperarse, viene a poner de manifiesto la continua relación entre las instituciones a las que nos referimos. (ej. de esta situación puede ser el conflicto planteado recientemente entre la judicatura y el Gobierno sobre los documentos secretos del CESID, al considerarse dichos documentos bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales)

³⁴⁴ Véase Cortes Generales, Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, Comisiones de Justicia e Interior, Año 1996, VI Legislatura, núm. 37, Sesión 5, 26 junio de 1996, pág. 648

La relación económica existente entre el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento viene se pone de relieve de manera anual, cuando el Consejo debe remitir su Presupuesto.

Una conexión, calificada por algunos de nuestro autores como medio de control lo constituyen las Comisiones de Investigación que, pueden definirse como los instrumentos con que cuenta el Parlamento para llevar a cabo una búsqueda de datos referentes a una determinada actividad.

Sobre las distintas vías de relación entre el Consejo General del Poder Judicial y la las Cortes Generales trata el capítulo segundo de la investigación, en donde de manera pormenorizada se van analizando todas y cada una de ellas para de esta forma obtener una perspectiva desde la que se nos permita entrar a debatir sobre los principales problemas que afectan al Consejo General del Poder Judicial y con él, a la judicatura como conjunto. Estas distintas vías de relación son las que por otra parte nos permiten definirnos sobre la naturaleza de esta institución. Podemos afirmar, junto a PIZZORUSSO y TEROL BECERRA que el Consejo actúa como un verdadero y auténtico órgano de enlace entre los distintos

poderes del Estado: y, de manera especial entre el
Legislativo y el Judicial.

CAPÍTULO PRIMERO: DESIGNACIÓN Y CESE DE LOS VOCALES DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN 1ª. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE DESIGNACIÓN DE LOS
VOCALES Y LA ACTUACIÓN DE LAS CORTES GENERALES

i) La aprobación de la Ley Orgánica del Consejo General del
Poder Judicial 1/1980 de 10 de Enero

Para llegar a comprender de forma correcta las distintas reivindicaciones y quejas que surgirían en el seno del Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de la enmienda Bandrés, que vendría a modificar sustancialmente la forma de designación de los vocales del CGPJ, se hace necesario mostrar con carácter previo, las líneas básicas sobre las que descansaba el mencionado Consejo. Debemos responder en primer lugar a la razón que originó el desarrollo de una Ley Orgánica sobre el Consejo General del Poder Judicial frente a la prevista Ley Orgánica del Poder Judicial.

El día 3 de octubre de 1979 era aprobada la Ley 2/1979, reguladora del Tribunal Constitucional. Para dar efectivo cumplimiento a la composición del mismo, se hacía preciso que el Consejo General del Poder Judicial llevara a cabo la

designación de dos de los miembros del referido Tribunal. Fue esta circunstancia, entre otras, la que dio origen a que el 23 de Octubre de 1980 se constituyera el Consejo General del Poder Judicial; tan sólo un año de diferencia con respecto a la Ley Orgánica del T.C. Dos ideas se recalcan si atendemos a lo anteriormente expuesto: por un lado, la rapidez con que fue elaborada la normativa del Consejo; sin embargo, " fue inútil la precipitación, porque el Tribunal Constitucional decidió iniciar sus funciones el 12 de julio de 1980, con sólo diez Magistrados, eligiéndose por ellos y entre ellos su Presidente y Vicepresidente"³⁴⁵. Por otra parte, aunque la Constitución prevé que la regulación del Consejo se hiciera en la LOPJ, se optó por realizarlo al margen de dicha Ley, aunque se respetaría, eso sí, el carácter de orgánico de la ley. La LOPJ vería la luz en 1985, fecha que pudiera considerarse demasiado tardía atendiendo a los intereses del Tribunal Constitucional.

ii) Designación de los Vocales del Consejo en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial

En el artículo 1 del Proyecto de LOGPJ, 1/1980, de 10 de Enero, que no variará a lo largo de la tramitación

³⁴⁵ Sainz de Robles ,F.:" Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial" en Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría.Tomo IV op. cit., págs.3000 y ss.

parlamentaria establecía la existencia de un órgano de gobierno del Poder Judicial:

" El gobierno del Poder Judicial corresponde a su Consejo General de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente Ley Orgánica ".

Es suficiente para comprender el espíritu de la LOCGPJ tomar en consideración los artículos 7, 8 y 12 del Proyecto de LOCGPJ, relativos a la forma de designación de los Vocales del Consejo. El artículo séptimo del Proyecto de LOCGPJ contemplaba un Consejo integrado por veinte vocales:

" doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión ".³⁴⁶

Especialmente interesante resulta el artículo octavo, este último, establecía el modelo electoral para llevar a cabo la elección de los vocales del Consejo :

" Los doce vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales en los términos establecidos en la presente ley.

³⁴⁶ Se llevó a cabo la presentación de dos enmiendas; una de tipo gramatical y otra proponiendo la eliminación de diferencias entre los Vocales por razón de su origen. Presentadas por el Grupo Parlamentario Comunista, la enmienda núm. 166, así como la enmienda que este mismo Grupo Parlamentario a la totalidad, véase la enmienda núm. 154.

Integrarán el Consejo al menos un Presidente de Sala del Tribunal Supremo, tres Magistrados del Tribunal Supremo, tres Magistrados, un Juez de Partido y un Juez de Distrito. Los restantes puestos serán distribuidos en el Reglamento de Organización entre las categorías existentes, atendiendo a su jerarquía en la carrera y al número de miembros que la integran."³⁴⁷

Tras la enmiendas presentadas al Proyecto de la LOCGPJ, el Informe de la Ponencia propuso un nuevo texto en relación a la elección de los componentes del Consejo. Así, en el Proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales, y que no sufriría modificación alguna a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, se establecía en su art.8º, que:

³⁴⁷ Las enmiendas presentadas al art. 8 se centraron, fundamentalmente en la deslegalización en un Reglamento del procedimiento de elección de determinados Vocales, en que no se representaban los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas, y, en cómo se debían representar las categorías judiciales. Véase la enmienda núm. 154 a la totalidad del Grupo Parlamentario Comunista criticando el mecanismo electoral por cercenar la democracia y sustituirla por un sistema de predominio de la jerarquía y corporativista. Rechazaron la deslegalización las enmiendas núm. 3 del Grupo de Coalición Democrática y la núm. 21 del Grupo de Minoría Catalana. Hubo otras enmiendas que también merecen ser destacadas: la enmienda núm. 167 del Grupo Comunista que, no consideraba necesario que se representaran todas las categorías judiciales y menos cómo aparecían en el Proyecto, es decir, primando a las categorías jerárquicas superiores y violando el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución; la enmienda núm. 85, del Grupo Socialistas de Catalunya propuso que se respetara la proporcionalidad del número de categorías, la enmienda núm. 232 del Grupo Andalucista estableció una mayor proporcionalidad en el reparto de puestos, la enmienda núm. 160 del Grupo Socialista propuso una nueva distribución de puestos entre los Vocales. Véase SAINZ MORENO, F.: Ley Orgánica del Consejo... op. cit., págs. 31 a 160

" los doce vocales de procedencia judicial serían elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales."

En lo que al artículo 12 se refiere el Proyecto establecía:

" los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en activo. El Reglamento de Organización podrá disponer la celebración de elecciones por separado para determinadas categorías"³⁴⁸

Una conclusión global, a la que llegamos tras el breve análisis de los artículos anteriormente citados sobre la regulación del CGPJ en la LO 1/1980, sería que daba una " notable primacía a los vocales de origen judicial favoreciendo así visiones judicialistas de la posición constitucional y de las funciones del Consejo, y con ello del propio Poder Judicial, que no tardaron en manifestarse en forma colectiva "³⁴⁹

³⁴⁸ Destacar que en el Informe de la Ponencia desaparecería esta última referencia relativa al *Reglamento de Organización podrá disponer...* permaneciendo igual el resto del artículo en toda su tramitación legislativa.

³⁴⁹ Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo General del Poder Judicial" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 9, Mayo-Agosto 1991, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág.152

Destacamos un aspecto que nos ha llamado la atención en lo que a la LOCGPJ se refiere; la elección del Presidente del Consejo General del Poder Judicial:

En el art. 27 de la ley dispuso que eran elegibles los Magistrados del Tribunal Supremo, los miembros de la Carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión.

Se establecía pues en la regulación existente un orden de precedencia, así al menos lo ha considerado cierto sector de la doctrina, entre otros RODRÍGUEZ-AGUILERA o GERPE LANDÍN, " el sistema aunque no lo impone establece... un orden de precedencia, no vinculante, al indicarse en primer lugar, entre quienes puede hacerse la elección, a los magistrados del Tribunal Supremo, seguidos de los miembros de la carrera judicial señalándose por último a los juristas de reconocida competencia"³⁵⁰

La reforma de 1985, con la entrada en vigor de la LOPJ, supuso un avance en cuanto al funcionamiento democrático

³⁵⁰ Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo General del Poder Judicial" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales op. cit., pág.151

interno del Consejo, los propios vocales eligen al Presidente y Vicepresidente, aunque el nuevo sistema para la designación de los vocales, al igual que BUSTILLO BOLADO " no creo que merezca un juicio tan positivo."³⁵¹

**iii) Motivos que originaron la reforma de la Ley Orgánica
del Consejo General del Poder Judicial**

La línea interpretativa mantenida en el Proyecto de LOPJ³⁵², responde, al igual que la ley para el Consejo General

³⁵¹ Bustillo Bolado, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" en Poder Judicial, op. cit., pág. 71

³⁵² Debemos hacer referencia al primer intento de LOPJ llevado a cabo en 1980. El tema ha sido objeto de análisis por TRUJILLO RINCÓN:

Este Proyecto fue el primer intento serio de desarrollo del art. 122 de la Constitución. Como ya se había promulgado la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, la Disposición Adicional undécima de este Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que no llegó a aprobarse nunca, preveía la incorporación como Libro V del texto articulado de la Ley del Consejo, con algunas modificaciones. El Proyecto quedó automáticamente sin efecto al producirse la disolución de las Cortes en septiembre de 1982 e iniciarse, por tanto, una nueva Legislatura después de las elecciones de 1982. Pero también fueron muchas otras las circunstancias que influyeron en la no aprobación de este primer proyecto de ley: en primer lugar, los cambios de títulos habidos en el Ministerio de Justicia a lo largo de los Gobierno de UCD -recordemos que entre septiembre de 1980, en la que deja de ser Ministro el Sr.CAVERO y noviembre de 1982, pasaron por allí, FERNÁNDEZ ORDOÑEZ y CABANILLAS GALLAS-, en segundo lugar, las enmiendas de totalidad y parciales presentadas; en tercer lugar, la lógica falta de impulso a la tramitación del Proyecto por quienes no se sentían suficientemente identificados con la orientación del mismo; y , en último lugar, la dificultad de conseguir un compromiso de

del Poder Judicial que, sería modificada con posterioridad, a un espíritu claramente favorable a aquellos miembros del Consejo procedentes de la rama judicial. No parecía pues existir una intención por parte de los parlamentarios de llevar a cabo una reforma en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, las variaciones que se van a provocar con la presentación de la enmienda Bandrés, va a originar no pocas quejas dentro del tradicional sistema judicial español que, se considera despojado de la facultad de designación de los miembros de su propio Consejo. El motivo responde a una hábil artimaña del PSOE que, con la intención de controlar al Poder Judicial decide intervenir a través del Congreso y Senado, en la designación de los miembros del Consejo.

De entre los numerosos miembros de la judicatura, juristas y miembros del mundo académico, que han hecho referencia a las circunstancias que provocaron el cambio en la regulación normativa existente, destacamos a SAINZ DE ROBLES por constituir su opinión, claro exponente de un amplio sector de la judicatura; " El cambio de la estructura del CGPJ obedece ... a un propósito depurador, entendiendo éste en el preciso sentido de eliminar de la magistratura lo

consenso entre el texto de UCD y el alternativo del PSOE.

Véase TRUJILLO RINCÓN, M.A.: " Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado", Congreso de los Diputados, Madrid, 1995, págs.351-352

más rápidamente posible a cuantos funcionarios, por su edad, habían servido casi toda la vida al régimen anterior. Animo depurador que atribuía al partido en el poder (desde octubre de 1982, el PSOE) y a otras formaciones políticas de izquierda"³⁵³. La opinión recogida en las líneas anteriores, no hace sino poner de manifiesto el clima de esos momentos.

En lo relativo a la configuración interna del Consejo que presentaba el Anteproyecto de LOPJ, al igual que MOVILLA ALVAREZ o PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ, consideramos que " hacía evidente un claro propósito de reforzar en su interior la posición de los vocales de procedencia parlamentaria. Con este objeto, se exigía un quorum cualificado (tres quintos) para la adopción de determinados acuerdos importantes relativos a las propuestas para el nombramiento del Presidente del TS y del propio Consejo y de los miembros del Tribunal Constitucional... Se determinaba que el cargo de Vicepresidente recaería en vocal de procedencia parlamentaria...Se preveía la presencia de dos vocales de aquella extracción en la Comisión Permanente.

iv) La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de Julio: el aspecto favorable.

³⁵³ Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo General del Poder Judicial" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, op. cit., pág. 152

Consideramos acertada la contribución realizada por esta ley en lo concerniente a la posibilidad de que la figura del Vicepresidente del CGPJ sea cualquier vocal del Consejo, eliminándose de esta manera la discriminación existente en la LOCGPJ relativa a los Vocales de procedencia parlamentaria, a los que se les privaba de la posibilidad de acceder a dicho cargo, debido al art. 28.2 que, venía a establecer la sustitución ocasional del Presidente por la del Magistrado más antiguo, miembro del Consejo General. Pese a que este apartado merece ser destacado, sin embargo, el punto de mayor transcendencia de la referida ley vendrá en lo que ha sido conocida como la enmienda Bandrés, cuya valoración no puede llegar a ser tan positiva.

4. La enmienda BANDRÉS MOLET

a) Tramitación parlamentaria de la enmienda número 25

Durante la tramitación de la vigente LOPJ 6/1985, de 1 de Julio, **los debates parlamentarios** suscitados en el seno del Congreso y Senado, recogen un hecho cuya transcendencia a la hora de desarrollar el estudio de lo que constituye la problemática en la elección de los miembros de la institución que analizamos no puede dejarse a un lado: el artículo 124

del **Proyecto** de LOPJ³⁵⁴, presentado por el Gobierno siendo Ledesma Bartret el Ministro de Justicia, decía así;

" El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey, por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión."

Al amparo de las facultades atribuidas por el reglamento del Congreso, el diputado por Euskadiko Ezquerria D. Juan María Bandrés Molet presentó la enmienda 25 que, tenía como objeto la sustitución parcial del texto propuesto a la Cámara por este otro:

" ... por un período de cinco años. Los Vocales serán nombrados, diez a propuesta del Congreso de los Diputados y otros diez a propuesta del Senado por

³⁵⁴ Véase BOCG, Serie A: Proyectos de Ley, de 19 de septiembre de 1984, núm. 118-I, recogido en LOPJ, Trabajos Parlamentarios, Tomo I, Cortes Generales, pág. 7 y ss.

mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales y entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión, debiendo ser como mínimo el número de los Jueces y Magistrados propuestos."³⁵⁵

Una vez presentadas las enmiendas en el Congreso³⁵⁶, se llevó a cabo el **informe de la Ponencia**, en la que " la enmienda 25 fue convertida por el señor Bandrés Molet en adición de un segundo párrafo del precepto, tesis que fue apoyada por el señor Castellano Caralliaguet "³⁵⁷, se consideró apropiado desestimar la corrección 1001³⁵⁸ por

³⁵⁵ LOPJ, Trabajos Parlamentarios, Vol. I, op. cit., pág. 193

³⁵⁶ Las Enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados pueden ser ordenadas en tres bloques así lo entiende GERPE LANDÍN " La composición del CGPJ, op. cit., pág.155:

- a) las que mantienen la elección judicial y la formula electoral, disintiendo en la composición de las listas : proponen que estén compuestas por Jueces y Magistrados sin fijar puestos por categorías; es esta posición están la enmienda comunista, la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y la del Grupo Parlamentario Socialista;
- b) las que mantienen la elección judicial, fijan la composición de las listas (2 Magistrados del TS, 6 Magistrados y 4 Jueces), defendiendo que la lista sea abierta; en esta posición están las Enmiendas de Minoría Catalana y del Grupo Popular;
- c) la solitaria Enmienda Bandrés

³⁵⁷ LOPJ Trabajos Parlamentarios, op. cit., pág. 667

³⁵⁸ La enmienda 1001, presentada por el Grupo Popular como primer firmante, al artículo 124 del proyecto de ley orgánica del poder judicial, establecía: " El Consejo General del Poder

entenderse como preferible el articulado presentado en el Proyecto de ley orgánica. El texto sustentado por la Ponencia, quedó redactado tal y como reproducimos;

" El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey, por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión."

Como puede observarse, se trataba de una fiel reproducción del anteproyecto de LOPJ; no se había atendido pues a la enmienda del Diputado Bandrés. Aún le quedaba camino por recorrer a la enmienda transaccional 25, para quedar recogida en la LOPJ 6/1985, de 1 de julio. La enmienda Bandrés contaría con el apoyo de su Grupo, así como con el

Judicial se integrará por los miembros y en la forma establecida en el artículo 122.3 de la Constitución española. " Se desestimó por entenderse que, aunque el contenido de la misma era análogo al del Proyecto que se presentaba, éste último cumplía de manera una manera más satisfactoria los interés pretendidos.

del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Vasco³⁵⁹; en contra se encontraban los planteamientos defendidos por los Populares, Minoría Catalana y Grupo Centrista.

Uno de los peldaños a los que me refería con anterioridad lo constituyen los debates llevados a cabo en la **Comisión de Justicia e Interior**, celebrados bajo la presidencia de D. Pablo Castellano Cardalliaguet.³⁶⁰ El análisis de los mismos despierta un enorme interés:

La forma en que fueron debatidas las enmiendas presentadas al Capítulo II, relativo a la composición designación y sustitución de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que contemplaba los art. 124 a 135, no fue como pretendió el Grupo principal de la oposición, Grupo Popular, debatir artículo por artículo, sino que se examinaron de forma conjunta.

³⁵⁹ Será en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de 6 de marzo de 1985, donde los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco apoyen la enmienda presentada por J.M.Bandrés.

³⁶⁰ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión celebrada el miércoles 6 de marzo de 1985, núm. 274, recogido en los Trabajos Parlamentarios de la LOPJ, op. cit., pág. 907

El debate en el seno de la Comisión de Justicia e Interior comenzó con la defensa llevada a cabo por el diputado Molet de las enmiendas que presentaba, haciendo especial incapié como es lógico en la 25 por constituir ésta la base sobre la se consolidaba su plan. Tras una *numantina*³⁶¹ argumentación, en la que se recogían críticas que él mismo solventaba, aunque de manera ciertamente deficiente a nuestro entender, el Presidente de la Comisión concedió la palabra al señor TRIAS DE BES I SERRA, por el Grupo de Minoría Catalana, quien se expresó de manera determinante en contra de la enmienda 25 así como de todas las enmiendas socialistas que la desarrollaban, "si el artículo 122.3 de la Constitución distingue un sistema de elección, por algo habrán querido los constituyentes que se distinguiera..., nuestra total y absoluta discrepancia de lo que puede significar una distorsión de la Constitución, un atentado a la independencia

³⁶¹ Con la utilización de este adjetivo no se pretende llevar a cabo una crítica a la actuación del diputado Bandrés Molet, que es digna de elogio, si se comparten sus planteamientos, sino una aclaración de lo que desde nuestra perspectiva constituía un grave ataque a la independencia judicial. Con posterioridad el propio Bandrés reconocería que pretendía unir la legitimación parlamentaria directa " a unas amplias competencias del Consejo , con posibilidad, incluso, de responsabilidad política; opción desechada por el Grupo Socialista que ve en la Enmienda Bandrés el acento final a la devaluación, pretendida en su proyecto, del órgano de gobierno del Poder Judicial. Véase Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit., pág. 69, 70. También en prensa en " Yo tuve la culpa ", El País, 31-10-1990

del Poder Judicial, y ciertamente una politización total..."³⁶²

No consideramos que sea apropiado, en lo que constituye el análisis de los trabajos parlamentarios, obviar aquellas posturas que, pese a carecer de un fundamento de cierto peso, fueron alegadas por algunos parlamentarios; la intervención del representante de la Minoría Catalana fue seguida de la del Grupo Parlamentario Vasco, a través del señor VIZCAYA RETANA, que expresó su disconformidad en relación a la presunta politización derivada de que la elección de los miembros del CGPJ fuera llevada a cabo en su totalidad por los miembros del Parlamento³⁶³.

³⁶² Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II Legislatura, núm. 274 de 1985, de la sesión celebrada el día seis de marzo de 1985, recogida en LOPJ, Trabajos Parlamentarios, op. cit., pág.911.

³⁶³ Para VIZCAYA RETANA la politización sería mayor aún en un " proceso electoral interno en el seno del Poder Judicial, en el seno de la Judicatura con listas cerradas, bloqueadas, a través de asociaciones politizadas, con situaciones de enfrentamientos y de enconos, con situaciones en que cada juez, cada magistrado debe ir con el carne o con la chapa diciendo ... elegido el Consejo del Poder Judicial a través de una mayoría de tres quintos, que obliga a un consenso prácticamente unánime de las Cámaras, resuelven una situación muy grave, y es que no se produce ese proceso electoral interno ".Véase LOPJ, Trabajos Parlamentarios, op. cit., pág. 913

La crítica a la tesis defendida por el mencionado diputado es sencilla, no es justo que el poder Legislativo elija la cúspide del poder judicial. Pese a que Vizcaya Retana pretende justificar su respuesta en que lo único que han hecho los jueces es " tener una oposición " y que eso no les da derecho a atribuirse la representación popular a la hora de elegir a su órgano de gobierno, ya que según éste, la voluntad se encuentra

Debemos resaltar la opinión manifestada por el señor RUIZ GALLARDÓN para el que la aprobación de la enmienda Bandrés suponía destruir el principio básico, la " piedra angular de nuestra democracia, que es evitar que el Poder Judicial, llamado a controlar al Ejecutivo, pueda, directa o indirectamente, ser controlado a su vez por dicho poder."³⁶⁴

De igual modo, al referirse al tema de las asociaciones³⁶⁵ de los jueces y magistrados, indica, como con

depositada en manos del Parlamento, debiendo ser éste el que elija los miembros del CGPJ, se olvida la transcendencia del papel que desarrollan los Juzgados y Tribunales.

³⁶⁴ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II legislatura, 1985, núm. 274. En LOPJ, Trabajos Parlamentarios, op. cit., pág.914

³⁶⁵ No vamos a entrar a ahora en el estudio de los orígenes de las asociaciones judiciales, pues el tema se desvía en cierto modo de la materia objeto de nuestra investigación: las relaciones entre el CGPJ y las Cortes Generales; sin embargo, si queremos dejar constancia de nuestro interés por la materia. Únicamente vamos a poner de relieve aquellos aspectos que produjeron el nacimiento del seno de la Asociación Profesional de la Magistratura de las diversas corrientes que conocemos en la actualidad.

Tal y como establece el artículo 127 de Constitución en su apartado primero, " los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales." De acuerdo con lo anterior, el 20 de enero de 1980 se constituía la Asociación Profesional de la Magistratura: pocos días después entraba en vigor la LOCGPJ. Tal como ha puesto de manifiesto REQUEJO IBÁÑEZ se aglutinó en torno a la APM el 70% de la Judicatura, incluidos los escasos miembros que habían pertenecido a la llamada Justicia Democrática. El sistema por el que se llevó a cabo la elección tanto de los miembros de

la enmienda 25 se niega " uno de los derechos que se les ha reconocido a los jueces y a los magistrados especialmente en nuestra Constitución, cual es el derecho a asociarse para la defensa de sus intereses profesionales. Porque el principal interés profesional de los jueces y magistrados, como de cualquier colectivo, es el de estar regidos por quienes merecen la confianza de ellos mismos, y eso se le sustrae de

la Asociación como la de los Vocales del Consejo fue la misma: sistema electoral mayoritario corregido. Sin embargo, este sistema de elección no va a tener un período de vigencia muy dilatado, al menos en el seno de la Asociación, que en su III Congreso lo modifica por el sistema proporcional. En 1983, un año después del triunfo del PSOE, se ha producido ya la constitución de una nueva corriente; Jueces Para la Democracia, aunque eso sí, permaneciendo en el seno de la APM, por considerar ésta la vía más adecuada para la discusión del trabajo en común sobre los temas de la Administración de Justicia y su proyección en la sociedad. Con posterioridad surgirá la Asociación Francisco de Vitoria.

En el IV Congreso extraordinario de la APM (9-11 marzo de 1984), se puso de manifiesto la necesidad de que se aglutinaran las distintas concepciones existentes dentro de la APM. Este hecho, unido a la decisión tomada en dicho Congreso de volver al sistema mayoritario corregido para la elección de los Vocales de Consejo, al tiempo que se mantenía el sistema proporcional en el Estatuto de la Asociación para la elección de los cargos de sus directivos vino a constituirse como el hecho determinante de los acontecimientos posteriores. Tal y como señala REQUEJO IBÁÑEZ, las consecuencias no se hicieron esperar, lo que eran corrientes de opinión se tornaron en dos asociaciones, si bien, ninguna llegaba a superar el número de 152 miembros (el 15% de la carrera Judicial) que exigía la LOCGPJ (Disposición Adicional 2); a partir de ese momento el posicionamiento periodístico quedó fijado: Jueces para la Democracia era la asociación progresista, Francisco de Vitoria la moderada o centrista y la Asociación Profesional de la Magistratura la conservadora. Véase Requejo Ibáñez, J.L.: "Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial", en Papeles de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, Madrid, 1996, pág. 20 y pág.22

su competencia para que esa competencia le sea atribuida a las Cámaras en exclusividad."³⁶⁶

RUIZ GALLARDÓN recoge en una frase muy significativa el sentimiento que se estaba desarrollando en el seno de los órganos jurisdiccionales, para los cuales, se consideraba se estaba " procediendo a la constitución de órganos de depuración de la propia magistratura."³⁶⁷

De la intervención de SÁENZ DE COSCULLUELA por el Grupo Parlamentario Socialista, merece especial atención la cuestión que él mismo se suscita sin llegar a resolver; " ¿ Por qué politiza elegir veinte y no politiza elegir ocho? Nadie me podrá responder a esta pregunta porque no tiene respuesta, señoras y señores Diputados; no tiene respuesta."

³⁶⁸ Pese a la seguridad y convicción con que pareció manifestarse el señor Coscullella, la respuesta existe, e incluso podríamos decir que está al alcance de cualquiera llegar a la misma; con la intervención por parte del

³⁶⁶ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II legislatura, año 1985, núm. 274, Comisión de Justicia e Interior. En LOPJ, op. cit., pág. 915

³⁶⁷ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II legislatura, Año 1985, Comisión de Justicia e Interior, núm. 274, en LOPJ, op. cit, pág. 915

³⁶⁸ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II legislatura, Año 1985, Comisión de Justicia e Interior, núm. 274, en LOPJ, cit, pág. 919

Parlamento en la elección de ocho de los miembros del CGPJ, lo que se pretende es evitar que el Consejo quede constituido únicamente por los miembros que la propia judicatura. Con la entrada de ocho miembros elegidos por el Parlamento, pese a que la politización a la que hacía referencia Cosculluela exista, esta queda contrarrestada con la elección de los otros doce miembros; se anularía de ésta manera la politización. Si todos los componentes del Consejo son designados a través del Parlamento llegamos a la situación actual, que ha sido criticada por todos los sectores por provocar esa politización a la que hacíamos referencia con anterioridad.

Para el señor NÚÑEZ PÉREZ, por el Grupo Parlamentario Centrista, " hay varios sistemas de elección posibles, y todos tienen sus ventajas e inconvenientes; todos, absolutamente todos. Pero los tratadistas de Derecho Constitucional -y recojo una opinión de LOEWENSTEIN- valoran cualquier procedimiento de elección teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: primero, deben quedar excluidas todas las influencias políticas, y, segundo, deberá haber absoluta seguridad de que sólo los más idóneos, los mejor dotados para el autogobierno³⁶⁹ tengan acceso a estos puestos.

³⁶⁹ El término *autogobierno*, considerado como la situación ideal de Administración Judicial, que sorprendentemente aparece en la propia Exposición de Motivos que acompañaba a la LOCGPJ, no es una expresión acertada. En este sentido; MOSQUERA

Ya sabemos que el cumplimiento pleno de estos dos requisitos sería una simple utopía, pero habría que buscar fórmulas que acercasen a la misma. El sistema que se nos propone vincula la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al Legislativo, y políticamente, lo hace afín al Ejecutivo, dígame lo que se diga. Y esto, dígame también lo que se diga, influye en la independencia del Poder Judicial y deja reducido el autogobierno del mismo a límites bastante insoportables. Que no se nos plantee la cuestión entre corporativismo y soberanía popular, porque tendremos que argumentar por lo mayor, es decir, pedir, si esto se pone en tela de juicio, que el pueblo soberano sea el que elija directamente los vocales del Consejo; que el pueblo, como se hace en otras democracias, elija directamente los Jueces y Magistrados, pero en elecciones independientes de las que se producen para la representación del pueblo en

considera que referirse al autogobierno bajo la regulación de la actual LOPJ, no es del todo correcto; a lo más, se podría llegar a considerar al mismo como un *gobierno compartido*: la clave de esta matización se encuentra en que no todos, mejor dicho, ninguno de los miembros que integran el Consejo son elegidos por la propia judicatura, sino que son designados por el Parlamento. Junto a esta primera idea se encuentra la de que el Consejo se encuentra sujeta al interés general de la sociedad, del Estado y del ciudadano. Otros autores en esta misma dirección MARIANO BORREGO, ANDRES IBAÑEZ, ALVAREZ CONDE.

las Cámaras, con un mandato claro y concreto, que es hacer las leyes y elegir al Presidente del Ejecutivo" ³⁷⁰

La Enmienda Bandres Molet, incorporada a una transaccional de la minoría socialista es aprobada en la sesión de 6 de marzo de 1985 en la Comisión de Justicia. ³⁷¹

³⁷⁰ Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II legislatura, Año 1985, Comisión de Justicia e Interior, núm. 274, en LOPJ, op. cit, pág. 921

³⁷¹ " Con la enmienda número 225 al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial se trataba de conjurar el peligro de que se repitiera el anunciado dominio conservador del Consejo General. La vía de salida consistía en la elección de la totalidad de sus componentes por las Cortes (Congreso y Senado, a partes iguales). Tomada la decisión por motivos pragmáticos y coyunturales, se hizo preciso fundamentarla constitucionalmente. Para ello se argumentó, de una parte, la ambigüedad de la fórmula lingüística empleada por el apartado 3 del artículo 122 de la vigente Constitución. De otra, la conveniencia de intensificar el control indirecto, o de segundo grado, del Parlamento sobre el Poder Judicial, a través de su órgano de gobierno; aprovechando para incrementar la legitimidad de quienes, no directamente elegidos por el Pueblo estaban llamados a ejercer una potestad de que éste es titular.... Los partidos de izquierda y de centro izquierda parecieron alborozados por la innovación. Entre los sectores progresistas de la Magistratura, la primera reacción fue de desconcierto JUECES PARA LA DEMOCRACIA en su II Asamblea (Sitges, Febrero de 1984), había presupuestado la elección mixta (judicial y parlamentaria) de los miembros del Consejo y reclamado con energía el abandono mayoritario, y su sustitución por el proporcional... En 1985, una encuesta de urgencia arrojó un resultado que se interpretó como posición mayoritaria favorable al nuevo mecanismo electivo, y partícipe de la fundamentación política aducida en su apoyo " Fernández Envalgo, Juan: " Los jueces en una Sociedad Democrática " Instituto Vasco de Administración Pública " Coordinada por Juan Igartua Salaverria, Oñati, 1987, pág. 102-103

El Dictamen de la Comisión incorporó la regulación definitiva en lo referente a la composición del CGPJ ello, pese a las diversas protestas que se manifestaban desde distintos frentes; la Asociación Profesional de la Magistratura,³⁷² la opinión pública, los grupos minoritarios populares que presentaron recurso de inconstitucionalidad, ni siquiera el planteamiento de conflicto por parte del CGPJ ante el TC contra el Congreso hicieron variar el texto definitivo que hoy tenemos recogido en la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, en el art. 112.

b) Fundamentos a favor del cambio

Los argumentos que se utilizan en defensa de la enmienda Bandrés son varios, destacamos aquí los que hemos considerado más relevantes:

³⁷² En el caso de las Asociaciones de la Magistratura, hemos de mencionar el cuando menos curioso tratamiento que éstas han tenido. Podemos referirnos a las mismas como antecedente necesario para la formación del Consejo. Su regulación se encontraba ya recogida en la Constitución, art. 127.1, en evidente relación con el art.22.1 del propio texto, complementado todo ello con la Disposición Adicional segunda de la LO 1/1980, en la que se establece que: como límite mínimo se hacía preciso contar con el 15% de quienes podían ejercer el derecho para constituirse validamente cono tal; el objetivo perseguía dicha norma es evidente, así al menos han puesto de manifiesto autores como PERFECTO ANDRES; cerrar el paso a la existencia legal de Justicia Democrática. Andrés Ibañez, P. y Movilla Alvarez: El Poder Judicial, op. cit., pág. 69

1) La Constitución no determina el sistema de propuesta de los doce vocales judiciales, siendo tan lícito que los propongan los propios jueces como las Cámaras; el sistema ofrece una forma de democratizar al órgano, apareciendo como freno a los intereses corporativistas; lo transcendente no es plantearse la cuestión de la politización de los propuestos, sino garantizar un status de independencia a los miembros del Consejo, añadiendo que el proceso electoral interno también politiza³⁷³.

2) Ya que todos los poderes del Estado tienen su origen en el pueblo debido a que " la Soberanía Nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado"³⁷⁴

y, que " las Cortes Generales representan al pueblo español",³⁷⁵ parecería lógico que fuera el Parlamento el encargado de llevar a cabo la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los que corresponde la

³⁷³ Apuntar aquí una reflexión llevada a cabo por GEORGES VEDEL y recogida entre otros por TEROL BECERRA que, señala " si se hace del Consejo un órgano reclutado entre los magistrados mismos y elegidos por ellos, se corre el riesgo de restablecer esos cuerpos judiciales, Estado dentro del Estado, que fueron una de las calamidades del antiguo régimen" Véase TEROL BECERRA: El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 79

³⁷⁴ Conforme a lo que determina la vigente Constitución española en su art. 1.2

³⁷⁵ Conforme a lo que determina la vigente Constitución española en su art. 66

función la de proteger al Estado de Derecho desde el vértice del poder judicial, junto al legislativo y al ejecutivo. El problema que se plantearía hace referencia a el nivel de participación que deberían desempeñar las Cortes Generales³⁷⁶. Se cuestiona de igual manera por los defensores de la enmienda citada, si debe corresponder a las Cámaras ejercer la facultad de nombramiento de Vocales del Consejo de manera exclusiva o por el contrario el Parlamento debe compartir dicha facultad con la Judicatura.

3) En íntima conexión con los argumentos anteriormente expuestos se encuentra el de que aparte de suponer una colaboración entre el Legislativo y el Judicial, implica el reforzamiento del principio democrático³⁷⁷ en la composición

³⁷⁶ En opinión de PEDRAZ PENALVA, " no parece seriamente admisible absolutizar la justificación de la titularidad de los vocales del CGPJ legitimándola por un Parlamento convertido en la venerable representación del pueblo soberano...no existe fundamento alguno para que tal selección electoral haya de ser legitimada precisamente por la representación política ciudadana fuera de su tiempo constitucional, cuya tarea a este tenor habría de ser la de legislar las líneas básicas de los aludidos criterios de idoneidad de los candidatos a consejeros así como de los profesionales de los electores " (El Gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, pág. 37)

³⁷⁷ En lo que al problema de la legitimación democrática se refiere, hay que partir de la legitimación que por sí tienen Jueces y Magistrados por el hecho de serlo conforme a la normas jurídicas de un Estado democrático de Derecho... y si están legitimados para cumplir con su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no se ve razón clara para que no lo estén para participar en la elección de los miembros de su órgano de gobierno si así lo disponen las leyes.... Lo que diferenciaría a los vocales del Consejo elegidos por el Parlamento de otros ...elegidos por los propios Jueces y Magistrados no sería la

de su máximo órgano de Gobierno³⁷⁸. En este sentido se ha puesto de manifiesto que resulta extraño el hecho de que " del texto constitucional no se desprenda más que una reserva positiva en favor del Congreso de los Diputados y del Senado, pero no una reserva negativa que hubiera requerido una formulación expresa, por lo que la remisión a la Ley Orgánica puede explicarse por la finalidad de dejar abierto el sistema, estableciendo un número de Vocales de designación parlamentaria "³⁷⁹

4) Otras observaciones de especial interés, como la de que " la remisión a la Ley Orgánica, sin precisar que el sistema de designación ha de ser el electivo judicial, no se concibe racionalmente si no es para mantener abierto el sistema a otras posibilidades..., no hay razón para entender que el constituyente abrió el camino a las otras posibles soluciones y quiso cerrar la vía precisamente a ésta, que estimó adecuada, al menos , para la elección de una parte de los

intensidad de su legitimación (la legitimación es un concepto jurídico-político que no creo que admita intensidades,) sino la forma en que acceden al cargo, igualmente legítima en todo caso."

Véase Bustillo Bolado, R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit.,pág. 75-76

³⁷⁸ Álvarez Conde, E.: Curso de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 299

³⁷⁹ Xiol Ríos, J. A.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho, op. cit., pág.34

Vocales."³⁸⁰, como complemento a ésta última referencia, se ha esgrimido la idea de que " de existir una reserva negativa para la designación parlamentaria, debería entenderse existente también para la propuesta por el Parlamento de miembros procedentes de la Carrera Judicial en el cupo de los juristas de reconocido prestigio."³⁸¹

5) La influencia que recibe el CGPJ por el hecho de que la designación de sus miembros sea por la vía parlamentaria incide únicamente de forma difusa, esto al menos es lo que manifiestan los partidarios de mantener el sistema establecido por la enmienda Bandrés, sin que pueda pensarse que afecta a la independencia de sus órganos. En relación a este tema, aparece como un freno a la posible politización³⁸² el hecho de que los plazos de la duración de los mandatos sea algo superior a la legislatura electoral.³⁸³ Incluso

³⁸⁰ Ibidem.

³⁸¹ Ibidem.

³⁸²La politización tal y como ha expresado parte de la doctrina, " se puede eliminar, sino totalmente, al menos hasta el mínimo aceptable, a través de medidas apropiadas, mediante garantías institucionales y, sobre todo, mediante un perfeccionamiento apropiado del procedimiento de elección o nombramiento." Bachoff, Otto " Jueces y Constitución " Cuadernos Cívitas, 1985, Madrid, págs. 62-63

³⁸³ Tal y como ha señalado Gerpe Landín; " el argumento de la asincronía temporal gana consistencia al ir acompañado de la imposibilidad de remoción de los vocales por las Cámaras... en el principio de la asincronía influyeron: la previsión de la elección de los vocales judiciales, que no podían ser

destacados autores como ÁLVAREZ CONDE, que se declaran abiertamente a favor de mantener el sistema parlamentario de designación de vocales introducido con la vigente LOPJ 6/1985, manifiestan la necesidad de introducir mejoras en el modelo establecido " no parece viable que los partidos políticos renuncien a sus respectivas cuotas de poder, pero hay que propugnar el establecimiento de mecanismos correctores, como pudiera ser la verificación estricta, por parte de la Mesa de la Cámara, de que los candidatos propuestos cumplen los requisitos legalmente establecidos; la necesidad de que dichos cambios no tengan adscripciones políticas claramente definidas; la posibilidad de arbitrar un procedimiento a través del cual lleguen al Parlamento propuestas no vinculantes de los sectores relacionados con el mundo judicial, especialmente de las asociaciones judiciales..."³⁸⁴

6) Un aspecto que de manera indirecta podría encuadrarse aquí, se encontraría en el modelo judicial. Así, en los países con una judicatura formada por funcionarios de

periodizadas en un plazo superior al de cinco años; y también la duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo" Gerpe Landín " La composición..." op. cit., pág.172

³⁸⁴ Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 4, en "Tema para Debate; el Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág.146

carrera³⁸⁵," las expectativas de ascenso en ésta, junto con la carencia de algunas otras garantía...hacen al juez más sensible y vulnerable ante el poder político, de donde surgen las voces a favor del autogobierno. Pero no hay que olvidar que es difícilmente compatible con un Estado democrático la existencia de un cuerpo de funcionarios, reclutados según criterios de mérito y capacidad, cuyo gobierno esté exento de sujeción a los poderes públicos representativos. De ahí, que una solución intermedia, como la adoptada por el artículo 122.3 CE sea lo único razonable."³⁸⁶ En relación a los jueces-funcionarios³⁸⁷, hay que poner de manifiesto el hecho de que no todos los autores están de acuerdo en que el acceso a la

³⁸⁵ En relación con las distintas fórmulas o vías de ingreso en la judicatura puede resultar interesante el análisis de la obra de López Sotelo, J.L.: " Sistemas jurídicos y formación de jueces y abogados" en PPU (Promociones y publicaciones Universitarias), Barcelona, 1995

³⁸⁶ Díez-Picazo, L.M.: Régimen constitucional... op.cit.,pág.145

³⁸⁷ En relación a la figura del juez-funcionario se ha manifestado el juez Navarro: "Si se estimase seriamente que la condición de funcionarios públicos de los jueces es un obstáculo par su legitimación democrática o para la plenitud de su independencia , habría que prescindir de aquella condición. Lo que de ninguna forma cabe aceptar en un sistema democrático es que la independencia judicial sea limitada con la excusa o la protesta de que los jueces son funcionarios y no tienen el carácter electivo y de profesionales del Derecho que les confiere una mayor legitimidad democrática en otros sistemas.El sistema español responde a los elementos típicos del modelo continental europeo, en el que la condición de funcionarios públicos de los jueces jamás ha sido utilizada como fundamento o pretexto para limitar su independencia o para cuestionar su legitimidad democrática." Véase Navarro J.: Manos Sucias, el poder contra la justicia, op. cit., pág.120

vida judicial se realice tal y como establece la LOPJ³⁸⁸ así, resultaría interesante señalar alguna de las alternativas propuestas, " a través de instrumentos legales de transformación de la organización judicial y de la práctica procesal, pueden los sistemas de jueces-funcionarios aproximarse a los arbitrales, reduciendo el predominio de los

³⁸⁸ Díez-Picazo ha señalado como el origen de los problemas y tensiones de la judicatura, el hecho de España, al igual que otros países pertenecientes a la tradición jurídica europeo-occidental (Francia, Italia, etc...) ha heredado lo que puede denominarse un modelo burocrático de juez. Este modelo de judicatura, que hunde sus raíces en los postulados ideológicos de la Revolución Francesa y en las grandes reformas napoleónicas de la organización del Estado, se caracteriza por la configuración del juez como un simple funcionario público. El perfil básico del juez-funcionario es el siguiente: entra joven, poco después de finalizar sus estudios universitarios, en la carrera judicial; el mecanismo de selección, la oposición, es típicamente burocrático y se basa exclusivamente en conocimientos técnico-jurídicos; tiende a desarrollar toda su actividad profesional dentro de la judicatura y carece, por ello, de experiencia en otros ámbitos; la lógica de la carrera, en fin, lo convierte en una persona naturalmente preocupada por la promoción a puestos más elevados en la jerarquía judicial y, por ello, sensible a aquellos incidentes susceptibles de obstaculizarla o retardarla. Esta forma de organizar la judicatura se halla en vivo contraste con la que es tradicional en los países anglosajones: allí, los jueces son seleccionados por órganos políticos (Parlamento y gobierno) entre profesionales experimentados y apreciados, tomando en consideración tanto su preparación técnico-jurídica como el conjunto de su personalidad, y, además, no existe la preocupación por la promoción, porque el nombramiento es para un puesto determinado, por no mencionar el hecho de que ser llamado a la judicatura es, en sí mismo, un altísimo honor para cualquier jurista y la coronación de una vida profesional.

Véase Díez-Picazo, L.M.: " Problemas y tensiones de la Judicatura, en Revista de Occidente, núm. 179, ed. Instituto Ortega y Gasset, Abril 1996, pág. 46

principios de poder y subordinación y aumentando los principios valores de confianza y respeto "³⁸⁹

c) Fundamentos contrarios al nuevo modelo

Los argumentos contrarios a la Enmienda Bandrés que fueron expuestos en el debate de dicha enmienda y que se han venido a reiterar con posterioridad, como consecuencia de la actual situación del Consejo, son numerosos:

1) Atenta contra la separación de poderes, abriendo el campo especialmente en situaciones de parlamentarismo mayoritario a que el Poder Ejecutivo presione sobre el Consejo;

2) Perjudica al asociacionismo judicial al romper cualquier canal de incidencia representativa institucional: voluntad de convertir al Consejo en un órgano de depuración política de la Magistratura: la regulación constitucional de la composición debe interpretarse como determinante de que el número máximo de vocales que pueden elegir las Cámaras son ocho, y así lo había recogido el Reglamento de cada una de

³⁸⁹ Peces Morate, J.: " Consolidación de la estructura judicial", en Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa, Centro de Estudios Judiciales, Colección Cursos, Vol. V, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, Madrid, 1990, pág.201

las Cámaras que concretaban que la propuesta alcanzaba a cuatro.³⁹⁰

3) Destacamos, llegado este momento una brillante opinión manifestada por JIMENEZ DE PARGA y que compartimos plenamente; se había producido una mutación del texto constitucional " debemos reconocer que la mutación constitucional, sin cambiar ni una letra ni una coma del texto de 1978, es incuestionable... La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, llevó a cabo una mutación constitucional al instaurar un procedimiento nuevo de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial: en lugar de ser los jueces y magistrados los titulares de sufragio activo para escoger doce de los veinte

³⁹⁰ Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág. 156

Terol Becerra, M.J.: El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 75 y ss., recoge aquella postura que pueden considerarse como acertada a la hora de llevar a cabo la defensa de los postulados referentes a la designación de los miembros del Consejo, y que fueron utilizados por BANDRES:

Al recaer en las Cámaras legislativas el nombramiento de los vocales del Consejo se dignifica todavía más a dicho órgano y sus miembros obtenían una legitimación aún mayor, siendo elegidos por los únicos representantes de la soberanía popular.

La eliminación del corporativismo como fórmula de organización de la judicatura, que dejaba al margen a diversos sectores del organigrama judicial.

Un aspecto sumamente interesante y sobre el que volveremos con posterioridad lo constituye la defensa llevada a cabo por MARCOS VIZCAYA, que hace referencia a la línea interpretativa con que debe ser entendido el artículo de la Constitución y su posterior desarrollo.

componentes del Consejo, que fue el sistema utilizado en 1980, todos los Vocales son elegidos, conforme a la regla de 1985, por los diputados, la mitad, y por los senadores, la otra mitad."³⁹¹. Como consecuencia directa de lo anterior, los" titulares del Poder Judicial, o sea todos los jueces y magistrados de España, ya no participan de las elecciones de su órgano de Gobierno, el Consejo General. Y la pregunta que inmediatamente surge de ésta: ¿ Puede valorarse como poder a una institución cuyos miembros son desprovistos de la facultad de elegir a su propio órgano?... La Constitución de 1978 formaliza un régimen político en el que el Poder Judicial es un auténtico poder junto al Poder Legislativo, residenciando en las Cortes, y el Poder Ejecutivo, cuya titularidad asume el Gobierno. Como requisito sine qua non para que el Poder Judicial siga siendo un poder es que se elijan los 20 componentes del Consejo General por los depositarios, jueces y magistrados, de ese poder. Si el órgano de gobierno del supuesto poder se forma en virtud de la manifestación de voluntad de las personas ajenas, la letra de la Constitución permanecerá inalterada, pero la modificación constitucional es evidente."³⁹²

³⁹¹ Jimenez de Parga, M.: " La ilusión política. ¿ Hay que reinventar la democracia en España?, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 141

³⁹² Jimenez de Parga, M.: " La ilusión política. ¿ Hay que reinventar la democracia en España?, op. cit., pág. 143

4) Sin duda, entre las distintas afirmaciones realizadas en contra del actual sistema de designación de Vocales³⁹³, la que mejor plasma la realidad es la del destacado procesalista DE LA OLIVA: " ... pretender, como se ha pretendido en innumerables comentarios y declaraciones... que el actual sistema de designación de los vocales del C.G.P.J. viene exigido por la Constitución cuando ésta proclama que la *justicia emana del pueblo*, además de que resulta un descubrimiento sospechosamente tardío (y parcial) de la Norma Fundamental, es querer engañarse o engañar. Los jueces y magistrados reciben su legitimación para impartir justicia no necesariamente de unas elecciones, sino de su sometimiento al Derecho y de su condición de singulares servidores del Estado y la sociedad. En muy pocos países democráticos los jueces y magistrados son legítimos porque procedan de unas elecciones. Pero es que, además, si se hubiere llegado en España a la conclusión de que la democracia no es perfecta sin tales elecciones (y que sin ellas los jueces no están democráticamente legitimados), a quien entonces habría que elegir democráticamente - ¿y por qué no directamente los

³⁹³ Consideramos oportuno poner de relieve aquí la opinión de JOSE LUIS MANZANARES SAMANIEGO, para el que " la parlamentarización de los Vocales judiciales y el increíble recorte de competencia son reformas contradictorias en una primera lectura, pero se hermanan y complementan cuando el objeto final consiste en reducir a su mínima expresión el autogobierno postulado por la Constitución de 1978" Véase El Gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 113

ciudadanos, el pueblo mismo?- sería a los jueces, pero no a los miembros del C.G.P.J., órgano que no administra justicia, la que emana del pueblo." ³⁹⁴

5) Cierta sector de la doctrina, el mayoritario, de entre los cuales destacaríamos a los procesalistas³⁹⁵, jueces³⁹⁶, así

³⁹⁴ Oliva De Santos, A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" en Revista de Derecho Procesal (dirigida a iberoamérica) op. cit., pág. 283. De igual modo se expresa en "Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, garant de l'indépendance de la Justice" en rapport présenté par Andres de la Oliva, publicado en Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature (Réunion multilatérale organisée par le Conseil de l'Europe en collaboration avec le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire d' Espagne, Madrid 9-11 Nov. 1993), op. cit., pág. 51 y 52

³⁹⁵ " En cuanto a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, seguimos pensando -incluso después del fallo del TC en su sentencia del Pleno 108/1986, de 29 de julio- que es contrario a la Constitución (art. 122.3 a la luz del 66.2) el que los designe todos el Parlamento...esa elección ... no obedece a o se funda en algún elemento novedoso con cierta enjundia, ni de filosofía política ni de nuevas concepciones constitucionales...el cambio respondió a una ocurrencia en el plano de la pura y simple conveniencia política, en orden a dominar el Poder Judicial" Véase OLIVA SANTOS, DE LA A.: " La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: análisis general y constitucional" en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, núm. 72, Madrid, 1987, pág. 427, de igual modo en " La nueva LOPJ; análisis jurídico, general y constitucional" en Revista de Derecho Procesal (dirigida a iberoamérica), núm. 1, ed. Edersa, Madrid, 1987, pág. 28-29

³⁹⁶ Queremos destacar en este lugar, la opinión de diversos jueces y magistrados; uno de ellos, el juez JOAQUÍN NAVARRO, ha manifestado su cambio de parecer respecto de la evolución del sistema de designación de los Vocales; " Con el transcurrir de los años mi postura de defensa del sistema de elección parlamentaria de los miembros de ese órgano ha tornado de entusiasta y crédula en pesimista y críticamente negativa; muchos son los males que aquejan a este organismo medio vivo, y

como destacados miembros entorno a la vida jurídico³⁹⁷, critican la utilización de la fórmula establecida; así por ejemplo, en opinión de GERPE LANDÍN debería volverse al sistema de designación previsto en la derogada LOGPJ y que se aplicó para la elección del primer Consejo³⁹⁸, por

entre ellos habrá que destacar el triste espectáculo al que nos ha llevado el sistema de cuotas parlamentarias..." De igual forma recogemos la opinión de RUIZ VADILLO " el sistema más conforme con el espíritu de la Constitución es aquel en el que las cámaras tienen la cuota que el artículo 122.1 señala, al menos en lo que podemos indicar negativamente "

Véase Navarro, J.: Hablan los jueces op. cit., pág. 138, así como pág. 29

³⁹⁷" la opción judicial es para nosotros más aconsejable porque con ella se garantiza una mejor expresión del pluralismo de opciones en la Magistratura, la participación y la democratización interna "

Véase Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" op. cit., pág. 148

CORDÓN MORENO también defiende la vuelta al sistema anterior a la vigente LOPJ, sistema que por otra parte, " tuvo poco tiempo para poner de manifiesto sus bondades. Sin duda, en favor de esta postura pueden traerse a colación tanto el argumento de autoridad que supone la recomendación contenida en la propia sentencia del TC, que advirtió de los riesgos de trasladar la dinámica partidista al ámbito del CGPJ, como los resultados mismos del sistema, que,.... no favorecen en mucho la imagen del CGPJ ante los ciudadanos."

Véase Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 4, en "Tema para Debate; el Consejo General del Poder Judicial", op. cit., pág.152

³⁹⁸ Los argumentos que se establecerían en defensa del sistema anterior vendrán a ser los siguientes: a)" Decir, como sostiene el Tribunal Constitucional, que la autonomía institucional del órgano no depende de la forma de propuesta, sino del estatuto o posición jurídica en que se sitúa a los vocales es una argumentación que puede admitirse siempre que maticemos que la opción tiene importantes efectos, ya que de la forma de la propuesta depende la ubicación política del Consejo: no tendrá el mismo peso político un Consejo designado por el Parlamento que otro cuya mayoría de miembros es designada directamente por los jueces y, por tanto, por las asociaciones de jueces, tras un proceso electoral en el que se han expresado

entenderse, tal y como considera DE LA OLIVA que la independencia de los miembros de la institución que analizamos " está del todo perdida a causa del sistema de designación...introducido en la LOPJ de 1985" ³⁹⁹. Para PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ con la nueva fórmula establecida con la LOPJ 6/85, se abandonaba al Consejo a la dinámica perversa

diferentes concepciones sobre la Administración de Justicia; b) La misma argumentación político-institucional debe atender a que si se admite, como hace el TC, que la funcionalidad del Consejo es desapoderar al Gobierno de aquellas atribuciones que pueden presionar sobre la independencia judicial, la lógica de la parlamentarización lleva al probable riesgo, cuando menos en el origen, de que la mayoría gubernamental designe también a la mayoría de Vocales del Consejo; c) Admitiendo que el Consejo no es órgano de autogobierno judicial, tampoco es un Comisionado de las Cortes Generales y por lo tanto su composición debe tender a garantizar la presencia dentro del mismo de las diferentes visiones sobre la Justicia, y entre ellas de forma mayoritaria las de la diferentes categorías de la carrera judicial, entender que las Cortes pueden dar una visión más fiel de tales " visiones" sólo puede ser expresión de una concepción jacobina de la democracia... e idílica (en cuanto presuponga que el Parlamento marginará en aras del interés general de los intereses partidistas o de cupos en la designación); d) Tampoco puede desatenderse, aunque no sea un órgano de autogobierno, que el Consejo gestiona intereses colectivos de la Judicatura y que la opinión pública hace un juicio sobre la actuación del Consejo que afecta a la carrera sin que ésta tenga representación; e) Por último, también actúa en favor de la intervención de los jueces en la designación de los Vocales judiciales, al considerar que el gobierno de los jueces debe respetar los principios del ordenamiento constitucional y de forma singular el de la participación de los jueces en cuanto tales en el mismo: negarlo es, además, renunciar, aunque sea indirectamente, a un canal interno de democratización de la carrera judicial, de romper con el tradicional aislamiento de los jueces y debilitar la legitimación del Consejo ante sus gobernados"

Véase Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 4, en "Tema para Debate; el Consejo General del Poder Judicial", op. cit., pág.141-142

³⁹⁹ Oliva, de la A.:Derecho Procesal Civil I, Ramón Areces, Madrid 1992, pág. 83

del actual modo de producirse la lucha por el poder entre los partidos⁴⁰⁰. FEDERICO SAINZ ROBLES considera que el pésimo resultado del sistema de designación por parte del Parlamento, de todos o algunos -su crítica llega incluso al primer Consejo- de los Vocales del Consejo, radica esencialmente en " el mal uso que hasta ahora ha hecho de esa competencia"⁴⁰¹ el Parlamento.

6) Un conjunto de razonamientos presentados por parte de aquellos que consideran que la enmienda Bandrés peca de inconstitucionalidad vendría basado en una interpretación del artículo 122 de la Constitución. Si este reserva ocho vocales del Consejo a la elección de las Cámaras, ello "implícitamente supondría que el resto de los Vocales no pueden ser propuestos por el Parlamento, sino que su sistema de designación debe ser otro...la Constitución ha querido un sistema en virtud del cual la composición de origen judicial y de origen parlamentario queden compensadas, por lo que el atribuir la designación de todos los Vocales a las Cámaras descompesaría ese equilibrio."⁴⁰²

⁴⁰⁰ Andrés Ibáñez, P.: " Consejo General del Poder Judicial, versión 1985, un desastre anunciado, en Jueces para la democracia, núm. 21, Enero 1994, págs.71 y ss.

⁴⁰¹ Sainz de Robles, F.C.:" ¿Un Pacto de Estado para la Justicia? en Tapia, Publicaciones para el Mundo del Derecho, año XIV, núm. 87, Abril-Marzo 1996,pág. 6

⁴⁰² RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, J.: El Poder Judicial y su Consejo... op.cit., pág. 34

De manera previa a exponer el parecer del autor de la investigación, se ha considerado oportuno llevar a cabo un análisis de la normativa existente en las Cámaras. Con posterioridad y, ya en el capítulo referente a las conclusiones, retomaremos la cuestión suscitada, para inclinarnos por una solución al problema que se nos plantea como básico en las relaciones entre el Consejo y las Cortes Generales; el de tomar partido sobre la forma de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

4.2. Regulación de la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial

a) En el Reglamento del Congreso de los Diputados

En el Reglamento del Congreso de los Diputados, puede ser interesante analizar, en relación a la forma de elección de los ocho Vocales que el Parlamento debe proponer, lo dispuesto en su art.204, que se incluye en el Capítulo IV, referente a las informaciones del Gobierno, dentro del Título XII, dedicado a las propuestas de nombramiento y de la designación de personas. En el citado artículo se establece la necesidad de que se acuerden por el Pleno de la Cámara las propuestas referentes a los cuatro miembros del CGPJ que debe

presentar el Congreso de los Diputados, así como la forma en que se llevará a cabo la propuesta de designación por parte de cada uno de los diversos grupos parlamentarios, estableciéndose un máximo de cuatro candidatos. El Reglamento del Congreso regula de igual forma la forma de actuación de cada grupo parlamentario, se establecen unos períodos máximos de cinco minutos para cada una de sus intervenciones. Aclara el precepto examinado que, serán elegidos aquellos candidatos que más votos alcancen siempre, claro está, que respeten lo establecido legalmente en relación a la obtención de votos, siendo precisa una mayoría de tres quintos⁴⁰³ para que pueda considerarse válida la misma a los efectos de estimarse como miembros del Consejo. Por último, y para los casos en los que en la votación de los candidatos se produzca un empate, se prevé una posterior votación que elimine el conflicto planteado.

⁴⁰³ En relación a la exigencia del requisito de la mayoría cualificada, diversos autores han considerado que con el establecimiento del mismo se corre el peligro de producir la paralización del órgano. Pese a que algunos estudiosos de la materia apuntan acertadamente la actividad que desarrolla el Consejo saliente y el plazo de seis meses para llevar a cabo la elección, la práctica de nuestros parlamentarios ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer los mecanismos normativos precisos para que la elección de los miembros del Consejo no se convierta en una "lucha" entre los diversos partidos políticos.

Llama la atención respecto a lo anteriormente detallado, la inexistencia de una disposición específica, dentro de la normativa parlamentaria, para la elección de los seis Vocales pertenecientes al grupo de jueces y magistrados. La respuesta a esta omisión reglamentaria se encuentra no sólo en el art. 205⁴⁰⁴, del Reglamento del Congreso de los Diputados, sino también en la Resolución de la Presidencia de esta Cámara sobre el procedimiento para el nombramiento de Vocales del CGPJ, de 24 de Septiembre de 1985, en donde se recogen las adaptaciones necesarias para la regulación de dicho procedimiento.⁴⁰⁵ Esta materia por las consecuencias que de la misma se derivan, es decir, la posible intervención o no del Parlamento en la elección de los Vocales del Consejo, ha sido estudiada por un amplio sector doctrinal así, "el hecho de que el Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado limite a cuatro el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben proponer para su nombramiento no puede ser obstáculo para que una ley orgánica amplíe ese número, siempre que pueda hacerlo constitucionalmente. Se producirá entonces, todo lo más, una laguna en el Reglamento,

⁴⁰⁴ Artículo 205 del Reglamento del Congreso de los Diputados " El sistema establecido en el artículo anterior, adaptado a la realidad de los puestos a cubrir y a los demás requisitos legales, será de aplicación para los supuestos en que un precepto legal prevea la propuesta, la aceptación o el nombramiento de personas por una mayoría cualificada de miembros del Congreso de los Diputados"

⁴⁰⁵ BOCG CD Serie E núm. 143, de 27 de septiembre de 1985

que deberá ser resuelta con su modificación o con los criterios hermenéuticos que proceda aplicar"⁴⁰⁶.

b) En el Reglamento del Senado

En lo referente a la normativa del Senado, cabe mencionar que en el Capítulo I, del Reglamento de esta Cámara que contempla las relaciones del Senado con la institución del Tribunal Constitucional, el art.187 remite al art. 184 de este reglamento, en donde se regula la forma de nombramiento de los miembros del Consejo General, sirviéndonos ésta referencia para, una vez más, poder constatar la similitud en los métodos de elección, precisándose tanto para el supuesto regulado en el Reglamento del Congreso de los Diputados como en el Reglamento del Senado de una mayoría de tres quintas partes de votos favorables para poder ser elegido validamente como miembro del CGPJ.

De la lectura de los artículos precedentes, observamos que todos los componentes del CGPJ son de esta forma, designados con intervención del Parlamento, lo dispone así en parte la Constitución, y en parte la LOPJ⁴⁰⁷; se suscitan

⁴⁰⁶ Xiol Ríos, J.A.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho op. cit., pág., 33

⁴⁰⁷ art.112 LOPJ " entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo"

dudas y críticas en amplios sectores de la doctrina sobre si esta fórmula de elección resulta positiva para el sistema democrático o si por el contrario, pese a que se respete la proporcionalidad de vocales provenientes de la carrera judicial, puede tener efectos negativos, encontrándose tal y como hemos visto anteriormente defensores de ambas alternativas⁴⁰⁸.

4.3. Situación actual

a) Introducción

⁴⁰⁸ Entre otras opiniones destacamos las de P. Andres Ibañez y la de E. Alvarez Cruz, recogidas en el trabajo realizado por Gerpe Landín M. " La composición del Consejo..." op.cit. pág. 158. El primero de los citados autores considera, en relación al grado de legitimidad de la enmienda Bandrés, que ésta " refleja una concepción jacobina de la democracia que la convierte en equivalente a parlamentarización, que se opone a la de la Constitución, sustentada en una concepción pluralista o policéntrica del poder; no menor importancia tiene en su crítica el efecto desactivador que la enmienda significará para el movimiento asociativo judicial, que considera fermento sustantivo para transformar democráticamente al cuerpo judicial". Desde la otra perspectiva tenemos la opinión de Alvarez Cruz, para el que se puede mantener la legitimidad de la parlamentarización; " la elección judicial, con un sistema mayoritario como el de la LOCGPJ convierte en árbitro de la elección a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, refuerza el sistema de cooptación corporativa; frente a una cooptación corporativa como la que hoy existe cualquier sistema es preferible desde el punto de vista democrático"

Para el estudio del presente apartado hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 122.3⁴⁰⁹ del Texto Constitucional desarrollado por la Ley Orgánica de 6/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial⁴¹⁰, que hace mención, al número de integrantes que han de formar parte del CGPJ, así como a su estatuto, composición, atribuciones... La mayor parte de la doctrina se encuentra conforme con la idea de que " los problemas normativos que hoy afectan al Consejo están en su regulación por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no en el art. 122 de la Constitución (como antes estaban en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (1980) "⁴¹¹

En el art.112 de la Ley Orgánica 6/1985, al regular la composición, designación y sustitución de los miembros del Consejo, determina en su párrafo tercero la forma de elección

⁴⁰⁹ - Art. 122.3 del Texto Constitucional "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con mas de quince años de ejercicio en su profesión."

⁴¹⁰ La entrada en vigor de la LOPJ 6/1985 de 1 de julio ha supuesto la derogación de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de Enero, y que ha sido objeto de reciente modificación a través de la LO 16/1994, de 8 de noviembre.

⁴¹¹ Gerpe Landín, M. " El Consejo del Poder Judicial ", RDP núm. 36 - La Reforma Constitucional - op. cit., pág. 179

de doce de los veinte miembros de este órgano⁴¹². El resto de los mismos, es decir, los ocho Vocales que debe proponer el Parlamento, serán seleccionados entre abogados y juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Será especialmente importante el control que sobre los mencionados requisitos de profesionalidad y competencia se lleve a cabo, pues de lo contrario se abre la puerta a una utilización de las facultades otorgadas al Parlamento contraria a la pretendida por la ley⁴¹³. Se ha propuesto, aunque con escasa fortuna, llevar a cabo un "examen" de los "aspirantes" aunque, en opinión de LUCAS MURILLO, no se encuentra "funcional introducir en el proceso de designación de los vocales la comparecencia de los posibles candidatos ante la Comisión de Justicia e Interior de las Cámaras...se trata de un expediente ajeno a nuestra cultura jurídica y vinculado a la propia de los Estados

⁴¹² Cada una de las Cámaras propondrá, por mayoría de tres quintos, seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.

⁴¹³ " Al establecer la Constitución que los vocales del Consejo deben ser jueces, magistrados, abogados y otros juristas está globalmente haciendo una doble opción: la prioritaria , establecer un órgano compuesto por profesionales ligados al mundo del derecho y , más concretamente, al mundo de la Administración de justicia; la segunda, aunque indirecta, dar prioridad a los criterios técnicos sobre los estrictamente políticos en la designación...las condiciones técnicas exigidas colaboran a limitar la politización partidista de la composición " Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo..." op. cit., págs. 170-171

Unidos, donde no es el Congreso sino el Presidente el que nombra a los jueces. En ese contexto tiene sentido la comparecencia de los designados ante el Comité Judicial del Senado, a quien constitucionalmente le corresponde el advice and consent ante esos nombramientos. En España, con un ordenamiento constitucional y una cultura jurídico-política diferentes, esta práctica me temo que sería disfuncional para las instituciones y perjudicial para las personas." ⁴¹⁴

Actualmente el sistema establecido hace que la elección de todos los miembros del CGPJ se lleve a cabo por el Parlamento, tal y como lo prevé la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, en relación con el art. 122.3 de la Constitución; todo lo anterior se encuentra acorde con lo dispuesto en el art.1.1 de la Constitución española. Y este sistema se justificaría por algunos, tal y como ha señalado PRIETO CASTRO por el hecho de que " no es deseable que la función judicial quede aislada de las demás como comportamiento estanco, pues el requisito de independencia objetiva no exige ni presupone como condición que la magistratura se cree sola a sí misma en un régimen de impenetrabilidad de las otras esferas del poder soberano del Estado que sería altamente perjudicial para el mismo estamento de los jueces. Por ello es necesario que el

⁴¹⁴ Lucas Murillo de la Cueva, P.: " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español " op. cit., pág. 224

gobierno del Poder Judicial esté compuesto por otras representaciones además de la propia magistratura."⁴¹⁵ Esta justificación del sistema establecido con la enmienda Bandrés serviría para apoyar la tesis referente a una composición mixta en el Consejo pero, resulta más que dudosa para defender la actual configuración del sistema, en donde todos los miembros del Consejo General son elegidos por el Parlamento.

b) Efectos resultantes de la aplicación de la enmienda

Bandrés

Los efectos resultantes del hecho de que la elección de los miembros del Consejo se lleve a cabo por parte del Parlamento, puede resumirse en la opinión de DE LA OLIVA para el que " la parlamentarización total del Consejo parece haber determinado un esquema de comportamiento que, en síntesis, sería este: de un lado, una mayoría holgada, que toma las decisiones, generalmente con carácter previo a Plenos y Comisiones; por otro lado, los Vocales propuestos por Grupos o partidos en minoría en las Cámaras legislativas, de los que se espera que se unan con frecuencia y en lo principal a la mayoría, por alguno de los siguientes motivos: por mor de un

⁴¹⁵ Cazorla Prieto, L.M y Arnaldo Alcubilla, E.: Temas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, op. cit., pág.372

consenso, que, en efecto, muchos temas exigen; por no ser presentados como personas empeñadas en una sistemática oposición; por conveniencias personales; por las incomodidades diversas que conlleva oponerse a la mayoría; etc. Quienes no responden a esa expectativa de engrosar la mayoría de modo básicamente estable...se encuentran en la siguiente alternativa: o disfrutar del cargo, cumpliendo estrictamente el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a la Comisión que le corresponda, o ejercer continuamente de *interventores* dejando constancia de su postura en explicaciones de voto y *votos particulares*"⁴¹⁶. Es evidente que " no tendrá el mismo peso político un Consejo designado por el Parlamento totalmente que otro, cuya mayoría de miembros, es designado directamente por los jueces y, por tanto, por las Asociaciones de Jueces, tras un proceso electoral en el que se han expresado diferentes concepciones sobre la Administración de Justicia ... si la composición pretende garantizar la presencia dentro del Consejo de las diferentes visiones técnicas sobre el mundo de la Justicia, y entre ellas de forma mayoritaria a la de los jueces y magistrados, entender que las Cortes pueden dar un reflejo más fiel de tales visiones que los propios jueces, sólo puede ser expresión de una concepción de la democracia poco atenta

⁴¹⁶ De la Oliva Santos, A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág. 308

al pluralismo o de despotismo ilustrado ... en cualquier caso implica un perjuicio irreparable, y no compensable con el riesgo del corporativismo, ya que éste debe equilibrarse con el de politización partidista"⁴¹⁷.

Otro de los efectos resultantes de la modificación introducida por la enmienda Bandrés, en opinión de ANDRÉS IBÁÑEZ se encontraría en la pérdida de papel de las Asociaciones Profesionales. Si para gestionar los intereses propios de jueces y magistrados en cuanto colectivo profesional están las Asociaciones Profesionales⁴¹⁸, el problema es que con la LOPJ de 1985, las asociaciones judiciales " dejaron de ser un elemento orgánico en el sistema de gobierno de la magistratura, que resultó fagocitado por el sistema de partidos. Perdieron una parte esencial de su carácter de instrumentos de participación, de agentes del pluralismo institucional. Pasaron a depender

⁴¹⁷ Gerpe Landín, M. " *El Consejo del Poder Judicial* " op.cit.,pág.184. Son muy numerosas las voces que se escuchan dentro de nuestra vida judicial; destacamos también la opinión de José Luis Manzanares, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial:"en la Administración de Justicia la imagen es casi tan importante como la realidad... cuando se cambia el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ de procedencia judicial, hemos terminado con la imagen: cualquier movimiento nuestro se interpreta en clave política. Estoy hasta el gorro de ver el nombre del presidente Pascual Sala en la prensa acompañado del paréntesis (PSOE) y el del vicepresidente... del correspondiente (PP)" Recogido en prensa, Diario ABC, pág. 12, 27-8-95

⁴¹⁸ Art. 127.1 CE

fácticamente de aquéllos, convertidos -sin mediaciones- en el único cauce de acceso al órgano de gobierno de la magistratura, es decir, al principal centro de elaboración y difusión de la política y la cultura judicial. De esta manera se produjo...una indeseable repolitización partidista del movimiento asociativo. El acceso del juez asociado -como juez- al órgano de gobierno de la magistratura se hace pasar por el partido, pero de manera informal, subrepticia. Hay que estar sin estar con/en el partido. Por otra parte, la forma en que este sistema incide sobre la asociación es bien conocida: condiciona la propia dinámica, enrarece las relaciones internas, genera adhesiones interesada, divide. Sobre todo, pone en manos de los partidos...un instrumento de extraordinaria eficacia distorsionadora. Después, tiene la consecuencia indeseable de que el juez asociado promovido al Consejo no ejerce ninguna representación de la asociación de procedencia, porque, allí, realmente, no se da otra relación efectiva de tal carácter que la que materialmente vincula al designado con el partido designante. O aún peor, dentro de éste, con quien tiene de hecho el poder de designar. Con ello, la dialéctica interna del órgano de gobierno se empobrece sensiblemente, se reduce a un único plano, el de la confrontación político-partidista. En el interior del Consejo se reproduce, sin especiales matices, casi mecánicamente, la confrontación política general. Como consecuencia, si la

asociación pierde autonomía respecto del partido, al Consejo le sucede lo propio respecto de otros centros de poder político"⁴¹⁹

4.4 Postura mantenida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 108/1986, de 29 de julio

El establecimiento del vigente procedimiento de designación parlamentaria ha supuesto una modificación de lo dispuesto en la antigua LOCGPJ en la que regía el sistema de autogobierno⁴²⁰, puesto que doce de los veinte miembros del

⁴¹⁹ Andres Ibáñez, P.: " Sobre asociacionismo e independencia judicial" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 25, Marzo 1996, pág.90

⁴²⁰ En relación a lo dispuesto por la LOCGPJ sobre designación de miembros del Consejo, señalar la postura de ALMAGRO, para el que se llegaba a través de dicha composición a un autogobierno relativo que huía del corporativismo cerrado de un autogobierno estricto, y cuya valoración no resultaría positiva. Se contribuía de esta manera, en opinión del citado autor, a evitar el carácter cerrado y pernicioso de un autogobierno exclusivo de jueces y se establecería una sana colaboración entre poderes, por un lado con las mayorías requeridas para las propuestas y por otro, por las condiciones de profesionalidad de los elegidos, que alejan influencias y apasionamientos políticos, meramente partidistas. Opiniones recogidas por Peces-Barba en La Constitución Española. Un estudio de derecho y política... op. cit., pág. 167

Para CASTAN, " lo que es llamado autogobierno representa una cierta meta ideal dentro del punto de vista más tradicional en la forma de concebir la magistratura"

Véase: la obra de Castan " Poder Judicial e independencia judicial" Reus, Madrid, 1951 pág.65-66, así como la obra de Andrés Ibáñez: El Poder Judicial, op, cit., pág.48

CGPJ eran elegidos por los jueces y magistrados por cooptación. La distribución se realizaba entre : tres Jueces, seis Magistrados y tres Magistrados del Tribunal Supremo, el sistema utilizado era el de elección mayoritaria con voto limitado, y en listas completas aunque abiertas, la circunscripción no va a variarse con la introducción de la LOPJ 6/1985, que va a mantener el sistema establecido con anterioridad; circunscripción nacional única. Esta situación fue recurrida por diversos colectivos. Por ello, se hace preciso observar el conflicto de atribuciones resuelto por el Tribunal Constitucional⁴²¹ a través de las sentencias 45/1986,

⁴²¹ GERPE LANDÍN ha elaborado de manera resumida un análisis de los motivos alegados por los recurrentes al modelo establecido tras la entrada en vigor de la LOPJ, al tiempo que toma en consideración los fundamentos jurídicos expuestos en las distintas sentencias del TC en relación al Consejo y sobre las que ya nos hemos referido con anterioridad. Vemos pues los aspectos esenciales del citado trabajo.:

Uno de los motivos alegados por los recurrentes haría referencia al art. 66.2 CE en virtud del cual, las Cortes son constitucionalmente un poder limitado(*), sin que la ley pueda atribuirle nuevas atribuciones, dado que sería tanto como convertir al legislador ordinario en legislador constituyente;

Según los recurrentes, desde la concepción de que el Consejo General es un órgano constitucional, no de mera relevancia constitucional, no resulta admisible que su configuración se refiera al legislador ordinario, permitiendo que varíe cada legislatura; coherentemente con ello, debe interpretarse que el art. 122.3 regula el electorado activo y así lo hace determinando que a las Cortes les corresponde la propuesta de 8, deduciéndose por coherencia que los doce restantes corresponden a jueces y magistrados, quedando la remisión a la ley orgánica limitada a aspectos formales y organizativos;

Se considera que otorgar a las Cortes Generales la propuesta de todos los miembros convierte al Consejo General en una dependencia de las Cortes Generales, que rompe con el principio de independencia del órgano y con los de autogobierno, participación y representatividad del Poder Judicial;

La interpretación literal es considerada por los recurrentes insuficiente; la interpretación originalista exterioriza que la voluntad de los constituyentes era que fueran elegidos por los jueces y magistrados, y el modelo en el que se inspiran -el de Italia- adopta también el mismo criterio.

En relación a la postura adoptada por el TC GERPE LANDÍN pone de manifiesto los fundamentos jurídicos sobre los que se apoyaría dicho Tribunal:

En torno a la primera de las alegaciones anteriormente expuestas, se considera que la *recta interpretación del último inciso del artículo 66.2 CE* no es que las Cortes sólo puedan tener las funciones expresamente contenidas en la Constitución, sino que ésta les asigna algunas que forzosamente han de cumplir y que la ley no puede atribuir a ningún otro órgano, sin que ello suponga que, por ley, no puedan reconocérsele otras (Véase STC 108/86 FJ 12°)

En relación al motivo alegado por los recurrentes relativo a la naturaleza constitucional del Consejo, debemos observar lo dispuesto en la STC 45/1986, FJ 11°, en donde se establece como que una autorizada opinión doctrinal entienda que los órganos constitucionales, entre los que se incluye el Consejo, deban venir regulados en sus elementos esenciales, entre los que se incluiría la forma de designación de sus componentes por la propia Constitución, no implica que del texto constitucional deban deducirse forzosamente todos esos elementos, cuando basta su simple lectura para comprobar que no regula alguno de ellos. Podrá decirse, en este caso, que la Constitución adolece de un fallo técnico, o que la doctrina citada no es aplicable...

En relación a la supuesta dependencia existente por parte de unos vocales designados por completo por el Legislativo, el TC considera que en último término, la posición de los integrantes no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que le otorga el ordenamiento jurídico. (STC 108/86 FJ 10°)

El último de los apartados tratados por GERPE LANDÍN hace mención a la interpretación que debe hacerse de la letra de la Constitución; el TC pone de manifiesto que no existe una postura común, señala el peligro que la nueva ley supone por una posible mala utilización de la misma, lo que parece aconsejar su sustitución pero que no es fundamento bastante para aconsejar su invalidez (STC 108/86 F.J. 13°)

Véase Gerpe Landín, M.: "El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias" op. cit., págs 136-140.

* Esta opinión de los recurrentes es compartida entre otros por DE LA OLIVA, así, "nosotros seguimos pensando que la certera inteligencia del art. 66.2 CE es la de los recurrentes, puesto

de 17 de abril, 108/1986 de 29 de julio, y auto 942/1985, de 18 de diciembre.

El TC al pronunciarse sobre estas cuestiones, y de manera más relevante en la Sentencia 108/1986 de 29 de julio⁴²², en referencia a los efectos que el sistema pudiera

que ese precepto tiene como finalidad delimitar -positiva y negativamente, precaviendo una tentación de *totalitarismo parlamentario*- el válido y lícito ámbito de ejercicio del poder legislativo, finalidad que se oscurece hasta casi desaparecer con la interpretación del TC, a la que, no obstante hay que atenerse hasta ahora." en OLIVA SANTOS, DE LA A.: "La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: análisis general y constitucional" en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, op. cit.,pág. 427

⁴²² Resulta sumamente complejo encontrar un lenguaje jurídico más ambiguo y contradictorio que el utilizado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986, de 29 de Julio. Decir que la fórmula establecida por la LOPJ 6/1985, de 1 de Julio, no era inconstitucional pero sí menos constitucional que lo anterior resulta cuando menos sorprendente.

Así, el T.C. concluye su polémica sentencia desestimando el recurso interpuesto: "la existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, pero no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en este caso, pues el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución". En la Sentencia citada resulta igualmente sorprendente "la apelación de los jueces constitucionales al buen sentido de las oligarquías partidistas para que renuncien a la distribución de cuotas del Consejo como una suerte de botín institucional consagrado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia se dicta cuando ya se ha formado el segundo Consejo, siguiéndose en su composición, férreamente, el

conllevar⁴²³ ha considerado que " se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma Constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos a ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial"⁴²⁴

principio de las cuotas" (Véase Manos Sucias, el poder contra la justicia, cit., pág. 153)

⁴²³ En opinión de FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, " ambos sistemas ofrecen riesgos evidentes, aunque, como señala el Tribunal Constitucional, es mayor el actual, pese a su corrección teórica, debido a la práctica llevada a cabo por el Parlamento en las ...elecciones llevadas hasta ahora... que ha generado un estado de opinión crispado, que es el único que puede moderar con sus críticas la actuación de los partidos y evitar esa desconfianza existente hacia toda institución procedente del Parlamento." Fernández- Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit., pág. 81

⁴²⁴ Véase el Fundamento jurídico decimotercero de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, número 108 de 1986, de 29 de Julio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad número 839/1985 presentado frente a la LOPJ 6/1985 de 1 de Julio.

En opinión de BUSTILLO BOLADO " no creo que fuera desacertado seguir el consejo que le daba al legislador en la STC 108/1986, y extraer del control del Parlamento la polémica designación de los doce vocales del Consejo procedentes de la Magistratura....me parecería más adecuado adoptar para la elección de esos doce Jueces y Magistrados ... el sistema de la

4.5. Posibles soluciones a la actual situación de crisis del Consejo provocada por la designación parlamentaria de los vocales:

Ley 1/1980 quizá corregido en lo que se refiere a la distribución de los vocales entre las distintas categorías judiciales, coordinando mejor el entonces predominante criterio jerárquico con el de proporcionalidad " Bustillo Bolado.R.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" op. cit., pág. 77. En esa misma dirección se ha manifestado Andrés Ibáñez que considera más acertado " el regreso al sistema original, con sufragio proporcional en la elección del componente judicial. De esta forma, en la línea de lo sugerido por Pizzorusso se difundiría el máximo de representatividad en el seno de la institución, impidiendo la concentración de poder-innecesaria y peligrosa en un órgano de garantía-, favoreciendo el pluralismo, el dinamismo interno y, en la misma medida, contribuyendo a conjurar los riesgos del colateralismo partidista que con tanta exuberancia se han materializado en la experiencia de estos años. Suele oponerse a esta propuesta una objeción estándar, que podría formularse más o menos así: ¿ qué aportaría al CGPJ la sustitución parcial de un mecanismo democrático de elección por otro corporativo?....en pocas palabras: el sistema mixto insertaría en aquél el tipo de dinámica democrática que demanda una función como la de administrar el ámbito estatutario de los constitucionalmente encargados de ejercer la jurisdicción de la independencia. Crearía en el CGPJ los presupuestos de una dialéctica interna que, para ser funcional al diseño de la política judicial idónea para producir jueces independientes, precisa integrar, como agentes, tanto - y por sí mismos- a quienes expresan directamente los valores centrales de la jurisdicción, como a quienes representan los propios de la soberanía popular. Esto, no por simple yuxtaposición de los exponentes de uno y otro polo como bloques cerrados y compactos, sino generando las condiciones más adecuadas para propiciar, primero, el pluralismo dentro de cada uno de ellos y, así la existencia en el órgano como tal, de una tensión múltiple y omnidireccional, apta para conjurar el riesgo de instrumentalizaciones y eventuales dependencias y para asegurar la autonomía funcional que el Consejo General del Poder Judicial, como institución de garantía necesita. " Andres Ibáñez, P.: " Sobre el asociacionismo e independencia judicial" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 25, marzo 1996, pág.91-92

a) Jueces corporativos: el autogobierno

Para el sector doctrinal contrario a la actual fórmula de designación de los miembros del Consejo, se plantearían posibles alternativas al modelo actual. Vamos a analizar cada una de las mismas para, posteriormente referirnos a aquella que consideramos más acertada.

En la primera de estas posibilidades se encontraría en recurrir a los jueces corporativos, a los que podríamos definir como los " magistrados encargados de solucionar los litigios surgidos en determinadas profesiones, que son designados por los miembros de la profesión... una elección corporativa, completamente diferente por su misma naturaleza a una elección por sufragio universal... sistema sólo...aplicable a jurisdicciones especializadas en determinadas profesiones"⁴²⁵. Parte de la doctrina considera que " el corporativismo judicial carece de todo papel y de toda justificación en el órgano de gobierno del poder judicial"⁴²⁶, " el corporativismo puede contribuir a reforzar el poder del colectivo, pero... el costo social es demasiado elevado. La independencia, convertida en pura cláusula hacia

⁴²⁵ Duverger, M.: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional " Ariel, Barcelona, 1980, pág. 164.

⁴²⁶ Xiol Ríos, J.A.: El Poder Judicial... op. cit., pág. 26.

el interior, conduce fatalmente al alejamiento de los fines que justifican la existencia de la organización "⁴²⁷. El tema de la intervención de las asociaciones, corporaciones y colegios profesionales en la elección de los miembros del CGPJ es objeto de debate entre los diversos grupos parlamentarios; lo que viene a poner de manifiesto la actualidad y complejidad de la materia.⁴²⁸ La referencia al corporativismo nos conduce de manera directa al tema del autogobierno de la magistratura: En relación a esta materia⁴²⁹ se plantean serias dudas; ¿ Cabe seguir hablando de autogobierno del poder judicial cuando en realidad la designación

⁴²⁷ Fernández Entralgo, J.: " Los jueces en una Sociedad Democrática " op. cit., pág. 125

⁴²⁸ " las pretensiones del Grupo Popular de que los colegios de abogados, asociaciones de jueces y fiscales o similares instituciones de censores de jurados de cuentas o auditores participen en el proceso de elección de vocales y consejeros del TC, CGPJ, y del Tribunal de Cuentas han chocado con el veto del Gobierno, que se ratifica en su idea de que sería caer en el corporativismo. Por contra, el principal partido de la oposición considera que sería una ayuda para asegurar la independencia de los órganos institucionales y huir de la sospecha sobre el reparto por cuotas que pueden hacer los partidos de los cargos que pactan." (Recogido en prensa, Diario ABC, 5-1-95)

⁴²⁹ " el modelo de autogobierno que la constitución configura es, indudablemente, un autogobierno centrado sobre los aspectos para los que tradicionalmente se ha postulado éste: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, que son aquellos sobre los que se han advertido siempre inconvenientes interferencias del ejecutivo...Un autogobierno judicial de grado excesivo, en el que la ley conceda amplias facultades discrecionales a los órganos encargados de llevarlo a cabo, es un autogobierno poco respetuoso con el principio de legalidad e incompatible con el Estado de Derecho" Véase González Rivas J.J.: El Poder Judicial y su Consejo General... op. cit., págs. 44 y 47

de los doce miembros de la carrera judicial la realiza otro órgano constitucional? y como consecuencia directa de ello, ¿no es posible y probable que a través de citada designación opere sobre los jueces y tribunales la influencia de órganos e intereses ajenos a la función jurisdiccional?"⁴³⁰; podemos ver como la idea del establecimiento del autogobierno se ha manifestado durante largos años, pero siempre " como expresión inalcanzada de la judicatura. No se trata de un concepto improvisado, sino que, por el contrario, ha ido madurando a través de las controversias que sobre el mismo se han sostenido. La primera referencia a ese ideal de autogobierno del que tenemos noticia (según BECERRIL, citado por PRIETO CASTRO) se planteó en las Cortes Constituyentes de 1869, cuando se discutía el texto del artículo 94 de la Constitución, pues, sentado que el Rey nombraría los jueces y magistrados a propuesta del Consejo de Estado, se sostuvo que en el seno de una Constitución liberal, dicho órgano administrativo no debía anteponerse al primer Tribunal de la Nación a quien por ello debería corresponder dicha propuesta. Se opuso a ello que la exclusión de dicho Consejo daría al Tribunal Supremo un poder omnímodo, a modo de un Estado dentro del Estado y que su autoformación le transformaría en un *monstruo inamovible*, que se reproducía a si mismo. No

⁴³⁰ Sánchez González, S.: Sistemas Políticos actuales ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995, pág. 224

prosperó, pues, la proposición por lo que se mantuvo la injerencia administrativa en la organización judicial, compensada con la posibilidad de que el Tribunal podría oponerse reverentemente al Gobierno después de efectuados los nombramientos, en la forma que recogió el art. 184 de la Ley Provisional de 1870."⁴³¹ Para nuestros autores, " las tensiones que en torno a la concepción del autogobierno precedieron y coexistieron con la elaboración del texto constitucional han determinado que la respuesta a la pregunta de si la Constitución consagra el autogobierno del Poder Judicial no haya podido ser más ambigua. Desde el seno del propio Consejo se ha insistido en que la Constitución consagra un sistema de gobierno autónomo del Poder Judicial y algunos autores han subrayado que la Constitución no consagra un sistema de autogobierno " ⁴³². Otros, pretendiendo huir de la terminología empleada ha buscado distintos tipos de calificaciones, destacamos la que consideraría posible denominarlo *gobierno autoindependizado*⁴³³. La postura que en cierto modo ha sido mayoritariamente adoptada vendría a decir

⁴³¹ Domínguez Martín, S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial ..." op.cit., pág. 997

⁴³² Xiol Ríos, J.A. " *El autogobierno del Poder Judicial; la situación en España*" Documentación Jurídica, Enero-Junio 1985, Ed. Ministerio de Justicia, en jornadas de estudio sobre el poder judicial, núms 45 y 46, pág.142.

que, " cabe pensar que es más razonable creer que la Constitución consagra efectivamente, un sistema de autogobierno, aunque fijando unos márgenes que lo alejan de las formulaciones absolutas, por lo que quizá la calificación más adecuada sea la de autogobierno relativo "⁴³⁴

b) Designación directa por el Gobierno

Otra alternativa que se presenta al modelo diseñado por la actual LOPJ 6/1985 de 1 de julio, sería la de someternos a los fórmulas de nombramiento directo por el gobierno; lo cual no parece estar muy acorde con el sistema actual y sin duda significaría dar lugar a un concepto distinto al de la independencia del poder judicial.

c) Designación directa por los jueces

La alternativa, si cabe, de recurrir a aquellos procedimientos en los que el nombramiento se lleva a cabo de forma directa por los jueces, sin la intervención de las

⁴³³ Martínez Ruiz, L.F. " Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la independencia del juez " RDPrI, núm. 2 - 3, 1980, pág.416

⁴³⁴ Recogido en " Poder Judicial y Tribunal de garantías en la nueva Constitución " en Lecturas sobre la Constitución Española, I, UNED, Madrid, 1978, pág. 296.

distintas asociaciones. Sirva de referencia al supuesto del autogobierno de la judicatura el hecho de que la UJI reclama que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los veinte de que se compone el mismo, que deben proceder de la carrera sean designados en elecciones libres, directas y secretas por los miembros de la Judicatura, sin que se disponga de ningún otro tipo de filtro, pudiendo ser elegidos y electores todos los jueces y, la designación por el Parlamento de los ocho Vocales no judiciales sobre la base de ternas presentadas por los Colegios profesionales y entidades relacionadas con el mundo jurídico.⁴³⁵

La postura mantenida por la UJI, sin embargo, no garantiza la independencia de los miembros del CGPJ elegidos a través de esta vía de elecciones judiciales, ya que los Vocales Parlamentarios que han sido designados según ese procedimiento se hallan en una relación de fidelidad con las diferentes asociaciones divididas según las diversas tendencias políticas. La temida politización derivada del sistema de elección parlamentaria, se encontraría pues dentro de la propia organización de la Magistratura, facilitándose, de esta manera, los roces entre el Poder Judicial y el resto de poderes y, amenazando la viabilidad de la vida política

⁴³⁵ Ponencia aprobada en el congreso de la UJI, Madrid, del 20-27 de Noviembre de 1994, recogido en prensa.

del estado. La fórmula propuesta existe en otros países aunque, claro está, con una organización y unos poderes diferentes de los que la Constitución da a nuestro CGPJ.

d) Designación vía criterios de antigüedad

Esta fórmula se presenta como una alternativa más al modelo actual; sin embargo, no creemos que la vía de designación por antigüedad en los escalafones de las distintas categorías de la carrera judicial sea la más apropiada: esencialmente por una razón; por este procedimiento se puede elegir a sujetos que, pese a pertenecer a la carrera judicial, lo que conlleva de por sí una cierta capacidad reconocida, no sean lo más idóneos.⁴³⁶

V) Conclusiones

Con las facultades⁴³⁷ que se han otorgado a nuestro CGPJ que, es quien gobierna al Poder judicial, tal y como se

⁴³⁶ Como defensores de implantar el sistema de designación por antigüedad en el escalafón: RODRÍGUEZ SANTOS " Carta abierta de un juez a los partidos políticos" y RAFAEL TERMES " Sobre la indeseable parlamentarización de la justicia". Véase opiniones manifestadas en Prensa 20-6-96, y 11-7-96

⁴³⁷ Dependiendo de los diversos autores de la doctrina, la clasificación de las distintas atribuciones de que dispone el Consejo varía sustancialmente. Para TEROL BECERRA, las posibilidades de actuación del órgano se dividen en: Tero Becerra: El Consejo General del Poder Judicial, op cit. pág. 102 A- De carácter no decisorio: memoria anual y facultad de informe

regula en el art. 104.2 de la LOPJ, es muy complejo encontrar un sistema en el que el órgano de dirección sea de origen corporativo. Con dichos poderes lo normal es que la elección se realice, bien por el gobierno, bien vía elección parlamentaria. Todo lo explicado anteriormente en cuanto al sistema de autogobierno, independencia... parecería llevarnos a la conclusión de que sería interesante consolidar la normativa existente, es decir, la actuación del Parlamento en la designación de los miembros del Consejo, debido a que el mismo, fue considerado por diversos autores como el mejor sistema factible en el Estado democrático⁴³⁸. Esto no implica

B- De carácter decisorio: propuestas de nombramiento

- * orden decisorio interno; los vocales y Servicio Técnico, Secretario General
- * orden decisorio externo; los dos miembros del TC
- * orden decisorio interno y externo ; nombramiento del Presidente del T.S. y del propio Consejo

⁴³⁸ La sección de Valencia de " Jueces para la Democracia " considera esta postura como la más acertada pues con la designación por parte del Parlamento de la totalidad de los miembros del Consejo se " produciría una mayor democratización y una mayor despolitización del Poder Judicial " Nota para la Prensa difundida el 8 de marzo de 1985 En este sentido pueden resultar interesantes: E. ALVAREZ CRUZ " La democratización del Poder Judicial" en el PAÍS, 19 de marzo de 1985, M. GARCÍA MIGUEL, en Poder Judicial" Soberanía e independencia", en el PAÍS, 31 de Marzo de 1985, P. SALA SÁNCHEZ " La elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial " en el PAÍS 9 de abril de 1985, A. MARTÍN PALLIN " los jueces, su independencia y su gobierno" en el PAÍS, 15 de abril de 1985. En contra de los anteriores pueden tenerse en consideración las opiniones de; P. ANDRES IBÁÑEZ " mas democracia para la justicia" en el PAÍS 11 marzo 1985, MOVILLA "Independencia judicial y soberanía popular", la Voz de Galicia, 25 de marzo 1985, PECES MORATE "El Poder de los Jueces", Diario 16, 19 de marzo 1985.

la imposibilidad de llevar a cabo reformas para su adecuación a un procedimiento ajeno a los defectos que se observan en la situación actual; situación que, en referencia al Consejo General del Poder Judicial y a la forma de designación de sus Vocales ha llegado ha ser descrita por RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS como de " hundido en el desprestigio. Hasta sus más ardorosos defensores de otros tiempos han tenido que reconocer públicamente que es un sistema históricamente pervertido"⁴³⁹

Son muchos los que acertadamente apuntan que se hace indispensable en la regulación vigente un cambio de dirección⁴⁴⁰; encontrar la vía adecuada es lo preciso: tomando como premisa que, no se trata de dar cambios radicales a la leyes vigentes dependiendo de quien se encuentre en el poder, se hace preciso mejorar las mismas: sumamente interesante resulta la posibilidad de modificar el sistema de cuotas existente, -con el que no se han obtenido los resultados

⁴³⁹ Ramón Rodríguez Arribas en "Deliberación" núm.13, Julio-Septiembre de 1995, Ed. APM. pág.3

⁴⁴⁰ En este sentido se ha manifestado MANUEL JIMENEZ DE PARGA: " Creo que, en este asunto como en otros, habría que llevar a cabo una *reforma de la reforma*, ya que el Consejo elegido por jueces y magistrados goza de mayor autoridad ante los titulares del Poder Judicial que el formado con la intervención de los poderes parlamentarios." MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA: La ilusión política, ¿ Hay que reinventar la democracia en España? op. cit., pág. 144

esperados desde una perspectiva científico-dogmática. La gran oportunidad otorgada al Parlamento de desarrollar una notable actividad para el mundo judicial ha sido malograda debido en gran medida a la incapacidad de los partidos políticos de actuar con imparcialidad, " tan pronto como se confía a los partidos algo tan importante como la posibilidad de controlar el órgano de gobierno del poder judicial, es imposible evitar que cedan a esa tentación: nadie consiente que le quiten su cuota"⁴⁴¹. Puede considerarse interesante la propuesta que realiza el Partido Popular a través de la cual el " Parlamento -Congreso de los Diputados y Senado- votarán, no a los candidatos de los partidos políticos, como viene ocurriendo hasta ahora, sino a los candidatos de las Asociaciones profesionales. Serán pues, los magistrados y jueces, los que designarán a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, limitándose el Parlamento a avalar con su voto la decisión que adopten las Asociaciones.

El Grupo Popular proponía, con anterioridad a su llegada al poder tras las elecciones del 3 de marzo de 1996, que los grupos parlamentarios se dirigieran a las Asociaciones de Magistrados para que éstas les hicieran llegar una lista con sus candidatos respectivos. Una vez recibidas las listas, los

⁴⁴¹ Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. En EL MUNDO, 15/10/95

grupos parlamentarios, respetando siempre el grado de representación de cada Asociación, procederían a la elección de los candidatos.⁴⁴² El problema que se plantea es cómo regular la actuación de esas asociaciones para que en el interior de las mismas no se produzcan luchas similares a las surgidas en el seno de los partidos políticos. Sin embargo, el principal problema en relación a la modificación de la normativa existente en torno a la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, no radica en analizar las soluciones dadas por el derecho comparado; de igual manera, no parece oportuno entrar a discutir si " el sistema electoral... debería ser una decisión constitucionalizada formalmente o, cuando menos, implícitamente determinable de

⁴⁴² Recogido en el Diario ABC, 14 de Octubre de 1995, véase también 16 de Junio de 1996. La postura de las diversas asociaciones en relación a la negociación llevada a cabo por los distintos partidos políticos es distinta:

La Asociación Profesional de la Magistratura ha llevado por primera vez a cabo un proceso interno de consulta a los asociados para seleccionar a sus candidatos. El 13 de abril la Comisión Permanente de la APM acordó que cada sección territorial eligiera en asambleas a los aspirantes al CGPJ, cuyos nombres serán remitidos a las Cortes en caso de que haya una petición institucional desde la Presidencia o desde las Mesas del Congreso y del Senado.

La Asociación Jueces para la Democracia ha entregado a los grupos parlamentarios la misma lista que ya les facilitó en noviembre de 1995, cuando venció el mandato del actual Consejo del Poder Judicial.

La Asociación Francisco de Vitoria ha decidido que los nombres de sus diez candidatos serán trasladados al Parlamento si se produce una petición expresa.

La Unión Judicial Independiente no ha propuesto ningún candidato. Tampoco lo ha hecho la Asociación de Fiscales

forma inequívoca"⁴⁴³; tampoco resulta conveniente discutir sobre si debemos volver a un sistema como el establecido por la LOCGPJ 1/1980, con las modificaciones que se creyeran convenientes, incluso sin necesidad de introducir las mismas, o por contra mantener la vigente LOPJ 6/1985. El problema radica en que se debe tomar conciencia de que no se puede "acometer esta reforma porque falta suficiente consenso político, falta suficiente consenso social y falta, sobre todo, el suficiente consenso profesional. En esta materia no es que no estemos de acuerdo los grupos parlamentarios...es que tampoco están de acuerdo los jueces y magistrados sobre cuál es el sistema idóneo para proveer esta designación, la forma de cobertura de estas vacantes, ni están de acuerdo los profesionales del Derecho, ni está de acuerdo la Academia, ni están de acuerdo los profesores universitarios"⁴⁴⁴. La solución, quizá se encuentre en " un genuino acuerdo entre los partidos políticos tendentes a proponer sólo personas de altas cualidades personales y profesionales, así como a evitar al máximo la instrumentalización de esas mismas instituciones... creo que en la vida constitucional hay problemas cuya solución no pasa por la aprobación de normas

⁴⁴³ Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias", op. cit., pág. 132

⁴⁴⁴ Véase en Revista Vasca de la Administración Pública, núm. 2, 1994, pág. 259, la intervención llevada a cabo por el diputado del grupo nacionalista vasco OLABARRÍA MUÑOZ.

legales, sino por el mejoramiento de la cultura política y el establecimiento de convenciones no escritas."⁴⁴⁵ El problema surge si, manifestada esa intención de cambio en nuestra cultura constitucional ésta no se lleva a cabo; en ese caso, se hace preciso, cuando menos, evitar que se produzcan alteraciones interpretativas de nuestro texto constitucional, " mutaciones constitucionales"⁴⁴⁶ tal y como puso de manifiesto JIMENEZ DE PARGA en relación a los efectos de la LOPJ 6/1985 de 1 de julio.

⁴⁴⁵ Díez-Picazo, L. M.: " Problemas y tensiones de la judicatura" en Revista de Occidente, núm. 179, ed. Instituto Ortega y Gasset, Abril 1996, pág. 54 y 55

⁴⁴⁶ Jiménez de Parga, M.: " La ilusión política. ¿Hay que reinventar la democracia en España? op. cit., pág. 141

SECCIÓN IIª ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

- i) Introducción
- ii) Requisitos
 - a) Formación jurídica
 - b) Cualidades éticas
 - c) Sistema de incompatibilidades
 - d) Posibilidad de reelección
 - e) Duración del mandato

SECCIÓN IIIª CESE DE LOS VOCALES

- i) Introducción
- ii) Causas

SECCIÓN II:ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL ESTATUTO DE LOS

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

i) Introducción

Tal y como ha puesto de manifiesto MONTERO AROCA, la independencia sólo puede predicarse de los que ejercen función jurisdiccional, sin esa función jurisdiccional, carece de sentido justificar la independencia. No se trata, de que a través del estatuto de los miembro del Consejo General del Poder Judicial quede garantizada la independencia de los miembros de la citada institución, el fin al que responden este conjunto de normas es a la de " posibilitar la eficacia de la idea que está en la base de la creación del Consejo, es decir, de que se convierta en un órgano autónomo y desvinculado de los otros poderes y, sobre todo, pero no únicamente del ejecutivo"⁴⁴⁷.

ii) Requisitos

a) Formación jurídica

⁴⁴⁷ Montero Aroca, J.: " Estatuto de los miembros del CGPJ" en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial , op. cit., pág.215

Si tomamos como premisa lo dispuesto en el artículo 122.3 de la Constitución Española, parece evidente que uno de los requisitos básicos que han de cumplimentar aquellos que van a ser designados como Vocales es el tener una sólida formación jurídica: jueces y magistrados se encuentran a la hora de analizar este supuesto con la ventaja de que para ingresar en la judicatura tuvieron que demostrar unos amplios conocimientos. El problema plantea mayores dificultades cuando nos referimos a los abogados y otros juristas; sin embargo, la obligación de que tengan una reconocida competencia y más de quince años en el ejercicio de la profesión, actúa como filtro y elimina cualquier sospecha sobre los mismos.

MONTERO AROCA, a la hora de analizar los requisitos para ser nombrado Vocal del Consejo distingue, tal y como hemos realizado nosotros entre los miembros procedentes de la judicatura y aquellos procedentes de las profesiones liberales⁴⁴⁸:

A) En relación a los jueces y magistrados, tal y como establece el art. 122.3 de la CE anteriormente citado y el

⁴⁴⁸ Montero Aroca, J.: " Estatuto de los miembros del CGPJ" en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 217-220

art.112.3 de la LOPJ se establece la necesidad de que concurran en los mismos dos requisitos:

- Uno puede considerarse genérico y se refiere a que los puestos reservados a jueces y magistrados deben repartirse entre tres categorías judiciales, esto es, entre magistrados del Tribunal Supremo, magistrados y jueces, pero sin que exista un reparto concreto determinado por ley. (art.299 LOPJ)

- Otro puede considerarse concreto y atiende a que los vocales procedentes de la carrera judicial han de estar en activo en su carrera en el momento de la elección (arts.348 y 349)

B) En relación a los Abogados y otros juristas MONTERO AROCA profundiza algo más, planteando algunas cuestiones de interés:

- Hace mención el citado autor a la duplicidad de términos existentes, dado que en la palabra jurista cabe englobar también a la de abogado. En ocasiones esta vía ha sido utilizada para designar a magistrados como Vocales del Consejo, desvirtuándose de esta forma la correcta interpretación de la norma. La duda que se suscita es si los constituyentes quisieron que en el Consejo se incluyera al

menos a un abogado, como clase de juristas. Al igual que a Montero Aroca nos parece más que criticable esa posibilidad.

- Los encargados de llevar a cabo el reconocimiento de la competencia no son, los senadores y diputados, éstos atienden a criterios objetivos que deben de ser otorgados por la sociedad como conjunto.

- En relación a los más de quince años de ejercicio de la profesión, se pone de manifiesto la necesidad de que realmente se haya llevado a cabo la misma, no puede adquirirse la experiencia si no se actuaba como tal.

b) Cualidades éticas

En cuanto a las condiciones personales de integridad o moralidad que deban corresponder a los Vocales, designados todos ellos en la actualidad por las Cortes Generales, no encontramos alusión alguna en la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, modificada parcialmente por la LO 16/94 de 8 de noviembre, ni en el reglamento interno del Consejo.

Si bien no parece necesario variar las disposiciones existentes, ni a nivel de Ley, ni reglamentario, sí deben

tenerse claros los criterios de que se partan a la hora de designar a los Vocales. En el espíritu de la institución se encuentra la idea de que el Poder Judicial sea dirigido en su quehacer diario por los miembros más capacitados, no sólo profesionalmente sino también, moralmente.

El requisito al que hacemos referencia probablemente hubiere pasado inadvertido a cualquier estudioso de la materia, dado lo obvio del mismo; sin embargo, los recientes acontecimientos en torno al caso Estevill, no cabe duda, han dejado huella en el mismo seno de la institución, así como de la ciudadanía.

Lo más importante es, por tanto que se den las condiciones morales y de honestidad en todos y cada uno de los Vocales del Consejo.

c) Sistema de incompatibilidades

Tal y como establece el artículo 117.1 de la LOPJ 6/1985 de 1 de julio: " Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por

cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar..."

La regulación de las incompatibilidades que pueden afectar a los Vocales designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial tienen como misión la de asegurar la independencia de los mismos en el desempeño de sus funciones. Como complemento a esa norma que podemos considerar general, encontramos otras:

- Véase las contempladas en el art. 389 de la LOPJ, referidas a las incompatibilidades y prohibiciones de jueces y magistrados

- En referencia a la materia retributiva debe atenderse a lo establecido en el art. 121.1 LOPJ

- El artículo 15 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial remite a los artículos , 117.1, 119.1, 120 y 121 de la LOPJ 6/85, de 1 de julio.

d) Posibilidad de reelección

La cuestión de si los Vocales del Consejo General del Poder Judicial pueden ocupar el cargo con posterioridad al cese de los mismos, por cualquiera de los motivos que analizaremos, es una cuestión a la que nunca se ha prestado especial atención.

Si bien es cierto que la LOPJ 6/85, en el artículo 112.4 establece que: " En ningún caso podrán ser elegidos:a) Quienes hubieren sido nombrados miembros del Consejo saliente b) Quienes presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial", también sabemos y, así lo ha puesto de manifiesto MONTERO AROCA, que el apartado b) del citado artículo se burla fácilmente; renuncia el sujeto que desempeña una función en los órganos técnicos días antes a ser designado. Conociendo esta posibilidad y de la picaresca existente, creo oportuno poner de manifiesto la necesidad de establecer un período entre el cese como miembro de los órganos técnicos y la posibilidad de ser designado Vocal del Consejo. De igual modo, es aconsejable la ineligibilidad de los consejeros para evitar así la profesionalización de los mismos. Llegaría incluso más allá, al proponer la imposibilidad de que los miembros salientes del Consejo pudieran ser promovidos, previo el transcurso de dos o tres años, a la categoría de magistrados del Tribunal Supremo, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera

judicial de libre designación o en cuya provisión concurran apreciación de méritos. Sólo de esta manera se daría sentido a las prohibiciones existentes durante el mandato de los Consejeros establecidas en el artículo 120 de la LOPJ. De otra forma, se corre el peligro de que determinados sujetos quieran hacerse con las Vocalías del Consejo para desde las mismas llevar a cabo su propia promoción.

e) Duración del mandato

PEDRAZ PENALVA⁴⁴⁹ ha llevado a cabo un análisis de algunas cuestiones relativas al estatuto de los miembros del Consejo:

- ¿El paso de cinco años de duración prevista exige de manera necesaria la renovación del Consejo antes de su término? La práctica continuidad en funciones del Consejo que debería haberse renovado el 8 de Noviembre de 1995 nos ha dado la respuesta. Se ha aplicado el artículo 115.2 de la LOPJ

⁴⁴⁹ Pedraz Penalva, E: " Del Consejo General del Poder Judicial y de la selección de sus miembros" Proemio al Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial op. cit.,pág.21

- ¿El tiempo de mandato de cada Vocal ha de ajustarse al del Consejo para el que se le nombra con independencia del transcurso o no de los cinco años? Se ha entendido que la permanencia de cada vocal, consumidos o no los cinco años, depende de la duración del Consejo para el que se le designó, lo que se ha visto plasmado normativamente en el art. 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 24 de Abril de 1986

- ¿La renovación de sus integrantes ha de ser simultánea o sucesiva? al igual que PEDRAZ PENALVA o SERRA DOMÍNGUEZ⁴⁵⁰, consideramos que sería positivo " un cambio sucesivo en pro de una exigible continuidad en el regimiento del judicial, con disminución de los vaivenes partidistas contrarios a una política de estabilidad y continuidad. La experiencia de una mitad o de las dos terceras partes de los Vocales podría compensar la bisonñez de los que se fueren incorporando, al modo como está previsto en otros órganos como el Tribunal Constitucional"⁴⁵¹ (art. 159.3 CE en relación con el 16 LOTC)

⁴⁵⁰ SERRA DOMÍNGUEZ Se manifiesta a favor de una renovación parcial cada tres años de los miembros del Consejo. Véase El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 184

⁴⁵¹ Pedraz Penalva, E: " Del Consejo General del Poder Judicial y de la selección de sus miembros" Proemio al Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial op. cit.,pág.21

SECCIÓN III^a CESE DE LOS VOCALES

i) Introducción

Como ya sabemos, pues ha sido analizado con anterioridad al estudio del estatuto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en la actualidad todos los Vocales del Consejo son designados por el Parlamento. Si como consecuencia directa de la naturaleza de órgano constitucional atribuida al Consejo, no podemos exigir responsabilidades disciplinarias del mismo, lo lógico sería que sí pudieran serle exigidas responsabilidades políticas. El problema que se plantea y, que brillantemente ha puesto de manifiesto MONTERO AROCA, es que pese a que el Parlamento puede designar a los Vocales del Consejo, sin embargo, no puede cesarlos: " de ahí que exista un híbrido entre responsabilidad disciplinaria y política"⁴⁵²

ii) Causas

Tal y como se dispone en el artículo 119.2 de la LOPJ:
" Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato imperativo alguno, y no podrán

⁴⁵² Montero Aroca, J.: " Estatuto de los miembros del CGPJ" en El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial op. cit., pág. 230

ser removidos de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidades o incumplimiento grave del cargo..."

La forma más habitual de cese de los Vocales del Consejo lo constituye la del cumplimiento del mandato. Sobre los problemas relativos a la inclusión de un nuevo Vocal y, al cómputo del plazo que el mismo debe recibir nos hemos referido con anterioridad. Como sabemos, el Consejo puede permanecer en funciones, en situación de interinidad, hasta que se lleve a cabo la designación del nuevo Consejo. Sin embargo, esta situación, provocada por la falta de consenso político debilita notablemente la valoración que de la misma se tiene; no debe ser pues ésta la vía utiliza⁴⁵³

Otra de las causas que constituyen el fin del mandato para uno o varios de los miembros del Consejo lo constituye la renuncia. Tal y como ha puesto de manifiesto MONTERO AROCA, " aunque otra cosa pudiera parecer, no existen ni causas de renuncia ni potestad en el presidente para aceptarla. Si el cargo de vocal del Consejo tiene naturaleza política hay que admitir que su titular puede dejarlo cuando lo estime oportuno, sin que tenga que alegar la concurrencia

⁴⁵³ Artículos 114 y 115.2 de la LOPJ

de la causa, ni mucho menos que ésta sea justificada".⁴⁵⁴ El art. 119.2 de la LOPJ establece: " ... La aceptación de la renuncia competirá al Presidente, y la apreciación de las restantes causas de cese deberá ser acordada por el Pleno del Consejo General por mayoría de tres quintos de sus miembros."

Respecto a las incompatibilidades ya hemos hecho referencia en apartados anteriores, únicamente recordar aquí que la misma puede dar atendiendo a tres circunstancias distintas:

- Supongamos que un Vocal es designado para otro cargo, en atención a las incompatibilidades existentes en el plazo de ocho días a contar desde el nombramiento, debe optar por el nuevo cargo de forma expresa; en el caso de que no lo haga de forma expresa, el Pleno del CGPJ y por mayoría de tres quintos, acordará su cese con motivo de incompatibilidad

- Puede darse también el supuesto de que un sujeto sea designado Vocal del Consejo y continúe ejerciendo funciones

⁴⁵⁴ Montero Aroca, J.." Estatuto de los miembros del CGPJ" en El Gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. op. cit.,pág. 231

contempladas como incompatibles; en tal caso " también tiene que ser posible el cese por incompatibilidad"⁴⁵⁵

El supuesto del incumplimiento grave de los deberes del cargo es sin duda el supuesto menos habitual dentro de los motivos de cese de los Vocales del Consejo.

La posibilidad de dejar de pertenecer a la carrera judicial se contempla únicamente para los de procedencia judicial. El supuesto más habitual es el de la jubilación⁴⁵⁶

⁴⁵⁵ Montero Aroca, J.: " Estatuto de los miembros del CGPJ" en El Gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, op. cit.,pág. 232

⁴⁵⁶ Véase además arts. 116 LOPJ, 121.2 y 121.3

CAPÍTULO SEGUNDO: INFORMES QUE EL CONSEJO PRESENTA ANTE LAS CORTES GENERALES

- i) Introducción
- ii) Objeto
- iii) Relevancia
- iv) Efectos resultantes de la omisión

CAPÍTULO SEGUNDO: INFORMES QUE EL CONSEJO PRESENTA ANTE LAS CORTES GENERALES

i) Introducción

Se plantean por parte de la doctrina diversas cuestiones relacionadas con los informes que debe desarrollar el Consejo General del Poder Judicial en los supuestos del art. 108 LOPJ. De entre las dudas suscitadas podrían destacarse por su especial relevancia las siguientes; en primer lugar hay que determinar cuales son los órganos que se encuentran dotados de iniciativa legislativa, es igualmente importante analizar cual es el momento en que debe actuar el Consejo, así como establecer una relación de los supuestos en los que llevan a cabo los informes⁴⁵⁷, especialmente teniendo en cuenta la reciente modificación operada en la LOPJ por la LO 16/1994, de 8 de noviembre, al tiempo que se determina su naturaleza, la relevancia vinculante o facultativa de los informes elaborados. Veremos además quienes son los destinatarios de

⁴⁵⁷ Una cuestión que se plantean algunos de nuestros autores es si el Consejo General del Poder Judicial se encuentra facultado para desarrollar sus informes cuando la materia objeto de análisis para dar lugar a los mismos son las normas comunitarias. En opinión de ÁLVAREZ CONDE " la redacción de la artículo 108 LOPJ no parece permitirlo. Quizás a lo más que en es este supuesto estaríamos en presencia de un informe facultativo y no preceptivo " Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las CC AA" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, op. cit. pág. 33

la actividad del CGPJ y, por último que va a suceder cuando se produce su omisión.

Lo primero que tenemos que analizar al observar la actividad llevada a cabo por parte del CGPJ en relación a los informes⁴⁵⁸ que el Consejo debe emitir ante la elaboración de

⁴⁵⁸ Puede ser interesante llevar a cabo una visión particular sobre la actividad que en esta materia ha venido desarrollando el Consejo:

En la Memoria de 1981, remitida el 30 de mayo de 1981 no existe un índice exhaustivo de las materias sobre las que el Consejo ha participado.

En la Memoria de 1982 se recogen los distintos informes que ha elaborado el Consejo:

- Informe al Proyecto de Ley de regulación del procedimiento de apremio aplicable a las multas en materia de circulación por carretera y demás vías públicas.
- Informe al Proyecto de LOPJ (A. P. de 21 de octubre de 1981)
- Informe desfavorable al Proyecto de Real Decreto Ley sobre funciones de los Jueces de Vigilancia de Penas
- Informe al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal
- Informe al Proyecto de Reforma Parcial del Código Penal
- Informe al Proyecto de Real Decreto regulando la detención de militares al servicio activo
- Informe a tres Proyectos de Real Decreto sobre estructura de la Mutualidad Judicial.
- Informe al Proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros sobre aplicación de la Ley 31/1981
- Informe en el expediente sobre elevación de categoría de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Marbella
- Informe al Proyecto de Real Decreto sobre creación de Juzgados de I^a instancia y de Distrito de Galicia y Andalucía
- Informe al Proyecto de Real Decreto sobre retribuciones complementarias de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
- Informe al Proyecto de Orden Ministerial sobre normas electorales para la renovación de la Asamblea de la Mutualidad de la General Judicial
- Informe al Proyecto de Orden Ministerial sobre conservación y destino de los objetos intervenidos en causas criminales
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se crea la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Memoria de 1983, remitida el 30 de julio de 1983:

-
- Informe al Anteproyecto de Ley por el que se determinan los índices multiplicadores y se fijan las plantillas en los Cuerpos de las Carreras Judicial, Fiscal y Secretariado de la Administración de Justicia.
 - Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido o preso y se modifican los arts. 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
 - Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal
 - Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifican los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre prisión provisional
 - Informe sobre el proyecto de Real Decreto-Ley modificando el de 4 de enero de 1977 en materia de competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
 - Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus
 - Informe al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento
 - Informes varios sobre creación de Juzgados , de revisiones de Sala, prestaciones de la Mutualidad General Judicial...
- La Memoria de 1984 también recopila todos los informes emitidos por el Consejo:
- Adición al informe relativo a la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 - Informe sobre el Proyecto de Ley de Adopción
 - Informe al Anteproyecto de Ley por el que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
 - Informe sobre el texto de la proposición de ley de fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales de Galicia
 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de los derechos fundamentales de la persona
 - Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas contra las actuaciones de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución.
 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley de extradición pasiva
 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial
 - Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifican los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
 - Informe al Anteproyecto de Ley Cambiaria y del Cheque
 - Informe respecto del Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el artículo 47 de previsión de funciones de la Administración de Justicia
 - Informe relativo a la Orden Ministerial sobre Registro Civil Unico en Madrid
 - Informe respecto de Registro Civil en Palma de Mallorca

-
- Informe sobre la fijación del valor del punto para 1984
 - Informe al Proyecto de Orden Ministerial que eleva a definitivo el régimen de Registro Civil Unificado en Santiago de Compostela
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de creación de 60 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Distrito
 - Informe respecto del Proyecto de Orden Ministerial relativa a la puesta en funcionamiento de varios Juzgados.
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de complementos de los Magistrados de Trabajo y Secretarios del Tribunal Central de Trabajo y Magistraturas de Trabajo
 - Informe sobre Proyecto de Orden Ministerial por la que se delega en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la formación de la estadística de asuntos tramitados por las Magistraturas de Trabajo
 - Informe al Proyecto de Orden Ministerial por la que se prórroga el derecho a la asistencia sanitaria de los trabajadores despedidos que tengan pendiente la resolución demanda por despido improcedente ante la Jurisdicción laboral
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto relativo a los criterios de coordinación de las Administraciones Penitenciarias
 - Informe sobre Anteproyecto de Real Decreto-Ley por el que se incrementan las plantillas de la Carrera Fiscal y del Cuerpo de Médicos Forenses
 - Informe sobre el Proyecto de Reforma Parcial y Urgente del Reglamento Penitenciario
 - Informe sobre el Real Decreto por el que se regula la aportación de los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial en la adquisición de determinadas especialidades farmacéuticas
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de complementos del Personal al servicio de la Administración de Justicia
- En lo relativo a los informes de 1985 destacamos:
- Informe al Anteproyecto de Ley Concursal
 - Informe sobre el Anteproyecto del Real Decreto sobre agrupación de Juzgados a efectos de ser servidos por el mismo Médico Forense
 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Comisiones Arbitrales del País Vasco
 - Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial de delegación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la formación de la estadística de asuntos tratados por las Magistraturas de Trabajo
 - Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial sobre prestación del Servicio de Guardia en las ciudades con más de

diez Juzgados de Instrucción, y en concreto en Madrid y Barcelona

- Informe a la Orden Ministerial por las que e establecen normas de carácter provisional para el pago de obligaciones exigibles para determinadas prestaciones y servicios de la Administración de Justicia

- Informe al Anteproyecto de Ley de Patentes

- Informe ampliatoria al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial

- Segundo informe al Proyecto de Ley de Comisiones Arbitrales del País Vasco

- Informe sobre el tratamiento de la materia de clases pasivas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985

- Informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Incompatibilidades del personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial y de la Administración de Justicia

- Informe sobre las cuestiones judiciales del Anteproyecto de Ley de Aguas

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales

- Informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral General

- Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial relativa al pago de honorarios por actuaciones de peritos designados por Jueces y Tribunales

Tal y como se desprende de la Memoria de 1986, puede considerarse éste como uno de los años más intensos en cuanto a la actividad de emisión de informes se refiere:

- Informe relativo al Proyecto de Orden Ministerial sobre la creación del Registro Civil Unico de Pontevedra

- Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial por el que se disponía la puesta en funcionamiento de diversas Magistraturas de Trabajo

- Informe al Anteproyecto de Ley de Ley por el que se daba nueva redacción al artículo 131 de la Ley Hipotecaria

- Informe al Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación judicial del derecho comunitario

- Informe al Anteproyecto de Ley de Conflictos Jurisdiccionales

- Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial sobre el régimen de sustituciones de los Secretarios Judiciales

- Informe sobre varios Proyectos de Ordenes Ministeriales relativas a la puesta en funcionamiento de distintos órganos judiciales ya creados

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual

- Informe sobre el Anteproyecto de la Ley General de Publicidad

- Informe al nuevo Anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales

- Informe al Proyecto de Instrucción sobre personal interino de la Administración de Justicia

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Adopción

-
- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar
 - Informe al Proyecto de Orden Ministerial por la que se disponía la puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vitoria
 - Informe al Proyecto de Reglamento orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del Servicio de Correos
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de modificación de los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Mutualidad General Judicial
 - Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Centro de Estudios Judiciales

La Memoria de 1987 contempla los informes emitidos por el Consejo:

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 344 del Código Penal
- Informe al Anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Adopción
- Informe al Anteproyecto de Ley de Arbitraje
- Informe al Anteproyecto de Ley por la que se crea la Fiscalía especial para la represión del tráfico ilegal de drogas
- Informe al Proyecto de Real Decreto de regulación de la policía judicial
- Informe al Anteproyecto de Real Decreto sobre indemnizaciones por razón de servicio
- Informe al Anteproyecto de Real Decreto por el que se regulan los Depósitos judiciales
- Informe al Proyecto de Reglamento Orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales
- Informe al Proyecto de Orden del Ministerio de Justicia por el que se regula el acceso al Centro de Estudios Judiciales
- Informes varios sobre la puesta en funcionamiento de distintas Magistraturas de Trabajo

En la Memoria de 1988:

- Informe al Anteproyecto de la Ley Procesal Militar
- Informe al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
- Informe a la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
- Informe al Anteproyecto de Planta Judicial Militar
- Informe al Anteproyecto de Ley de Bases sobre procedimiento laboral
- Informe al Anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia
- Informe al Anteproyecto de Ley sobre prelación de créditos por exacciones en favor de la CECA
- Informe al Anteproyecto de Ley de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil de las directivas de la CEE en materia de Sociedades

-
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario
 - Informe al Anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad
 - Informe al Proyecto sobre agrupación de forensías y retribuciones complementarias de los Médicos Forenses
 - Informe al Proyecto de Real Decreto y de Ordenes Ministeriales sobre creación y entrada en funcionamiento de nuevas plazas judiciales y órganos de la Administración de Justicia

En la Memoria elaborada para 1989:

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se amplía a dieciséis semanas la licencia por maternidad del artículo 373 de la LOPJ
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se constituye en el seno de la Comisión General de Codificación una sección especial para la reforma procesal
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de complementos de la Carrera Judicial y fiscal de los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
- Informe al Proyecto de Real Decreto sobre coordinación general de funciones y cómputo recíproco de cuotas entre el régimen de la seguridad social de los funcionarios públicos y los distintos regímenes.
- Informe al Proyecto de Orden Ministerial por el que se revisan las Agrupaciones de Forensías
- Informe al Proyecto de Orden Ministerial por el que se revisan las agrupaciones de Juzgados a efectos de ser servidas por un sólo médico forense
- Informe a los Proyectos de Ordenes Ministeriales de convocatorias de provisión por concurso de plazas
- Informe al Proyecto de Circular de la Subsecretaría del Ministro de Justicia sobre elección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos de la Administración de Justicia
- Informe sobre el uso de Togas por los Graduados Sociales
- Informe sobre el sellado de Libros de Comercio
- Informe sobre asistencia médica a los detenidos y presos ingresados en el Depósito Municipal

La Memoria de 1990 contiene una relación detallada de los informes llevados a cabo por el Consejo:

- Informe al Anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral
- Informe al Anteproyecto de Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
- Informe sobre el Proyecto de Ley de la Comisión Arbitral del País Vasco
- Informe al Anteproyecto de Real Decreto por el que se modifica el art. 94.1a) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
- Informe al Anteproyecto de Real Decreto por el que se establece la cuantía del complemento de destino de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

-
- Informe sobre la modificación del Real Decreto 391/89 de 21 de Abril sobre retribuciones complementarias de la Carrera Judicial
 - Informe al Proyecto de Real Decreto remitido por el Ministerio de Justicia por el que se regula la comunicación al Registro Central de Penados y Rebeldes y a la oficina del Censo Electoral las condenas que lleva aparejada la pena de privación del derecho de sufragio
 - Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los miembros de la carrera judicial destinados en el Ministerio de Justicia
 - Informe al Proyecto de Orden Ministerial por el que se determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción del detenido

La Memoria de 1991 hace mención a:

- Informe al Anteproyecto de Ley de modificación de determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil
- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de julio de Régimen Electoral General
- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana
- Aprobación del informe al Anteproyecto de Ley sobre el contrato de Agencia
- Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Hipotecario en materia de ejecución extrajudicial de hipotecas
- Aprobación del informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las indemnizaciones a testigos por comparecencia ante órganos jurisdiccionales del orden penal
- Aprobación del informe sobre los Proyectos de Real Decreto por los que se modifican la cuantía de los complementos de destino de Magistrados, Jueces y Ministerio Fiscal
- Informes varios relativos a Órdenes Ministeriales

La Memoria de 1992 contempla los informes elaborados por el Consejo:

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifican los artículos 73.1 y 86 de la LOPJ sobre patentes y marcas
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la Reforma Urgente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores
- Informe sobre el Anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal
- Informe al Anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de contratación
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifican determinados artículos de la Ley 27/1987, de 11 de Noviembre de propiedad intelectual
- Informe sobre Proyecto de Ley de Prevención de riesgos Laborales

-
- Informes varios sobre reales Decretos y Órdenes Ministeriales

En 1993 tal y como recoge la Memoria se llevaron a cabo :

- Informe sobre el Anteproyecto de Código Penal
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Asistencia Gratuita
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre Régimen de circulación y entrega vigilada de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se complementa la Ley 1/1990 de 6 de abril, de Determinación de la Capitalidad de los Partidos Judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos
- Informe sobre el Anteproyecto de Determinación de la Capitalidad de las Sedes de diversos organismos jurisdiccionales penales y sociales de ámbito inferior a la provincia en relación con Cataluña
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se contempla la incorporación al régimen comunitario en el ámbito de los seguros privados
- Informe sobre la propuesta de modificación por Real Decreto sobre los complementos de destino de la Carrera Judicial
- Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se constituyen los Juzgados de diversos órdenes jurisdiccionales
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares
- Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1616/89 por el que se establece la cuantía de complemento de destino de los funcionarios en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
- Informe al Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone la entrada en funcionamiento de determinados órganos jurisdiccionales
- Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial en relación con los libros del Registro que deben llevar los Juzgados de Instrucción y otros, en relación con la Ley Orgánica 7/1988
- Informe sobre propuesta al Ministro de Justicia para la reforma de la OM de 4 de octubre de 1984, con el fin de que el servicio de guardia se preste simultáneamente en Madrid y Sevilla simultáneamente
- Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial sobre indemnizaciones por razón del servicio de personal judicial o fiscal o al servicio de la Administración de Justicia

Durante 1994 tal y como contempla la Memoria aprobada el 20 de julio de 1994 se llevaron a cabo los siguientes informes:

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se crean determinados órganos judiciales y el Cuerpo de Facultativos Forenses

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se reforma la Ley 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial

- Informe al Anteproyecto de Ley de incorporación al derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991 sobre protección jurídica de los programas de ordenador

- Informe al Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo

- Informe al Anteproyecto de Ley de Sociedades de responsabilidad Limitada

- Informe al Anteproyecto de Ley de la normativa de Elecciones

- Informe al Anteproyecto de Ley de la Incorporación al Derecho Español de la Directiva 93/7

- Informe al Anteproyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos Hipotecarios

La Memoria relativa a 1995 contempla:

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Código penal

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VI y del Capítulo IX del Libro II del Código Penal

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de interrupción Voluntaria del embarazo

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de contrabando

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley 50/1981 de 30 de Diciembre por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía especial para la represión de los delitos de naturaleza económica y de corrupción

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de incorporación al derecho interno de la Directiva 93/83/CEE

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas tributarias, sociales, de gestión financiera, del personal al servicio de las Administraciones Públicas

- Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Prevención de Riesgos Laborales

- Informe al Anteproyecto de Ley de Supresión de los Seguros Privados

En el Debate de la Memoria relativa a 1995 y en la que se incluyen datos referentes a 1996 se comprende los informes desarrollados por el Consejo (Véase Cortes Generales, Diario de

los anteproyectos de ley y disposiciones generales del Estado y de las CCAA, es si el Consejo cuenta con iniciativa legislativa o carece de la misma. Se pretendió, basándose en el articulado de la derogada LOCGPJ 1/1980, argumentar que el Consejo disponía de dicha facultad⁴⁵⁹. La iniciativa

Sesiones, Congreso de los Diputados, Comisiones de Justicia e Interior, año 1996, VI Legislatura, número 37, Sesión núm. 5, 26 de junio de 1996. Comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de presentar las memorias de 1994 y 1995):

- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Ayuda y Asistencia a víctimas de delitos violentos
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Asistencia Gratuita
- Informe sobre la Ley de Protección Jurídica al Menor
- Informe al Anteproyecto de Ley reguladora del Gobierno sobre venta de bienes muebles a plazos que es consecuencia de la Ley de Protección de crédito al Consumo
- Relativos al desarrollo reglamentario:
- Reglamento de la Carrera Judicial
- Reglamento de la Escuela Judicial 2/95, de 7 de junio de 1995
- Reglamento 3/95 de 7 de junio de jueces de paz
- Reglamento de órganos de Gobierno de los Tribunales

El último de los informes sobre los que se tiene conocimiento ha sido el remitido por el Consejo General del Poder Judicial en relación a la videovigilancia policial.

⁴⁵⁹ En las siguientes normas se aclaraba esta cuestión:
art.3 de la LOCGPJ " el Consejo General del Poder Judicial dispondrá de facultades de iniciativa o propuesta y, en otro caso, de informe en las siguientes materias..."
apart.5; " Proyectos de ley en materias procesales o que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales o al Estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados "
apart.6; " Proyectos de ley y disposiciones de carácter general en materia penitenciaria "
apart.7; " Disposiciones de cualquier rango que afecten al personal judicial o a la organización y mantenimiento de servicios de justicia "

Debemos destacar como algún autor consideró que el Consejo disponía de la posibilidad de participar en la función legislativa, postura ésta que sería también acogida por el Grupo Popular vía de enmienda, cuando se presentaba para su aprobación la vigente LOPJ 6/1985 de 1 de julio, frente a esta tesis surgieron detractores así," una primera crítica a la pretendida

legislativa que, supone el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente y que implica para las Cámaras el deber de realizar la función legislativa, únicamente puede ser ejercitada por algunos órganos,⁴⁶⁰ a los que hace referencia la Constitución en sus arts. 87 y 89.2 y dentro de los cuales no se encuentra el CGPJ, de lo que parece desprenderse dado el carácter tasado con que deben interpretarse los artículos mencionados que, no cabe mantener en la actualidad aquellas concepciones referentes a una posible iniciativa legislativa en manos del Consejo.

iniciativa legislativa del CGPJ se encuentra en la terminología utilizada por la ya derogada LOGPJ, ya que debería haberse utilizado el término proposición de ley pues dichas proposiciones son las procedentes de órganos que no son el Gobierno; proyecto de ley es el adoptado por el Gobierno en Consejo de Ministros " Xiol Ríos: El Poder Judicial y su Consejo General op. cit.pág. 65

⁴⁶⁰ - art. 87 de la Constitución " 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia." art. 89.1 de la Constitución; " 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87 "

ii) Objeto

Los motivos que originan que se lleve a cabo la actividad de informe por parte del CGPJ se encuentra regulados en el art. 108.1 de la LOPJ⁴⁶¹, que ha sido objeto de reciente ampliación a través de la reforma introducida por la LO 16/1994, de 8 de noviembre, sin que pueda considerarse que los supuestos recogidos tengan el carácter de *numerus clausus*, pues en el apartado g) de este artículo al referirse a las materias en torno a las cuales se hace precisa el informe del Consejo, se incluye la cláusula " aquellas otras que le atribuyan las leyes ".

⁴⁶¹ art.108.1 " El Consejo General del Poder Judicial deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a alguna de las siguientes materias;

- a) Determinación y modificación de demarcaciones judiciales y de su capitalidad en los términos del artículo 35 de esta Ley.
- b) Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces, Magistrados, Secretarios y personal que preste servicios en la Administración de Justicia.
- c) Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.
- d) Estatuto orgánico de los Secretarios y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- e) Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales.
- f) Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario
- g) Aquellas otras que le atribuyan las leyes."

El informe desarrollado por el CGPJ, únicamente podrá tener por objeto los anteproyectos⁴⁶², sin que por el contrario se contemple dicha posibilidad para los supuestos de los proyectos de ley.⁴⁶³ Para resolver la cuestión tantas

⁴⁶² Tal y como ha puesto de manifiesto MANZANARES, " antes el Consejo operaba como escalón intermedio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahora su papel es mucho más modesto, como si se hubiera convertido en un mero órgano asesor de todos y cada uno de los Departamentos ministeriales. Claro que en ambos supuestos el valor real de sus informes dependerá básicamente del crédito que el Consejo merezca" Véase El Gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial. op. cit., pág. 114

⁴⁶³ Tal y como ha señalado ÁLVAREZ CONDE, " el legislador nunca tuvo la intención de que el Consejo informase las proposiciones de ley, entendiendo que la facultad de informe se reducía a una relación directa entre el Consejo y el Gobierno, enmarcándose dentro del proceso prelegislativo y no dentro del procedimiento parlamentario... se quiso privar al CGPJ de cualquier participación en el procedimiento legislativo, negándole cualquier intervención cuando la iniciativa legislativa fuese adoptada por otro titular distinto del Gobierno. En relación al papel desempeñado por el CGPJ en lo que constituyen los diferentes sistemas europeos principalmente el modelo francés y el modelo italiano, señalar que en ambos ejemplos reina igualmente un criterio restrictivo de participación por parte del CGPJ, primando las propuestas de origen gubernamental y no las de origen legislativo. Para un análisis más detallado véase " Alvarez Conde ,E.: "El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las CCAA" op. cit., pág. 34. Tal y como ha puesto de manifiesto MORENO CATENA, " si se diera vuelta atrás y acudiéramos a que esa facultad de informe no fuera a los Anteproyectos de Ley, ... sino que los informes del consejo hubieran de emitirse sobre los Proyectos de Ley, -una enmienda del grupo parlamentario popular en el Senado, así lo ha venido pidiendo, enmienda que también se planteó por este grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados-, podríamos convertir al Consejo del Poder Judicial en un órgano consultivo, y preguntarnos : si es un órgano consultivo, ¿De quién?, ¿A quién emite el informe?, si es un órgano consultivo el Poder o de los Poderes Ejecutivos, si es un órgano consultivo del gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado y de las Comunidades autónomas, si es un órgano consultivo de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de qué textos prelegislativos ha de

veces planteada por algún sector doctrinal de por qué no se ampliaba el campo de actuación del informe emitido por parte del Consejo a los proyectos de ley, bastaría interpretar cual es el sentido que tienen dichos informes: la pretensión de éstos es la de presentar al Gobierno objeciones y sugerencias para una mejor y más práctica aplicación de las leyes; puesto que como sabemos, es jurídicamente imposible modificar un proyecto en sentido estricto⁴⁶⁴, la solución por la que se opta es la de dar al CGPJ la facultad de intervenir mediante el análisis de los anteproyectos y la posterior presentación de los informes a los que nos venimos refiriendo. Parte de la doctrina ha dejado ver al art. 108 LOPJ como la expresión de " un mero compromiso político del legislador en el sentido de que *tendrá* en cuenta el sentido del parecer del CGPJ en las materias indicadas"⁴⁶⁵; frente a esta postura cabe sostener sin embargo, que, los informes deberán ser tenidos en cuenta,

emitir informe...si el consejo General del Poder Judicial hubiera de emitir informe sobre todos los Proyectos de Ley en materia substantiva o procesal, ... ciertamente, yo creo que se convertiría pura y simplemente en un órgano inoperante, que se dedicaría a cumplir funciones muy dignas, encomiables y necesarias, pero funciones similares a lo que podría ser el Consejo de Estado." Véase El Gobierno de la Justicia.El Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág. 166

⁴⁶⁴ Con la expresión proyectos de leyes nos referimos únicamente a aquellos proyectos que han sido aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria

⁴⁶⁵ Díez-Picazo, L.M.: Régimen constitucional del poder... op.cit.,pág. 154

entendiendo esta expresión en un sentido literal, de tal forma que la actuación del CGPJ con la realización de los informes no puede considerarse como un mero y simple trámite; ésta concepción parte de un planteamiento eminentemente práctico, ya que no debemos olvidar que si los anteproyectos se convierten en leyes con posterioridad, los encargados de aplicar las mismas, serán los juzgados y Tribunales.

Importante es también la determinación del momento, que, no del plazo de treinta o quince días dependiendo de si es o no urgente, en que debe emitirse el informe por parte del CGPJ; la doctrina se ha preocupado de señalar que; " el informe del CGPJ debe ser el último que se emita antes de la elevación del Anteproyecto al Consejo de Ministros y que, como es obvio, el Anteproyecto sea también el último que se redacte. No se debe ello sólo al respeto y consideración que se deben los órganos constitucionales. El art. 2.4⁴⁶⁶ de la Ley Orgánica del Consejo de Estado español... establece el carácter final del informe del órgano jerárquicamente

⁴⁶⁶ art. 2.4 LOCE " Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún otro Cuerpo u órgano de la Administración del Estado. En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente sólo podrá informar el Consejo de Estado en Pleno."

superior en el ordenamiento. No conocemos ningún órgano superior a uno constitucional, como es el CGPJ."⁴⁶⁷

Una duda suscitada en los estudios de la materia hace referencia a si los informes que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial deben realizarse únicamente sobre aquellos Anteproyectos que haya remitido el Gobierno de la Nación, o si por el contrario, el Consejo debe actuar también en aquellos supuestos en los que la remisión sea realizada por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Para un amplio sector doctrinal, de entre los cuales destacamos a ÁLVAREZ CONDE, " el CGPJ es competente para informar los anteproyectos de ley que, dentro del ámbito material del art. 108, pudiesen aprobar las CC AA... nada puede oponerse a una interpretación afirmativa...aunque una mera interpretación gramatical del artículo 108 de la LOPJ pudiera dar a entender que el Consejo únicamente debe informar los anteproyectos de leyes remitidos por el Gobierno de la nación y que afecten a las materias enumeradas en dicho precepto, hay que proceder a una interpretación integradora que nos conducirá necesariamente a proclamar la competencia

⁴⁶⁷ Xiol Ríos, J.A.: El Poder Judicial y su Consejo... op. cit., pág.63

del Consejo sobre los anteproyectos de leyes remitidos por las Comunidades Autónomas "⁴⁶⁸

iii) Relevancia

De lo anteriormente expuesto en cuanto a los informes del Consejo y su ámbito restringido únicamente a los anteproyectos y disposiciones de carácter general del Estado y de las CCAA sobre determinadas materias⁴⁶⁹, se van a derivar importantes consecuencias, así, al venir referidos, los informes, a los anteproyectos de leyes y emitirse, por tanto, en el curso del procedimiento para la elaboración de

⁴⁶⁸ Destacamos el informe emitido al Anteproyecto de ley del Gobierno Vasco, posteriormente Ley 5/1992, de 16 de Octubre relativa a la capitalidad de los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Véanse también las Sentencias 56/1990 y 62/1990. Recogido en Alvarez Conde , E.: " El ámbito competencial del CGPJ y las CCAA " cit., pág.33

⁴⁶⁹ El Consejo informa sobre anteproyectos legislativos que afectan a la determinación y modificación de demarcaciones judiciales y, sobre los que se refieren al ámbito estrictamente subjetivo-orgánico de la Administración de Justicia como son los relativos a la fijación y modificación de la plantilla orgánica de los órganos jurisdiccionales y personal que preste servicios en la Administración de Justicia. Su actividad de informe también es preceptiva para anteproyectos legislativos que afecten a normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras normas que se refieran a materias procesales en relación con la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los órganos jurisdiccionales, para terminar con las atribuciones que también por vía de informe legislativo le corresponde en relación con el régimen penitenciario y las leyes penales. Para un estudio más detallado véase LORCA NAVARRETE, A.M^a.: Introducción al Derecho Procesal... op. cit., pág. 70 y ss.

disposiciones de carácter general previsto en la LRJAP y PAC, podríamos considerar, que del análisis del art. 83.1⁴⁷⁰ de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en relación al art. 108 LOPJ, el informe que emite el Consejo tiene carácter facultativo pues el mencionado artículo de la LOPJ no establece excepción alguna al principio general de la no vinculación.

Tal y como ha señalado parte de la doctrina " el informe previsto en el art. 108 de la LOPJ no puede tener carácter vinculante por la propia naturaleza normativa de las potestades (legislativa y reglamentaria) sobre cuyo ejercicio ha de informar el CGPJ..., las potestades normativas tienen una naturaleza exquisitamente política y, en consecuencia, han de ser ejercitadas libremente y sin vinculación alguna precisamente por los órganos políticamente responsables que ostenten su titularidad; las Cortes Generales (art. 66.2 CE) y el Gobierno (art. 97CE) respectivamente o, en su caso, los equivalentes órganos de las Comunidades Autónomas."⁴⁷¹ Para reforzar esta argumentación cabe también acudir a la utilización de la expresión recogida en el art. 108 LOPJ "

⁴⁷⁰ 83.1 LRJAP y PAC: " Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes"

⁴⁷¹ Díez Picazo, L.M.: Régimen Constitucional del ..., op. cit., pág.151-152

deberá" que, tal y como han advertido diversos autores " conduce necesariamente a la conclusión de que los informes del CGPJ tienen carácter preventivo y no vinculante "⁴⁷²

Hemos visto que es lo que dispone la ley acerca de cual es el momento en que deben emitirse los informes del CGPJ⁴⁷³ y cuales son las materias sobre los que deben versar, pero no debemos olvidar que una cosa es lo preceptuado en la ley y otra distinta y muy importante el modo en que la actuación del poder público se lleva a cabo, pudiendo resultar coincidente en mayor o menor grado con la prescripción legal; ante estos casos, es decir, cuando el Gobierno no cumple con la obligación de tener en cuenta los informes del CGPJ, ya sea para la adopción de anteproyectos de ley o de disposiciones generales, se plantea en la doctrina una compleja problemática referente a las consecuencias jurídicas derivadas de este incumplimiento. El análisis de la jurisprudencia⁴⁷⁴ pone de manifiesto que la vulneración del informe en la elaboración de los reglamentos en aquellos casos en que es preceptivo, va a provocar la nulidad de las

⁴⁷² Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del CGPJ y las CCAA " op. cit., pág. 28

⁴⁷³ Pueden llegar a emitirse sus informes con posterioridad a la fase legalmente prevista, siendo este el caso de la omisión de remisión del informe del Consejo por parte del Gobierno a las Cámaras sobre un proyecto de ley, ante el que el Gobierno es requerido por la omisión llevada a cabo por parte de las Cortes.

⁴⁷⁴ STS de 19 de mayo 1988, STS de 15 de octubre de 1988

normas reglamentarias, sin que quepa la opción de una posible convalidación a posteriori; así se recogía en la ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 y, de igual forma se contempla en la vigente LRJAP y PAC 30/92 de 26 de Noviembre⁴⁷⁵. El tema objeto de debate es establecer si es posible aplicar ese efecto de nulidad en el ámbito del procedimiento legislativo; a este respecto puede que lo más acertado sea entender que la nulidad no podrá darse en estos supuestos, y ello fundamentalmente basándonos en que " a diferencia del procedimiento de elaboración de los reglamentos, el procedimiento legislativo sólo se halla condicionado en cuanto a su validez por la Constitución y, con muchas matizaciones por los reglamentos parlamentarios. Es indiscutible que, en un ordenamiento dotado de Constitución rígida y supralegal, las condiciones de validez de una ley no pueden ser fijadas por otra ley anterior, por

⁴⁷⁵ art. 67 de LRJAP y PAC 30/92 de 26 de Noviembre

- " 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
2. Si el vicio consistiera en incompetencia, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente"

lo que la violación del artículo 108 LOPJ jamás puede determinar la nulidad de una norma con rango de ley "⁴⁷⁶

Una cuestión que parece ser de interés es la relativa al alcance y el ámbito de los informes emitidos por el CGPJ; quién debe ser el que determine las materias sobre las que debe versar el informe que remite el Consejo; aquel que lo solicita mediante la remisión o debemos respetar la libertad de actuación del Consejo. Para ÁLVAREZ CONDE, la segunda postura es la acertada; no debe " limitarse el Consejo a informar sobre los puntos concretos que le haya solicitado, en su caso, el autor de la norma, los cuales, en el caso de existir, deber ser considerados como una simple indicación que no vincula al autor del informe. En concreto, parece lógico interpretar que el alcance del informe puede extenderse a aquellos preceptos que puedan incidir en los derechos fundamentales de los ciudadanos y a aquellos otros en los cuales el Consejo considere necesario proponer mejoras de carácter técnico." ⁴⁷⁷ Esta ha sido la actitud del Consejo, consiguiendo con ello que el " Consejo haya adquirido una importancia política mayor de la que se le venía otorgando. A ello ha contribuido el hecho concreto de haber debido

⁴⁷⁶ Díez-Picazo, L.M.: Régimen constitucional del Poder ... op. cit., pág.152

⁴⁷⁷ Alvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las CC AA" op. cit., pág.29

dictaminar Anteproyectos de Ley con amplia resonancia pública, como los de la denominada " Ley de Seguridad Ciudadana", Nuevo Código Penal o " Ley de Asistencia Jurídica Gratuita"... También ha influido positivamente en este punto una interpretación amplia del artículo 108 LOPJ por la que, el Consejo, al examinar las iniciativas legislativas y los proyectos de Reglamentos, no se limita a lo que guarda directa relación con la Administración de Justicia, sino que expresa su parecer en relación con los principios y derechos constitucionales y acerca de cuanto se refiere aún indirectamente a la justicia" ⁴⁷⁸

iv) Efectos resultantes de la omisión

Queda por exponer una de las cuestiones que más interés despierta en la doctrina, el de la omisión del informe que debe llevar a cabo el Consejo General para los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, que provoca con su incumplimiento lo establecido en el art. 88 de la Constitución, el cual dispone que, " los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos".

⁴⁷⁸ De la Oliva Santos, A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág.295

Debemos observar lo dispuesto por la vía jurisprudencial⁴⁷⁹ respecto a los efectos de la vulneración del art. 88 de la Norma Suprema. Según el TC, por la forma en que se realizó la tramitación de la vigente LOPJ, no se produjo la supuesta vulneración del texto constitucional que parte de la doctrina pretendía, ya que la ausencia de uno de los antecedentes del proyecto de ley sólo tiene transcendencia cuando junto a ella se produce la privación de elementos de juicio necesarios para tomar una determinación por parte de las Cámaras en cuanto a la misma. Esta sentencia va a permitirnos responder

⁴⁷⁹ STC 108/1986 de 29 de Julio que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la LOPJ. Se discutía en torno al efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.5 de la LOCGPJ 1/1980, de 10 de Enero, ya que el informe presentado por el CGPJ únicamente se refirió al Anteproyecto de ley y no al Proyecto de ley. Por otra parte, debemos responder a si la ausencia de un determinado informe del Consejo puede suponer la violación del precepto 88 de la Norma Constitucional: en relación a esta situación destacamos el trabajo citado con anterioridad de Alvarez Conde relativo al Consejo y a las Comunidades Autónomas, en donde se recoge un extracto de la sentencia 108/1986, de 29 de Julio: el Tribunal, partiendo del principio de que no toda infracción de cualquier parcela del ordenamiento jurídico debe suponer la inconstitucionalidad del acto en que se ha producido tal infracción, señaló contundentemente; " La ausencia de un determinado antecedente solo tendrá trascendencia si se hubiese privado a la Cámara de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero en este caso el defecto, que debió ser reconocido de inmediato , hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras, y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido esta denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo para los parlamentarios " En lo relativo a la omisión de las disposiciones de carácter general debe retrotraerse el expediente al momento en que se llevó a cabo el vicio.

al supuesto planteado de la omisión por parte del Gobierno en la remisión del informe del CGPJ, cuando aquel envía al Congreso un proyecto de ley cuya materia tenga por objeto una de los supuestos contemplados en el art. 108 de la LOPJ, siendo con posterioridad aprobada por las Cortes. Ello no es óbice para que se tenga en cuenta la facultad reconocida a la Mesa del Congreso⁴⁸⁰ y puesta de manifiesto por parte de la doctrina " de negarse a tramitar los proyectos de leyes que el Gobierno no acompañe de los requisitos exigidos"⁴⁸¹.

⁴⁸⁰ art. 31.1.1 del Reglamento de la Mesa del Congreso de los Diputados " Corresponde a la Mesa las siguientes funciones; adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara."

⁴⁸¹ Terol Becerra: El Consejo General...op. cit., pág.114

CAPÍTULO TERCERO: INSTRUMENTOS DE CONTROL PARLAMENTARIO

SECCIÓN Iª INTRODUCCIÓN

SECCIÓN IIª MEMORIA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ELEVA ANUALMENTE ANTE LAS CORTES GENERALES

- i) Concepto, objeto y datos a partir de los que se elabora
- ii) Carácter doctrinalmente atribuido
- iii) La responsabilidad derivada de la presentación: responsabilidad en sentido propio y en sentido impropio

SECCIÓN IIIª LAS SESIONES PÚBLICAS

SECCIÓN IVª CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

- i) Introducción
- ii) Funciones y características
- iii) Conclusiones

SECCIÓN Vª ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. LA NUEVA SITUACIÓN CREADA CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LO 16/1994 DE 8 DE NOVIEMBRE

CAPÍTULO TERCERO: INSTRUMENTOS DE CONTROL PARLAMENTARIO

SECCIÓN Iª INTRODUCCIÓN

Hemos visto como " la independencia del juez individual y la del propio poder judicial, es un valor político e ideológico que se inscribe en un determinado contexto: el de los regímenes democrático-liberales, con separación de poderes y aspiración a un cierto equilibrio de los mismos a través de un sistema de controles recíprocos"⁴⁸²; para llevar a cabo dichas actuaciones de control, el Parlamento cuenta con diversas vías, todas ellas tendentes a observar la actividad llevada a cabo por parte del Consejo: uno genérico, nombrar Comisiones de investigación que la Constitución refiere a cualquier asunto de interés público (art. 76 CE); y otros de carácter más específico; la Memoria anual que debe remitir el Consejo a las Cortes sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y tribunales (art. 109.1 LOPJ); por otro lado se encuentra la remisión que también de manera anual debe llevar a cabo el Consejo sobre la materia presupuestaria, no debemos olvidar que quien controla la capacidad económica de las instituciones, controla las instituciones mismas. La

⁴⁸² Revenga Sánchez, M.: " Independencia y responsabilidad del juez: dos valores enfrentados ", Revista Poder Judicial, 2ª época, núm. 14, Junio 1989, pág. 51, CGPJ

situación tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 16/94 ha variado notablemente. Otras fórmulas de control, como las sesiones públicas aún no han sido adoptadas, pese a ser un sistema ya consolidado en países de nuestro entorno como por ejemplo en Italia⁴⁸³.

SECCIÓN IIª MEMORIA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ELEVA ANUALMENTE ANTE LAS CORTES GENERALES

i) Concepto, objeto y datos a partir de los que se elabora

El principal problema con el que nos encontramos a la hora de analizar cuál es la naturaleza de la Memoria es el de responder al carácter que se le otorga a la misma, ya sea dotándola de cierta relevancia y significado o concibiéndola desde una perspectiva meramente informativa.

Una de las consecuencias que supone la presentación del citado trabajo anual, es la creación de una relación entre

⁴⁸³ En referencia a la necesidad de modificar el sistema actual de las sesiones del Consejo General, destacamos la opinión del juez NAVARRO, para el que se hace preciso introducir entre otros principios el de la publicidad de los debates y ello porque frente " al peligro de oligarquización y de endogamia corporativa de los órganos de decisión institucional instalados en la lógica del poder se precisa una participación transparente y un fuerte compromiso de apertura hacia otros foros distintos al estrictamente judicial que evite las peligrosas disfunciones del sistema actual" Véase Navarro, J.: Manos Sucias, el poder frente a la justicia, op. cit.pág. 31

las Cortes Generales y el Consejo, del cual el Parlamento puede nutrirse para llevar a cabo, con posterioridad, diversas actuaciones con fines esencialmente prácticos, como pudiera ser la presentación de proposiciones en relación a la conveniencia de realizar determinados cambios en la estructura judicial...; se obtiene de esta manera una colaboración en el desarrollo de las tareas prelegislativas de las Cortes, que resulta sumamente interesante debido, a que el Consejo puede, desde su propia perspectiva aportar llamadas de atención en temas concretos.

A la Memoria que el CGPJ eleva anualmente a las Cortes hace referencia el art.109.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial estableciendo que " El Consejo General del Poder Judicial elevará anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de recursos en general, para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. " Podemos considerar a las Memorias como " las actas de presencia en la vida pública de un órgano constitucional, absolutamente imprescindible para la

independencia y eficacia de la justicia"⁴⁸⁴. El significado de las mismas, si tenemos en consideración lo que hemos establecido anteriormente constituyen una forma de relacionarse entre sí los dos Poderes, Legislativo y Judicial, " mediante una información, con planteamiento de necesidades, problemas o propuestas de soluciones y aún de exigencias y reproches"⁴⁸⁵

La remisión de la Memoria al Parlamento se encontraba ya prevista en el art.4 de la LOCGPJ 1/1980, de 10 de enero, en donde se establecía la necesidad de enviar a las Cortes y al Gobierno una memoria anual sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia; no se trata pues, de una novedad introducida por la vigente LOPJ 6/1985, de 1 de julio.

La Memoria se caracteriza por ser uno de los pilares que va a convertir al CGPJ en uno de los órganos más polémicos recogidos en la Constitución. En este sentido podemos señalar como los " conflictos del Consejo con las Cortes Generales ... tienen su momento álgido durante la elaboración de la LOPJ (conflictos de atribuciones ante el Tribunal

⁴⁸⁴ Memoria que anualmente el Consejo General del Poder Judicial eleva a las Cortes Generales, Memoria de 1984, Ed. CGPJ, Madrid, pág. 12

⁴⁸⁵ Memoria que anualmente el CGPJ eleva a las Cortes Generales, Memoria de 1982, Ed. CGPJ, Madrid, pág. 19 y 20

Constitucional) pero se mantienen de forma latente las diferencias en el momento de deliberación anual de la Memoria presentada por el Consejo."⁴⁸⁶ La Memoria que, anualmente, el Consejo debe presentar al Parlamento, puede motivar un debate que termine en suscitar un conflicto entre los distintos órganos.⁴⁸⁷

La Memoria se concibe como un medio, como un instrumento⁴⁸⁸ a través del cual, se explica cómo se ha

⁴⁸⁶ Gerpe Landín, M.: " El Consejo del Poder Judicial ", op. cit., pág.180

⁴⁸⁷ " Reflexión sobre el Poder Judicial " en Poder Judicial, Marzo 1982, núm.2 pág. 26, Ponencias del día 11 de Diciembre de 1981 presentadas por FERNÁNDEZ VIAGAS

⁴⁸⁸ Fernández-Miranda ha llegado a afirmar que las memorias elevadas por los distintos Consejos responden al concepto que el órgano tiene de si mismo. La citada autora toma como base esta premisa para analizar distintas memorias relativas a cada uno de los Consejos constituidos hasta el momento.

El período comprendido entre 1980-1985 se consideró positivo, ello entre otras razones por que, tal y como señalara Fernández-Miranda:

... " El Consejo en su decisión de ocupar todo el espacio político que considera le corresponde como gobierno de un Poder del Estado interpreta de forma muy amplia determinadas competencias atribuidas legalmente... Plantea la necesidad de que, bien la futura ley orgánica del Poder Judicial, bien el propio Tribunal Constitucional, establezcan un criterio sobre la facultad de iniciativa que le corresponda, dado que existen tesis contrapuestas sobre la misma. En espera de la decisión , el Consejo opta por hacer uso de tal competencia, tanto en el sentido de iniciativas o propuestas de ley como iniciativa o propuestas de disposiciones reglamentarias durante todo su mandato...El primer Consejo realiza un esfuerzo muy notable de conocimiento de la realidad judicial y de búsqueda de soluciones a los problemas endémicos con vistas a la reestructuración de la Administración de Justicia, sin embargo, sus continuas reivindicaciones van generando enfrentamientos con los distintos

Gobiernos que acusan al órgano del ejercicio de competencias que no le corresponden. Será un proceso de 5 años que terminará con el desapoderamiento del Consejo establecido en la Ley Orgánica de 1985, que justifica ... la actitud del segundo Consejo" (Véase la obra de la citada autora " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit., pág. 84-85)

El período que comprende de 1985-1990 no puede ser considerado de manera tan optimista a como lo fue la primera etapa. El Consejo, vistos los resultados de llevar a cabo una participación activa en lo referente a la vida judicial y sus problemas, va a tomar una actitud mucho más prudente:

" En oposición a la idea anterior del Consejo como representante del Poder Judicial, en pie de igualdad con el Ejecutivo, el actual órgano se refiere a la importante colaboración con aquél, canalizada a través del Ministerio de Justicia, y que se manifiesta en la aceptación de la relación de necesidades de la Administración de Justicia que le es enviada.

Respecto del valor de la Memoria..., el segundo Consejo presenta este documento como mero instrumento de información elevado a los representantes del pueblo, acto de especial trascendencia política desde la perspectiva de la cooperación entre los poderes del Estado; a través de este informe las Cámaras conocen la situación real de la justicia y su nivel de eficacia.

Olvidada la pretensión de ser titular de iniciativa legislativa, el Consejo insta al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que en el ejercicio de su legítima facultad introduzca en el Parlamento los proyectos de ley necesarios...

Como resumen... la justicia española ha dejado de adolecer de su crónica anemia en medios materiales y personales..." (Ibíd, pág. 86).

El tercer período de actividad del Consejo (1990-1995) va a permitirnos poner de manifiesto como algunas de las solicitudes que venía realizando el Consejo se han recogido con posterioridad en la LO 16/1994 de 8 de Noviembre. Así, ya en 1991 se exigía la necesidad de un presupuesto adecuado a las necesidades propias del entorno judicial. Se señalaba de igual forma en 1991 la importancia dada a la formación de jueces y magistrados; en 1994, con la modificación introducida por la Ley Orgánica las facultades de formación y selección quedan en manos del Consejo.

El Consejo, se " declara órgano constitucional, y no de mera relevancia, por el reconocimiento que de tal naturaleza hace la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; ello implica la plena participación en la dirección de la actividad del Estado referida a la justicia, debido a la información privilegiada que recibe en el ejercicio de sus competencias, lo que le sitúa en una posición preferente a la hora de conocer las necesidades de

desarrollado la Administración de justicia, así como cuales han sido las dificultades y obstáculos con los que se ha encontrado a lo largo del año judicial, "las Memorias del CGPJ y del Fiscal General del Estado"⁴⁸⁹ reiteran una y otra vez las carencias de medios materiales y personales ...se ha llegado a insinuar el riesgo inminente de colapso del Funcionamiento de los Tribunales"⁴⁹⁰. El contenido de la

la Administración de Justicia y marcar los objetivos prioritarios" (ibíd, pág. 80)

La Memoria de 1991 viene a poner de manifiesto que el Consejo " ha superado el desconcierto originado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, conoce su posición institucional, la valora e intenta ejercer sus competencias en toda su amplitud; evita enfrentarse al Ejecutivo, pero reivindica la atención preferente que precisan sus criterios en cada uno de los ámbitos de actuación" (ibíd, pág.90)

⁴⁸⁹ La Institución del Ministerio Fiscal resulta fundamental a la hora de tratar el tema del Poder Judicial. Es preciso reforzar las garantías formales que aseguren la imparcialidad e independencia con que debe actuar respecto de los distintos poderes; especial atención a las relaciones del Ministerio Fiscal con el Ejecutivo. Para evitar las posibles manipulaciones o influencias a las que pudiera quedar sometido el Fiscal General del Estado, resulta sumamente interesante atender a la posibilidad de que sea el CGPJ el encargado de presentar o formular una terna o lista de candidatos para que sean las Cortes Generales las encargadas de realizar su designación. De igual modo y, tal y como apuntaba la APM " es preciso dotar al titular del cargo de la garantía de inamovilidad durante un período de mandato de duración -5 o 7 años- salvo causas regladas de revocación o cese, que en todo caso correspondería apreciar al órgano legislativo, ante el que podría comparecer periódicamente o cuando se estimase oportuno para dar cuenta de su gestión." en la Ponencia " Un nuevo Proyecto de Justicia " durante el XI Congreso de dicha asociación en Madrid del 26 al 28 de Octubre de 1995, pág.9

⁴⁹⁰ Burón Barba, L.A.: "Las instituciones y el Poder Judicial en la Transición Española", Editora Diputación de Córdoba, Córdoba, 1992, pág.176

Memoria consta de tres apartados tal y como dispone el artículo 109 de la LOPJ 6/1985:

- Estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo.
- Estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales.
- Necesidades que existen en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones asignadas al Poder Judicial.

Para la redacción de la misma se utilizan como elementos base los " datos estadísticos proporcionados por los órganos del propio Consejo, y los comunicados por los Tribunales Superiores de Justicia referentes a órganos judiciales de sus respectivos territorios "⁴⁹¹. Sin embargo, la Memoria no tiene por objeto únicamente el establecer una valoración estadística, sino que pretende ir más allá, ya que trata de llevar al Parlamento soluciones a los problemas surgidos en el ámbito relacionado con la Administración de justicia.

ii) Carácter doctrinalmente atribuido

⁴⁹¹ " Memoria que el CGPJ eleva a las Cortes " CGPJ, Madrid, 1993

¿Constituye la Memoria un medio de control por parte del Parlamento? Es amplia la discusión en torno a esta cuestión. Para TEROL BECERRA la elevación de la Memoria por parte del CGPJ al Parlamento conlleva una cierta actividad de control por parte de este último⁴⁹²; este parece ser también el sentido de la ley el art.109.2 de la LOPJ, al establecer la posibilidad de que en el momento de la presentación de la Memoria ésta se debata, ya sea mediante la interpelación de preguntas por parte de los miembros del Parlamento o bien a través de solicitudes de los parlamentarios de aclaraciones referentes a los datos contenidos en la Memoria, tales como cuál ha sido la aplicación de los fondos otorgados, donde se han incrementado los gastos respecto a ejercicios anteriores y el por qué de los mismos etc...GERPE LANDÍN considera que la Memoria " posibilita que las Cámaras demuestren la pérdida de confianza. La reprobación parlamentaria sostenida por una mayoría cualificada, aunque no implique jurídicamente sanción de responsabilidad política, es incuestionable que rompe el

⁴⁹² Tal y como ha señalado BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, " no se prevé en la Constitución un control político directo e inmediato de las Cortes Generales sobre el Consejo, aunque éstas, como representantes del pueblo español, están facultadas para cuestionar las conductas del Consejo, aunque, por respeto al estatuto constitucional de independencia del Consejo y de no subordinación a los otros poderes del Estado, ese enjuiciamiento no se puede traducir en el planteamiento de mociones de censura, al estar vetadas por vulnerar el espíritu del texto constitucional; aunque sí obviamente en mociones de aprobación o reproche, ejercitables según los Reglamentos de las Cámaras" Véase Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M. en Poder Judicial y Constitución, Boch, Barcelona,1987, pág.44,

vínculo fiduciario que está en el origen de la designación y puede provocar el cese del Consejo, aunque jurídicamente debería adoptar la forma de renuncia individualizada de todos sus miembros. Convertir la Memoria en instrumento de responsabilidad política únicamente se justifica si reconocemos al Consejo una potestad de dirección de la política judicial diseñada legislativamente por las Cortes. Si el Consejo no tiene esa potestad, carece de sentido plantearse la cuestión, quedando la Memoria como un importante instrumento de información, de comunicación y de coordinación entre el Consejo y las Cortes Generales "⁴⁹³ En opinión de otro destacado autor, ÁLVAREZ CONDE, " esta Memoria del Consejo General aparece concebida como una solicitud...Pero también puede y debe ser concebida como una exposición de la actuación del Consejo. Y cabe, a nuestro juicio, que las Cámaras se pronuncien sobre dicha actuación, aprobándola o no. Ciertamente, el rechazo de las Cámaras de la Memoria no implica necesariamente la dimisión en bloque

⁴⁹³ Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo... " op.,cit., pág. 167. De igual modo, el citado autor hace referencia a la consideración que debe otorgarse a la Memoria " aunque no consideramos que la finalidad de la Memoria sea convertirse en vía de control parlamentario sobre el Consejo, es la única vía... para canalizar la fiscalización y control parlamentario " en Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias " op. cit., pág. 138

del Consejo General, pero supone un mecanismo democrático, ciertamente muy tímido, de fiscalización política"⁴⁹⁴

Para CAZORLA PRIETO o FERNÁNDEZ CARNICERO la obligatoria presentación "elevatorá" por parte del CGPJ de la Memoria al Parlamento, no constituye, sino un elemento más en el marco de la colaboración " *podrán debatir*" entre los distintos poderes constitucionales al servicio de sus respectivas funciones.

iii) La responsabilidad derivada de la presentación: responsabilidad en sentido propio y responsabilidad en sentido impropio

La problemática existente nos lleva al tema de la responsabilidad derivada de la presentación de la Memoria por parte del Consejo General del Poder Judicial. Podemos incluir aquí la clasificación realizada por FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR de las responsabilidades que se derivan de la presentación de la Memoria:

- En primer lugar " sólo es posible señalar una responsabilidad política del Gobierno en cuanto a que no haya

⁴⁹⁴ ÁLVAREZ CONDE, E.: Curso de Derecho Constitucional Tecnos, Madrid, 1992, pág. 455-456

proporcionado a la Administración de Justicia y al propio Consejo los medios exigidos para su adecuado funcionamiento...

- En segundo lugar, podría aludirse una responsabilidad del parlamento ante el cuerpo electoral respecto al cuerpo elegido por él...

- Por último, la información pública realizada por el Consejo ante las Cámaras puede y debe incidir en ese control difuso ejercido por la opinión pública, generador de unos criterios que se aplicarán en las urnas"⁴⁹⁵. Se trataría pues de una responsabilidad de carácter indirecto que en ningún momento recae sobre el Consejo.

Para LUCAS MURILLO el Consejo no es un sujeto activo del proceso político. Se trata de un órgano de garantía que actúa conforme a Derecho, no en virtud de criterios de oportunidad. Por estas razones, el citado autor vendría a considerar que el Consejo " carece de vínculos de responsabilidad política... el Consejo no puede ser disuelto, tampoco cabe remover a sus miembros si no es como consecuencia de un proceso penal ante el Tribunal Supremo o de una decisión de su propio Pleno, en los casos tasados y

⁴⁹⁵ Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985 " op. cit., pág. 63

con las garantías que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 57.2 y 119.2). Naturalmente, esta suma de responsabilidad penal y disciplinaria, junto con la civil que pueden contraer sus integrantes (art.119.1 LOPJ), añadida a la fiscalización de los actos del Consejo por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, pone de manifiesto que el órgano de gobierno de los jueces, no es, en modo alguno, un sujeto irresponsable, De ahí que la posición que considere que negar su responsabilidad política ante las Cortes equivale a ignorar el principio constitucional básico de los poderes públicos, al que se refiere el artículo 9.3 del texto fundamental, suponga ... forzar las cosas."⁴⁹⁶

Hay que distinguir entre la responsabilidad⁴⁹⁷ política del Consejo General -que se pretendió quedara recogida en la

⁴⁹⁶ Lucas Murillo de la Cueva.P.: " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op. cit., pág.233

⁴⁹⁷ Tal y como ha señalado ALBACAR dado el carácter de órgano que ostenta el Consejo, con la consiguiente imputación directa al Estado de los actos que aquél ejercite, la responsabilidad por los daños causados por tales actos, podrá exigirse del Estado, pero no del Consejo, por carecer de personalidad jurídica independiente de la estatal. Tal circunstancia,...no obstaría a la exigencia de la correspondiente responsabilidad personal a los miembros del Consejo, en los supuestos de actuación antijurídica...la falta de decisión del legislador español para explorar el camino que entreabrió con la exigencia de esta memoria, que parece ofrecer un cierto matiz de rendición de cuentas al pueblo español, representado por sus Cortes Generales, y la inexistencia en nuestro sistema constitucional de un mecanismo que permita la decantación y exigencia de responsabilidad política al Consejo General del Poder Judicial, produce en la realidad social de nuestro sistema la anomalía, que choca con los canones más puros del derecho constitucional,

ley, tal y como parece apuntar el art.109 LOPJ⁴⁹⁸- de aquella originada por el Ministro de Justicia o la procedente de la actividad desempeñada en el ejercicio de sus cargos por jueces y magistrados. En este sentido convendría destacar como ni en la Constitución, ni en la LOPJ, se trata de manera exhaustiva la responsabilidad política de jueces y magistrados (a diferencia de lo que ocurre en otros países), aunque se determinan por contra la civil, penal, disciplinaria, así como la responsabilidad patrimonial de su Administración consecuencia del mal funcionamiento.

y que creemos que habrá de ser corregido en un futuro próximo, que supone la presencia de un órgano constitucional, a quien se le encomienda una función política de rango primario, sin que, de manera consecuente, se le someta a una responsabilidad también política ante el depositario original del poder del Estado, es decir, el pueblo español" Albacar López, J.L.: "Naturaleza jurídica del Consejo General del Poder Judicial " en Jornadas de estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, op. cit., pág.134-135. En esta misma dirección se han manifestado XIOL RÍOS, GONZÁLEZ RIVAS y RODRÍGUEZ-ZAPATA para los que por un lado, la Memoria no permite exigir responsabilidades, únicamente permite suministrar elementos de juicio, y para los que " sólo es posible hablar de responsabilidad política del Consejo General del Poder Judicial en un sentido traslaticio e impropio ". Véase El Poder Judicial y su Consejo General ... op. cit., pág. 55

En opinión de ALMAGRO NOSETE los miembros del Consejo General del Poder Judicial son responsables en los mismos términos que los magistrados del Tribunal Supremo además, la exigencia de responsabilidad política de esta naturaleza puede ser recíproca y sin duda lo es más aún más marcadamente en las relaciones entre el Judicial y el Ejecutivo.

⁴⁹⁸ Las enmiendas presentadas por Bandrés J.M. y el Grupo Popular giraban en torno a la idea de la responsabilidad política del CGPJ, tal y como se recoge en " *Ley Orgánica del Poder Judicial. Trabajos Parlamentarios* " op. cit., pág 193 y 543.

En defensa de la admisión de la responsabilidad política del CGPJ, se ha argumentado, que " si en el esquema clásico, el Ministro de Justicia era el responsable político de la función de gobierno de la judicatura, no se encuentran razones de peso para excluir ahora a esta institución del control y responsabilidad política."⁴⁹⁹ Sin embargo, esta postura no es unánime; una muestra de la amplia discusión doctrinal la encontramos en aquellos autores que vienen manteniendo que " sólo es posible hablar de responsabilidad política del Consejo General del Poder Judicial en un sentido traslaticio e impropio, ... la forma de designación de sus miembros..., el carácter temporal de su mandato, la sujeción a criterios objetivos en el método de adopción de acuerdos, la publicidad y crítica de sus trabajos, el sometimiento de éstos al Parlamento, la posibilidad (arbitrada inicialmente por la vía de la práctica constitucional y ahora por vía legal) de comparecencias y preguntas ante los órganos de éste, son elementos que contribuyen a integrar su legitimación democrática y a hacer efectiva, en sentido material, una cierta responsabilidad política, pero ésta no es la responsabilidad política propia de los órganos de

⁴⁹⁹ Merino Merchán, J.F.: Instituciones de Derecho Constitucional Español, op. cit., pág 557

gobierno en un sistema parlamentario."⁵⁰⁰ Tal y como ha señalado MOSQUERA," resulta ocioso plantearse el problema de si el Consejo General puede ser responsable políticamente del funcionamiento del Poder Judicial, es decir, de la función de administrar justicia, dado que, ... esta responsabilidad solamente podría ser exigida a cada Juez en particular."⁵⁰¹ En opinión de DE LA OLIVA, el Consejo no responde jurídico-políticamente ni ante el Parlamento ni ante el Gobierno." Eso no significa, empero, que haya un Poder del Estado, el Judicial, de la misma naturaleza que los otros dos...pero completamente irresponsable...el CGPJ no es el máximo órgano de un tercer Poder del Estado semejante al Ejecutivo y al Legislativo, sino un alto órgano del Estado que tiene la exclusiva función de velar, directa e indirectamente, por la independencia en que los Jueces y Magistrados han de hallarse- en interés de todos: también del Ejecutivo y del Legislativo-...el CGPJ es un órgano del Estado esencialmente garantizador, lo que no cabe predicar del Gobierno de la Nación, de los Gobiernos autonómicos, ni de las Cortes y parlamentos regionales"⁵⁰²

⁵⁰⁰ Xiol Ríos, J.A.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado... op. cit., pág.55-56

⁵⁰¹ Mosquera, L.: " La posición del Poder Judicial en la Constitución española " en La Constitución Española de 1978, un estudio sistemático, op. cit., pág. 750-751

⁵⁰² De la Oliva Santos,A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág. 305-306

Hemos hecho referencia a lo dispuesto por la vigente LOPJ 6/1985, en todo aquello que hace mención a la Memoria, no podemos por ello, pasar por alto el carácter relevante que le ha sido otorgado a la misma, entre otras cosas, por constituir un resumen de todo lo ocurrido durante el año judicial; así, se realizan en la misma estudios comparativos entre los diferentes juzgados y Tribunales indicando el número de Sentencias dictadas por cada uno, el número de miembros integrantes de cada uno de los diferentes cuerpos..., es debido a ese carácter relevante al que antes nos referíamos por lo que va a ser el Presidente del CGPJ el encargado de presentar la Memoria en el Parlamento. En cuanto a la tramitación de la Memoria en el Congreso y el Senado⁵⁰³

⁵⁰³ art.201 del Reglamento del Congreso de los Diputados y art. 183 del Reglamento del Senado.

art. 201; " Los demás informes que, por disposición constitucional o legal deban ser rendidos a las Cortes Generales o al Congreso de los Diputados, serán objeto de la tramitación prevista en los artículos 196 y 197 del presente Reglamento, excluida la intervención inicial del Gobierno, pudiendo dar lugar o no según su naturaleza, a la formulación de propuestas de resolución."

art. 196; " 1. Cuando el Gobierno remita al Congreso una comunicación para su debate, que podrá ser ante el Pleno o en Comisión aquél se iniciará con la intervención de un miembro del Gobierno, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por tiempo máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo Parlamentario.

2. Los miembros del Gobierno podrán contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupadas por razón de la materia. Todos los intervinientes podrán replicar durante un plazo máximo de diez minutos cada uno. "

art. 197; " 1. Terminado el debate, se abrirá un plazo de treinta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas de resolución. La Mesa admitirá las propuestas que sean congruentes con la materia objeto del debate.

debemos analizar los artículos 201 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 183 del Reglamento del Senado, en donde se establecen de manera exhaustiva los pasos a seguir.

Pese a la importancia otorgada a la Memoria, un amplio sector de la doctrina, entre otros TEROL BECERRA o LUCAS MURILLO, considera que " no cabe esperar que se produzca ningún tipo de consecuencia para el mundo del Derecho, dado el carácter meramente informativo "⁵⁰⁴que tiene la misma.

2. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de cinco minutos. El Presidente podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la defensa de cada una de ellas.

3. Las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación, salvo aquellas que signifiquen el rechazo global del contenido de las comunicación al Gobierno, que se votarán en primer lugar.

art. 183 del Reglamento del Senado; " Los informes que por imperativo legal deban someterse al Senado serán objeto de tramitación y deliberación en la forma que disponga el Presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces."

⁵⁰⁴ Terol Becerra, M.J.: El Consejo General... op. cit., pág. 104. En este mismo sentido se ha manifestado Lucas Murillo " en realidad la relación entre las Cortes y el Consejo que contempla ese artículo de la Ley Orgánica se agota en el marco de la función de información parlamentaria". Igualmente considera Lucas, que no es posible llevar a cabo un análisis comparativo al referirnos a la responsabilidad de cada una de las distintas instituciones, entre la posición del Consejo y la del Defensor del Pueblo (Alto comisionado de las Cortes Generales), o el Tribunal de Cuentas (que depende directamente de las Cortes Generales). Véase " El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español " op. cit., pág. 234 y ss.

SECCIÓN IIIª LAS SESIONES PÚBLICAS

En la actualidad, las sesiones celebradas por el Consejo General del Poder Judicial son secretas. A mi modo de ver, opinión compartida por ANDRES IBAÑEZ o MOVILLA ALVAREZ, esto constituye un grave error⁵⁰⁵, en especial si atendemos del modelo italiano, en donde " se ha demostrado ser un eficaz instrumento de control democrático "⁵⁰⁶. Se observa sin embargo, una cierta dosis de habilidad en la regulación existente en nuestro país, al contemplarse la posibilidad dada a los distintos integrantes del Consejo, de que su opinión quede recogida en el acta en calidad de voto particular si así se solicita. Con carácter previo a la implantación de esta vía de control, se hace preciso llevar a

⁵⁰⁵ En relación a la reforma legal que apuntábamos; " el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó... sin ningún voto en contra y la sola abstención de Soledad Mestre una propuesta presentada por el Vocal Andrés de la Oliva, en la que se solicita una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las deliberaciones y actas de las reuniones del CGPJ dejen de ser secretas...

La propuesta aprobada consiste en sustituir ese texto por el siguiente: Las sesiones de los órganos del Consejo se celebrarán a puerta cerrada. Sin embargo, solo tendrán carácter reservado, con el correspondiente deber de secreto, las deliberaciones sobre propuestas de nombramientos y procedimientos disciplinarios concretos. En la misma línea de transparencia, el CGPJ pedirá que se añada la previsión de que cualquier persona que aduzca un interés legítimo podrá pedir y obtener copia de las actas del Consejo." Véase Diario ABC, 27 de Septiembre de 1995

⁵⁰⁶ Andres Ibañez P.y Movilla Álvarez: El Poder Judicial op. cit.,pág. 85

cabo un estudio en profundidad de los efectos resultantes de esta medida, y ello, en atención a la opinión de destacados autores, entre ellos ALVAREZ CONDE que ha apuntando cómo en el modelo italiano se ha provocado con la utilización de este sistema la politización de la vida judicial, con los enormes perjuicios que ello implica. De igual forma, para el citado autor no es necesaria la implantación de esta vía de control dada la nitidez de los trabajos del Consejo. En este sentido, " el Consejo es un órgano que funciona con una transparencia exquisita, incluso superior a la transparencia que se produce en otros órganos constitucionales o en otros órganos de deliberación "⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ Entrevista con Enrique Alvarez Conde, celebrada en el Consejo General del Poder Judicial, 24 de Noviembre de 1995. En este mismo sentido, es decir, contrario a la publicidad de las sesiones celebradas en el seno del Consejo se manifestaba el 25 de junio de 1992, con motivo del debate celebrado en Murcia sobre el CGPJ. Intervinieron junto al citado autor, Pascual Sala, Martínez Muñoz, Calvo Rojas, Gerpe Landín, y Cerdón Moreno. Intervenciones recogidas en el Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario...op. cit., pág.148

SECCIÓN IVª CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

i) Introducción

La justificación de la existencia de las Comisiones de Investigación vendría dada en la posibilidad de que a través de las mismas se indague sobre las actividades desempeñadas por el Consejo General del Poder Judicial; cuestión ésta que, si bien resulta alto improbable, al tiempo que sumamente compleja, no debe descartarse, dada la situación política actual en donde se plantean conflictos de atribuciones como el planteado por el Gobierno por la actuación del juez Garzón, y en donde todas las instituciones y Administraciones son cuestionadas. Otra base sobre la que fundamentar la existencia de dichas Comisiones lo constituye la posibilidad de que a través de las mismas se informe al Poder Judicial para que éste pueda actuar en relación a asuntos considerados de interés público, de los que en numerosas ocasiones únicamente obtendrá conocimiento gracias a la investigación realizada a nivel parlamentario.

La reserva de la potestad jurisdiccional a los órganos del Poder Judicial⁵⁰⁸ y la diferente naturaleza de las

⁵⁰⁸ La Constitución española de 1978 ha privado a las Cortes Generales de toda función jurisdiccional, incluso en aquellos ámbitos en los que la inercia constitucional se la venía atribuyendo. Véase Rodríguez-Zapata, J.: "El Poder Judicial como

responsabilidades que a partir de la Comisión investigadora pueden depurarse obligan a trazar límites y diferenciaciones;⁵⁰⁹ no podemos considerar ficticia la conexión existente entre los dos poderes referidos, dada la existencia de ciertas zonas de condonimio entre el Parlamento y el Poder Judicial; una de estos nexos estaría constituido por las CdeI a las que con anterioridad nos referíamos; sin duda, esto se debe fundamentalmente a que la función de control no es privativa de ningún poder del Estado, sino que se extiende horizontalmente en las áreas competenciales de todos los poderes.⁵¹⁰

En relación a la actividad parlamentaria que pudiera implicar una cierta intrusión de las competencias del Poder Judicial, destacamos las Comisiones de Investigación, definidas por diversos autores, al referirse a la actividad de control llevada a cabo por el Parlamento, como " una especie de eslabón intermedio entre la forma más suave del derecho de interpelación y su expresión más severa del voto

límite de la potestad de control de las Cortes Generales " en El Poder Judicial, op. cit., pág. 2466.

⁵⁰⁹ Amoros Dorda, J.F. : " Comentarios a las leyes políticas Constitución Española de 1978 " Dirigida por O. Alzaga, Tomo VI, Edersa, Madrid, 1989, pág. 580.

⁵¹⁰ Rodríguez-Zapata, J.: " El Poder Judicial como límite de la potestad de control de las Cortes Generales " en El Poder Judicial, op. cit., pág. 2466.

de censura constructivo"⁵¹¹, diferenciadas de las Comisiones de Estudio, al ser el objeto fundamental de estas últimas el de " proporcionar al Pleno información con vistas a su trabajo legislativo "⁵¹²

En la actualidad las Comisiones de Investigación han cobrado una notable importancia, consecuencia directa de la situación política⁵¹³; sin embargo, pese al incremento de las funciones desempeñadas por el Parlamento en su actividad controladora⁵¹⁴ respecto del Gobierno y de la Administración, las CdeI han perdido los elementos que las identificaban como

⁵¹¹ Villacorta Mancebo, L.: " Hacia el equilibrio de poderes: Comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes ", Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1989, pág. 218

⁵¹² Torres del Moral, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 1992, Tomo II, pág. 199

⁵¹³ " A veces la lucha política sale de lo que debe ser su campo de batalla, campo que aun siendo muy amplio ... frecuentemente es insuficiente para mantener el fragor de la batalla dentro de sus límites y ésta se desplaza a los tribunales " Quintana López T.: " El control jurisdiccional de las decisiones parlamentarias ", en el Libro Homenaje al Profesor E. G. Enterría, La Corona, las Cortes Generales, del Gobierno y de la Administración Pública, Tomo III, Col. Civitas, Madrid 1991, pág. 2088.

⁵¹⁴ Entre las causas que señala Sainz de Robles respecto a la ineficacia del papel del Parlamento en la actualidad, podemos destacar el papel controlador " el parlamento está aniquilado porque no ejerce su función de control y ésta es la peor herencia de la última etapa, que los resortes de la vida democrática estén herrumbrosos " Véase Hablan los jueces, op. cit., pág. 89

instrumentos de control parlamentario, por ello, tal y como señalan algunos autores, " cuando se crean, su constatada inutilidad, han vaciado en el día de hoy su contenido "⁵¹⁵. Se han transformado en una vía técnica para llevar a cabo la lucha política entre los distintos partidos. Con ello se ha dado lugar a que la creación de las Comisiones responda fundamentalmente a intereses partidistas que pretenden provocar de manera casi constante el desprestigio político de sus oponentes.

La primera referencia obligada, previo al análisis de las funciones que desempeñan las Comisiones en su actividad investigadora y, previo también al estudio del papel que debe llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial, es detenernos en la normativa existente en nuestra Constitución⁵¹⁶, desarrollada a través de los Reglamentos del

⁵¹⁵ Esteban de, J. y, González-Trevijano, P.: Curso de Derecho Constitucional II Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993, pág.338

⁵¹⁶ art. 76 CE: 76.1 " El Congreso y el Senado, y, en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas "

76.2 " Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación."

Constitución italiana de 27 de diciembre de 1947: art. 82 " Cada Cámara podrá disponer encuestas sobre materias de interés

Congreso y del Senado, así como la Ley Orgánica de Comparecencia de los Ciudadanos ante las Comisiones de investigación 5/ 1984 de 26 de mayo, al tiempo que atendemos a la regulación existente en países próximos a nuestro

público. A tal fin nombrará entre sus propios miembros una comisión formada de manera tal que refleje proporcionalmente los grupos. Cada comisión de encuesta averiguará y examinará con análogos poderes e idénticas limitaciones que la autoridad judicial."

Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949:art. 44.1 El Bundestag tiene e derecho y, a petición de una cuarta parte de sus miembros, la obligación de nombrar una Comisión de encuesta encargada de reunir las pruebas necesarias en audiencia pública. Podrá acordarse la celebración de sesiones cerradas.

Art44.2 Las disposiciones sobre procedimiento penal se aplicarán por analogía al procedimiento probatorio. El secreto de la correspondencia, las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones nunca se verá afectado.Art44.3 Los Tribunales de justicia y las autoridades administrativas vienen obligados a prestar auxilio judicial y administrativo.Art. 44.4

Las resoluciones de las Comisiones investigadoras no podrán ser sometidas a la consideración judicial. Los Tribunales quedan en libertad para apreciar y calificar los hechos que son objeto de la investigación.

En el modelo Francés destacamos la Ordenanza relativa al funcionamiento de las Asambleas Parlamentarias núm. 58-1100, de 17 de noviembre: Il ne peut être crée de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été crée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

En el estudio del sistema Norteamericano, debemos destacar la obra de SANTAOLALLA, " El Parlamento y sus instrumentos de información " en donde recoge aquellos casos que más interés han despertado al referirse a las investigaciones llevadas a cabo por el Congreso y la posible intromisión que dicha actividad ha podido suponer. Se analizan casos como *Anderson v. Dunn* , *Kilbourn v. Thompson* , *Mc. Grain v. Daugherty*, *Sinclair v. United States*, *Delaney v. United States* , *Hutcheson v. United States*

entorno. Debemos asimismo considerar cual es el propósito al que responden las Comisiones de Investigación⁵¹⁷.

ii) Función y características

La función por la que se crean⁵¹⁸, es la de estudiar

⁵¹⁷ Aparece esta figura por primera vez en la Ley de Cortes de 1942; el art. 15.II establece " Las Comisiones legislativas podrán recibir del Presidente de las Cortes otros cometidos, tales como realizar estudios, practicar informaciones y formular peticiones o propuestas. Podrán constituirse, para estos fines, en Comisiones especiales distintas de las legislativas." (BOE 200 de 19 de julio). El parecer de la doctrina no es uniforme a la hora de referirse a los antecedentes de ésta figura; así, destacados autores de la doctrina como Alzaga Villaamil y Santaolalla prescinden de esta regulación, por considerarla ajena al marco constitucional, al desarrollarse en el período franquista. Para los mencionados autores, los precedentes de las Comisiones de Investigación se encontrarían en las previsiones acerca de "la obligación de los Ministros de comparecer ante las Cámaras. Santaolalla López entiende que las disposiciones constitucionales sobre facultades de las Cortes para conocer de los hechos que pueden afectar a la condición de un parlamentario... o para enjuiciar criminalmente a los miembros del Gobierno..., bien pudieran dar origen al establecimiento de Comisiones de encuesta o investigación, aunque, claro está, con un ámbito restringido de actuación" V. Amoros Dorda: Revista de Derecho Público, Comentarios a las leyes políticas, Constitución Española de 1978 op. cit., pág. 562 Véase Alzaga Villaamil, " La Constitución Española de 1978, comentario sistemático ", op. cit., pág. 520, asimismo, véase Santaolalla El Parlamento y sus instrumentos de información (Preguntas, interpelaciones y Comisiones de investigación), op. cit., pág. 242

⁵¹⁸ Diversos autores, destacamos a ACHTERBERG y a VILLACORTA consideran que la función de las Comisiones de Investigación se reduce por lo esencial a encuestar los escándalos, e incluso llegan a convertirse en el medio más eficaz del Parlamento para controlar al Gobierno. V. Mancebo " *Hacia el equilibrio...*" op. cit., pág. 218

aquello que deba conocer el Parlamento a través de sus propios medios de información, por ser de interés público, para determinar si es posible exigir algún tipo de responsabilidad: se derive ésta de instituciones o de supuestos individualizados. Se plantea el problema de responder a ¿ qué es en España la responsabilidad ? Tal y como escribió Mariano de Cavia el 25 de noviembre de 1891⁵¹⁹, podemos considerar que la responsabilidad corresponde a una palabra hueca.

Se hace preciso poner de manifiesto, aunque sea por todos conocida, la independencia e imparcialidad con la que deben actuar los órganos del Poder Judicial y, derivada de la misma la consecuente posibilidad de que los mismos concluyan sus actuaciones de manera distinta a la efectuada en el seno de la Comisión investigadora. Parece pues, que la normativa existente, artículo 76 de la Constitución, es acorde con el artículo 117 de la misma. Si bien lo analizado hasta el momento no parece ser de gran complejidad, va a ser fundamental a la hora de estudiar el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal que, tomará conocimiento de lo acontecido en la Comisión, tal y como se regula a nivel constitucional, "para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas

⁵¹⁹ Recogido en presa " ABC" 10-III-1995

"⁵²⁰. Como ha puesto de manifiesto la mayor parte de la doctrina al referirse a la comunicación que se efectúa por

⁵²⁰ " cuando proceda " fue objeto de un interesante debate a lo largo del proceso de elaboración del precepto. Centrándonos en lo que se refiere a las conclusiones de la Comisión de Investigación, en el artículo 67 del Anteproyecto constitucional se establecía que " sus conclusiones no serán obligatorias para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales." De las diversas enmiendas a que fue sometido el actual art. 76 de la Constitución, seis en total en el Congreso de los Diputados, únicamente indicar que las mismas pertenecían a la categoría de lo que en jerga política se denominan enmiendas "técnicas" sin excesiva precisión. Es en el informe de la Ponencia cuando comienza a darse un contenido próximo al actual; " Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la comunicación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas cuando proceda". El Texto del artículo 70 del Informe de la Ponencia se aprobó por unanimidad, dándose traslado del mismo al Senado en el que fue objeto de un total de diez enmiendas, entre las que debemos destacar la del senador Sánchez Agesta que situaba las palabras " cuando proceda" entre " comunicado " y " al Ministerio Fiscal". Para Sánchez Agesta en el Proyecto se atribuían a las Cámaras la obligación de decidir sobre el carácter criminoso o no de los hechos puestos de relieve por la investigación y, adicionalmente, la de decidir sobre la procedencia de las acciones procesales. Su enmienda no trataba de recargar a las Cámaras, sino de descargarlas de una responsabilidad indebida. Debía quedar suficientemente aclarado que las Cámaras lo único que debían decidir era si procedía o no poner en conocimiento del Fiscal el resultado de la investigación. Fueron presentadas diversas interpretaciones no acordes con las del senador antes mencionado, entre otras la del senador Villar Arregui y la del senador Gutiérrez Rubio. La intervención que conduciría al consenso fue la del senador Sainz de Varanda Jiménez que propuso incluir " cuando proceda" entre los términos " para el ejercicio" y " de las acciones ". El Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado contenía el siguiente texto "... Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas." - Amoros Dorda, F.J.: artículo 76. *Comisiones de Investigación*, en Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978, op. cit., págs. 561 a 593 - Así como " Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Cortes

parte de la Comisión al Ministerio Fiscal, con ella, nunca se "implicaría una calificación formal sobre si unos hechos determinados son constitutivos o no de delito, y que sería el Ministerio Fiscal quien decidiría libremente sobre la interposición de las acciones pertinentes"⁵²¹; de esta manera se respetaría en todo momento la mencionada independencia con que deben actuar los miembros del Poder Judicial, entre los que se incluye al Ministerio Fiscal⁵²².

Generales", 1980, Tomo I, pág. 18 y ss., Tomo II, pág.1203 y ss. Tomo III, pág. 3601 y ss., Tomo IV pág. 4209 y ss.

⁵²¹ Santaolalla, F.: El Parlamento y sus instrumentos de información - preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación - op, cit. pág. 255

⁵²² art. 2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (BOE núm. 11 de 13 de enero de 1982) dispone en su apartado 2.1 que " el Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad." En relación a este artículo puede observarse diversa jurisprudencia constitucional: STC 37/1988, AATC 59/1983, 93/1983, 460/1983...

Que el Ministerio Fiscal debería ser independiente de toda influencia es algo que queda fuera de toda duda. El problema se plantea al analizar la práctica habitual, de donde deducimos la necesidad de que el " Ministerio Fiscal se integre con la necesaria autonomía dentro del Poder Judicial y en su órgano de Gobierno(previa reforma de éste) no podrá hablarse de auténtica independencia de esta institución cuya cabeza visible es nombrada y sustituida por el Gobierno y por ende con una sumisión teórica evidente, sin ningún tipo de mecanismo de autoprotección que no sea la actitud heroica de su titular presentando la dimisión cuando se le impongan determinadas directrices..." Véase Manos sucias, el poder contra la justicia, op. cit., pág. 29

Resulta sumamente interesante detenerse en la preocupación que se despertó en algunos senadores, durante los debates parlamentarios de 1978, en relación al supuesto de si con la intervención de los miembros de una comisión investigadora se implicaba en el actuar de éstos la necesaria calificación de unos hechos como constitutivos de delito. Tal y como ha puesto de manifiesto AMORÓS DORDA, " por el hecho de ser ciudadanos, los parlamentarios están sujetos a un deber general de denuncia del delito que es claro que requiere, para su cumplimiento, hacer un juicio de criminalidad de los hechos conocidos. Este deber general debe matizarse más en el caso de personas que, por razón de su actividad o cargo, están en condiciones de acceder a más información y a mayores conocimientos jurídicos o legales que el común de los españoles. No parece lógico que se libere a los responsables de una investigación parlamentaria de esta sujeción. "⁵²³

En relación a lo anterior y, sin pretender llevar a cabo una crítica de lo expuesto, deberíamos tener presentes los reproches realizados por algunos estudiosos de la materia:

Se presenta como muy complejo llegar a imaginar la posibilidad de que el Ministerio Fiscal no proceda a

⁵²³ Amoros Dorda, F. J. : " Comentarios a las leyes..." op.cit., pág. 588.

calificar unos hechos como delictivos cuando los representantes del pueblo español, integrados en una comisión investigadora han decidido darle comunicación porque lo consideraban procedente. Esta es entre otros la opinión de ALZAGA que considera que " es más que realista prever que al Fiscal no le queda otra opción que formular, en los términos procesalmente pertinentes, la acusación al Juez competente, el cual a su vez se verá sometido a una presión, todo lo singular que se quiera, pero desde luego no desconocible, que le dificultará el instruir el sumario con entera libertad. Es más, el Tribunal que haya de juzgar tampoco disfrutará de un clima de verdadera independencia para emitir el fallo que corresponda sobre las acusaciones en cuestión."⁵²⁴

Las Comisiones de investigación, carecen de las facultades atribuidas a la autoridad judicial⁵²⁵, tales como la posibilidad de ordenar la detención de una persona que se niega voluntariamente a comparecer, llevar a cabo registros

⁵²⁴ Alzaga Villaamil, O.: La Constitución española de 1978 op. cit., pág. 521

⁵²⁵ En este mismo sentido se han pronunciado parte de la doctrina. "Si bien las Comisiones tienen facultades instructoras y disponen de algunas de las garantías propias de la administración de justicia, carecen de la posibilidad de aplicar la norma abstracta al caso concreto ... carecen de capacidad ejecutiva y de despliegue de medidas coercitivas limitadoras de la libertad". Villacorta Mancebo, L.: " Hacia el equilibrio..." op. cit.,pág. 218-219

domiciliarios con la intención de descubrir pruebas etc..., sin embargo, no aparece recogida de esta manera en todo el derecho comparado; destacamos el modelo italiano, por la regulación normativa existente en relación a los poderes de las comisiones parlamentarias de investigación, las cuales cuentan con " los mismos poderes y las mismas limitaciones de la autoridad judicial"⁵²⁶

En el sistema español, frente a las limitaciones que hemos recogido anteriormente, la comisión investigadora puede ordenar la comparecencia y declaración de quienes considere pertinente para el desarrollo de la investigación; de igual forma, tiene también capacidad para solicitar la puesta a disposición de la documentación que se precise para el desempeño de sus funciones, el básico poder *To send for persons, papers and records*. Junto a estas facultades se encuentra también la posibilidad reconocida en el art. 109 del texto Constitucional de recabar información y ayuda a través de los Presidentes de las Comisiones.⁵²⁷ Cierta sector

⁵²⁶ De esta forma se encuentra regulado en la Constitución Italiana, art.82, así como en los reglamentos de las Cámaras; art.141.2 del Reglamento del Congreso, art. 162.4 del Reglamento del Senado.

⁵²⁷ El art. 109 del Texto Constitucional establece que: " Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas." Que duda cabe de que dicho precepto es aplicable a las Comisiones de Investigación pero, tal y como han señalado diversos autores, hubiera sido

de la doctrina ha manifestado su parecer en relación al apartado al que ahora nos referimos, especialmente tras llevar a cabo un análisis de los poderes con que cuentan países de nuestro entorno, especialmente en los sistemas italiano y alemán. Se ha calificado de " omisión lamentable, en cuanto que estas normas (hace referencia a las facultades con que cuentan las Comisiones de investigación en los países antes mencionados) imponen o posibilitan un funcionamiento ágil y eficaz de las investigaciones parlamentarias que pueden escapar de las rutinarias comparecencias de deponentes ante los parlamentarios. Nada se opone a que nuestras Comisiones de investigación utilicen otros medios de actuación, pero pueden encontrarse sin apoyo normativo claro para ello." ⁵²⁸

Algunos autores consideran que el sistema actual podría ser reformado, destacando entre los aspectos modificables el del poder otorgado a las Comisiones; con la propuestas que se presentan el " poder coercitivo consistiría en evidenciar a

preferible que las facultades que se otorgan a las Comisiones Investigadoras se encontraran recogidas en el art. 76 de la Constitución, por otra parte, se apunta también la crítica de que la señalada posibilidad de recabar información y ayuda se encuentre sometida al Presidente de las mismas, pues, con ello se elimina, en cierto modo, la agilidad que se pretende reine en las mismas.

⁵²⁸ Amoros Dorda, J.F. : " Comentarios... " op. cit., pág. 587

la luz pública, no sólo los resultados sino también el desarrollo de las investigaciones y de esta manera, sería conveniente que

fueran publicas las sesiones y los interrogatorios, así como las comparecencias de los citados por la comisión.... Serviría para dar mayor transparencia y contribuir a acabar con el alejamiento de los ciudadanos y su desconfianza respecto de las instituciones representativas."⁵²⁹ En relación a lo anterior, debemos recordar como la función de las CdeI se " agota en la detención de posibles responsabilidades políticas en relación con los hechos investigados, y éste es el punto límite de sus investigaciones"⁵³⁰. El único elemento conflictivo en relación a la publicidad⁵³¹ es que de forma paralela a la investigación desarrollada por la comisión parlamentaria encargada de la misma, pueden estar llevándose

⁵²⁹ Medina Rubio, R. : La función constitucional de las Comisiones parlamentarias de investigación, Universidad de Alicante, Cuadernos Civitas, Madrid, 1994, pág.89.

⁵³⁰ Torres Bonet, M.: " Las relaciones entre las Comisiones de Investigación y el Poder Judicial " comunicación presentada en las VI Jornadas de Derecho Parlamentario referentes a los Problemas Actuales del Control Parlamentario celebradas en Madrid, Palacio del Senado, del 25 al 27 de enero de 1995, pág.12 del texto mecanografiado.

⁵³¹ Santaolalla destaca como en las investigaciones llevadas a cabo en la RFA en relación al caso Flick, la Comisión de investigación desarrolló sus trabajos de manera pública, al tiempo que en un caso de características similares los españoles no tuvieron acceso a las declaraciones llevadas a cabo en la Comisión formada en el Congreso de los Diputados. Véase Santaolalla, F.: El Parlamento en la encrucijada "ed. Eudema, Madrid, 1989, pág. 107

a cabo indagaciones por parte de los órganos del Poder Judicial; juzgados y Tribunales, entorpeciéndose (quizás sería mejor presionándose) con la publicidad - debido a que con la misma se producen juicios paralelos⁵³² que constituyen una "auténtica invasión en la función jurisdiccional"⁵³³- la actividad judicial de la que van a poder derivarse verdaderas responsabilidades penales cuando estas procedan. En el respeto mutuo de ambos poderes es donde se encuentra el equilibrio, que beneficia no sólo a las instituciones, sino también a los ciudadanos.

⁵³² Tal y como ha puesto de manifiesto JIMÉNEZ DE PARGA," han contribuido a dañar la imagen de los magistrados los juicios paralelos que se montan con las informaciones que facilitan los medios de comunicación. Dejando a un lado las noticias inexactas o tendenciosas que a veces llegan al público relativas a personas sometidas al enjuiciamiento de los Tribunales de Justicia, incluso cuando se informa con precisión y veracidad, el riesgo de equivocarse al emitir un veredicto en la calle es grande. Los sumarios se forman con materiales complejos, las pruebas que constan en ellos deben ser matizadas con declaraciones de signo vario, el juez se encuentra con dificultades para hallar la verdad material y raros son los asuntos en los que el blanco y el negro de la culpabilidad o la inocencia resultan indiscutibles. La ponderación de los datos, que efectúan los jueces antes de dictar sentencia, obliga a un trabajo serio y de absoluta serenidad que no se realiza por quienes con dos o tres testimonios se pronuncian alegremente fuera de los Juzgados. El juicio paralelo en la calle se remata con un veredicto popular que puede no ser ajustado a Derecho. El día que se hace pública la sentencia del Tribunal de Justicia, y si ésta no coincide con lo que muchos esperaban, la desilusión es enorme, en perjuicio también de los jueces intervinientes y, por extensión, de sus compañeros de oficio." Véase La ilusión política. ¿Hay que reinventar la política en España? op. cit., pág. 151

⁵³³ Recogido en prensa, el Mundo, 3-XII-1994, pág.10

Un aspecto de especial interés a la hora de analizar las facultades con que cuentan las Comisiones de Investigación se encuentra en la limitación que implican materias tales como los secretos de Estado o los secretos profesionales. En estos casos nos encontramos ante un conflicto entre el interés parlamentario por esclarecer un asunto público frente al interés de que determinados hechos o materias continúen siendo secretas.

Para VILLACORTA MANCEBO, en referencia al primero de los supuestos, que las Comisiones conozcan dichos secretos no implica una transgresión de la normativa existente. En iguales términos se refiere al secreto profesional, siempre que las declaraciones llevadas a cabo en la Comisión no sean públicas⁵³⁴

Parece clara la necesidad de evitar que se produzcan intromisiones en la actividad desempeñada por los órganos judiciales, en especial en la llevada a cabo por el poder legislativo; la atribución a las Comisiones de Investigación de poderes judiciales podría llevarnos a considerar tal y

⁵³⁴ Véase el estudio llevado desarrollado por Villacorta Mancebo referente al art. 2 y art. 10.2 de la ley 48/78, de 7 de octubre, de Secretos Oficiales, así como la Resolución de la Presidencia sobre acceso por el Congreso de los Diputados a materias clasificadas de 18 de Diciembre de 1966, en : " Hacia el equilibrio..." op. cit., pág. 222 y ss.

como ha señalado DUGUIT que se vulnera en cierta medida la libertad individual del sujeto y ello debido a que el " poder judicial se convierte en el garante último de la libertad y lo convierte en límite de los poderes investigadores de las Cámaras; éstos no llegarán más allá de donde puede llegar un juez."⁵³⁵

Otro destacado autor italiano MANZELA, se ha referido a la discutida atribución de facultades judiciales a las Comisiones investigadoras, para éste," ningún ciudadano puede encontrarse frente al poder político inquiriente en condiciones de garantía de las propias libertades constitucionales peores que las que tuviera ante un juez cualquiera."⁵³⁶

iii) Conclusiones

Es consecuencia de la necesidad de la ampliación de los actuaciones de control del Parlamento por lo que se producen injerencias en ámbitos propios de la función jurisdiccional; junto a esta situación, la evidencia de que el Parlamento ha perdido en la realidad política de los sistemas

⁵³⁵ Recorder de Casso, E.: en la obra dir. por Garrido Falla, F. Comentarios a la Constitución, op. cit.,pág. 817

⁵³⁶ Recorder de Casso, E.: en la obra dir. Garrido Falla, F. Comentarios a la Constitución, op. cit., pág. 817

contemporáneos su capacidad de control, sería tal que no necesita demostración⁵³⁷; es por ello por lo que, al igual que destacados autores, consideramos que en la actualidad, " la participación de los órganos parlamentarios en ...complejos fenómenos de enjuiciamiento no favorecen... a la institución que representa la soberanía nacional, cuya capacidad investigadora se muestra invariablemente inferior a la de la prensa y a la de los órganos judiciales, yendo a remolque de ambos, y que en el desarrollo de tales fenómenos parece relegada a la secundaria y desairada función de ser un puro escenario físico donde acaecen hechos que alimentan la actividad de los agentes reales de control social y jurídico"⁵³⁸. Parece pues necesario reforzar, si es que queremos transformar el carácter que ahora tienen atribuido las Comisiones de Investigación, aquellos instrumentos necesarios para que éstas desempeñen un verdadero papel representativo de su función y eficacia dentro del sistema democrático; se hace preciso dotarla de auténtico contenido, con mayores facultades de actuación, colaboración de las autoridades judiciales y administrativas, buenos equipos

⁵³⁷ García Morillo, J.: " Aproximación al concepto de control Parlamentario ", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 10, 1986, pág.3

⁵³⁸ Santamaría Pastor, J.A.: " La actividad del Gobierno y de la Administración Pública como objeto de control Parlamentario ", en VI Jornadas de..., op. cit., pág.10 del texto mecanografiado.

técnicos, y el acceso a todo tipo de documentación y archivos, parece interesante también la posibilidad de dar entrada a miembros ajenos al estatuto parlamentario⁵³⁹; así por ejemplo, aquellos que tengan un interés especialmente relevante, expertos independientes en la materia que se esté tratando... en relación a todo lo anterior y, para mantener un criterio coherente, se hace preciso " la exclusión de actuaciones simultáneas de los dos poderes públicos: si el poder judicial actúa en relación con un hecho, el legislativo debe detener su actividad; o a la viceversa... ningún precepto constitucional atribuye prioridad de ningún tipo al poder judicial sobre las Cámaras "⁵⁴⁰. Por otro lado, resulta interesante apuntar como argumento de peso en favor del objetivo de evitar los paralelismos a que nos referíamos con anterioridad como " la apertura de una investigación parlamentaria y de un sumario judicial sobre unos mismos hechos, puede producir resultados contradictorios, descoordinaciones o interferencias."⁵⁴¹

⁵³⁹ El sistema de inclusión de miembros ajenos al parlamento es práctica habitual en el derecho inglés, especialmente para los casos en que no se recurre al Select Committee y por contra se constituye una Royal Comisión. Véase Recorder de Casso, op. cit., pág.813

⁵⁴⁰ Santamaría Pastor, J.A.: " La actividad del Gobierno y de la Administración Pública como objeto de control Parlamentario ", en VI Jornadas de..., op. cit., pág.12 del texto mecanografiado.

⁵⁴¹ Amoros Dorda, J.F. : Comentarios a las leyes políticas Constitución Española de 1978 op. cit., pág. 580.

Es aquí donde el Consejo General del Poder Judicial debe recordar al Parlamento, aunque claro está, sin atribuirse el carácter de representante⁵⁴² del Poder Judicial ya que, como sabemos no lo es, que suspenda y no se dificulten las investigaciones judiciales con las actividades que llevan a cabo las Comisiones de investigación. Este papel que asignamos al CGPJ, lo hacemos, no por ser el órgano encargado de defender y mantener la independencia de los Juzgados y Tribunales en el ejercicio de sus competencias que, pueden verse seriamente afectadas debido a la gran influencia que dichas comisiones tienen en la opinión pública, en las numerosas violaciones que del secreto

⁵⁴² STC 45/1986 " No hay nada...que autorice a sostener la pretensión de representación procesal por el Consejo General del Poder Judicial, como tal. Los órganos en que se expresa el Poder Judicial (que es un poder de configuración plural, para ejercer la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en nombre del Rey), no tienen acceso al conflicto de atribuciones, pues los órganos judiciales en sí mismos considerados no son órganos constitucionales a los efectos de plantear conflicto de atribuciones según el artículo 59.3 LOTC, y los conflictos posibles entre Juzgados y Tribunales y otros órganos del Estado tienen previstos otros cauces procedimentales en los que no tiene cabida el propio Consejo. Además, al configurarse constitucionalmente como órgano de gobierno, no podría ser, siquiera a efectos procesales, representante del Poder Judicial, pues ello estaría en contradicción con el principio constitucional de independencia de Jueces y Magistrados (art. 117.1 CE) y ese presunto carácter representativo habría de admitirse también del lado pasivo, sujetando así al miembro integrante del Poder Judicial a instancias o actuaciones judiciales propias del Consejo."

sumarial⁵⁴³ decretado por los juzgados se realizan por parte de las CdeI, en los juicios paralelos..., sino que referida atribución, lo hacemos sobre la base de considerar al CGPJ como un órgano de enlace entre los distintos poderes del Estado. Cuenta el Consejo General además, para ello, con lo dispuesto en el Tratado de Maastricht, que en su nuevo artículo 138 apartado C)TCE, que introduce las comisiones temporales parlamentarias europeas, excluye su constitución cuando de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el procedimiento. De la OLIVA ha puesto de manifiesto un grave problema al analizar los artículos 122 CE⁵⁴⁴ y el 14 de la LOPJ⁵⁴⁵. Al tomar como

⁵⁴³ En opinión de Ramón Rodríguez Arribas, " ya no existe la repulsa profesional hacia quienes revelan los contenidos de un procedimiento judicial y menos aún se guardará el secreto cuando se trata de una investigación parlamentaria" Véase en El Mundo, 20/10/95 " Los jueces piden que la comisión diferencie su labor de la judicial"

⁵⁴⁴ El citado autor considera que si se entiende que el Poder Judicial" ha de ser independiente - quienes han de serlo son, más bien los órganos jurisdiccionales y las personas que los integran-, el Consejo, al ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, tendría encomendada, de forma natural, la defensa de la independencia judicial." Véase " Acerca del Consejo General del Poder Judicial"op. cit., pág. 291

⁵⁴⁵ El art. 14 de la LOPJ dispone:

1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por si mismos las diligencias estrictamente necesarias para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.

2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

premisa que cuando se produce una vulneración en la independencia judicial debe acudir en primer lugar al Consejo, parece lógico pensar que corresponde al Consejo velar por la independencia. El problema se plantea cuando se revela que el Consejo, una vez recibidas esas quejas procedentes de los juzgados o tribunales, en el caso que nos ocupa por esa duplicidad a la que nos hemos referido anteriormente, descubre que no puede hacer nada. No tiene verdaderas facultades de actuación, debe confiar en su *auctoritas...*" parece conveniente que la ley reconozca de modo expreso la facultad del CGPJ de instar la actuación del Ministerio Fiscal, que debiera dar cuentas al Consejo." ⁵⁴⁶

Tal y como señala de la Oliva, el art. 14 de la LOPJ suele ser invocado en los siguientes casos: a) " informaciones de prensa sobre asuntos judiciales, que el Juez o Magistrado considera inquietantes o perturbadores; b) ciertas actuaciones de abogados, expresadas de palabra o por escrito; c) indicaciones formuladas por tribunales de categoría superior en resoluciones judiciales, que el Juez o Magistrado al que se dirigen aquéllas entienden contrarias a su independencia; d) órdenes de los superiores jerárquicos internos de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están actuando como Policía judicial, en virtud de las cuales cesan en esa situación sin la preceptiva autorización del Juez." Véase " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" op. cit., pág. 292

⁵⁴⁶ En este sentido se ha manifestado De la Oliva, " Acerca del Consejo General del Poder Judicial " op., cit., pág.302

SECCIÓN Vª ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
LA NUEVA SITUACIÓN CREADA CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LO
16/94 DE 8 DE NOVIEMBRE

Nos hemos referido con carácter previo a los diversos instrumentos de los que dispone el Parlamento para supervisar las actividades que realiza el Consejo General del Poder Judicial: una vez analizado el carácter otorgado a las Memorias, al papel desempeñado por las Comisiones de Investigación, así como la posibilidad de transformar en públicas las sesiones del Consejo, se hace preciso tomar en consideración la materia presupuestaria. Las transformaciones operadas en este campo, derivadas de la reciente modificación llevada a cabo por la Ley Orgánica 16/94, impregnan a esta materia una importancia sustancial.

Un ejemplo de la amplia conexión existente entre los elementos considerados como instrumentos de control en manos del Parlamento lo constituye la relación Memoria- Gestión Presupuestaria que desarrolla el Consejo: así, hasta la reforma llevada a cabo en la LOPJ por la LO 16/1994, de 8 de noviembre, la Memoria estaba llamada a complementarse con el anteproyecto que de su presupuesto remitía al Gobierno con igual periodicidad. La idea de que la descripción que el Consejo hacía en la Memoria sintonizaría con las propuestas

de ingresos y gastos en que éste consiste (el Presupuesto), aportaba de esta manera a cada uno de los órganos que intervenían en los sucesivos trámites para su aprobación, elementos de juicios coordinados.⁵⁴⁷ Esta perspectiva de complemento se transforma, como consecuencia de la reforma introducida, dando lugar a que las relaciones Memoria-Anteproyecto deban interpretarse como vínculo Memoria-Presupuesto la cual tendrá en cierto modo más sentido pues, utilizará datos definitivos, no susceptibles de las variaciones que con anterioridad podía realizar el Gobierno.

En el art.107.8⁵⁴⁸ de la LOPJ 6/1985 de 1 de Julio, hoy reformado por la LO 16/1994⁵⁴⁹, de 8 de noviembre, dentro del

⁵⁴⁷ Terol Becerra, M.J.: El Consejo... op. cit., pág 119

⁵⁴⁸ art. 107 LOPJ; El Consejo General del Poder Judicial tendrá competencias en las siguientes materias:
8.Elaboración y aprobación del anteproyecto de presupuesto del Consejo". En relación con este artículo se encontraba también el art.127.12 de la misma ley " Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobar y remitir al Gobierno el Anteproyecto de Presupuesto del Consejo General "En relación al anteproyecto presupuestario destacaban del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial aprobado por Acuerdo de 22 de abril de 1986 los ss. arts. 85 a 89 y 26, 33 y 56.Todos ellos objeto de las necesarias modificaciones para contemplar y dar desarrollo a la nueva concepción procedente de la variación establecida por la Ley Orgánica 16/1994 de 8 de noviembre.

⁵⁴⁹ La Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, en su artículo undécimo referente al régimen presupuestario del CGPJ, establece algunas modificaciones;

Título II, Capítulo primero, se encontraba la potestad otorgada al CGPJ para que elaborara y aprobara su propio *anteproyecto presupuestario*.

El sistema que establecía la hoy reformada Ley Orgánica era el siguiente; una vez aprobado el anteproyecto presupuestario del Consejo en el seno CGPJ, se daba traslado de éste al Gobierno para que lo analizara; en el caso de ser ratificado por el mismo pasaba a incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las alternativas no finalizaban aquí; se daba también otra posibilidad, consistente en que, antes de que se llevara a cabo la incorporación a los citados presupuestos generales, se llevare a cabo una variación por parte del Gobierno de las cifras remitidas por el CGPJ. En relación a las facultades de variación en manos del Gobierno, ha señalado la doctrina que, uno de los principales problemas con los que se enfrenta cualquier institución u organismo que pretenda ser autónomo e independiente del resto de poderes existentes, se encuentra

El apartado 8 del art. 107 queda redactado de la siguiente forma: "Elaborar, dirigir la ejecución y controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo".

Los apartados 12 y 13 del artículo 127 quedan redactados de la siguiente forma:

" 12. Elaborar el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente.

13. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento"

en el plano económico; la posibilidad otorgada al Gobierno de variar las cifras consignadas en los presupuestos elaborados y aprobados por el seno del CGPJ, implicaban un sometimiento de éste órgano a las decisiones que se adoptasen desde el plano del poder ejecutivo, del que tantas veces se ha pretendido separar al poder judicial para que éste desempeñara correctamente sus funciones. Como acertadamente señalara, con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, " este control férreo por parte del Ejecutivo es un de los puntos que envenenan las relaciones Ejecutivo-Judicial y dan pie a las acusaciones de prepotencia de aquél que se oyen y leen en los medios de comunicación social"⁵⁵⁰

Esto hay que analizarlo teniendo en cuenta que órganos considerados fundamentales en el Estado social y democrático de Derecho, junto al CGPJ, como son el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas⁵⁵¹, tienen la facultad de regular sus propios presupuestos, pasando directamente a

⁵⁵⁰ Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley Orgánica 1/1980 a la Ley Orgánica 6/1985" op. cit.,pág. 57

⁵⁵¹ El art. 6 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas, " El Tribunal de Cuentas elaborará su propio presupuesto, que se integrará en los Generales del Estado, en una sección independiente, y será aprobado por las Cortes Generales ".

La Disposición Transitoria Cuarta; " El Gobierno habilitará los créditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que éste disponga de presupuesto propio."

integrarse en los Presupuestos Generales del Estado. El Consejo General del Poder Judicial contaba hasta hoy con una cierta autonomía, pero también es cierto que ésta era cualitativa y cuantitativamente inferior a la de otros órganos⁵⁵². Es por ello por lo que, se reclamaba⁵⁵³ para el Consejo la facultad de elaborar un Proyecto de Presupuesto de características afines a las concedidas al Tribunal Constitucional⁵⁵⁴, postura ésta que ha sido finalmente recogida en la reciente modificación operada en la LOPJ⁵⁵⁵, en

⁵⁵² Existe una diferencia manifiesta entre las facultades otorgadas a las Cámaras y las que disfruta el CGPJ. Aquellas, tal y como establece el art. 72.1 de la Constitución "...aprueban autónomamente sus presupuestos..."

⁵⁵³ LA UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS en la resolución adoptada en Atenas en su Congreso de Octubre de 1994 llegó a la conclusión de que " la independencia judicial exige, como una de sus garantías, los medios económicos que aseguren la realización de una Justicia eficaz...por tanto, atenta contra esa independencia que el Ejecutivo retenga la competencia de iniciativa presupuestaria que debe pertenecer de manera autónoma al Poder Judicial...este último presentará sus propuestas presupuestarias a las Cámaras Legislativas, que adoptarán la decisión final" Véase la Comunicación presentada por la sección territorial de Madrid " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial "en la XI Congreso de la APM celebrado en Madrid, en los días 26-27-28 de Octubre de 1995, pág.4 del texto mecanografiado.

⁵⁵⁴ Postura mantenida entre otros por Gerpe Landín, M: " *El Consejo General del Poder Judicial* "op. cit., pág.186

⁵⁵⁵ Hace referencia a los artículos 107.12 de la LOPJ y a la reforma introducida a través de la LO 16/1994 de 8 de noviembre, que en su artículo 11 atribuye al pleno la competencia para elaborar el presupuesto del Consejo y que se integrará en los Presupuestos Generales del Estado, en sección independiente. Tal y como señala LUCAS MURILLO, se ha pasado a reconocersele autonomía presupuestaria, con los efectos que se deducen de esa atribución: " los aspectos formales tienen importancia a la hora de determinar la posición de un órgano con la relevancia

contra de la postura que apuntaba la imposibilidad de ampliar las facultades del CGPJ a niveles afines a los otorgados a ciertos órganos de relevancia constitucional; la razón del impedimento a la hora de atribuir la administración económica de la gestión de los medios materiales y de la dotación presupuestaria del Poder Judicial al CGPJ derivaría, en opinión de algunos, " no tanto de que no incida en el gobierno del Poder Judicial -es claro que, al menos indirectamente, sí lo hace-, como de que una gestión presupuestaria de esa envergadura conlleva auténticas decisiones políticas, las cuales, en una forma de gobierno parlamentaria (art.1.3 CE), no pueden ser adoptadas por órganos políticamente no responsables. La distribución de los recursos destinados al Poder Judicial forma parte de la política interior (art.97 CE) y, por tanto no puede dejar de corresponder al Gobierno"⁵⁵⁶

constitucional que posee el Consejo. No añaden potestas, o no lo hacen de modo significativo, pero contribuyen asentar auctoritas". Véase Lucas Murillo:" El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" op. cit., pág. 227

⁵⁵⁶ Díez-Picazo, L.M." Régimen constitucional del Poder Judicial" cit., pág.147-148

**CAPÍTULO CUARTO: DE LOS CONFLICTOS ENTRE EL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL Y OTROS ÓRGANOS DE NATURALEZA
CONSTITUCIONAL**

- i) Introducción
- ii) Conflictos de atribución entre órganos
constitucionales
- iii) Breve apunte sobre los Conflictos de jurisdicción

CAPÍTULO CUARTO DE LOS CONFLICTOS ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y OTROS ÓRGANOS DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL

i) Introducción

Como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, la "colaboración entre los órganos constitucionales responde a la esencia misma de la democracia parlamentaria"⁵⁵⁷, es más, podemos incluso afirmar que " con respeto siempre a la integridad de funciones constitucionalmente reconocidas a las Cortes Generales y al Poder Judicial, la colaboración entre ambos poderes no es sólo posible, sino necesaria para que el Estado de Derecho sea no sólo expresión de una voluntad constitucional (artículo 1.1 de nuestra Ley de Leyes) sino manifestación de una sociedad constituida"⁵⁵⁸, es quizá por ello por lo que algunos de nuestros autores han manifestado, al referirse al sistema legislativamente establecido para los conflictos existentes entre el Poder Judicial, el Congreso de los Diputados o el Senado, así como con el Gobierno, regulado por la LO 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional,

⁵⁵⁷ Fernández-Carnicero González, Claro J.: " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " en El Poder Judicial, op. cit., pág. 1344

⁵⁵⁸ Fernández-Carnicero González, Claro J.: " Relaciones entre el Poder Judicial y las Cortes Generales " en El Poder Judicial, op. cit., pág. 1347

que un estudio en profundidad de dicha vía de conflicto " nos llevaría a pocos sitios, primero, por que es muy difícil en términos reales un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo que no termine siendo zanjado por el Poder Legislativo mediante una Ley. Pero ante todo, porque lo importante, a nuestro juicio no es tanto la posibilidad de conflictos que se dan entre ambos Poderes, como la posibilidad y los mecanismos de colaboración que existen en la legislación o en la interpretación como tales de aquellos procedimientos en que ambos Poderes tienen facultades paralelas o concurrentes"⁵⁵⁹

Previo al análisis de lo que constituye este apartado debemos dejar aclarada la diferenciación existente entre dos términos que han sido utilizados indistintamente durante un largo período: conflictos de atribución-conflictos de jurisdicción, provocando con ello una cierta confusión⁵⁶⁰. Con

⁵⁵⁹ Fraile Crivillés, M.: " Las Cortes Generales y el Poder Judicial" en II Jornadas de Derecho Parlamentario, 27, 28 y 29 de Marzo de 1985, op. cit., pág.102

⁵⁶⁰ Para llegar a considerar la existencia de uno de estos conflictos como tal se han de dar diversos requisitos;"

a) Capacidad para ser considerado como parte o legitimación activa y pasiva (requisito subjetivo)
b) Que exista materia de conflicto (requisito objetivo)
c) De forma auxiliar (conceptualmente), pero no menos imprescindible, debe hablarse también de otros requisitos formales como son haber agotado sin éxito el trámite previo del requerimiento de revocación al órgano presuntamente invasor, y que este requerimiento se hiciera dentro del plazo máximo de un mes desde que llegó a conocimiento del órgano actor la indebida asunción de atribuciones (requisito temporal). Para el

la entrada en vigor de la LOPJ 6/1985 de 1 de Julio, y la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 2/1987, de 18 de mayo la situación se ha aclarado bastante.

Los conflictos de atribución versan sobre las competencias atribuidas por la Constitución y sus leyes orgánicas de desarrollo. Para GÓMEZ MONTORO " se mantiene esta denominación para referirse a los que surgen en el seno de la Administración y sigue en vigor la regulación de la Ley de 1948, si bien habrá que entender que cuando el conflicto se produce entre dos Departamentos Ministeriales la resolución del mismo, aunque formalmente siga correspondiendo al Jefe del Estado, exigirá la intervención del Consejo de Ministros y el refrendo de la decisión del Rey por el Presidente del Gobierno."⁵⁶¹

planteamiento del conflicto deben precisarse en el escrito los preceptos y atribuciones que se consideran vulnerados y acompañar certificación de los antecedentes necesarios así como de haber cursado aquél requerimiento previo.

d) Por último, es menester que la *causa petendi* esté en reivindicar la titularidad de una competencia de que se haya despojado al actor por el órgano que se estima invasor (requisito causal o finalista)."

Así lo ha señalado García Roca, F.J. en " El conflicto entre órganos constitucionales" Temas clave de la Constitución Española, op. cit., pág.48

⁵⁶¹ Gómez Montoro A.J.: El conflicto entre órganos constitucionales op. cit., pág. 229

Por otro lado la materia de los conflictos de jurisdicción; suele ser aquella propia de las simples leyes de ordenación administrativa. GÓMEZ MONTORO define éstos como los conflictos que surgen entre la Administración de los Tribunales de distintas jurisdicciones o entre éstos, para a continuación clasificarlos dentro de cinco grandes grupos, en atención a la nueva normativa existente a la que nos referíamos con anterioridad⁵⁶²:

- 1) Entre la Administración y la Jurisdicción ordinaria
(artículos 38 LOPJ y 1 a 21 de LOCJ)
- 2) Entre la Administración y la Jurisdicción Militar
(art. 30 LOCJ)
- 3) Entre la Administración y la Jurisdicción Contable
(art. 31LOCJ)
- 4) Entre la Jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Militar
(arts. 39 LOPJ y 22 a 29 LOCJ)
- 5) Entre la Jurisdicción Contable y la Jurisdicción Militar
(arts.31LOCJ)

Una de las cuestiones que ha analizado la doctrina española hace referencia a la existencia de zonas de

⁵⁶² Gómez Montoro, A.J.:" El Conflicto entre órganos constitucionales, op. cit., pág. 228

intersección entre ambos conflictos, posibilidad inconcebible para GARCÍA ROCA.

i) Conflictos de atribución entre órganos constitucionales

El objeto de este apartado lo constituye fundamentalmente el estudio de lo dispuesto en la LO 2/1979, de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional⁵⁶³. En su Título IV y, en desarrollo de lo previsto en la Constitución por el art. 161, distingue entre distintos tipos de conflictos que podemos englobar en dos. Los primeros afectan a la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA o de estas últimas entre sí, y los segundos que son, los que presentan un especial interés a los efectos de análisis en el presente trabajo, contempla los que se originan entre diversos órganos de carácter constitucional; su regulación se encuentra en los art. 59 y 73 a 75 de la LOTC que vienen a configurar el conflicto entre los órganos constitucionales como un auténtico proceso jurisdiccional, en el que se decide sobre la titularidad de competencias.

⁵⁶³ " La novedad que suponía la introducción de los conflictos entre órganos constitucionales encontró una fuerte oposición por parte de algunos Grupos Parlamentarios que pidieron su supresión. Los grupos Socialista, Socialistas de Catalunya y Minoría Catalana se opondrán a esta competencia no tanto en sí misma cuanto por su introducción en la LOTC; el Grupo Comunista, pedirá sin más, su supresión" Véase la obra de Gómez Montoro: El Conflicto entre órganos constitucionales op.cit., pág. 238

La intervención general del Consejo General del Poder Judicial en conflictos constitucionales planteados ante el Tribunal Constitucional se concreta a los llamados *conflictos entre órganos constitucionales del Estado*." No tiene intervención en la otra especie de conflictos, los que pueden surgir entre el Estado y las Comunidades Autónomas a pesar de que éstos pueden afectar directamente a la unidad jurisdiccional y, en tal caso, no se puede descartar una *iniciativa del Consejo ante el Parlamento*"⁵⁶⁴.

Se establece en el art. 59.3 de la LOTC que el Tribunal Constitucional conocerá de los conflictos sobre competencias asignadas y que opondan: " Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí."⁵⁶⁵

⁵⁶⁴ " Reflexión sobre el Poder Judicial " en Poder Judicial, Marzo 1982, núm.2 pág. 26, Ponencias del día 11 de Diciembre de 1981 presentadas por FERNÁNDEZ VIAGAS.

⁵⁶⁵ Resulta sumamente interesante destacar el proceso del Tribunal de Cuentas: durante la primera fase del iter legislativo en el Congreso de los Diputados, figuraba también entre aquellos el Tribunal de Cuentas. La Ponencia de la Comisión del Senado acordó suprimir la referencia a este órgano: ya que los conflictos habrán de plantearse exclusivamente entre los órganos constitucionales que culminan los poderes del Estado. Sin embargo, la exclusión del órgano al que nos referimos dejaría de tener vigencia al aprobarse el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de marzo que dispone que: " Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Constitucional "

Va a ser preciso examinar el capítulo III, artículos 73 a 75, referente a los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, del mencionado Título IV, con especial atención, puesto que en él se contemplan aspectos sumamente interesantes desde diversas perspectivas, no sólo procedimentales sino también competenciales. Se dispone como se deben llevar a cabo las notificaciones de los órganos entre los que existen problemas de atribuciones, se detallan los plazos de actuación por parte de los diversos órganos, así como cuál debe ser el contenido de los escritos a través de los cuales se manifiesta la intromisión en el ámbito de actuación por otro órgano. Contempla también el capítulo III, lo relativo a los actos nulos originados como consecuencia de las situaciones provocadas por la actividad de los órganos constitucionales con indebidas toma de atribuciones.

El objeto del conflicto puede considerarse como la invasión o usurpación de las atribuciones conferidas a un determinado órgano. Se produce una sustracción de competencias que debe ir unido a una efectiva lesión: sólo tras esa efectiva pérdida de atribuciones es cuando podemos hablar realmente de un conflicto que deberá reivindicar su titular mediante la interposición del correspondiente recurso. Podemos afirmar pues que el conflicto entre órganos constitucionales tiene su origen en " la implantación de un

moderno Estado constitucional en el que la norma fundamental delimita los ámbitos competenciales propios de cada poder, determinando además los órganos concretos que deben ejercer esas competencias ...sirve además como mecanismo para controlar el poder."⁵⁶⁶

Conforme al artículo 73 LOTC, el conflicto consta de dos fases procedimentales; requerimiento previo y posterior tramitación del conflicto si la primera fase a la que nos referíamos no surtiera efecto. Algunos autores han puesto de manifiesto la originalidad de este sistema, sin embargo, no puede considerarse especialmente innovador, dado que la técnica del previo acuerdo entre las partes es práctica habitual en el Derecho Administrativo e Internacional. Como señala GARCÍA ROCA, el " único sentido posible de la fase previa al conflicto es buscar paz jurídica mediante el común acuerdo sobre la esfera de atribuciones controvertida."⁵⁶⁷

El fin al que responde la posibilidad de que el Consejo pueda llevar a cabo el planteamiento de un conflicto responde a una doble idea: que " el Consejo pueda salir al paso de la invasión del ámbito de los tribunales por el Ejecutivo o las

⁵⁶⁶ Gómez Montoro, A.J.: El Conflicto entre órganos constitucionales op. cit., pág.250

⁵⁶⁷ García Roca, F.J.: El Conflicto entre órganos constitucionales op. cit.,pág.105

Cámaras y, en sentido inverso, mediante un conflicto constitucional pueden las Cámaras contrarestrar un exceso de poder del Judicial, a fin de que la independencia no redunde en arbitrariedad, peligros que, siempre, planean sobre la acción de la justicia"⁵⁶⁸

Puede resultar interesante analizar las situaciones que hasta el momento se han planteado a este respecto; el Consejo General del Poder Judicial interpuso dos conflictos de atribuciones a las decisiones del Congreso de los Diputados adoptadas el 28 de marzo y, el 20 de junio y, una tomada en el Senado el 13 de junio de 1985.

Especial atención merece el escrito del CGPJ de 10 de abril de 1985, remitido al Congreso de los Diputados referente al artículo 119 del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial; se fundamentaba dicho escrito en el artículo 161.1.d) de la Constitución Española en relación al artículo 73.1⁵⁶⁹ de la LOTC, y en él, se solicitaba que se revocara la

⁵⁶⁸ Fernández Viagas, P.: " El Consejo General del Poder Judicial y los conflictos constitucionales " Ponencia presentada en las Jornadas de estudio sobre el CGPJ celebradas en Madrid, del 10 al 13 de Diciembre de 1981 op. cit., pág.276-277

⁵⁶⁹ El artículo 73.1 de la LOTC establece : En el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.3 de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes Orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión

aprobación del artículo 119 del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerar que la Constitución sólo habilita a las Cortes Generales para proponer ocho de los veinte miembros del Consejo, debiendo ser los doce restantes propuestos por jueces y magistrados; de igual modo se solicitaba que se revocara la disposición adicional 1.ª, número 2, inciso 1 del referido Proyecto, en el sentido de abstenerse de delegar en el Gobierno la potestad reglamentaria sobre el estatuto jurídico de la Carrera Judicial y, por el contrario, atribuírsela al CGPJ. La Mesa del Congreso de los Diputados adoptó el 30 de abril de 1985 acuerdo de contestación al escrito del Consejo, con el que se iniciaba el conflicto constitucional.

Esta era una de las soluciones que podía adoptar el Congreso; la doctrina lo denomina " recíproca afirmación de la competencia ".

de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de el que la revoque. En el mismo artículo, apartado 2 se dispone: Si el órgano al que se dirige la notificación afirmare que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectificare en el sentido que le hubiere sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional. A tal efecto, presentará escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará certificación de los antecedentes que reputa necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el número anterior de este artículo.

Otra posibilidad habría sido la rectificación de la decisión o allanamiento a la pretensión del Consejo General del Poder Judicial. Tal y como indica GARCÍA ROCA " la imposibilidad de esta hipótesis...fue una de las argumentaciones esgrimidas por la Mesa del Senado. En efecto, el Consejo requirió al Senado el día 20 de junio de 1985 y éste en su escrito de respuesta adujo que había enviado al Congreso el texto del proyecto de LOPJ con sus correspondientes enmiendas, el día 17 de julio, extremo este que hacía la solicitud del Consejo de imposible cumplimiento."⁵⁷⁰

Junto a estas dos posibilidades existen otras dos alternativas. Así, una tercera vía, contemplada en el artículo 73.2 de la LOTC habría supuesto el planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, por silencio negativo; dicho precepto señala que, si " dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella, no rectificare en el sentido que le hubiere sido solicitada, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará conflicto ante el Tribunal Constitucional "

⁵⁷⁰ García Roca, F.J.: El Conflicto entre órganos constitucionales op. cit., pág.106

Sobre una cuarta solución se ha manifestado GARCÍA ROCA así, según el citado autor," nada impide que tras el requerimiento previo se produzca una *satisfacción extraprocesal* de la pretensión, de forma que modificando el requerido de alguna manera la decisión sobre la atribución controvertida, aunque no se trate de una rectificación en el sentido solicitado... se alcance un acuerdo que haga el conflicto innecesario por desistimiento"⁵⁷¹. Como ejemplo de esto último es preciso hacer referencia a la modificación operada por la Comisión de Justicia del Senado sobre la Disposición Adicional 1ª de la LOPJ relativa a la potestad reglamentaria.

ii) Breve apunte sobre los conflictos de jurisdicción

Este tipo de conflictos⁵⁷² tienen un alcance distinto a los conflictos entre órganos constitucionales. Debido a la

⁵⁷¹ García Roca, F.J.: El conflicto... op. cit., pág. 107

⁵⁷²" Las competencias jurisdiccionales..., no pertenecen al Poder Judicial, entendido como unidad, sino a cada juez y Tribunal, y es precisamente para garantizar el libre ejercicio de esas competencias para lo que se establecen toda una serie de medidas tanto frente a los demás poderes públicos como frente a posibles intromisiones de otros órganos del mismo Poder Judicial. Con el reconocimiento de legitimación al CGPJ para defender estas competencias jurisdiccionales se conseguirá evitar las intromisiones de los demás poderes públicos, pero se estará dando carta de naturaleza a las del propio CGPJ, órgano que, no puede olvidarse, carece de toda competencia jurisdiccional." Opiniones de DE OTTO, REQUEJO PAGES, MARTÍN RETORTILLO, recogidas en El Conflicto entre órganos constitucionales Gómez Montoro, op. cit., pág.301-30

menor importancia de los mismos, podemos afirmar junto a GÓMEZ MONTORO que, se trata de un acierto el que no se haya atribuido al TC la resolución de éstos conflictos jurisdiccionales, al tiempo que se valora positivamente que se haya introducido la variante francesa del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, regulado mediante la Ley de Conflictos Jurisdiccionales de 18 de mayo de 1987.

La situación política actual ha venido a poner de manifiesto un conflicto que, en otro tiempo hubiera posiblemente pasado inadvertido a la ciudadanía en general y, que hoy constituye una de las noticias más ampliamente recogidas en todos los medios de comunicación⁵⁷³: así, el "

⁵⁷³ Recogemos algunos de los momentos más importantes del caso hasta la situación actual: Diario ABC, 12/10/95 " Garzón requiere al ministro de Defensa que le entregue los documentos que le niega el CESID", Diario ABC, 15/10/95, " Garzón recibirá hoy la negativa de Defensa a entregarle los documentos del CESID", El País, 16/10/95 " El Gobierno plantea un conflicto de jurisdicción con Garzón para no entregar los papeles del Cesid.", Diario ABC, 16/10/95 " El Gobierno se niega a entregar a Garzón documentos secretos del CESID y plantea conflicto de jurisdicción", El Mundo, 16/10/95 " El Gobierno retrasa la investigación del GAL con un conflicto de jurisdicción", El País, 16/10/95 " El Gobierno plantea un conflicto de jurisdicción con Garzón para no entregar los papeles del Cesid ", El Mundo 17/10/95 " El ministro de Defensa acusa al juez Garzón de atribuirse facultades que corresponden al Gobierno", El Mundo 17/10/95 " IU propone que el Gobierno entregue al Senado los documentos del CESID", El País, 17/10/95 " Los jueces censuran que el Gobierno se ampare en la ley de Secretos para negar datos a Garzón", Diario ABC, 17/10/95 " El Gobierno apela a la división de poderes para evitar que los papeles secretos del CESID lleguen a manos de Garzón", El País, 17/10/95 " Conflicto con Garzón", El Mundo, 18/10/95 " Garzón estudia si acusa al ministro Perterra de cometer delito por negarle los papeles del CESID" " Almunia arremeta contra las asociaciones de

conflicto de competencia "⁵⁷⁴ planteado como consecuencia de las competencias atribuidas al Consejo de Ministros y al juez

jueces y algunos miembros del CGPJ", Diario ABC, 19/10/95 " Pujol apoya a González frente a Garzón y dice que tampoco entregaría los papeles del CESID", El Mundo, 19/10/95 " El Gobierno estudiaba desde hace más de un mes presentar el conflicto contra Garzón", Diario ABC, 20/10/95 " El secreto y la razón de Estado" " El fiscal de Garzón le aconseja que, por el momento no actúe contra Suarez Pertierra"El Mundo 20/10/95 " El fiscal cree que Pertierra debe entregar a Garzón los documentos del CESID", Diario ABC, 3/11/95, " Garzón se arroga la facultad de inadmitir el conflicto de Defensa y sugiere que es un auténtico fraude de ley", El Mundo, 3/11/95 " Garzón no admite a trámite el conflicto que le planteó el Ministro de Defensa sobre el CESID" El País, 3/11/95 " Garzón rechaza el conflicto planteado por Defensa" Diario ABC, 4/11/95 " El Tribunal de Conflictos ignora la inadmisión acordada por Garzón y estudiará el día 14 el escrito de Defensa",Diario ABC, 14/11/95 " El fiscal dice a Moner que no pida los papeles del CESID mientras no se resuelva el conflicto" El País, 15/11/95, " La Sala de Conflictos reprende a Garzón por no admitir el recurso de Pertierra" El 16 de Diciembre de 1995 la prensa recoge la Sentencia del Tribunal de Conflictos relativo a los documentos del CESID. El problema sin embargo continúa, aún hoy discutiéndose.

⁵⁷⁴ Para el Juez Baltasar Garzón no existe tal, dado que cuando la ley de Conflictos de Jurisdicción trata la materia parte de un presupuesto básico como es la existencia de un problema que trata de dirimir, es decir la preexistencia real o aparente de un conflicto de jurisdicción, cuestión que no concurría para el citado miembro de la judicatura en el presente supuesto.

En esta misma línea se han manifestado " los más prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo que coinciden en dictaminar la ausencia del pretendido conflicto de jurisdicción entre el Gobierno y la Audiencia Nacional. Ante todo, porque la Administración no tiene abierta ninguna actuación o expediente sobre el caso en cuestión, cuya competencia pretende reclamar. Y además, porque el Gobierno no puede asumir la supuesta competencia dado que el Ministerio de Defensa no puede actuar como un tribunal en el caso penal que instruye el juez Garzón sobre los crímenes de los GAL del sumario Mombar.

Por si algo faltara, la ley de Conflictos, en su artículo 10, evidencia que quien plantea el conflicto debe consultar previamente a los interesados en el expediente." Véase El Mundo, 17/10/95

Baltasar Garzón⁵⁷⁵ en referencia a determinados papeles⁵⁷⁶ que el juez Garzón solicitaba al entonces Ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra y que éste se negaba a entregar pese a los requerimientos del juez, por encontrarse dichos documentos, en opinión del citado ex-ministro, así como del actual, bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, modificada por la Ley de 7 de Octubre de 1978⁵⁷⁷. El conflicto fue resuelto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, Sentencia de 14-Diciembre-1995, que, es la instancia competente para resolver el litigio entre la Administración y los Juzgados o Tribunales.⁵⁷⁸ Han

⁵⁷⁵ Corresponde al Consejo la defensa -en su caso mediante el planteamiento del conflicto o sostenimiento en el proceso de sus atribuciones ante la acción de otro órgano constitucional- de la independencia de los jueces en el plano político ante la ingerencia de otros órganos de poder. Frente al Consejo, puede el Parlamento promover conflicto, como expresión del control democrático del Poder Judicial.

" Reflexión sobre el Poder Judicial " en Poder Judicial, Marzo 1982, núm.2 pág. 26, Ponencias del día 11 de Diciembre de 1981 presentadas por FERNÁNDEZ VIAGAS. Igualmente recogido en la Ponencia presentada en las Jornadas de estudio antes citadas, " El Consejo General del Poder Judicial y los Conflictos Constitucionales "op. cit., pág. 285

⁵⁷⁶ Los documentos a los que se hace referencia son, entre otros, el Acta Fundacional de los GAL, así como una nota de despacho firmada por el Coronel Juan Alberro Perote el 28 de septiembre de 1983

⁵⁷⁷ Los preceptos que invoca El Ministerio de Defensa son el art. 4, 7, 8, 11 y 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

⁵⁷⁸ En opinión de García Roca la atribución a órganos distintos, y por procedimientos diferentes de la solución de los conflictos de jurisdicción y de los de atribución entre órganos constitucionales parece acertada. Unos y otros se diferencian

sido diversas las opiniones vertidas en torno a esta cuestión; aún hoy continúa la problemática.

claramente por su objeto y sus sujetos. En " El conflicto entre órganos constitucionales " op. cit., pág.59

La Sala fue constituida en noviembre de 1994 par todos los conflictos que surgieran a lo largo de 1995. La composición de dicho Tribunal de Conflictos de Jurisdicción viene recogida en el art. 38 de la LOPJ: " Los conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Superno, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes del Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.

El Presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate."

CONCLUSIONES

PRIMERA

El estudio del Consejo General del Poder Judicial constituye, para nosotros, no así en el derecho comparado, el análisis de un órgano novedoso. Los orígenes de esta institución se remontan a 1946, fecha en la que en Francia se crea Le Conseil Supérieur de la Magistrature con la intención de evitar los abusos de los que está siendo objeto la Magistratura por parte del Ejecutivo; ya de manera directa, ya sea a través del Ministerio de Justicia. Con esta misma intención iniciaría su andadura en España el Consejo General del Poder Judicial que, entró en funciones el 23 de Octubre de 1980.

El modelo establecido es, pese a padecer notorias deficiencias y limitaciones, desde el punto de vista teórico, el menos perjudicial a la hora de asegurar la independencia de los jueces en un Estado social y democrático de Derecho. Así lo demuestra el hecho de que en los países en los que no existe se crea y, en los que ya ha sido creado perdura.

La instauración de esta institución en nuestro sistema democrático vino de la mano del texto constitucional que, a

través del artículo 122.2 establecía la existencia de un órgano de gobierno del poder judicial. Pese a que la normativa existente a nivel constitucional no ha sido modificada, sin embargo, el sentido atribuido al Consejo General del Poder Judicial en el art. 122.3 CE, relativo a su composición, ha sido desvirtuado a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, norma que vino a sustituir a la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980 de 10 de Enero.

SEGUNDA

Sabemos que la primera influencia recibida por nuestros constituyentes procedía de Francia. Por otro lado, esa influencia francesa se completaba con la procedente de Italia que, ya en 1958 contaba con el Consiglio Superiore della Magistratura; algunos han pretendido ir más allá, y considerar como el verdadero precedente de nuestra actual institución el modelo italiano de 1907, postura ésta sin embargo, que no compartimos.

Los cambios normativos producidos con posterioridad, no sólo en nuestro ámbito, sino en toda Europa, consecuencia de la importancia de la materia y de los problemas que de esta se derivan, nos han hecho retroceder en el tiempo de una

manera notable: el único sistema de los tradicionales, que no tiene en cuenta la opinión de jueces y magistrados a la hora de designar a los miembros de su propio órgano de gobierno es el nuestro. En Italia, de los 33 miembros que forman dicho Consejo, 20 son elegidos por todos los magistrados ordinarios pertenecientes a las distintas categorías de la carrera; en Francia es la propia institución la que propone los nombramientos; en Portugal de los 17 miembros de que consta el Conselho siete son designados directamente por los jueces. Incluso en países como Grecia, en donde la composición es variable, la vía del sorteo entre los distintos miembros de la judicatura parece más justo que el actual sistema establecido en España. Es más, incluso en los países que han adoptado recientemente esta institución, ha imperado la lógica y, una parte proporcional, cuando menos, del total de los miembros es designada por la propia judicatura: En Bulgaria de los veinticinco miembros del denominado Alto Tribunal once son nombrados por autoridades judiciales. Eslovenia sirve también de ejemplo, dado que de los once miembros de su Consejo Judicial, seis son elegidos por los propios jueces.

TERCERA

La naturaleza del Consejo General del Poder Judicial es materia controvertida. La primera cuestión a resolver es si se trata o no de un órgano de carácter constitucional; en éste sentido, lo que pondría de manifiesto que el CGPJ constituye un órgano constitucional, "órgano de naturaleza y regulación constitucional" es que en él se dan todas las notas que los defensores de la teoría de los órganos constitucionales han utilizado para la caracterización de los mismos.

Consecuencia de la determinación constitucional inmediata de su existencia, del sistema de nombramiento de sus miembros y del núcleo de sus competencias, la atribución implícita al mismo de una función esencial en el sistema político cual es la del Gobierno del Poder Judicial, su carácter de órgano supremo (*superiorem non recognoscens*) e independiente de los demás órganos constitucionales, su carácter de órgano necesario y probablemente indefectible para garantizar la posición del Poder Judicial en el sistema político, nos llevan a la conclusión de que se trata de un órgano de naturaleza constitucional. Pero, por si lo anterior no fuera suficiente, podemos afirmar que el Consejo se trata de un órgano constitucional, en virtud de las funciones que se le encomiendan, como la de intervenir en la composición de otros órganos, así, toma parte es la propuesta para el

nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y, participa también en el nombramiento del Fiscal General del Estado, si bien simplemente será oído, tal y como dispone el artículo 124.4 de la Constitución. Incluso podemos sustentar nuestras afirmaciones en la normativa existente: a través del artículo 59.3 de la LOTC, el CGPJ ha sido calificado por el legislador como órgano constitucional, junto al Gobierno, Congreso de los Diputados y Senado.

Una vez que consideramos al Consejo como un órgano de naturaleza constitucional se plantea la cuestión relativa al fin de su creación. El Consejo, no cabe duda de que se crea como un órgano de garantía, al servicio de los jueces y Tribunales para que éstos realicen su función con la máxima independencia. Se configura como el órgano garante de dicha independencia y de la imparcialidad de aquéllos, y clave esencial - dentro de sus posibilidades- para esa eficacia y adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de su protección. Sin embargo, si vamos más allá, comprendemos que el rango de órgano constitucional atribuido al Consejo le da valor de expresión pública -sin arrogarse su representación- y solemne de un Poder Judicial separado e independiente de los otros dos Poderes, que va a permitirle ejercer una función de enlace con los demás poderes del

Estado que tienen la legitimación democrática en sentido tradicional.

CUARTA

La implantación en nuestro sistema político de un nuevo órgano, el Consejo General del Poder Judicial, y, su tratamiento específico, tuvo en general buena acogida en los medios doctrinales, que veían en él un cambio de cualidad para el futuro de la independencia de la magistratura. Las valoraciones posteriores en relación a cada Consejo han ido variando dependiendo de la actitud y facultades otorgadas a los mismos. Es evidente también, que, dicha valoración depende desde que perspectiva se observe el papel atribuido al Consejo; es inevitable que las encuestas sobre la justicia dé resultados negativos ya que la mitad de las personas que tienen un pleito lo pierden o, en una gran parte, son condenadas por una sentencia penal, y naturalmente nadie acepta su propia culpa. Otros de los que tienen relación con la justicia se creen con motivos suficientes para quejarse por la exasperante lentitud de ésta. El resto también suele tener una opinión negativa de la justicia, en gran parte porque lee los periódicos, y en parte por lo que cuentan. Sin duda la ciudadanía en general no valora todo lo que debería

el papel que desempeña el Consejo. Por ello considero más interesante la opinión de la propia judicatura.

Hoy la consideración que la mayor parte de la judicatura tiene respecto al órgano supremo de los mismos es bastante negativa; esa consideración sobre el Consejo se debe fundamentalmente a que los jueces y magistrados no se sienten representados ni amparados por el Consejo, al que se mira con recelo y desconfianza; a ello sin duda ha contribuido notablemente el que la designación de los miembros del Consejo se realice de manera íntegra y exclusiva por el Parlamento.

QUINTA

La pretendida territorialización del Consejo General del Poder Judicial y con ello la creación de Consejos Territoriales, no tiene cabida en nuestro sistema democrático: el Consejo General del Poder Judicial está inserto dentro de la estructura de los Poderes del Estado, regido por el principio de la unidad, por lo que no es susceptible de fragmentación en las Comunidades Autónomas. Si se llevara a cabo, se multiplicaría por diecisiete el viciado esquema de Ley Orgánica del Poder Judicial, implicaría llevar la politización del gobierno judicial, no ya a su órgano

central, sino a cada una de las regiones dando lugar a una visión *atomizada* de la Justicia, sujeta a los intereses políticos locales de todo signo a la par que implicaría no sólo suprimir el verdadero autogobierno de la Justicia, que es el desempeñado por los órganos de gobierno interno, sino politizar ese mismo ámbito.

SEXTA

La regulación normativa existente en cuanto a la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial contenida en la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, elaborada a partir de la enmienda Bandrés, que modificó el sistema establecido en la LOCGPJ 1/1980 de 10 de enero, no parece estar muy acorde con la idea de los redactores de nuestra vigente Constitución. Si bien, tal y como puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/86, de 29 de julio, es posible considerar el sistema vigente como acorde con la Constitución, dada la remisión a la Ley Orgánica establecida constitucionalmente, los riesgos que de la designación parlamentaria se derivan son evidentes.

Las medidas para evitar las inseguridades producidas por la nueva vía de nombramiento de los Vocales del Consejo, no se encuentran en el estudio del derecho comparado: ni

todos los problemas surgidos en los distintos países son iguales, ni la mentalidades son asimilables. De igual manera, no parece oportuno entrar a discutir si el sistema electoral de los Vocales del Consejo debería ser una decisión constitucionalizada formalmente o, cuando menos, implícitamente determinable de forma inequívoca; las discusiones sobre esta materia han sido tan abundantes que no aportaríamos nada nuevo.

La principal dificultad radica en que se debe tomar conciencia de que no se puede acometer la reforma del método de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial porque falta suficiente consenso político, falta suficiente consenso social y falta, sobre todo, el suficiente consenso profesional. En esta materia no es que no están de acuerdo los grupos parlamentarios ni tampoco están de acuerdo los jueces y magistrados sobre cuál es el sistema idóneo para proveer esta designación, la forma de cobertura de estas vacantes, ni están de acuerdo los profesionales del Derecho, ni está de acuerdo la Academia, ni están de acuerdo los profesores universitarios. La solución, quizá se encuentre en un genuino acuerdo entre los partidos políticos tendentes a proponer sólo personas de altas cualidades personales y profesionales, así como a evitar al máximo la instrumentalización de esas mismas instituciones. Creo que en

la vida constitucional hay problemas cuya solución no pasa por la aprobación de normas legales, sino por el mejoramiento de la cultura política y el establecimiento de convenciones no escritas. El problema surge si, manifestada esa intención de cambio en nuestra cultura constitucional ésta no se lleva a cabo: en ese caso, se hace preciso, cuando menos, evitar que se produzcan alteraciones interpretativas de nuestro texto constitucional, es decir " mutaciones constitucionales" tal y como ocasionara la LOPJ 6/85. En ese caso, se hace inevitable devolver a la magistratura la facultad de designar, al menos, lo que la Constitución implícitamente le reconoce en el artículo 122.3, es decir, doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial.

SÉPTIMA

Los informes desarrollados por el Consejo General del Poder Judicial únicamente pueden tener por objeto los anteproyectos, sin que por el contrario se contemple dicha posibilidad para los supuestos de los proyectos de ley. Puesto que como sabemos, es jurídicamente imposible modificar un *proyecto* en sentido estricto, la solución por la que se opta es la de dar al CGPJ la facultad de intervenir mediante el análisis de los anteproyectos y la posterior presentación de los informes a los que nos venimos refiriendo. El peligro

de que el artículo 108 de la LOPJ, reformado por la LO 16/94 de 8 de noviembre, se considere como expresión de un mero compromiso político del legislador en el sentido de que "tendrá en cuenta el sentido del parecer del CGPJ", no es aceptable; los informes deberán ser tenidos en cuenta, entendiendo esta expresión en un sentido literal, de tal forma que la actuación del CGPJ con la realización de los informes no puede considerarse como un mero y simple trámite. Es evidente, por otro lado, que el valor real de sus informes dependerá básicamente del crédito que el Consejo merezca: por ello, parece esencial que la institución a la que nos hemos venido refiriendo recupere el prestigio que ha ido perdiendo.

Creo que es acertado considerar los informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial como una vía más de relación entre los distintos órganos del Estado. Y ello partiendo de un sentido eminentemente práctico: ya que no debemos olvidar que si los anteproyectos se convierten en leyes con posterioridad, los encargados de aplicar las mismas, serán los juzgados y Tribunales. Es por esto por lo que el Consejo no debe limitarse a informar sobre los puntos concretos que le hayan solicitado, de modo que éstos deben ser tomados como una simple indicación que no vincula al autor del informe. Parece lógico interpretar que el alcance del informe puede extenderse a aquellos preceptos que puedan

incidir en los derechos fundamentales de los ciudadanos y a aquellos otros en los cuales el Consejo considere necesario proponer mejoras de carácter técnico. Esta ha sido la actitud predominante de la institución, consiguiendo con ello que el Consejo haya adquirido una importancia política mayor de la que se le venía otorgando.

OCTAVA

Con respecto a la potestad reglamentaria del Consejo debemos en primer lugar poner de manifiesto la escasa atención que la doctrina ha otorgado a su estudio a consecuencia de lo cual se han producido situaciones de verdadera inseguridad jurídica, nada deseables en el seno de nuestras instituciones. La razón señalada de este abandono entre otros motivos se encuentra en la necesidad de tener que dilucidar, con carácter prioritario y urgente, otros aspectos de mayor relieve dogmático e importancia práctica.

Con la entrada en vigor de la LOPJ 6/1985, de 1 de Julio, que derogó a la LOGPJ 1/1980, de 10 de Enero, se daba, en cierta medida, respuesta a las dudas suscitadas en relación a si la potestad reglamentaria derivada de la actuación del CGPJ alcanzaba al ámbito externo o por contra se limitaba a un ámbito de carácter *ad intra*; en el art. 110

de la hoy parcialmente modificada LOPJ 6/1985, se establece que el CGPJ " podrá dictar reglamentos sobre su personal, organización y funcionamiento en el marco de la legislación sobre la función pública." En consecuencia, todo cuanto define derechos y deberes de los jueces queda bajo reserva de ley orgánica, estando reservado el ámbito reglamentario para exigencias de tipo práctico.

Si bien el *status* de jueces y magistrados, es decir, el conjunto de los derechos y deberes de los que son titulares como tales, ha de venir determinado por ley y más precisamente por ley orgánica (art.122.1 CE), ello no supone necesariamente que no quepa en términos absolutos ningún tipo de regulación infralegal que afecte a ese *status*. Exigencias de carácter práctico pueden imponer que regulaciones de carácter secundario, auxiliar, puedan ser dispuestas por vía reglamentaria, pero en el bien entendido sentido de que tal tipo de disposiciones no pueden incidir en el conjunto de derechos y deberes que configuran el *status* de los jueces y sí sólo regular, como se ha dicho, condiciones accesorias para su ejercicio. El problema es que no es fácil entender lo que puede significar relaciones de carácter "accesorio o auxiliar" términos a los que alude la sentencia del TC 108/86, de 29 de julio.

Parece evidente que se abre un campo, aunque claro está reducido, para el ejercicio de la potestad reglamentaria *ad extra*, así el CGPJ tiene competencia para dictarlos en tanto que protegen la independencia judicial. Serán competentes para dictarlos, tanto el Gobierno como el CGPJ y, siempre que no innoven los derechos y deberes, será válido el reglamento que primero se dicte, proceda de uno u otro de los órganos mencionados.

NOVENA

A la Memoria que el Consejo General del Poder Judicial eleva anualmente a las Cortes hace referencia el art.109.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial; se caracteriza por ser uno de los pilares que va a convertir al CGPJ en uno de los órganos más polémicos recogidos en la Constitución.

Podemos considerar a las Memorias como las actas de presencia en la vida pública de un órgano constitucional, absolutamente imprescindible para la independencia y eficacia de la justicia. Sin embargo, ésto no responde a la cuestión clave referente al carácter que debemos otorgar a las Memorias. Aunque no consideramos que la finalidad de la Memoria sea convertirse en vía de control parlamentario sobre

el Consejo, es una de las pocas únicas vías existentes para canalizar la fiscalización y llevar a cabo dicho control. Concebidas en un primer momento como vías de solicitud de información, también pueden y debe ser concebidas como una exposición de la actuación del Consejo. Las Cámaras van a poder pronunciarse sobre la actuación del Consejo, lo cual, conlleva una cierta actividad de control por parte de las mismas. Se establece también la posibilidad de que en el momento de la presentación de la Memoria ésta se debata, ya sea mediante la formulación de preguntas por parte de los miembros del Parlamento o bien a través de solicitudes de los parlamentarios de aclaraciones referentes a los datos contenidos en la Memoria. Puede incluso que se rechace la aprobación de la Memoria, en cuyo caso se puede hablar de un mecanismo democrático, ciertamente muy tímido, de fiscalización política.

DÉCIMA

En referencia a otros instrumentos en manos del Parlamento para desarrollar gestiones de control, hemos de citar las Comisiones de Investigación. La participación de muchos de estos órganos parlamentarios en complejos fenómenos de enjuiciamiento no favorecen a la institución que representa la soberanía nacional, cuya capacidad

investigadora se muestra invariablemente inferior a la de la prensa y a la de los órganos judiciales, yendo a remolque de ambos, y que en el desarrollo de tales fenómenos parece relegada a la secundaria y desairada función de ser un puro escenario físico donde acaecen hechos que alimentan la actividad de los agentes reales de control social y jurídico.

UNDÉCIMA

La materia presupuestaria ha sido incluida en este apartado por considerar que, sin independencia en un plano económico, se presenta como súmamente difícil o complicada una verdadera independencia judicial. Esto hay que analizarlo teniendo en cuenta que órganos considerados fundamentales en el Estado social y democrático de Derecho, junto al CGPJ, como son el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, tienen la facultad de regular sus propios presupuestos, pasando directamente a integrarse en los Presupuestos Generales del Estado. El Consejo General del Poder Judicial contaba hasta hoy con una cierta autonomía, pero también es cierto que ésta era cualitativa y cuantitativamente inferior a la de otros órganos. Es por ello por lo que, se reclamaba para el Consejo la facultad de elaborar un Proyecto de Presupuesto de características afines a las concedidas al Tribunal Constitucional, postura ésta que ha sido finalmente

recogida en la reciente modificación operada en la LOPJ 6/1985. En esta línea ha de subrayarse la importancia de los artículos 107.12 de la LOPJ y a la reforma introducida a través de la LO 16/1994 de 8 de noviembre, que en su artículo undécimo atribuye al Pleno la competencia para elaborar el presupuesto del Consejo y que se integrará en los Presupuestos Generales del Estado, en sección independiente.

BIBLIOGRAFÍA

En la presente bibliografía se enumeran las obras más directamente relacionadas con la institución del Consejo General del Poder Judicial prescindiendo, por razones de unidad temática, de los manuales de Teoría del Estado y Derecho Constitucional salvo los que abordan, con mayor detenimiento, el objeto de estudio del presente trabajo.

La sistemática seguida en la recopilación bibliográfica articula los trabajos existentes sobre el Consejo General del Poder Judicial del siguiente modo:

I. MANUALES Y OBRAS GENERALES

II. MONOGRAFÍAS

III. ARTÍCULOS DE REVISTAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

IV. OTRA DOCUMENTACIÓN

V. ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

SECCIÓN I MANUALES Y OBRAS GENERALES

Alonso de Antonio, A.L y J.A: Derecho Constitucional Español, Editorial Universitas S.A., Madrid, 1996

Álvarez Conde, E.: Curso de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 1992-3 (Tomos I y II)

Álvarez Vélez M^aI. & Alcón Justas, M^a F.: Las Constituciones de los quince Estados de la Unión Europea, Dykinson, 1996

Alzaga Villaamil, O.: La Constitución Española de 1978 (Comentario Sistemático) Ed. del Foro, Madrid, 1978

Alzaga Villaamil, O: (dir) Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978 Edersa, Madrid, 1983-1989 (12 vols.)

Canga Rodríguez-Varcárce, L.: Derecho Constitucional Español, Centro de Estudios Procesales, Madrid, 1993

Caretti, P. y De Siervo, U.: Instituzioni di Diritto Pubblico, secunda edizione, Trivittico Giuridico Sezione Manuali, G.Giappichelli Editore, Torino, 1994

Cavero, I. & Zamora Rodríguez, T.: Los sistemas políticos, ed. Universitas S.A., Madrid, 1996

Cazorla Prieto, L.M., y Arnaldo Alcubilla, E.: Temas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1988

Duverger M.: Instituciones políticas y Derecho Constitucional. Colección Demos, Ed. Ariel, Barcelona, 1970.

Esteban, J. De y López Guerra, L.: El Régimen Constitucional Español. Labor Universitaria, Barcelona, 1983, Tomos I y II.

Esteban, J. De y González-Trevijano Sánchez P. J.: Curso de Derecho Constitucional Español. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Madrid, tomos I, II y III, 1992-1994.

Fernández Segado y García Belaunde: Los sistemas constitucionales iberoamericanos, Dykinson, Madrid 1992

Fernández Segado, F.: El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992

García de Enterría, E. & Predieri, A.: La Constitución Española de 1978, estudio sistemático, 2ª Edic Cívitas, Madrid, 1981.

Garrido Falla, F.: Comentarios a la Constitución Civitas, Madrid, 1985, 2ª Edición

Gómez Orfanel, G.: Las Constituciones en los Estados de la Unión Europea, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996

González Casanova, J.A.: Teoría del Estado y Derecho Constitucional, 2ª ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1983

Hauriou, A.: Derecho Constitucional e instituciones políticas, Ariel, Barcelona, 1980

Kelsen, Hans: Teoría General del Estado, 15ª ed. Editora Nacional, Madrid, 1979

Loewenstein, K.: Teoría de la Constitución, ed. Ariel, Barcelona, 1976

López Guerra, L. & Espín, E. & García Morillo, J. & Pérez Tremps, P. & Satrustegui, M.: Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, 2ª ed. Valencia, 1994 (2 vols.)

Lorca Navarrete, A.Mª.: Introducción al Derecho Procesal. Organización Judicial Española. España y principios rectores del Proceso Penal Español, 2ª ed. Ed. Dykinson, Madrid, 1995

Lucas Verdu, Pablo : Curso de Derecho Político. Tomo II, Tecnos, Madrid 1986, 2ª Ed.

Mellado Prado, P. y Sánchez González, S.: Sistemas Políticos Actuales, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995

Merino Merchán, J.F.: Instituciones de Derecho Constitucional Español, Ramón Carande, Madrid, 1994

Oliva, de la A., y Fernández, M. A.: Derecho Procesal Civil Tomos I y II, Ramón Areces, Madrid, 3ª Ed., 1992

Otto, I.de: Derecho Constitucional, sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1987

Peces-Barba, Gregorio: La Constitución Española de 1978,; un estudio de derecho y política 2ª ed. Colección el derecho y el Estado, ed. Fernando Torres S.A., Valencia 1985.

Pereira Menaut, A.C (dir): Temas de Derecho Constitucional Español.Una visión problemática. Follas Novas, Santiago de Compostela, 1996

Pérez Royo, J.: Curso de Derecho Constitucional, 2ª ed. Marcial Pons, Madrid, 1995

Pizzorusso, A.: Lecciones de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984

Rodríguez-Zapata, J.: Teoría y práctica del Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 1996

Román, P.(coord.): Sistema político español, McGraw-Hill, Madrid, 1995

Rubio Llorente, F.: La forma del poder (Estudios sobre la Constitución) Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993

Sánchez Agesta, L.: El sistema político de la Constitución española de 1978, 7ª ed. Edersa, Madrid, 1993

Sánchez González, S.: Sistemas Políticos Actuales, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995

Sánchez Goyanes, E.: Constitución española comentada, 20ª ed. Paraninfo, Madrid, 1994

Torres del Moral, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, 3ª ed.Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1992 (2 vols.)

Vergottini, G.: Derecho Constitucional Comparado, Traducción de Pablo Lucas Verdú. Espasa Calpe, Madrid, 1983

SECCIÓN II MONOGRAFÍAS

Agúndez, Fernández, A.: Historia, estructura y actividad del Poder Judicial en España. Historia de los jueces de España, Editora Nacional, Madrid, 1974

Álvarez Conde, E., (coord): Diez años de régimen constitucional, Dº. Dcho. Constitucional, Univ. Valencia, Tecnos, Madrid, 1989

Andrés Ibañez, P. y Movilla Alvarez: El Poder Judicial, Temas Clave de la Constitución Española, ed. Tecnos, Madrid, 1986

Aparicico Pérez, M.A.: El status del Poder Judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), Barcelona, Univer. Barcelona, 1995

Bachoff, Otto: Jueces y Constitución, Cuadernos Cívitas, Madrid, 1985

Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M.: Poder Judicial y Constitución, Ed. Bosch, Barcelona, 1987

Cabedo Nebot, R.: Jurisdicción, competencia y organización del Poder Judicial; comentarios y jurisprudencia coord. (Cabedo), Edersa, 1996

Cazorla Prieto, L. M.: Las Cortes Generales,: ¿Parlamento contemporáneo?, Civitas, Madrid, 1985.

Clavero B.: Los derechos y los Jueces, Cuadernos Civitas, Madrid 1988

Consiglio Superiore Della Magistratura: L'organizzazione della giustizia in Italia, Roma, Agosto, 1995

Daga Luigi: Il Consiglio Superiore della Magistratura, ed. Eugenio Jovene, Napoli, 1973

Díez-Picazo, L.M.: Régimen Constitucional del Poder Judicial, Cívitas, Madrid, 1991

Dromi, R. y Nemem, E.: " La Constitución Reformada, comentada, interpretada y concordada", ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, Rep. Argentina, 1994

Escusol Barra, E.: Estudio sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial: la responsabilidad en la función judicial de jueces, Tribunales y Estado; posición del Ministerio Fiscal, Colex, Madrid, 1989

García Roca, F. J.: El Conflicto entre órganos constitucionales. Tecnos (Temas claves de la Constitución Española), Madrid, 1987.

Gargarella, R.: La justicia frente al autogobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, ed. Ariel, Barcelona, 1996

Gómez Montoro, Á. J.: El Conflicto entre órganos constitucionales, Centro de estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

González Granda, P.: Independencia del juez y control de su actividad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993

Hernández, Valeriano: " Independencia del juez y desorganización judicial", ed. Monografías Cívitas, Madrid, 1991

Huertas Contreras, M.: "El Poder Judicial en la Constitución Española", ed. Univ. Granada, Granada, 1995

Jimenez de Parga, M.: " La ilusión política. ¿ Hay que reinventar la democracia en España?", Alianza Editorial, Madrid, 1993

Lavilla Alsina, L.: Poder Judicial y Constitución, Ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1978

López Aguilar, J.F.: Justicia y Estado Autonómico, Orden competencial y Administración de Justicia en el Estado compuesto de la Constitución Española de 1978, ed. Cívitas, Monografía, Madrid, 1994

López Aguilar, J.F.: La justicia y sus problemas en la Constitución Tecnos, (Temas Claves de la Constitución Española) Madrid, 1996

López Sotelo, J.L.: Sistemas jurídicos y formación de jueces y abogados en PPU (Promociones y publicaciones Universitarias), Barcelona, 1995

Lorca Siero, A.; Sobre el origen constitucional del Poder Judicial en España, ed. Jañez, León, 1991

Medina Rubio, R.: La función constitucional de las Comisiones Parlamentarias de investigación, Universidad de Alicante, Cuadernos Civitas, Madrid, 1994

Montero Aroca, J.: Independencia y responsabilidad del juez, Civitas, Madrid, 1990

Montero Aroca, J.: Responsabilidad del juez y del Estado por la actuación del poder judicial, ed. Temas clave de la Constitución Española, Tecnos, Madrid, 1988

Montero Gibert, J.R.: El Control Parlamentario, en Temas clave de la Constitución española, Tecnos, Madrid, 1994.

Montesquieu: Del espíritu de las leyes, ed. Tecnos, Madrid, 1980



Movilla Alvarez, C. y Andrés Ibáñez, P.: El Poder Judicial en Temas Clave de la Constitución Española, Tecnos, Madrid, 1986

Ossorio, A.: La Justicia, Vol II, Bases para la reorganización judicial, Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa-América, copia, 1961

Otto, I. de: Estudios sobre el poder judicial Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1989

Pérez Tremps, P.: Tribunal Constitucional y Poder Judicial, CEC, Madrid, 1985

Perrot, R.: Institutions judiciaires, Montchrestien, Paris, 1994

Pizzorusso, A.: "La Corte costituzionale e il principio d'indipendenza del giudice" en Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, I, Cedam, Padua, 1985

Pizzorusso, A.: L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, ed. Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1990

Puyol Montero, F.: Dictámenes y criterios gubernativos del Consejo General del Poder Judicial (Primera y Segunda época), ed. CGPJ, Madrid, 1991

Requejo Ibáñez, J.L.: El Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial en los Papeles de la Fundación (Temas monográficos) para el Análisis y Estudios Sociales, Madrid, 1996

Requejo Pagés, J.L.: Jurisdicción e Independencia judicial Madrid, CEC, 1989

Rodriguez Aguilera, C.: El Consejo General del Poder Judicial, ed. Boch, Barcelona, 1980

Rodríguez-Zapata, J.: El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado Social y Democrático de Derecho, CGPJ, Premio Poder Judicial, 1990

Ruiz, G.: Federealismo Judicial, Monografías, ed. Cívitas, Madrid, 1994

Santaolalla López, F.: Derecho Parlamentario Español, Espasa Calpe, Madrid 1990

Santaolalla, F.: El Parlamento en la encrucijada Eudema, Madrid, 1989

Santosuosso, F.: Il Consiglio superiore della Magistratura: principi e porcedenti llege istitutiva 24 marzo 1958, ed. Giuffrè, Milano, 1958

Silvestri, G.: "Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella Costituzione italiana" en Scritti in onori di Massimo Severo Giannini, III, Giuffrè, Milan, 1988

Simon, D.: La indepencencia del Juez, editorial Ariel, Barcelona, 1985

Terol Becerra, M. J.: El Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990

Tolivar Alas, L.: Derecho Administrativo y Poder Judicial Madrid, Tecnos, 1996

Trujillo Rincón, M.A.: Los Conflictos entre órganos constitucionales del Estado, Congreso de los Diputados, Madrid, 1995 (Monografía)

Villacota Mancebo, L.: Hacia el equilibrio de poderes. Comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1989

Virgala Foruria, E. : " Las Comisiones y Ponencias (con especial referencia al Parlamento Vasco) en el Colectivo Parlamento y Derecho " coordinado por LARAUDOGOITIA Y DA SILVA OCHOA, Parlamento Vasco , Vitoria, 1991

Xiol Ríos, J.A. (AAVV): El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho, Premio Poder Judicial. CGPJ. Madrid, 1990

SECCIÓN III ARTÍCULOS DE REVISTAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Agúndez Fernández, A.: " Procedimiento electoral para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial", en Jornadas de Estudio sobre el CGPJ, CGPJ y Editora Nacional, Madrid, 1983

Alba Navarro, M.: " Las facultades de iniciativa, propuesta e informe en materia legislativa del Consejo General del Poder Judicial", en Poder Judicial, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. I, Madrid, 1983

Albacar López, J.L.: " Naturaleza jurídica del Consejo General del Poder Judicial" en Jornadas de estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ y Editora Nacional, Madrid, 1983

Albacar López, J. L.: " Naturaleza jurídica del Consejo General del Poder Judicial" en La Ley, nº 325, de 5 de Enero de 1982

Albacar López, J.L.: " La organización judicial y el sistema de selección de jueces en la nueva Constitución española" en L'Ordinamento Giudiziario, Documentazione Comparativa, Vol. II, Rimini, 1983

Alfonso, O.: " El Consejo Superior de la Magistratura en Portugal" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 22, Febr. 1994

Álvarez Conde, E.: " El ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial y las CC AA" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº.16, Sep.-Dic. 1993, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

Álvarez Conde,E.: " Algunas consideraciones sobre la posición constitucional del Poder Judicial", en la obra colectiva El Poder Judicial, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, vol.I, 1983

Amoros Dorda : " Art. 76 de la CE: Comisiones de investigación " en Comentarios a las leyes políticas, dirigido por Oscar Alzaga, Edersa, Madrid, 1989, tomo VI

Andres Ibáñez, P.:" Conversación con Alessandro Pizzorusso" en Poder Judicial, núm. 9, Dic. 1983.

Andrés Ibáñez, P.: " CGPJ: silencio y disciplina" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 1 Abril 1987

Andres Ibáñez, P.: " Consejo General del Poder Judicial, un desastre anunciado ", en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 21, Enero 1994.

Andres Ibáñez, P.: " Sobre asociacionismo e independencia judicial" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 25, Marzo 1996

Andrés Ibáñez, P.: " En la renovación del CGPJ" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm.26, Julio 1996

Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 4, ed. Asamblea Regional de Murcia, Universidad de Murcia, en "

Tema para el Debate; el Consejo General del Poder Judicial", Murcia, 1992

Aparicio Pérez, M.A.: " El control de los nombramientos de los Consejeros del Poder Judicial" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 12, Enero 1991

Aparicio Pérez, M.A.: " El Poder Judicial " en Revista de Derecho Político núm. 37 - La reforma Constitucional, ed. Uned, Madrid, 1992,

Aragón Reyes, M.: " El control parlamentario como control político", Revista de Derecho Político núm. 23, 1987

Aragón Reyes, M.: " La interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del Control Constitucional" REDC, núm. 17, 1986

Arévalo Gutiérrez, A.: " Comisiones de investigación y de encuesta " en la obra colectiva Las Comisiones Parlamentarias, coord. Silva Ochoa, Vitoria,-Gasteiz, 1994, Parlamento Vasco.

Auger, Liñan C.:" Poder Judicial y Constitución", en Poder Judicial, núm. 13, 1985-1986

Auger Liñan, C.: Organización judicial y Estatuto del Juez, en Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa, Centro de Estudios Judiciales, Colección Cursos, Vol. V, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, Madrid, 1990

Auger Liñán, C.: " Sobre el poder Judicial en el constitucionalismo español" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 26, julio 1996

Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M.: " Relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo", comunicación a la décima ponencia presentada en Terceras Jornadas de Derecho Judicial, Tomo I, Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1987

Bandrés Sánchez-Cruzat,J.M.:" Poder Judicial en Chile" en Jueces para la Democracia, Información y Debate núm. 1 Abril de 1987

Bartole, S.: "Consiglio Superiore della Magistratura; due modelli a confronto" en Quaderni Costituzionali, Università degli studi, Padova,1989

Bassols Coma, Martín: " Los principios del Estado de Derecho y su aplicación a la Administración en la Constitución "en Revista de la Administración Pública, núm. 87, sept.-diciembre, 1978, págs. 113 y ss.

Belloch, Ojeda Avilés: " Jueces y Derecho de huelga" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 16-17, feb-marzo de 1992

Bessone-Carbone : " Consiglio superiore della magistratura", voce in Digesto delle Discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989

Bravo Fernández de Araoz, P.: " La titularidad de la potestad reglamentaria" en Rev. Poder Judicial, núm. 1 CGPJ, Madrid, 1986

Bonifacio-Giacobbe: " La magistratura", in Commentario della Costituzione (art. 104-107), a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1986

Borrego López, J.: " La Administración del Poder Judicial" en Poder Judicial, segunda época, ed. CGPJ, núm. 39, Sept. 1995

Burón-Barba, A.: " El Consejo General del Poder Judicial función jurisdiccional" en Jornadas de Estudio sobre el Poder Judicial, CGPJ y Editora Nacional, Madrid, 1983

Bustillo Bolado, R.O.: " El autogobierno del poder judicial en Europa" en Poder Judicial, núm. 37, 2ª Época, CGPJ, Madrid, Marzo 1995

Cobo Saenz, F.J.: " La incidencia del sistema de selección de jueces y magistrados, sobre la independencia del Poder Judicial, concebida como elemento legitimador de la actividad judicial" comunicación a la decimosexta ponencia, en las Terceras Jornadas de Derecho Judicial, Tomo II, Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1987

Canales Aliende, J.M.: " La administración del Consejo General del Poder Judicial" Actualidad Administrativa núm. 8, Editora General de Derecho, semana 16 al 22 de Febrero de 1987

Canales Aliende, J. M.: " La administración de Justicia: hacia una visión gerencial del servicio público de la Justicia" en Revista de Estudios Políticos, núm. 73, C.E.C., Madrid, 1991

Carretero Pérez, A.: " Precisiones sobre la facultad de iniciativa legislativa del Consejo General del Poder Judicial" en Revista de Administración Pública núm. 100-102.Vol. I, Enero-Diciembre 1983, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983.

Carretero Pérez, A.: " Organización de Juzgados y Tribunales " en Documentación Jurídica, núm. 45-46, enero -junio 1985

Cascajo Castro, J.L.: " La organización del Poder Judicial: Poder Judicial y Comunidades Autónomas " en Documentación Jurídica, Tomo XII, Enero-Junio 1985, que recoge las Jornadas celebradas en el Centro de Estudios Constitucionales del 17 al 19 de abril de 1985 relativas al Poder Judicial.

Castorina, E.: " Note ricostruttive sul vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura" en Diritto e Societa, Cedam, Padova, 1988

Cazorla Prieto, L. M.: " Las relaciones del Tribunal de cuentas con las Cortes Generales." Presupuesto y Gasto Público núm. 12/1982

Chimenti, C.: " Algunos rasgos fundamentales del parlamentarismo italiano" en Revista de Estudios Políticos, Centro de estudios Constitucionales, núm. 75, Enero-Marzo 1992

Consiglio Superiore Della Magistratura: " Relazione annuale sullo stato della giustizia (1991), Quaderno C.S.M. núm. 55, Roma, 1991

Consiglio Superiore Della Magistratura: " Relazione annuale sullo stato della giustizia (1986-1990), Quaderno C.S.M. núm. 36, Roma 1990

Da Cunha Rodrigues, J.N.: " Modelos de governo do poder judicial. Alternativas." en Revista do Ministério Público núm. 58, 1994

Dalle H.: " El autogobierno del Poder Judicial" recogido en Documentación Jurídica núm. 45-46. Ponencias y Comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre el Poder Judicial, celebradas durante los días 17 al 19 de Enero de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales. Ed. Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Tomo XII, Enero-Junio, Madrid, 1985

Delgado Barrio, J.: " Independencia judicial y titularidad de la potestad disciplinaria " en Boletín de Información del

Ministerio de Justicia, año XLVII, núm. 1691, ed. Ministerio de Justicia, 5 de diciembre de 1993

Delgado Barrio, J.: " Régimen jurídico de los actos del Consejo General del Poder Judicial: su impugnación " en Revista Española de Derecho Administrativo, núm 32.

Delgado J., y Ferrando Marzal,M.:" La independencia judicial" decimo séptima ponencia de las Terceras Jornada de Derecho Judicial,Tomo II, Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1987

Devoto, M.: " Profili costituzionali del potere giudiziario e conflitto di attribuzioni contro il Ministro della Giustizia", en Diritto e Società, núm. 3, 1994

Díez-Picazo, L.M. : " Problemas y tensiones de la judicatura" en Revista de Occidente, núm. 179, ed. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 1996

Díez-Picazo, L.M.: " Notas de Derecho Comparado sobre la independencia judicial", en Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Enero-Abril 1992

Domínguez Martín S.: " Perspectivas y realidades del Gobierno del Poder Judicial, creado por la Constitución "en El Poder Judicial, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. II, Madrid, 1983

Dominguez Martín, S.: " Estudio sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial" vol. II (autogobierno, derecho comparado y bibliografía), en Cuadernos de Documentación, (Presidencia del Gobierno) núm. 41, Madrid, 1985

Fernández Entralgo, J.: " Los jueces en una Sociedad Democrática " Instituto Vasco de Administración Pública, Addenda: Valoración de la nueva LOPJ. Coord. Igartua Salaverría, Oñati, 1987

Fernández-Miranda Campoamor, C.: " El Consejo General del Poder Judicial: de la Ley orgánica 1/1980, de 10 de enero a la Ley orgánica 6/1985, de 29 de Julio" en Revista de Derecho Político, núm. 38, UNED, Madrid, 1993

Fernández Ordóñez, F.: " La independencia del Poder Judicial en *La Justicia en la década de los 80*" Colección Temas Constitucionales, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid 1981. Discurso pronunciado por el Ministro de Justicia el día 19 de Julio de 1981 en la Clausura de la V

Conferencia Hispano-Lusa-Americana y de Filipinas de Ministros de Justicia celebrada en Lima.

Fernandes, J.P. y coordinado por Rodrigues Queiró: Dicionário Jurídico da Administração Pública, Tiragem, 2ª ed. Octubre, 1990

Fernández Valverde, R.: " La potestad reglamentaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial" , comunicación a la décima ponencia de las Terceras Jornada de Derecho Judicial, Tomo II, Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1987

Fernández Viagas, P.: " El Consejo General del Poder Judicial y los conflictos constitucionales " Ponencia presentada en las Jornadas de estudio sobre el CGPJ celebradas en Madrid, del 10 al 13 de Diciembre de 1981, CGPJ y Editora Nacional, Madrid, 1983

Fraille Crivillés, M.: " Las Cortes Generales y el Poder Judicial" en II Jornadas de Derecho Parlamentario, 27, 28 y 29 de Marzo de 1985, Congreso de los Diputados , Monografías 4, Madrid, 1986

García Morillo , J.: " Aproximación al concepto de control parlamentario" Revista Facultad de Derecho de Universidad Complutense, Madrid 1986, núm. 10

Gerpe Landín, M.: " El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza jurídica, composición y facultades reglamentarias"(Comentarios a las Sentencias del Tribunal Constitucional 45/1986 y 108/1986) en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 2, ed. Il Llustre Col·legi D'Advocats de Barcelona, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona, 1987

Gerpe Landín, M.: " La composición del Consejo General del Poder Judicial" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 9, Mayo-Agosto 1991, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991

Gerpe Landín, M. " El Consejo del Poder Judicial " en Revista de Derecho Político núm. 36, pág. 177-187. Tema La reforma Constitucional, Madrid, 1992.

Gisbert Gisbert, A.: " La elección del Fiscal General del Estado: hacia una intervención parlamentaria" en Ministério Público: instrumento do executivo ou órgão do Poder Judicial? en Revista do Ministério Público, caderno núm. 6 relativo al IV Congresso do Ministério Público 20, 21, 22 de Maio de 1994

Gomes Canotilh, J.J. y Moreira V.: Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª edição revista, Coimbra, Ed.1993,

González-Cuellar García, A.: " Poder Judicial en el Constitución " en Revista Española la Ley , de 9 de mayo de 1989

Guaza Vásquez, J.L.: " El Consejo General del Poder Judicial: una renovación pendiente" en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, núm. 86, págs. 211-226, 1996

Hutchinson, Tomás;" La insuficiencia del criterio subjetivo para comprender la totalidad de la actividad del Poder judicial", en actualidad y perspectivas del Derecho Público a fines del siglo XX (homenaje a Garrido Falla), Ed.Complutense, Madrid, 1992, págs.239-261.

Iracheta Iribarren, M.:" La selección e ingreso de los Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial" Decimosexta Ponencia presentada en Terceras Jornadas de Derecho Judicial, Tomo II, Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1987

" La crisi del CGPJ" en el Pórtico de la Revista Jurídica de Catalunya núm. 2, 1996, Barcelona, ed. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona & Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya.

Lane.L.:" " Judicial independence and the increasing executive role in judicial administration" en Judicial independence: The contemporary debate.

Lavilla Rubira, J.J.: " Congreso de los Diputados, y demas poderes públicos: información, control y responsabilidad. " en Estudios Sobre la Constitución. Libro homenaje al profesor E. García de Enterrría, Madrid, Civitas, 1991

Latour Brotons,J.:" Función jurisdiccional y de gobierno del Poder Judicial: sus manifestaciones en los Tribunales supremos y en los órganos superiores de Gobierno" en El Poder Judicial en Europa, CGPJ, Madrid, 1989

Lázaro, J.: " Estatuto de Asociaciones Judiciales" en Jueces para la Democracia, Información y Debate , núm.1, Abril 1987

Ledesma Bartret F.:" Relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo" en Jornadas de Estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ y Editora Nacional, Madrid, 1983

López-Fancho Raynaud, J.R.: " Los jueces en una Sociedad Democrática " Instituto Vasco de Administración Pública, Valoración de la nueva LOPJ. Oñati 1987

Lucas Murillo de la Cueva, P.:" El Gobierno del Poder Judicial: los modelos y el caso español" en Revista de las Cortes Generales, núm. 35, segundo cuatrimestre 1995, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1995.

Lucas Murillo de la Cueva, P.L.:" Las Comisiones de Investigación de las Cortes ", Revista Faculta de Derecho Universidad Complutense, ed. Facultad Derecho UCM, núm. 10 Madrid, 1986

Lucas Murillo de la Cueva, P.: " Modèles de Gouvernement du Pouvoir Judiciaire" en Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature(Réunion multilatérale organisée par le Conseil de l'Europe en collaboration avec le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire d' Espagne, Madrid 9-11 Nov. 1993) ed. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1995

Mahrenholz, G.E.: " División de poderes e interpretación, hacia una teoría de la praxis constitucional" en la (AAVV) Constitución y Ley. Acerca de la relación entre poder judicial y poder político, Tecnos, Madrid, 1987

Marinez Ruiz, L.F.: " Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la independencia del juez " Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, núm. 2-3, 1980

Martín Bernal, J.M.:" Historia, presente y porvenir del Consejo General del Poder Judicial" en Tapia, publicaciones para el mundo del Derecho, Año XIV, núm. 90, Oct-Nov 1996

Martín Ostos, J.:" Consejo General del Poder Judicial y Tribunales de Menores" en Justicia 95, núm. I-II, ed. Boch, Barcelona, 1995

Martín-Retortillo Baquer, L.:" Comunicación a la Ponencia sobre la función jurisdiccional y el status de los jueces y magistrados " en Documentación Jurídica nº 45-46. *Ponencias y Comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre el Poder Judicial, celebradas durante los días 17 al 19 de Enero de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales. Ed. Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Tomo XII, Enero-Junio, Madrid, 1985*

Maureen Williams,S.:" Jornadas angloargentinas de Abogados y Jueces" en Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, núm. 2, Tomo 53, Montevideo, Buenos Aires, Argentina, Septiembre 1993

Mosquera, L.: " La posición del poder judicial en la Constitución española de 1978 " en La Constitución Española de 1978 (coor. García Enterría y Predieri), estudio sistemático, Cívitas, Madrid, 1981

Muñoz Machado, S.: "La independencia judicial y el problema de la relación de la justicia con los demás poderes del Estado", en Actualidad y perspectivas del Derecho Público a fines del Siglo XX, (Homenaje a Garrido Falla), Ed. Complutense, Madrid, 1992, págs. 261-279.

Oliva, de la A.: " La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial" en Revista de Derecho Procesal dirigida a iberoamérica, Edersa, Madrid, 1987

Oliva, de la A.: " La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: análisis jurídico general y constitucional" en Revista Facultad de Derecho Universidad Complutense , núm. 72 Facultad de Derecho, Madrid, 1987,

Oliva, de la A.: " Acerca del Consejo General del Poder Judicial" en Rev. Derecho Procesal dirigida a Iberoamérica, núm. 2, ed. Edersa, Madrid, 1994

Oliva, de la A.: " La reforma procesal" en Revista de Derecho Procesal, núm. 1, Madrid, 1995

Oliva, de la A.: " Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, garant de l'indépendance de la Justice" en Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature

Ottto, I. de: " Organización del Poder Judicial y Comunidades Autónomas", en Documentación Jurídica, Enero-Junio, Ministerio de Justicia, núm. 45-46, 1985 que recoge las Ponencias y Comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre el Poder Judicial, celebradas del 17-19 de Abril de 1985, en el Centro de Estudios Constitucionales

Otto, I. de: Recensión al libro El Poder Judicial de Claudio Movilla Alvarez y Perfecto Andrés Ibañez, Poder Judicial, num. 1-2 1986, ed. Tecnos, Colección Temas Clave de la Constitución española, Madrid, 1986

Parada, R.: " Carrera. Neutralidad Política y Gobierno de los Jueces " en Informativo OTROSÍ, Publicaciones del Colegios de Abogados de Madrid, Marzo-Abril 1996, págs 28 a 33

Patrono M.: " Scenari per una Riforma del Consiglio della Magistratura" en Quaderni Costituzionali, Università degli studi, Padova, 1989

Peces Morate, J.E.: " El partidismo en el CGPJ" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 10, Sept.1990

Pedro Sagüés, N.: " El Poder Judicial en la Reforma Constitucional" en la obra colectiva Reforma Constitucional, ed. Ciudad Argentina, Fundación de Estudios Políticos y Administrativos, Buenos Aires, Rep. Argentina, 1994

Pellet Lastra, A.: " La versión argentina del Consejo de la Magistratura y del juri de enjuiciamiento" en Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, (La reforma constitucional en México y Argentina) ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996

Picó i Junoy, J.: " Límites a la actividad docente de jueces y magistrados" en Revista Poder Judicial, núm. 38, 2ª Época, Junio 1995, CGPJ

Pizzorusso, A.: " L'Autogoverno del potere giudiziario in Italia " recogido en Documentación Jurídica núm. 45-46 *Ponencias y Comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre el Poder Judicial, celebradas durante los días 17 al 19 de Enero de 1985 en el Centro de Estudios Constitucionales. Ed. Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Tomo XII, Enero-Junio, Madrid, 1985*

Pizzorusso, A.: " Le Conseil Superiur de la Magistrature en Italie", en Renueve Francaise de Droit Constitutionnel, núm. 9, Presses Universitaires de France, Paris, 1992

Pizzorusso, A.: " La experiencia del Consejo Superior de Magistratura" en Jueces para la Democracia, información y debate, núm. 24, Noviembre 1995. (Traducción por Andrés Ibáñez, P.)

Pompeu Casanovas: " Balance sociológico del desarrollo de la Administración de la Justicia en España " en Deliberación, ed. APM, Julio-Septiembre 1995

Porras Nadales, A.J.: " Conflictos entre órganos constitucionales y principio de separación de poderes" en Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, núm. 52, Madrid, 1986

Porras Nadales, A.J.: " El Consejo General del Poder Judicial segun la STC 108/1986, de 29 de julio, sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial" en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 19, enero-abril, 1987

Porras Ramírez, J.M.: "Fundamento, naturaleza, extensión y límites de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial" Revista de Estudios Políticos, Centro de estudios Constitucionales, Madrid, núm. 87, Enero-Marzo 1995,

Prieto-Castro Fernández, L.: " El autogobierno de la magistratura", en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, núm. 2, 1970

Quintana López, T.: " El control jurisdiccional de las decisiones parlamentarias" en la obra colectiva La Corona, Las Cortes Generales, del Gobierno y de la Administración Pública. Libro homenaje al profesor E. García de Enterrría, Madrid: Civitas, 1991.

Revenga Sánchez, M.: "Independencia y responsabilidad del juez: dos valores enfrentados. El reciente debate italiano", en el Poder Judicial, núm.14, 2ª Época CGPJ, Madrid, 1989.

Revenga Sánchez, M.: " Responsabilidad y disciplina judicial. El caso italiano " en el Poder Judicial, núm. 21, 2ª Epoca, CGPJ, Madrid, 1991

Rodriguez-Aguilera, C. " El Poder Judicial en las CCAA" en Revista Jurídica de Cataluña, núms 3-7-9 1981

Rodriguez Aguilera, C.: " El Poder Judicial en la Constitución", Revista Jurídica de Cataluña, núm. 3, 1980.

Rodriguez Aguilera, C: " Los políticos ante la judicatura" en Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 22 de Feb.1994

Rodríguez-Zapata, J.: " El Poder Judicial como límite de la potestad de control de las Cortes Generales " en El Poder Judicial, Vol. III, ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983

Ruiz-Rico, J.J.: " Investigación científica, Poder Judicial y realidad social", en Documentación Jurídica, Tomo I,, ed. Ministerio de Justicia, Enero-Marzo 1987

Ruiz-Rico, J.J. y Huertas Contreras, M.: " Jueces, Poder Judicial y Administración de Justicia en España" en Documentación Jurídica. Tomo I, ed. Ministerio de Justicia, Enero-Marzo 1987

Ruiz Vadillo , E.: " Independencia judicial, el CGPJ y las Cortes" en II Jornadas de Derecho Parlamentario, Congreso de los Diputados, Monografía, IV. 27, 28 y 29 de Marzo de 1985, Madrid, 1986

Sainz de Robles, F.C.:" ¿Un Pacto de Estado para la Justicia? en Tapia, Publicaciones para el Mundo del Derecho, año XIV, núm. 87, Abril-Marzo 1996

Sainz de Robles, F.C.:" Poder Judicial y Consejo General del Poder Judicial", Estudios sobre la Constitución: Homenaje al Profesor E. G. de Enterría, Cívitas Madrid, 1991

Santaolalla, F.:" El Parlamento y sus instrumentos de información; preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación." Revista de Derecho Privado, Madrid, 1982

Santos Gaona, D.: " La estructura orgánica del Ministerio de Justicia en el momento de creación del Ministerio de Justicia e Interior. Evolución reciente. " en Boletín de Información del Ministerio de Justicia e Interior, núm. 1714, de 25 de junio de 1994.

Seminario sobre " Sistema judicial español: poder judicial, mandatos constitucionales y política judicial" 1988, Santander, jornadas celebradas del 26 al 30 de julio, UIMP, recogido en Revista Poder Judicial, número especial, V, Madrid, CGPJ

Seminario sobre " El Poder Judicial en el conjunto de poderes del Estado y la Sociedad" Celebrado en la UIMP, Santander, del 3 al 7 de julio de 1989 (Dirigido por Cristina Alberdi Alonso), recogido en Revista Poder Judicial, número especial V, Madrid, CGPJ

Stephen, M.:" Judicial Independence - A fragile bastion" en Judicial independence: The contemporary debate

Tenorio Sánchez, P.J. y Vacas García-Alos: " Reflexiones sobre el órgano de control de los acuerdos del CGPJ" en La LEY, 2, 1988

Tenorio Sánchez, P.J.: " Los conflictos de atribuciones entre poderes del Estado en Italia: algunos aspectos " Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, núm. 73, Madrid, 1988

Tolivar Alas, L.:" Las Comunidades Autónomas y la fijación de las demarcaciones judiciales " en Poder Judicial, V.III, ed. Inst. Estudios Fiscales, Madrid, 1983

Toharia, J.J.:" Informe: actitudes de los españoles ante la Administración de Justicia " en el Primer Barómetro de Opinión del CGPJ, en Poder Judicial, núm. 14, Marzo de 1985

Toharia, J.J.: " Cuarto Barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial" Revista Poder Judicial núm. 12. 1988

Toharia, J.J.: " Los españoles y la Administración de Justicia; segundo barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial" en Poder Judicial, 2ª época, N°.1, Marzo 1986

Toharia J.J.: " Cuestionario del Quinto Barómetro y series temporales de respuestas para las preguntas comunes de los anteriores Barómetros " en Poder Judicial, 2ª época, n°. 19, Sep. 1990

Toharia J.J.: " Encuesta a una muestra nacional de jueces " en Poder Judicial, 2ª época, n°. 19, Sep. 1990.

Villagómez Cebrián, M.; " Las atribuciones del órgano de Gobierno del Poder Judicial: Análisis comparado del sistema italiano y el español" en Revista Poder Judicial, núm. 35, 2ª Época, CGPJ, Madrid, Sept.,1994

Xiol Ríos, J.A.: " El autogobierno del Poder Judicial: la situación en España " en Documentación Jurídica, ed. Ministerio de Justicia, en jornadas de estudio sobre el Poder Judicial, núm. 45-46, Enero- Junio 1985.

Xiol Ríos, J.A.: " Systèmes d'administration de la justice" en Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature, op. cit.

Zubiri de Salinas, F.: " El Gobierno Territorial de la Justicia en el Proyecto de LOPJ " en Documentación Jurídica, número monográfico dedicado al Proyecto de LOPJ, Tomo XII, Abril-Diciembre 1984

SECCIÓN IV OTRA DOCUMENTACIÓN

Memorias que el Consejo General del Poder Judicial eleva anualmente a las Cortes Generales, CGPJ, Madrid, 1981-1995

Mérida, M.: " Hablan los jueces, la justicia a prueba", ed. Plaza and James, Barcelona, 1996

Navarro Estevan, J.: " Mamos Sucias, el poder contra la justicia", ed. Temas de Hoy, Madrid, 1995

Sánchez Barrios, M.I.: " El Consejo General del Poder Judicial como órgano garante de la independencia judicial" Tesis Doctoral, inédita, Salamanca, 1993

Santamaría Pastor, J. A. " La actividad del Gobierno y de la Administración Pública como objeto de control parlamentario " ponencia presentada en las VI Jornadas de Derecho Parlamentario referentes a los Problemas Actuales del Control Parlamentario celebradas en Madrid, Palacio del Senado, del 25 al 27 de enero de 1995

Torres Bonet, M.: " Las relaciones entre las Comisiones de Investigación y el Poder Judicial " comunicación presentada en las VI Jornadas de Derecho Parlamentario referentes a los Problemas Actuales del Control Parlamentario celebradas en Madrid, Palacio del Senado, del 25 al 27 de enero de 1995

" La crisis del Gobierno del Poder Judicial; una visión constitucional", organizado por el Instituto de Derecho Parlamentario. Ponentes intervinientes: Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Juan Fernando López Aguilar. Celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el 6 de mayo de 1996

Ponencia presentada en el XI Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, Madrid, 26 al 28 de Octubre de 1995 Sección Territorial de Madrid: " El Proceso hacia el derrumbamiento del Poder Judicial "

Ponencia presentada al XI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrada en Madrid del 26 al 28 de Octubre de 1995 " Un nuevo Proyecto de Justicia "

Ponencia presentada al XI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrada en Madrid del 26 al 28 de Octubre de 1995 " Soluciones jurídicas frente a la corrupción"

(AAVV) " Constitutions of the countries of the World", Tomos I a XX, Ed. Albert P. Blaustein & Gisbert H., Oceana Publications, Inc., Dobbs, Ferry, New York, (updated)

(AAVV) " El Gobierno de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial", Publicación con motivo en el Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León. Valladolid, 28, 29 y 30 de septiembre de 1994. Ed. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996

(AAVV) " El Poder Judicial y su Consejo General en el Estado Social y Democrático de Derecho", CGPJ, Premio Poder Judicial, 1990

(AAVV) Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature (Réunion multilatérale organisée par le Conseil de l'Europe en collaboration avec le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire d'Espagne, Madrid 9-11 Nov. 1993) ed. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1995

(AAVV) Magistratura, CSM e Principi Costituzionali a cura di B. Caravita, ed. Laterza, Roma-Bari, 1994

(AAVV) Vincent, J., Guinchard S., Montagnier, G., Varinard A.: "La justice et ses institutions" Dalloz, Paris, 1991

(AAVV) " Jornadas sobre el Poder Judicial en el Bicentenario de la Revolución Francesa" Madrid, Jornadas celebradas entre los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1989, Centro de Estudios Judiciales, Colección Cursos, Vol 5, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 1990

(AAVV) Sainz-Robles, F. C.: La Constitución Española. Lecturas para después de una década Ed. Univ.Complut., Fundación para la Libertad y la Democracia, Madrid, 1989

(AAVV) " Terceras Jornadas de Derecho Judicial", Presidencia del TS, Secretaría Técnica, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Tomos I y II, Madrid, 1987.

(AAVV) Judicial independence: The contemporary debate, ed. Shimon Shetreet of Jerusalem and Jules Deschênes, Superior Court of Québec (Consultin Editor), Martinus Nijhoff Publishers, a member of the Dluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985

(AAVV) " Reflexiones sobre el Poder Judicial" en Poder Judicial, Marzo 1982, núm. 2, CGPJ. Se recogen ponencias

varias en relación a las Jornadas celebradas en Madrid del 10 al 13 de Diciembre de 1981

" Planteamiento de conflicto de competencia por el CGPJ al Congreso de los Diputados en relación al artículo 119 del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Aprobado el día 28 de Marzo de 1985 " en Revista de las Cortes Generales núm. 4, primer cuatrimestre, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1985

SECCIÓN V ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

- Diario ABC: " Mariscal busca apoyos en los nacionalistas para modificar el sistema de elección del CGPJ" 27 de Noviembre de 1996
- Diario ABC: " El PP rechaza la propuesta socialista de examinar en el Congreso a los aspirantes al Consejo del Poder Judicial", Nacional, 21 de Mayo de 1996
- Diario ABC: Entrevista con Mariscal de Gante, 12 de Mayo de 1996
- Diario ABC: "Las asociaciones de jueces no rectifican sus críticas al jefe del Ejecutivo" en Sección Elecciones Generales, 30 de Enero de 1996
- Diario ABC: " Serra pide la dimisión del vicepresidente del CGPJ " en Sección Elecciones Generales, 30 de Enero de 1996
- Diario ABC: " La negociación sobre el Poder Judicial, al borde de la ruptura" en Sección Nacional, 1 de Diciembre de 1995
- Idem: " El CGPJ, en prórroga de su mandato, acuerda enviar a Barcelona la Escuela Judicial" 10 de Diciembre de 1995
- Idem: " González instó a Aznar a ceder en el CGPJ con la amenaza de bloquearlo tras las elecciones" 15 de Diciembre de 1995
- Idem: " La eutanasia del órgano de gobierno de los jueces" 31 de Marzo de 1996
- Idem: " Rato relaciona la operación acoso y derribo del CGPJ con los nombramientos en la Sala del Supremo que juzgará a los GAL", 30 de Marzo de 1996
- Idem: " El Gobierno culpa al PP de la crisis del CGPJ por aplazar su renovación hasta las elecciones" 29 de Marzo de 1996
- Idem: " Aznar cree lamentable la actitud de Sala al disolver el CGPJ" 29 de Marzo de 1996
- Idem: " La oposición y los jueces, preocupados porque se intente limitar la capacidad judicial de investigar" 17 de Diciembre de 1995
- Idem: " El grupo de vocales propuesto por el PSOE recupera la mayoría en el CGPJ " 28 de Diciembre de 1995

- Idem: " El grupo popular recurre por inconstitucionalidad la reforma Belloch de la Ley del Poder Judicial" 11 de Febrero de 1995
- Idem: " El PSOE y el PP reabren la negociación para renovar los cargos del Consejo del Poder Judicial" 14 de Noviembre de 1995
- Idem: " El CGPJ pide una reforma legal para que sus deliberaciones dejen de ser secretas" 27 de Septiembre de 1995
- Idem: " El PP propone que las Asociaciones de Magistrados designen a los Vocales del CGPJ" 14 de Octubre de 1995
- Idem: " El PP propone un nuevo sistema para agilizar la renovación de órganos constitucionales" 5 de Enero de 1995
- Idem: " Una sentencia del TC sobre la imparcialidad del juez puede afectar a los casos de Garzón contra ex altos cargos de interior" Editorial, 27 de Marzo de 1995
- Idem: " Sala provoca un enfrentamiento en el CGPJ al exponer su versión sobre la crisis del organismo sin consultar a la minoría" Editorial, 29 de Marzo de 1996
- Idem: " Sala dice que el CGPJ sería un colegio profesional sin la designación parlamentaria" 3 de Abril de 1996
- Idem: " Sala dinamita el Consejo del Poder Judicial al aceptar la renuncia de seis de los vocales del grupo socialista" Editorial, 28 de Marzo de 1996
- Idem: " Desventuras del CGPJ" 29 de Marzo de 1996
- Idem: " La Justicia bajo grave sospecha por el llamado caso María Soledad" Sección Internacional, Argentina 31 de Marzo de 1996
- Idem: " La renovación del Consejo del Poder Judicial entra, con más de medio año de retraso, en su recta final" 16 de Junio de 1996
- Idem: " Trillo propone que el Parlamento examine la independencia de los candidatos del CGPJ y al TC" 18 de Junio de 1996
- Idem: La ministra de Justicia propondrá reformar el sistema de designación para el Poder Judicial" 21 de Junio de 1996
- Idem: " El PSOE bloquea la renovación del CGPJ con la exigencia de incluir a un juez próximo a Belloch" Editorial, 27 de junio de 1996
- Diario 16: " El CGPJ admite el presunto soborno de Pascual Estevill" 21 de Marzo de 1996
- Diario 16 : " La quiebra del Tercer Poder", 24 de Marzo de 1996
- Diario 16: " Certificado de defunción.Estevill da la puntilla al Poder Judicial" 24 de Marzo de 1996
- Diario 16: " Montesquieu está grave", Editorial, 23 de Octubre de 1990
- Diario 16: " El pecado original" Editorial, 29 de Septiembre, 1991
- Diario 16: " La tragedia de la justicia" Editorial,14 de Octubre de 1991

- Diario 16: " CiU afirma que el Gobierno no ha contestado aún a su propuesta sobre CGPJ" 20 de Octubre de 1994
- El Mundo: " Lavilla dispuesto a aceptar la presidencia del Poder Judicial" , 15 de Mayo de 1996
- El Mundo: " Pascual Sala pide que se tenga la voluntad política de mejorar la justicia" El Mundo, 9 de Noviembre de 1994
- El Mundo: " Almunia arremete contra las asociaciones de jueces y algunos miembros del CGPJ" 18 de Octubre de 1996
- El Mundo: " El juez Moreiras arremete contra la Prensa acusándola de protagonizar un juicio paralelo", 15 de Octubre de 1995
- El Mundo: " Aznar cree que los ataques a los jueces han generado una crisis institucional" 27 de Enero de 1995
- El Mundo:" Leguina e Ibarra atacan ahora al CGPJ y lo llaman sindicato de jueces" 27 de Enero de 1995
- El Mundo:" El Programa de Aznar: La mayoría no podrá bloquear las negociaciones" 28 de Marzo de 1995
- El Mundo: " La tragicomedia del Poder Judicial " Editorial, 3 de Octubre, 1991
- El Mundo : " La forzada indignación del Consejo General del Poder Judicial" Editorial, 24 de Diciembre de 1991
- El Mundo: " Los jueces piden que la comisión diferencie su labor de la judicial" 20 de Octubre de 1995
- El Mundo: " Puyol pide un representante de la Generalidad en la Unesco y elegir dos vocales del CGPJ" 20 de Abril de 1996
- El Mundo:" Frente común de jueces, fiscales y secretarios para defender la independencia judicial" en Editorial, 2 de Diciembre de 1994
- El Mundo: " El Poder Judicial estudia hoy si Estevill intentó o no comprar el voto de un vocal" 20 de Marzo de 1996
- El Mundo: " Sala dice que la crisis del CGPJ se debe sobre todo a Estevill"29 de Marzo de 1996
- El País: " Es Supremo condena al juez Estevill a 6 años de inhabilitación, por lo que cesa en el CGPJ", 5 de Julio de 1996
- El País: " El afán del PP y el PSOE por imponer a sus patrocinados prolonga la negociación del CGPJ" 26 de Junio de 1996
- El País: " Jueces conservadores recuerdan la promesa del PP de cambiar de sistema de elección del CGPJ" 10 de Abril de 1996
- El País: " El Presidente del Poder Judicial disuelve el Consejo al aceptar la dimisión de seis vocales" 28 de marzo de 1996
- El País: " El jefe y 16 inspectores del CGPJ dimiten por las anomalías de Estevill" 23 de Marzo de 1996
- El País: " Sala niega móviles políticos en las seis dimisiones del CGPJ aceptadas" 30 de Marzo de 1996

- El País: " Fuerte presión de las asociaciones judiciales ante la renovación del CGPJ" 18 de mayo de 1996
- El País: " 331 jueces han sido asesinados o torturados en el mundo en 1995" 12 de Abril de 1996
- El País: " El último requerimiento", Editorial, 24 de Octubre de 1985
- El País: " Sala vincula la crisis del Poder Judicial al caso Estevill y no a los nombramientos del Supremo" 29 de Marzo de 1996
- El País: " La elección de la cima judicial", Editorial, 1 de Agosto de 1986
- El País: " Malos consejos" Editorial, 8 de Noviembre de 1990
- El País: " Consejo aletargado", Editorial, 26 de Septiembre de 1991
- El País: " La Fiscalía del País Vasco investiga el patrimonio del magistrado Luis Blánquez" El País, 17 de mayo de 1996

En atención a los autores:

- Álvarez Cruz: " La democratización del Poder Judicial" en El País, de 19 de Marzo de 1985
- P. Andrés Ibáñez: "¿Mas democracia para la justicia?" El País, de 11 Marzo 1985
- Arespachaga, J. de: " La razón de una actitud" ABC, 19 de Agosto de 1985
- Bandrés Molet: " La elección y el gobierno de los jueces españoles " el día de Aragón, de 20 de Marzo de 1985
- Bandrés Molet : " Yo tuve la culpa" El País, 31 Octubre 1990
- Bernat Freixes, J.M.: " El laberinto del Consejo General del Poder Judicial", El País, 17 de Noviembre, 1990
- Cuadra,B.: " Del Dicho al hecho " El País, 4 de Julio de 1988 - Idem: " El PSOE vota a Auger para presidir el Poder Judicial" El País, 20 de Octubre de 1991
- Doñate, A: " Independencia judicial y democracia", El País, 25 de Mayo,de 1991
- Esteban, J. de : " Las tribulaciones del Poder Judicial" el Mundo, 2 de Octubre de 1991
- M. García Miguel: " Un mensaje de optimismo sobre la justicia" en El País, 9 de Julio de 1996
- M. García Miguel: " Poder Judicial; soberanía e independencia El País, 31 de Marzo de 1985
- García-Trevijano, A.:" Las manos de la justicia" en EL Mundo, 10 de Diciembre de 1995
- González Ballesteros, T.: " El Parlamento y los jueces" Diario 16, 22-Noviembre de 1990
- Hernández Gil, A.: " Hacia una nueva etapa de la Administración de justicia" en *Le Monde Diplomatique*, edición especial, " La Administración de Justicia en España, 1990

- M.Jiménez de Parga:" Cambio constitucional sin reforma del texto" 10 De Marzo de 1985
- M. Jiménez de Parga:" Más o menos jueces" en La Vanguardia, 2 de Julio de 1990
- M Jiménez de Parga: " Latinoamérica, una palabra envenenada" en Diario ABC, 16 de Octubre de 1995
- M. Jiménez de Parga: " Empieza el Parlamentarismo" 12 de Marzo de 1996
- M. Jiménez de Parga: " El informador " Diario ABC, 21 de marzo de 1996
- M. Jiménez de Parga: " La alternancia" Diario ABC, 3 de abril de 1996
- Martín Pallín J.A.:" Los jueces, su independencia y Gobierno" El País de 15 de Abril de 1985
- Martínez-Calcerrada,L.: " Decálogo del mal juez" en Diario ABC, 28 de Febrero de 1995
- C. Movilla Álvarez: " Independencia judicial y soberanía popular" La Voz de Galicia de 25 de Marzo 1985
- Navarro Esteban, J.: " El pascualazo" en El Mundo,17 de Diciembre de 1996
- Navarro Esteban, J.: " El Consejo de nunca acabar" Diario ABC, 8 de Abril de 1996
- Neira, J.: " La cuerda de la Justicia" en Diario 16, 23 de Marzo de 1996
- Oliva Santos, de la: " ¿ Qué puede hacer hoy el Consejo General del Poder Judicial ? " Diario 16, 6 de Octubre de 1991
- Peces-Barba,G.:" El Gobierno de los jueces" Diario ABC, 20 de julio de 1996
- Peces Morate:" El Poder de los jueces" Diario 16, 19 Marzo 1985
- Pradera, J.: " El reparto del botín " El País, 11 de Noviembre de 1990
- Ramírez, P.J.: " La gran burla" El Mundo, 4 de Noviembre de 1990
- Requejo Ibáñez, J.L.:" España: hacia el control político de la justicia" en Le Monde Diplomatique, edición especial sobre la Administración de Justicia en España, 1990
- Requejo Ibáñez,J.L.:" No a la politización de la justicia" Diario ABC, 29 de julio de 1996
- Rodríguez Arribas,R.:" Desde el 84 el poder político intenta controlar al judicial" en El Mundo, 15 de Octubre de 1995
- Rodríguez Santos,B.:" Carta abierta de un juez a los partidos políticos" en Diario ABC, 20-junio de 1996
- Rodríguez Bereijo, A.: " El problema del CGPJ son las personas" en El Mundo
- Rubio Esteban,M.:" Enjugar a los jueces" Diario ABC, 6 de Septiembre de 1996
- Sáenz Cosculluela, J.: " En la judicatura no se ha hecho la transición democrática", en El País, 15 de marzo de 1995

- Sainz de Robles, F.:" Luces y sombras de la independencia judicial" Ya, 8 de Diciembre de 1987
- P. Sala Sánchez:" La elección parlamentaria de los Vocales del CGPJ" El País, de 9 de Abril de 1985
- P. Sala Sánchez: Entrevista en el Sol, 17 de Noviembre de 1990
- Termes, R.:" Sobre la indeseable parlamentarización de la justicia" en Diario ABC, 11 de julio de 1996
- R. Trillo Torres: " Reflexión sobre el gobierno de los jueces" El País, 17 de mayo de 1996
- Urbano, P.:" El show realista del Poder Judicial " en El Mundo, 29 de Septiembre de 1991
- Idem: " Presidente Sala ; están presionando a un juez ! " en El Mundo, 21 de junio de 1991
- Vega Benayas, de la C.: " ¿Qué Justicia?, Le Monde Diplomatique, edición especial sobre la Administración de Justicia en España, 1990
- Vega Benayas, de la C.: " ¿Irredento Consejo Judicial?" en El País, 29 de marzo de 1996
- Yanel, A.: " El Consejo de los líos" en El País, 23 de Octubre de 1995